BOLETÍN INFORMATIVO

Nº 49

AÑO 2006

BOLETIN INFORMATIVO

Nº 49

ÍNDICE

DISPOSICIONES NO PUBLICADAS EN BOJA..... 9

I.- DE LA INTERVENCIÓN GENERAL 9

I.1.- Comunicación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 12 de enero de 2006, sobre competencia para la fiscalización de expedientes de subvenciones con acumulación de ayudas. 10

I.2.- Comunicación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 13 de enero de 2006, sobre competencia para la fiscalización de expedientes de subvenciones con acumulación de ayudas. 12

I.3.- Instrucción nº 1/2006, de 24 de abril de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de los expedientes relativos a las ayudas y/o becas a favor de los alumnos de cursos de formación profesional ocupacional y de los profesionales de la formación en calidad de alumnos, reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, y los procedimientos para su aplicación. 17

I.4.- Instrucción nº 2/2006, de 23 de junio de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de los expedientes relativos a la concesión de subvenciones para la gestión sostenible de los recursos forestales, para la prevención y lucha contra los incendios forestales y para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento y gestión sostenible de los recursos cinegéticos, y los procedimientos para su aplicación..... 35

I.5.- Instrucción 3/2006, de 23 junio de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucia, por la que se dictan normas de control en materia de tributos cedidos..... 50

I.6.- Instrucción nº 4/2006, de 23 de junio de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de expedientes relativos a la concesión de la ayuda nacional por superficie a los productores de frutos de cáscara y los procedimientos para su aplicación 59

I.7.- Instrucción nº 5/2006, de 14 de julio de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de expedientes relativos a la concesión de bonificaciones de los intereses de los préstamos de mediación ICO destinados a paliar los daños producidos en el sector agrario por las heladas acaecidas en los meses de enero a marzo de 2005 y los procedimientos para su aplicación..... 74

II. DE LA INTERVENCIÓN GENERAL Y OTROS CENTROS..... 90

II.1.- Instrucción Conjunta 1/2006, de 24 julio de 2006 de la Dirección General de Fondos Europeos y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen determinadas medidas de control sobre gastos cofinanciados por fondos europeos en el ámbito de la Junta de Andalucía..... 91

III. DE OTROS CENTROS 103

III.1.- Resolucion de 18 de enero de 2006, la Direccion General de Presupuestos de la Consejeria de Economia y Hacienda por la que se dictan normas sobre confeccion de nominas para el personal al servicio de la Comunidad de Andalucia para 2006..... 104

III.2.- Instrucción 2/2006, de 24 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, sobre el procedimiento de concesión de la asignación económica regulada en los artículos 22 y siguientes de la Ley 3/2005, de 8 de abril..... 118

III.3.- Instrucción nº3/2006, de 4 de octubre, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se modifica parcialmente el manual de

documentación de entrada respecto de determinados actos administrativos objeto de inscripción en el Registro General de personal de la Junta de Andalucia. 123

III.4.- Instrucción de la Dirección General de Fomento del Empleo, de 14 de noviembre de 2006, sobre acreditación del grado de minusvalía en subvenciones al fomento del empleo en centros especiales de empleo. 126

SENTENCIAS, DICTÁMENES E INFORMES..... 128

IV.1. PERSONAL 128

IV.1.1.- PERSONAL EN GENERAL..... 128

IV.1.1.1.- Informe de la Intervencion General de la Administración del Estado, de 2 de octubre de 2006 sobre la forma de justificar los gastos de viaje realizados con motivo de una comisión de servicio, cuando el billete ha sido emitido electrónicamente y el medio de transporte utilizado sea el avión. 129

IV.1.1.2.- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 4 de octubre de 2006, sobre improcedencia de que los servicios prestados a los consorcios puedan ser reconocidos a efectos de trienios. 131

IV.1.1.3.- Comunicación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 25 de octubre de 2006, por la que se establece que a partir de enero de 2007, la nómina del personal al servicio de la Administración de Justicia se tramitará por el sistema Sirhus. 138

IV.1.2.- ALTOS CARGOS 140

IV. 1.2.1.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 13 de noviembre de 2006, sobre cuantía máxima mensual de la indemnización para gastos de vivienda. 141

IV.2.- CONTRATOS 146

IV.2.1.- CONTRATOS EN GENERAL..... 146

IV.2.1.1.- Informe de la Intervención General de la Administración del Estado de 5 de junio de 2006 por el que se resuelven consultas acerca de la interpretación del art.3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas, en su redacción dada por el Real Decreto Ley de 5/2005, de 11 de marzo,de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. 147

IV.2.1.2.- Informe 47/06 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Ministerio de Economía y Hacienda), de 11 de diciembre de 2006, sobre aplicación de la revisión de precios en contratos de duración inicial inferior a un año cuando el plazo de ejecución resulta superior..... 169

IV.2.2.- CONTRATOS DE OBRAS 173

IV.2.2.1.- Informe de la Intervención General de la Administración del Estado, de 5 de mayo de 2006, sobre determinadas cuestiones surgidas en relación con el apartado cuarto del artº 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 174

IV.2.2.2.- Informe 16/06 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Ministerio de Economía y Hacienda), de 30 de octubre de 2006, sobre interpretación del artículo 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a su aplicación a las variaciones en las mediciones. 184

IV.2.3.- CONTRATO DE SUMINISTROS..... 189

IV.2.3.1.- Informe 7/2006, de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, de 17 de noviembre de 2006, sobre tramitación de expediente para la contratación de suministro. 190

IV.2.4.- CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 195

IV.2.4.1.- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 25 de abril de 2006, sobre necesidad de autorización previa de la Universidad a su profesorado para la impartición de conferencias o cesión de derechos ligados a la propiedad intelectual. 196

IV.2.4.2.- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 27 de septiembre de 2006, sobre supervisión de facturas de los servicios de telecomunicaciones. 205

IV.3.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS 207

IV.3.1.- Comunicación de 5 de octubre de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre aplicación de los articulos 58 y 63 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 208

IV.3.2.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 2 de febrero de 2006, sobre cambio de titularidad en un procedimiento subvencional derivado de una fusión societaria. 218

IV.3.3.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 8 de febrero de 2006, sobre posible existencia de norma reguladora que impediría la concesión de una subvención excepcional. 231

IV.3.4.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 17 de febrero de 2006, sobre prespuesto aceptado tras el trámite de reformulación de solicitudes de subvenciones. 247

IV.3.5.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 1 de marzo de 2006, sobre incidencias en el trámite de subsanación de una solicitud de subvención reglada y sobre determinación de las inversiones subvencionables. 254

IV.3.6.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 4 de marzo de 2006, sobre presentación, fuera del plazo establecido, de solicitudes de prórroga de becas. 266

IV.3.7.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 8 de marzo de 2006, sobre posible existencia de norma reguladora que impediría la concesión de una subvención excepcional. 274

IV.3.8.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 30 de marzo de 2006, sobre superación del límite temporal máximo establecido para el disfrute de una beca de formación e investigación. 283

IV.3.9.- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 4 de mayo de 2006, sobre la forma en que ha de justificarse una subvención. 289

IV.3.10.- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 7 de julio de 2006, sobre la necesidad de que los perceptores de las

ayudas previas a la jubilación ordinaria, en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, acrediten, con anterioridad a dictarse la resolución de concesión, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. 292

IV.3.11.- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 6 de noviembre de 2006, sobre la imposibilidad de exonerar de fiscalizacion previa los gastos por transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios municipales..... 296

IV.3.12.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 28 noviembre de 2006, sobre imposibilidad de que las comunidades de bienes accedan a la condición de beneficiarias de una subvención sin previsión expresa en la norma reguladora. 299

IV.4.- OTROS GASTOS 307

IV.4.1.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 3 de febrero de 2006, sobre reconocimiento de pensión no contributiva (PNC) de invalidez..... 308

IV.4.2.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 11 de mayo de 2006, sobre acreditación del requisito de insuficiencia de recursos en el reconocimiento del derecho a percibir una pensión no contributiva (PNC) e invalidez de un DNI caducado a efectos de la acreditación de la personalidad. 322

IV.4.3.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 15 de mayo de 2006, sobre retrocesión de cuantías abonadas indebidamente con posterioridad al fallecimiento del beneficiario de una pensión del fondo de asistencia social. 336

IV.4.4.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 25 de mayo de 2006, sobre acreditación del requisito de insuficiencia de recursos en el reconocimiento del derecho a percibir una pensión no contributiva (PNC). 344

IV.4.5.- Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucia, de 26 de julio de 2006, sobre rehabilitación en el derecho a la percepción de prestaciones del fondo de asistencia social (FAS). 360

V.- CONTROL 367

V.1.- CONTROL INTERNO 367

V.1.1.- FUNCIÓN INTERVENTORA 367

V.1.1.1.- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 29 de marzo de 2006, sobre la competencia de las Intervenciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda para fiscalizar las subvenciones y actuaciones en materia de rehabilitación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007..... 368

V.1.1.2.- Informe de la Intervención General de la Administración del Estado, de 7 de abril de 2006, sobre intervención previa de la propuesta de reconocimiento de la obligación correspondiente al gasto derivado de la mensualidad de diciembre de 2005 por un servicio de limpieza prestado en ese periodo..... 372

V.1.1.3.- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 13 de julio de 2006, relativo a la fiscalización expedientes electrónicos de subvenciones tramitados al amparo de la orden de la Consejería de Gobernación de 29 de diciembre de 2005..... 383

VI.- CONTABILIDAD..... 387

VI.1.- Comunicación de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 8 de mayo de 2006, sobre las implicaciones contables de los compromisos adquiridos en el ejercicio 2005 y anteriores, que aún mantengan remanentes de crédito pendientes de pago, como consecuencia de las competencias que se le atribuyen al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos en materia de infraestructuras educativas y sus servicios complementarios, iniciados por la Consejería de Educación y que se encuentran en curso la fecha de creación del mismo..... 388

DISPOSICIONES NO PUBLICADAS EN BOJA

I. DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

COMUNICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 12 DE ENERO DE 2006, SOBRE COMPETENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES CON ACUMULACIÓN DE AYUDAS.

La instrucción 4/2005, de 14 de noviembre, de la Intervención General, por la que se modifica la Instrucción 5/2002, de 10 de junio, sobre procedimientos específicos de fiscalización derivados de la implantación de la base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, posibilita a la Intervención General el atribuir a la Intervención Delegada, Provincial o Central la competencia para la fiscalización de los expedientes que se encuentren en el supuesto contemplado en la letra c) del apartado primero de la Norma Cuarta de dicha Instrucción, siempre que los expedientes correspondan a un mismo centro contable y procedan de una misma sección presupuestaria.

La citada atribución de competencias se realizará para líneas de subvenciones completas, comunicándose previamente a los órganos gestores e intervenciones afectadas la fecha de comienzo de efectos y el régimen transitorio que sea necesario arbitrar.

Las líneas de subvenciones afectadas son las que se detallan a continuación:

Consejería de Agricultura y Pesca

Líneas de ayudas:

1) Mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.
2) Organización y participación en ferias y certámenes agroalimentarios.
3) Mejora de la producción y calidad de plántulas y viveros.

- Aplicaciones presupuestarias de la sección 16.00 y para todos los servicios y provincias:

Subconceptos 771.00, 771.02 y 747.00 del programa 71E.

Subconceptos 772.00 y 772.12 del programa 71B.

Subconcepto 777.00 del programa 71D.

Por ello, se comunica que a partir del próximo **20 de enero de 2006** tendrá efecto la citada atribución de competencias cuyo procedimiento de fiscalización será el previsto en la Norma Cuarta de la Instrucción 5/2002, debiendo entenderse, en tal caso, las menciones a la Intervención General, por las relativas a la Intervención Central, Delegada o Provincial que resulte competente.

COMUNICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 13 DE ENERO DE 2006, SOBRE COMPETENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES CON ACUMULACIÓN DE AYUDAS.

La instrucción 4/2005, de 14 de noviembre, de la Intervención General, por la que se modifica la Instrucción 5/2002, de 10 de junio, sobre procedimientos específicos de fiscalización derivados de la implantación de la base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, posibilita a la Intervención General el atribuir a la Intervención Delegada, Provincial o Central la competencia para la fiscalización de los expedientes que se encuentren en el supuesto contemplado en la letra c) del apartado primero de la Norma Cuarta de dicha Instrucción, siempre que los expedientes correspondan a un mismo centro contable y procedan de una misma sección presupuestaria.

La citada atribución de competencias se realizará para líneas de subvenciones completas, comunicándose previamente a los órganos gestores e intervenciones afectadas la fecha de comienzo de efectos y el régimen transitorio que sea necesario arbitrar.

Las líneas de subvenciones afectadas son las que se detallan a continuación:

Consejería de Agricultura y Pesca

Líneas de ayudas:

4) Mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.
5) Organización y participación en ferias y certámenes agroalimentarios.
6) Mejora de la producción y calidad de plántulas y viveros.

- Aplicaciones presupuestarias de la sección 16.00 y para todos los servicios y provincias:

Subconceptos 771.00, 771.02 y 747.00 del programa 71E.
Subconceptos 772.00 y 772.12 del programa 71B.
Subconcepto 777.00 del programa 71D.

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Línea de ayuda: Modernización de Pymes Comerciales.

- Aplicaciones presupuestarias de la sección 15.00, servicios 91 y 17 y todas las provincias:

  Subconcepto 774.00 del programa 76A

Por ello, se comunica que a partir del próximo **20 de enero de 2006** tendrá efecto la citada atribución de competencias cuyo procedimiento de fiscalización será el previsto en la Norma Cuarta de la Instrucción 5/2002, debiendo entenderse, en tal caso, las menciones a la Intervención General, por las relativas a la Intervención Central, Delegada o Provincial que resulte competente.

A los efectos de clarificar la competencia para la fiscalización de los distintos expedientes de gastos, una vez seleccionada la propuesta de documento contable de subvención con acumulación, el órgano gestor deberá consultar el menú "subvenciones" del sistema integrado Júpiter, a fin de conocer el "estado" de la misma. Si dicho estado es "c.acumulación" deberá proceder al envío de la subvención mediante la opción "envío propuestas a la intervención" a través del menú "subvenciones" del sistema Júpiter.

Dicho estado indicará si la subvención seleccionada, se encuentra "pendiente de validar por I.G." (pendiente de validar por la Intervención General) o si por el contrario está "pendiente de validar por ID/IP/IC" (pendiente de validar por la Intervención Delegada/Intervención Provincial/Intervención Central).

Una vez identificada la Intervención competente se remitirá por el órgano gestor la documentación establecida en la Instrucción 5/2002.

Si la fiscalización realizada por la Intervención competente fuera favorable en cuanto a la acumulación, ésta procederá a modificar el "estado" de la subvención "pendiente de validar por ID/IP/IC" a "favorable", para los cual se procederá como se indica a continuación:

1) Se accede a la base de datos de subvenciones a través de la extranet de la Consejería de Economía y Hacienda (http://extranet.ceh.junta-andalucia.es). Usuario y palabra de paso con la que se accede a Júpiter.

2) Una vez se ha accedido a la base de datos de subvenciones se seleccionarán las siguientes opciones de menú: subvención – subvención a empresas – acciones – control manual de subvenciones (si el informe es desfavorable se deberá realizar doble click sobre el sentido del informe y seleccionar las subvenciones correspondientes.

   Recibido el informe favorable por el órgano gestor correspondiente, y realizada la modificación de la base de datos de subvenciones por la Intervención competente, el expediente podrá ser tramitado, una vez incluida en índice la propuesta de documento contable, a fin de proceder a su contabilización.

   Asimismo se adjunta a este escrito modelo orientativo del informe de acumulación.

INFORME DE ACUMULACION A LOS EFECTOS DE LA FISCALIZACION PLENA DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES (APARTADO 4.3. Y 4.4. DE LA INSTRUCCIÓN 5/2002, DE LA INTERVENCION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA)

Con fecha .... de ..... de ....., se ha recibido en esta Intervención escrito del Jefe del Servicio de ..... (Dirección General de .....), de la Consejería de ..... (órgano gestor nº .....), por el que, de conformidad con la instrucción....., de ....., de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre modificación del procedimiento específico de fiscalización de subvenciones con acumulación derivados de la implantación de la base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ARIADNA), remite la documentación necesaria para la fiscalización plena de la subvención que se indica. El presente informe-propuesta, con el carácter de previo a la antedicha fiscalización plena, tiene por objeto apreciar si la propuesta, considerando otras subvenciones acumulables concedidas antes, vulnera límites máximos de intensidad de la ayuda previstos en las decisiones de autorización de la Comisión europea o en el Reglamento de exención por categorías al que se acoja aquélla.

ANTECEDENTES

La propuesta que a continuación se relaciona ha sido grabada en el Sistema Júpiter, pero excluida de índice de remisión a la Intervención respectiva, por haber sido identificada en base de datos como potencialmente incursa en acumulación:

SITUACION	Nº PROPUESTA	CÓDIGO SUBVENCIÓN	EXPEDIENTE	IMPORTE
Con acumulación				

Corresponde la subvención que se propone conceder, al amparo de ....., a favor de ....., para (.....) radicada en ..... (provincia de .....). Confrontada la propuesta de resolución con la antecedente señalada por el órgano gestor (la núm. ..... del ejercicio .....), se verifica que corresponden a ..... de igual/diferente anualidad e iguales/distintos elementos de inversión, gastos corrientes, etc...).

CONSIDERACIONES

Del examen de los expedientes, el ahora propuesto, y el señalado como antecedente por el órgano gestor, se comprueba que subvencionan igual/diferente ....., e iguales/distintos elementos de inversión, gastos corrientes, etc..., de igual/distinta anualidad.

CONCLUSION

Apreciado que la subvención que se va a someter a fiscalización, contrastada con la antecedente, se refieren a igual/diferente finalidad, se emite informe **FAVORABLE/DESFAVORABLE.**

Provincia,

EL INTERVENTOR/A DELEGADO/PROVINCIAL/CENTRAL
DE LA CONSEJERIA DE.....

Fdo.:

INSTRUCCIÓN Nº 1/2006, DE 24 DE ABRIL DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA FISCALIZACIÓN POR MUESTREO DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS AYUDAS Y/O BECAS A FAVOR DE LOS ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y DE LOS PROFESIONALES DE LA FORMACIÓN EN CALIDAD DE ALUMNOS, REGULADAS EN LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000, Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN.

El artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su actual redacción dada por la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, establece que la función interventora podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas, entre otros, a los gastos de subvenciones (en términos similares se pronuncia el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía).

Asimismo, el apartado 3 del citado artículo 78 dispone que, a dichos efectos, la Intervención General determinará los actos, documentos y expedientes sobre los que la función interventora podrá ser ejercitada sobre una muestra y no sobre el total de los expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la selección, identificación y tratamiento de la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisión que pueda derivarse del ejercicio de esta función.

El sistema de muestreo parece razonable aplicarlo a actos de producción masiva y sometidos a procedimientos muy reglados, donde el mejor control resulta ser el ejercido por los propios servicios gestores mediante la revisión de los expedientes.

La experiencia acumulada en la ejecución de los créditos destinados a la concesión de ayudas y/o becas a favor de los alumnos desempleados destinatarios de los

cursos de Formación Profesional Ocupacional y a los profesionales de la formación en calidad de alumnos, establecidas en los artículos 10 y 11 de la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, modificada por Orden de 17 de febrero de 2003 de la citada Consejería, así como el escaso número y entidad de las deficiencias detectadas en la fiscalización de dichos expedientes, aconseja la agilización de los mecanismos de control, compatibilizando una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos públicos con los controles encaminados a verificar su uso adecuado, con el objetivo de alcanzar y dar cumplimiento, no sólo al principio de legalidad, sino también a los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir la gestión del gasto público, sin que por ello se vean afectados los principios de la función fiscalizadora. De este modo, el procedimiento de gestión tan sólo se vería interrumpido en función del número de las deficiencias y de la singular importancia de las posibles irregularidades que se pongan de manifiesto en los actos, documentos o expedientes examinados.

La tramitación de las referidas subvenciones reúne las características antes señaladas en orden al ejercicio de la función interventora mediante técnicas de muestreo, por lo que esta Intervención General, en uso de las facultades que le otorga el artículo 78.3 de la Ley General de la Hacienda Pública, dicta las siguientes

INSTRUCCIONES

PRIMERA.- OBJETO.

La presente Instrucción tiene por objeto establecer el régimen de fiscalización de los expedientes de ayudas y/o becas que se tramiten a favor de los alumnos desempleados destinatarios de cursos de Formación Profesional Ocupacional y de los profesionales de la formación en calidad de alumnos, reguladas en los artículos 10 y 11 de la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, modificada por Orden de 17 de febrero de 2003.

No obstante, quedan expresamente excluidos de la presente Instrucción aquellos expedientes en los que, haciendo uso de la facultad prevista en el apartado nueve

del artículo 10 de la citada Orden, se concedan anticipos del importe de la ayuda y/o beca.

SEGUNDA.- FUNCIÓN INTERVENTORA.

1. La función interventora respecto de los expedientes tramitados para la concesión de dichas subvenciones se efectuará por procedimiento de muestreo, con arreglo a lo que se determina en la presente Instrucción.

2. La fiscalización previa por muestreo consiste en la fiscalización sobre muestras representativas del conjunto de los actos, los documentos y los expedientes susceptibles de producir obligaciones de naturaleza económica, previamente a:

   a. Su autorización.
   b. La adquisición del compromiso del gasto.

3. La fiscalización previa por muestreo implica, cuando la Intervención competente dé su conformidad, que ésta engloba todos los actos singulares que integran la totalidad del universo de la actividad controlada, con excepción de aquéllos que se devuelvan con informe de fiscalización de disconformidad.

TERCERA.- CONFIGURACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO.

1. El procedimiento de muestreo a que se refiere la presente Resolución consistirá en la selección de expedientes de subvenciones que hayan de ser objeto de fiscalización, los cuales habrán de ser intervenidos sobre la base de la totalidad de la documentación incluida en los mismos, a fin de verificar que se han ajustado en su tramitación a las disposiciones que resultan de aplicación.

2. El universo o población, es decir, el conjunto de actos, documentos o expedientes integrados en la actividad controlada, ya sea de manera singular y/o en un período determinado, estará constituido por el conjunto de expedientes a

que se refiere la Instrucción Primera de esta Resolución que se sometan a fiscalización en un ejercicio presupuestario del que se ha de obtener la muestra representativa.

3. En base a ello, el muestreo deberá garantizar el examen de los mismos a medida que tienen entrada en la Intervención, por lo que, a los efectos de esta Resolución, estará constituido por los expedientes que pretendan remitirse a las Intervenciones Provinciales competentes mensualmente para su fiscalización.

CUARTA.- PORCENTAJE MINIMO.

Los expedientes a revisar se seleccionarán por muestreo, cubriendo, en todo caso y para cada ejercicio presupuestario, un porcentaje no inferior al 5 por 100 de los expedientes que se tramiten, que deberán representar, al menos, el 5 por ciento de los créditos presupuestarios que pretendan comprometerse, porcentajes que deberán respetarse en la selección de las muestras en base a las relaciones mensuales.

Sin perjuicio de lo anterior, habrán de tenerse en cuenta los siguientes tamaños de muestras establecidos según el número de expedientes que constituyan el correspondiente universo:

Nº de expedientes del universo	Nº de expedientes que constituyen la muestra
1-50	50%
51-100	Al menos el 10%
101 ó más	Al menos el 5%

QUINTA.- MÉTODO DE SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA.

1. Cada órgano gestor remitirá, con periodicidad mensual, una relación certificada de los expedientes de subvenciones a que se refiere la presente Resolución que se pretendan someter a fiscalización a la Intervención competente. Los

expedientes deberán encontrarse en la fase de tramitación que corresponda al momento en que ha de realizarse la fiscalización previa y habrán de estar a disposición de la Intervención.

Dichas relaciones mensuales serán remitidas a la Intervención mediante oficio, debiendo contener, al menos, los siguientes datos:

a) Nº de expediente.
b) Datos identificativos del alumno (nombre y apellidos y NIF).
c) Importe de la subvención.
d) Línea de ayuda (Ayudas a los alumnos desempleados / Ayudas a profesionales de la formación en calidad de alumnos).
e) Denominación del curso.
f) Modalidad de ayuda (transporte / manutención / alojamiento / beca de asistencia a personas discapacitadas / ayuda por hijos).

2. Los expedientes a examinar se obtendrán de dichas relaciones mediante la aplicación, con carácter general, del procedimiento de muestreo sistemático con arranque al azar[1]

3. Seleccionada la muestra por la Intervención competente, ésta dirigirá oficio al órgano gestor indicándole los expedientes seleccionados que han de someterse a fiscalización previa.

   El órgano gestor remitirá a la Intervención, en un plazo máximo de tres días, la documentación completa de los expedientes seleccionados que resulte exigible según lo establecido en la normativa reguladora de las presentes subvenciones, acompañando la preceptiva propuesta de documento contable ”AD” a cada uno de ellos.

[1] Selección sistemática con arranque al azar: Este método consiste en dividir el número de elementos de la población por el número de elementos de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Si éste es, por ejemplo, de 10, y se fija al azar como punto de partida el tercer elemento, la muestra estará compuesta por los elementos 3, 13, 23, 33 y así sucesivamente. En la utilización de este método, el Interventor deberá asegurarse de que la población no está estructurada de tal forma que el intervalo de muestra coincida con un determinado patrón de la población.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la Intervención competente lo estimase oportuno podrá aplicar el método de selección que considere más adecuado entre los siguientes:

   - Muestreo sistemático con arranque aleatorio
   - Muestreo aleatorio simple.
   - Muestreo numérico.

5. En el supuesto en que la Intervención utilizase un método de selección alternativo al previsto con carácter general habrá de dejar constancia del mismo en el informe mensual y en el informe-resumen que deberá remitir a la Intervención General. Asimismo, para efectuar la selección deberá tener en cuenta estos criterios, a efectos de garantizar la aleatoriedad y objetividad del proceso de selección:

   - Los expedientes seleccionados deben ser lo más representativos posible de cada modalidad de subvención.
   - Con la muestra de expedientes que resultara seleccionada deberá cubrirse, como mínimo, el porcentaje establecido en la Instrucción Cuarta.

SEXTA.- FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS.

1. Los expedientes seleccionados serán objeto de fiscalización previa, sobre la base documental completa de los mismos, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y extremos establecidos en la normativa aplicable a dichas subvenciones, así como los exigidos por la Ley General de la Hacienda Pública, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y demás normativa de aplicación en la materia, quedando los no seleccionados exentos de la aportación de la misma, salvo lo que se dispone sobre ellos más adelante para los supuestos en que sea precisa la ampliación de la muestra.

2. El muestreo en la fase de fiscalización previa se realizará con base en una única relación mensual, de forma tal que seleccionada la muestra, practicada de acuerdo con lo establecido en la presente Instrucción, y contabilizadas las correspondientes propuestas de documentos contables “AD”, el órgano gestor procederá a remitir, dictadas las resoluciones de concesión de las ayudas y notificadas a los beneficiarios, en un plazo máximo de quince días desde la contabilización del compromiso de gasto, a la Intervención competente las propuestas de documentos contables “OP” correspondientes a los expedientes seleccionados.

   Las propuestas de documentos contables “OP” han de acompañarse de las resoluciones de concesión y del resto de la documentación exigida, en su caso, por la normativa reguladora y demás concordante en la materia, entre la que deberá encontrarse la certificación acreditativa de la aplicación de la subvención a las finalidades para las que se concedió, según determina el artículo 40.1, párrafo segundo, del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, en los términos establecidos en el apartado segundo de la Instrucción 3/2002, de 30 de abril, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece el modelo de certificación acreditativa del empleo de subvenciones, a efectos de su preceptiva fiscalización y contabilización.

3. Las propuestas y los documentos contables correspondientes a expedientes que hayan sido seleccionados en aplicación del procedimiento de muestreo, en cualquiera de las fases de fiscalización (“AD”, “OP”), serán estampillados por el órgano que los expida a efectos de hacer constar en ellos: “Intervenido por muestreo. Expediente seleccionado”.

4. Las propuestas de documentos contables correspondientes a expedientes seleccionados en fase de fiscalización previa y, por ende, en fase de intervención formal del pago, se grabarán en el Sistema Integrado Júpiter en el tipo 6 (subvenciones y transferencias), subtipo 1 (subvenciones regladas).

SÉPTIMA.- RESULTADO DEL MUESTREO Y DETECCION DE DEFICIENCIAS.

1. Fiscalizados los expedientes seleccionados la Intervención seguirá respecto a ellos el trámite establecido con carácter general, emitiendo, en su caso, los informes de fiscalización que procedan respecto a los mismos.

2. En el supuesto de que la revisión de los expedientes seleccionados pusiera de manifiesto deficiencias, irregularidades o anomalías, se procederá a su cuantificación.

   Asimismo, se analizarán las anomalías y defectos detectados con el objeto de determinar:

   a) Si tienen carácter sistemático, porque pueden afectar a todos los elementos que componen la población, entendiendo por tal la totalidad de los expedientes remitidos para su fiscalización;

   b) Si tienen carácter aislado, por afectar a una parte definida y delimitada de la población, o de la documentación aportada con los expedientes, única parte en la que podrían producirse o repetirse los defectos o anomalías detectados.

   A tales efectos, las correspondientes Intervenciones Provinciales elaborarán un informe mensual, de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo I de la presente Instrucción, sobre las anomalías o deficiencias detectadas en el cumplimiento de la legalidad en los actos de gestión realizados, del que se dará traslado a la Intervención General para seguimiento, control y perfeccionamiento de los procedimientos de control seguidos, y al órgano gestor, a fin de facilitar la toma de decisiones por éste.

OCTAVA.- AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA.

1. Cuando la Intervención considere graves las anomalías o defectos detectados en los expedientes revisados, así como, en todo caso, cuando su cuantía exceda del 5 por 100 del importe total de los expedientes de ayudas o subvenciones que han

sido seleccionados y cuando de dichos defectos, de no subsanarse, pudiera derivarse la formulación de las correspondientes propuestas de inicio de expedientes de reintegro, se ampliará la muestra mediante una nueva selección sobre la base de la misma relación de expedientes objeto de la muestra respecto de la cual se detectó la deficiencia.

2. La decisión de ampliar la muestra deberá ser trasladada al órgano gestor, según el modelo de comunicación que figura como Anexo II en la presente Instrucción, y a la Intervención General, haciendo constar el objeto, alcance y motivos de la ampliación especificando en base a qué concretas deficiencias observadas en los expedientes seleccionados inicialmente se ha ampliado la muestra, determinando los expedientes a los que afecta.

3. El alcance de la revisión en los expedientes seleccionados como consecuencia de la ampliación prevista en el apartado anterior, se determinará atendiendo a la naturaleza de los defectos o anomalías detectados en los expedientes inicialmente seleccionados, de forma que:

   a) Si los errores son sistemáticos, el alcance deberá ser el mismo que el aplicado en la revisión de los expedientes seleccionados inicialmente.

   b) Si los errores son aislables a una parte de la población que reúna una serie de notas o caracteres propios que permita diferenciarla del resto de la población, o bien son propios de una determinada parte de la documentación presentada, los procedimientos de revisión pueden limitarse a la parte de la población o de la documentación a la que únicamente puedan afectar los errores detectados en los expedientes seleccionados inicialmente.

NOVENA.- FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES NO SELECCIONADOS.

1. Una vez realizada la fiscalización previa de los expedientes seleccionados, tanto inicialmente como, en su caso, aquellos que lo hayan sido a consecuencia de la ampliación de la muestra, se comunicará al órgano gestor a efectos de que por

éste se prosigan las actuaciones procedimentales oportunas respecto a los expedientes no seleccionados.

2. En este sentido, dictadas las resoluciones de concesión de las subvenciones y notificadas a los beneficiarios, el órgano gestor procederá a enviar a la Intervención competente, simultáneamente con la remisión de las propuestas de documentos contables “OP” de los expedientes seleccionados, las propuestas de documentos contables “ADOP” correspondientes a los expedientes no seleccionados de la muestra en cuestión, acompañadas de fotocopia compulsada de las resoluciones de concesión y de la “hoja de datos” acreditativa de la inclusión de los expedientes en la Base de Datos de Subvenciones.

   Recibidas en la Intervención, se procederá a su contabilización, previa comprobación de que las mismas corresponden a los expedientes que figuran en la relación de expedientes de la que se extrajo la muestra y sin perjuicio, en su caso, de las devoluciones de las propuestas que procedan por errores en su confección o por no aportar la documentación citada en el párrafo anterior, a efectos de su subsanación.

3. Las propuestas y los documentos contables correspondientes a expedientes que no hayan sido seleccionados en aplicación del procedimiento de muestreo (“ADOP”), serán estampillados por el órgano que los expida a efectos de hacer constar en ellos: “Intervenido por muestreo. Expediente no seleccionado”.

4. Las propuestas de documentos contables “ADOP” correspondientes a expedientes no seleccionados en fase de fiscalización previa y, por ende, en fase de intervención formal del pago, se grabarán en el Sistema Integrado Júpiter en el tipo 6 (subvenciones y transferencias), subtipo 24 (subvenciones muestreo en base de datos).

DÉCIMA.- INFORMACIÓN A LA INTERVENCIÓN GENERAL.

1. Las Intervenciones Provinciales competentes deberán enviar a la Intervención General para seguimiento, control y perfeccionamiento de los procedimientos de control seguidos, y al órgano gestor, a fin de facilitar la toma de decisiones por éste, un informe-resumen, cuyo modelo figura como Anexo III en la presente Instrucción, del resultado de la aplicación del sistema de fiscalización por muestreo efectuada sobre los expedientes de subvenciones tramitados durante el ejercicio presupuestario, en el que se incluirá, como mínimo:

   a) El porcentaje cubierto y el número de expedientes revisados en relación con el total de expedientes presentados y contabilizados.
   b) El procedimiento utilizado en la selección de la muestra.
   c) Las incidencias, anomalías o defectos detectados en las revisiones efectuadas, detallando los que fueron subsanados y, en su caso, aquéllos respecto a los cuales se formuló discrepancia. En su caso, se hará constar si alguno de los expedientes revisados debiera motivar un expediente de reintegro.

2. Si la información contenida en el informe-resumen anual remitido a la Intervención General lo requiriese, se procederá a comunicar las conclusiones obtenidas de la aplicación del procedimiento de muestreo a la Dirección General de Formación para el Empleo, a efectos de la adopción de las medidas oportunas tendentes a corregir las deficiencias advertidas.

UNDÉCIMA.- EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.

Con independencia de lo señalado en los apartados anteriores y de la aplicación del procedimiento de muestreo, se podrá determinar por el Interventor General el sometimiento a fiscalización previa de aquellos expedientes que se considere oportuno por razón de las circunstancias especiales concurrentes en los mismos.

DUODÉCIMA.- COMIENZO DE LOS EFECTOS.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su adopción, siendo de aplicación a aquellos expedientes que sean remitidos para su fiscalización previa a partir de dicha fecha.

ANEXO I

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN POR MUESTREO DE EXPEDIENTES DE AYUDAS Y/O BECAS A FAVOR DE LOS ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y DE LOS PROFESIONALES DE LA FORMACIÓN EN CALIDAD DE ALUMNOS, DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN 1/2006, DE 24 DE ABRIL DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

DATOS BASICOS DE LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS

Número de expedientes:

Fase contable de tramitación de los expedientes: (AD, OP, ADOP).

Normativa reguladora de los expedientes: Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocupacional, modificada por Orden de 17 de febrero de 2003.

Período de fiscalización:

Órgano gestor:

Número de los expedientes fiscalizados (Nº de expediente Júpiter y beneficiario):

La Intervención Provincial..... , de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 1/2006, de 24 de abril de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de los expedientes relativos a ayudas y/o becas a favor de los alumnos de cursos de Formación Profesional Ocupacional y de los profesionales de la formación en calidad de alumnos, reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se especifican, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

ALCANCE Y LIMITACIONES AL CONTROL

La fiscalización ha consistido en la verificación de los siguientes extremos:

.-

.-

.-

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

.- Tipo de procedimiento aplicado:

.- Volumen de la muestra:

RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN

(Indicar el resultado. En caso de deficiencias, las actuaciones realizadas con indicación de las irregularidades e identificación de los informes emitidos).

ANEXO II

COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA DE EXPEDIENTES DE AYUDAS Y/O BECAS A FAVOR DE LOS ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y DE LOS PROFESIONALES DE LA FORMACIÓN EN CALIDAD DE ALUMNOS, DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN 1/2006, DE 24 DE ABRIL DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Intervención Provincial....., de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 1/2006, de 24 de abril de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de los expedientes relativos a ayudas y/o becas a favor de los alumnos de cursos de Formación Profesional Ocupacional y de los profesionales de la formación en calidad de alumnos, reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se especifican a continuación, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

DATOS BASICOS DE LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS

Número de expedientes:
Fase contable de tramitación de los expedientes: (AD, OP).
Normativa reguladora de los expedientes: Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocupacional, modificada por Orden de 17 de febrero de 2003.
Período de fiscalización:
Organo gestor:
Número de los expedientes fiscalizados (Nº de expediente Júpiter y beneficiario):

ALCANCE Y LIMITACIONES AL CONTROL

La fiscalización ha consistido en la verificación de los siguientes extremos:

.-

.-

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

.- Tipo de procedimiento aplicado:

.- Volumen de la muestra:

ANOMALÍAS O DEFICIENCIAS DETECTADAS

(Relación de deficiencias, así como el número de expedientes y la cuantía total de los expedientes afectados por las mismas, así como su identificación).

ALCANCE DE LA AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA

(Se determinará según se hayan detectado errores sistemáticos o aislables, siguiendo lo establecido en el apartado 8.3 de la presente Instrucción; identificándose los expedientes seleccionados de la relación remitida por el órgano gestor con indicación del número de expediente, los datos identificativos del tercero y el importe de la subvención propuesta)

ANEXO III

INFORME RESUMEN-ANUAL DE FISCALIZACIÓN POR MUESTREO DE EXPEDIENTES DE AYUDAS Y/O BECAS A FAVOR DE LOS ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y DE LOS PROFESIONALES DE LA FORMACIÓN EN CALIDAD DE ALUMNOS, DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN 1/2006 DE 24 DE ABRIL DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Intervención Provincial....., de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 1/2006, de 24 de abril de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de los expedientes relativos a ayudas y/o becas a favor de los alumnos de cursos de Formación Profesional Ocupacional y de los profesionales de la formación en calidad de alumnos, y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se han tramitado en el ejercicio económico 20__, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

Porcentaje cubierto de expedientes:

Nº de expedientes revisados:
Nº de expedientes presentados:
Nº de expedientes contabilizados:

Procedimiento utilizado en la selección de las muestras:

(En caso de haber sido varios los utilizados indicar procedimiento y relación mensual a la que se aplicó cada uno).

Incidencias, anomalías o defectos detectados

(Relacionarlos, indicar los que fueron subsanados y, en su caso, aquellos respecto a los cuales se tramitó discrepancia. Detallar, asimismo, si alguno de los expedientes debería motivar un expediente de reintegro, indicando las circunstancias concurrentes e identificando individualizadamente el/los expediente/s en cuestión).

Resultado de la fiscalización

(Indicar el resultado. En el caso de deficiencias, las actuaciones realizadas con indicación de las irregularidades e identificación de los informes emitidos).

INSTRUCCIÓN Nº 2/2006, DE 23 DE JUNIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA FISCALIZACIÓN POR MUESTREO DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES, PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES Y PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS ESPECIES SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, ASÍ COMO EL FOMENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN

El artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su actual redacción dada por la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, establece que la función interventora podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas, entre otros, a los gastos de subvenciones (en términos similares se pronuncia el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía).

Asimismo, el apartado 3 del citado artículo 78 dispone que, a dichos efectos, la Intervención General determinará los actos, documentos y expedientes sobre los que la función interventora podrá ser ejercitada sobre una muestra y no sobre el total de los expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la selección, identificación y tratamiento de la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisión que pueda derivarse del ejercicio de esta función.

El sistema de muestreo parece razonable aplicarlo a actos de producción masiva y sometidos a procedimientos muy reglados, donde el mejor control resulta ser el ejercido por los propios servicios gestores mediante la revisión de los expedientes.

La experiencia acumulada en la gestión de los créditos destinados a la concesión de las subvenciones para la gestión sostenible de los recursos forestales, para la

prevención y lucha contra los incendios forestales y para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento y gestión sostenible de los recursos cinegéticos, y el escaso número y entidad de las deficiencias detectadas en la fiscalización de dichos expedientes, aconseja la agilización de los mecanismos de control, compatibilizando una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos públicos con los controles encaminados a verificar su uso adecuado, con el objetivo de alcanzar y dar cumplimiento, no sólo al principio de legalidad, sino también a los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir la gestión del gasto público, sin que por ello se vean afectados los principios de la función fiscalizadora. De este modo, el procedimiento de gestión tan sólo se vería interrumpido en función del número de las deficiencias y de la singular importancia de las posibles irregularidades que se pongan de manifiesto en los actos, documentos o expedientes examinados.

La tramitación de las referidas subvenciones reúne las características antes señaladas en orden al ejercicio de la función interventora mediante técnicas de muestreo, por lo que esta Intervención General, en uso de las facultades que le otorga el artículo 78.3 de la Ley General de la Hacienda Pública, dicta las siguientes

INSTRUCCIONES

PRIMERA.- OBJETO.

La presente Instrucción tiene por objeto establecer el régimen de fiscalización previa de los expedientes de subvenciones tramitadas al amparo de la normativa que se cita a continuación:

- Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 9 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la gestión sostenible de los recursos forestales, previstas en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, modificada por las de 9 de abril y 30 de octubre de 2003.

- Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 10 de julio de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la prevención y

  lucha contra incendios forestales, previstas en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, modificada por la de 9 de abril de 2003.

- Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 8 de junio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos.

SEGUNDA.- FUNCIÓN INTERVENTORA.

1. La función de intervención crítica respecto de los expedientes tramitados para la concesión de dichas subvenciones se efectuará por procedimiento de muestreo, con arreglo a lo que se determina en la presente Instrucción.

2. La fiscalización previa por muestreo consiste en la fiscalización sobre muestras representativas del conjunto de los actos, los documentos y los expedientes susceptibles de producir obligaciones de naturaleza económica previamente a:

   a. Su autorización.
   b. La adquisición del compromiso del gasto.

3. La fiscalización previa por muestreo implica, cuando la Intervención competente dé su conformidad, que ésta engloba todos los actos singulares que integran la totalidad del universo de la actividad controlada, con excepción de aquéllos que se devuelvan con informe de disconformidad.

4. La intervención formal de la ordenación del pago se realizará por el procedimiento establecido en la normativa vigente, sin que le resulte aplicable la técnica de muestreo que se aprueba en la presente Instrucción.

TERCERA.- CONFIGURACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO.

1. El procedimiento de muestreo a que se refiere la presente Resolución consistirá en la selección de expedientes de subvenciones que hayan de ser objeto de fiscalización, los cuales habrán de ser intervenidos sobre la base de la totalidad de la documentación incluida en los mismos, a fin de verificar que se han ajustado en su tramitación a las disposiciones que les resultan de aplicación en cada caso.

2. El universo o población, es decir, el conjunto de actos, documentos o expedientes integrados en la actividad controlada ya sea de manera singular y/o en un período determinado, estará constituido por el conjunto de expedientes que se sometan a fiscalización en un ejercicio presupuestario del que se ha de obtener la muestra representativa.

3. Por ello, el muestreo deberá garantizar el examen de los mismos en el momento en que tengan entrada en la Intervención, por lo que, a los efectos de esta Instrucción, estará constituido por los expedientes que pretendan remitirse a la Intervención Delegada en la Consejería de Medio Ambiente anualmente para su fiscalización.

CUARTA.- PORCENTAJE MINIMO.

Los expedientes a revisar se seleccionarán por muestreo, debiendo respetarse en la selección de las muestras, en base a las relaciones anuales, los siguientes tamaños, establecidos según el número de expedientes que constituyan el correspondiente universo:

Nº de expedientes del universo	Nº de expedientes que constituyen la muestra
1-50	50%
51-100	Al menos el 10%
101 ó más	Al menos el 5%

QUINTA.- MÉTODO DE SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA.

1. El órgano gestor remitirá, una vez al año, relación certificada de los expedientes de subvenciones, independiente para cada una de las Órdenes a las que se refiere la presente Resolución, que se pretendan someter a fiscalización a la Intervención Delegada en la Consejería de Medio Ambiente. Los expedientes deberán encontrarse en la fase de tramitación que corresponda al momento en que ha de realizarse la fiscalización previa y han de encontrarse a disposición de la Intervención.

   Dichas relaciones anuales serán remitidas a la citada Intervención Delegada mediante oficio, debiendo contener, al menos, los siguientes datos:

a) Nº de expediente.
b) Datos identificativos del tercero (nombre o denominación y NIF o CIF).
c) Importe de la subvención
d) Línea de ayuda.
e) Acción subvencionable y, en su caso, subacción.
f) Norma reguladora de la subvención.

2. Los expedientes a examinar se obtendrán de dichas relaciones mediante la aplicación, con carácter general, del procedimiento de muestreo sistemático con arranque al azar[2].
3. Seleccionada la muestra por la Intervención, ésta dirigirá oficio a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente indicándole los expedientes seleccionados que han de someterse a fiscalización previa.

   El órgano gestor remitirá a la Intervención, en un plazo máximo de tres días, la documentación completa de los expedientes seleccionados que resulte exigible

[2] Selección sistemática con arranque al azar: Este método consiste en dividir el número de elementos de la población por el número de elementos de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Si éste es, por ejemplo, de 10, y se fija al azar como punto de partida el tercer elemento, la muestra estará compuesta por los elementos 3, 13, 23, 33 y así sucesivamente. En la utilización de este método, el Interventor deberá asegurarse de que la población no está estructurada de tal forma que el intervalo de muestra coincida con un determinado patrón de la población.

según lo establecido en la normativa reguladora de las presentes subvenciones, acompañando la preceptiva propuesta de documento contable “AD” a cada uno de ellos.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado segundo, si la Intervención competente lo estimase oportuno, podrá aplicar el método de selección que considere más adecuado entre los siguientes:

   - Muestreo sistemático con arranque aleatorio.
   - Muestreo aleatorio simple.
   - Muestreo numérico.

5. En el supuesto en que la Intervención utilizase un método de selección alternativo al previsto con carácter general, habrá de dejar constancia del mismo en el informe-resumen anual que deberá remitir al cierre del ejercicio a la Intervención General. Asimismo, para efectuar la selección deberá tener en cuenta estos criterios, a efectos de garantizar la aleatoriedad y objetividad del proceso de selección:

   - Los expedientes seleccionados deben ser lo más representativos posible de cada modalidad de subvención
   - Con la muestra de expedientes que resultara seleccionada deberá cubrirse, como mínimo, el porcentaje establecido en la Instrucción Cuarta.

SEXTA.- FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS.

1. Los expedientes seleccionados serán objeto de fiscalización previa sobre la base documental completa de los mismos, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y extremos establecidos en la normativa aplicable a dichas subvenciones, así como los exigidos por la Ley General de la Hacienda Pública, el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y demás normativa concordante en la materia, quedando los no seleccionados exentos de la

aportación de la misma, salvo lo que se dispone sobre ellos más adelante para los supuestos en que sea precisa la ampliación de la muestra.

2. El muestreo en la fase de fiscalización previa se realizará con base en una única relación anual por cada una de las tres Órdenes citadas en la anterior Instrucción Primera, de forma tal que seleccionada la muestra, practicada de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, y una vez contabilizadas las correspondientes propuestas de documentos contables "AD" y comunicada por la Intervención Delegada en la Consejería de Medio Ambiente a la Dirección General de Gestión del Medio Natural la fiscalización de conformidad de los expedientes seleccionados, ésta última deberá proceder a dictar las resoluciones de concesión de las subvenciones y a notificarlas a los beneficiarios.

3. Las propuestas y documentos contables correspondientes a expedientes que hayan sido seleccionadas en aplicación del procedimiento de muestreo, (AD) serán estampillados por el órgano que los expida, a efectos de hacer constar en ellos: "Intervenido por muestreo: Expediente seleccionado".

4. Las propuestas de documentos contables correspondientes a expedientes seleccionados en fase de fiscalización previa se grabarán en el Sistema Integrado Júpiter en el tipo 6 (subvenciones y transferencias), subtipo 1 (subvenciones regladas)

SÉPTIMA.- RESULTADO DEL MUESTREO Y DETECCION DE DEFICIENCIAS.

1. Fiscalizados los expedientes seleccionados la Intervención seguirá respecto a ellos el trámite establecido con carácter general, emitiendo, en su caso, los informes de fiscalización que procedan respecto a los mismos.

2. En el supuesto de que la revisión de los expedientes seleccionados pusiera de manifiesto deficiencias, irregularidades o anomalías, se procederá a su cuantificación.

   Asimismo, se analizarán las anomalías y defectos detectados con el objeto de determinar:

   a) Si tienen carácter sistemático, porque pueden afectar a todos los elementos que componen la población, entendiendo por tal la totalidad de los expedientes remitidos para su fiscalización;
   b) Si tienen carácter aislado, por afectar a una parte definida y delimitada de la población, o de la documentación aportada con los expedientes, única parte en la que podrían producirse o repetirse los defectos o anomalías detectados.

OCTAVA.- AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA.

1. Cuando la Intervención considere graves las anomalías o defectos detectados en los expedientes revisados, así como, en todo caso, cuando su cuantía exceda del 5 por 100 del importe total de los expedientes de subvenciones que han sido seleccionados y cuando de dichos defectos, de no subsanarse, pudiera derivarse la formulación de las correspondientes propuestas de inicio de expedientes de reintegro, se ampliará la muestra mediante una nueva selección sobre la base de la misma relación de expedientes objeto de la muestra respecto de la cual se detectó la deficiencia.

2. La decisión de ampliar la muestra deberá ser trasladada al órgano gestor, según el modelo de comunicación que figura como Anexo I en la presente Instrucción, y a la Intervención General, haciendo constar el objeto, alcance y motivos de la ampliación, especificando en base a qué concretas deficiencias observadas en los expedientes seleccionados inicialmente se ha ampliado la muestra, determinando los expedientes a los que afecta.

3. El alcance de la revisión en los expedientes seleccionados como consecuencia de la ampliación prevista en el apartado anterior, se determinará atendiendo a la naturaleza de los defectos o anomalías detectados en los expedientes inicialmente seleccionados, de forma que:

   a) Si los errores son sistemáticos, el alcance deberá ser el mismo que el aplicado en la revisión de los expedientes seleccionados inicialmente.
   b) Si los errores son aislables a una parte de la población que reúna una serie de notas o caracteres propios que permita diferenciarla del resto de la población, o bien son propios de una determinada parte de la documentación presentada, los procedimientos de revisión pueden limitarse a la parte de la población o de la documentación a la que únicamente puedan afectar los errores detectados en los expedientes seleccionados inicialmente.

NOVENA.- FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES NO SELECCIONADOS.

1. Una vez realizada la fiscalización previa de los expedientes seleccionados, tanto inicialmente como, en su caso, aquellos que lo hayan sido a consecuencia de la ampliación de la muestra, se comunicará al órgano gestor a efectos de que por éste se prosigan las actuaciones procedimentales oportunas respecto a los expedientes no seleccionados.

2. En este sentido, el órgano gestor procederá a remitir a la Intervención Delegada en la Consejería de Medio Ambiente las propuestas de documentos contables "AD" correspondientes a los expedientes no seleccionados de la muestra en cuestión, por el importe total de las subvenciones concedidas incluidas en la relación anual correspondiente, acompañadas de la propuesta de resolución de concesión y de la "hoja de datos" acreditativa de la inclusión de los expedientes en la Base de Datos de Subvenciones.

   Recibidas en la Intervención, se procederá a su contabilización, previa comprobación de que las mismas corresponden a los expedientes que figuran en la relación anual objeto de fiscalización y sin perjuicio, en su caso, de las

devoluciones de las propuestas que procedan por errores en su confección, a efectos de su subsanación.

3. Las propuestas y los documentos contables correspondientes a expedientes que no hayan sido seleccionados en aplicación del procedimiento de muestreo deberán ser estampillados por el órgano que los expida, a fin de hacer constar en ellos: “Intervenido por muestreo. Expedientes no seleccionados”.

4. Las propuestas de documentos contables “AD” correspondientes a los expedientes que no hayan sido seleccionados en fase de fiscalización previa en la muestra, se grabarán en el Sistema Integrado Júpiter en el tipo 6 (subvenciones y transferencias), subtipo 24 (subvenciones muestreo en base de datos).

DÉCIMA.- INFORMACIÓN A LA INTERVENCIÓN GENERAL.

1. La Intervención Delegada en la Consejería de Medio Ambiente deberá enviar a la Intervención General para seguimiento, control y perfeccionamiento de los procedimientos de control seguidos, y al órgano gestor, a fin de facilitar la toma de decisiones por éste, un informe-resumen anual por cada una de las tres Órdenes a las que se refiere la presente Resolución, cuyo modelo figura como Anexo II en la presente Instrucción, del resultado de la aplicación del sistema de fiscalización por muestreo efectuado sobre los expedientes de subvenciones tramitadas durante el ejercicio presupuestario, en el que se incluirá, como mínimo:

   a) El porcentaje cubierto y el número de expedientes revisados en relación con el total de expedientes presentados y contabilizados.

   b) El procedimiento utilizado en la selección de la muestra.

   c) Las incidencias, anomalías o defectos detectados en las revisiones efectuadas, detallando los que fueron subsanados y, en su caso, aquéllos

respecto a los cuales se formuló discrepancia. En su caso, se hará constar si alguno de los expedientes revisados debiera motivar un expediente de reintegro.

2. Si la información contenida en el informe-resumen remitido a la Intervención General lo requiriese, se procederá a comunicar las conclusiones obtenidas de la aplicación del procedimiento de muestreo a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, a efectos de la adopción de las medidas oportunas tendentes a corregir las deficiencias advertidas.

UNDÉCIMA.- EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.

Con independencia de lo señalado en los apartados anteriores y de la aplicación del procedimiento de muestreo, se podrá determinar por el Interventor General el sometimiento a fiscalización previa de aquellos expedientes que se considere oportuno por razón de las circunstancias especiales concurrentes en los mismos.

DUODECIMA.- COMIENZO DE LOS EFECTOS.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su adopción, siendo de aplicación a aquellos expedientes que sean remitidos para su fiscalización previa a partir de dicha fecha.

ANEXO I

COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES, PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES Y PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS ESPECIES SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, ASÍ COMO EL FOMENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN, DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN 2/2006, DE 23 DE JUNIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Intervención Delegada en la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 2/2006, de 23 de junio de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se determina la fiscalización por muestreo de los expedientes relativos a la concesión de subvenciones para la gestión sostenible de los recursos forestales, para la prevención y lucha contra los incendios forestales y para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento y gestión sostenible de los recursos cinegéticos, y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se especifican a continuación, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

DATOS BASICOS DE LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS

Número de expedientes:
Fase contable de fiscalización de los expedientes: (AD)
Normativa reguladora de los expedientes:
Período de fiscalización:
Organo gestor:
Identificación de los expedientes fiscalizados (Nº de expediente Júpiter, en su caso, y NIF o DNI y nombre del beneficiario o denominación):

ALCANCE Y LIMITACIONES AL CONTROL

La fiscalización ha consistido en la verificación de los siguientes extremos:

.-

.-

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

.- Tipo de procedimiento aplicado:

.- Volumen de la muestra:

ANOMALÍAS O DEFICIENCIAS DETECTADAS

(Relación de deficiencias, así como el número de expedientes y la cuantía total de los expedientes afectados por las mismas, así como su identificación y la modalidad de ayuda).

ALCANCE DE LA AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA

(Se determinará según se hayan detectado errores sistemáticos o aislables, siguiendo lo establecido en el apartado 8.3 de la presente Instrucción; identificándose los expedientes seleccionados de la relación remitida por el órgano gestor con indicación del número de expediente, los datos identificativos del tercero, la modalidad de ayuda y el importe de la subvención propuesta).

ANEXO II

INFORME RESUMEN-ANUAL DE FISCALIZACIÓN PREVIA POR MUESTREO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES, PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES Y PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS ESPECIES SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, ASÍ COMO EL FOMENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN, DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN 2/2006, DE 23 DE JUNIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Intervención Delegada en la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 2/2006, de 23 de junio de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se determina la fiscalización por muestreo de los expedientes relativos a la concesión de subvenciones para la gestión sostenible de los recursos forestales, para la prevención y lucha contra los incendios forestales y para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento y gestión sostenible de los recursos cinegéticos, y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se han presentado en el ejercicio 20__, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

Porcentaje cubierto de expedientes:

Nº de expedientes revisados:
Nº de expedientes presentados:
Nº de expedientes contabilizados:

Procedimiento utilizado en la selección de las muestras:

(En caso de haber sido varios los utilizados indicar procedimiento y relación anual a la que se aplicó cada uno).

Incidencias, anomalías o defectos detectados

(Relacionarlos, indicar los que fueron subsanados y, en su caso, aquellos respecto a los cuales se tramitó discrepancia. Detallar, asimismo, si alguno de los expedientes debería motivar un expediente de reintegro, indicando las circunstancias concurrentes e identificando individualizadamente el/los expediente/s en cuestión).

Resultado de la fiscalización:

(Indicar el resultado. En el caso de deficiencias, las actuaciones realizadas con indicación de las irregularidades e identificación de los informes emitidos).

INSTRUCCIÓN 3/2006, DE 23 JUNIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE CONTROL EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS.

El artículo 81.4 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 14.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía establecen la posibilidad de sustituir la fiscalización previa de los derechos por la toma de razón de éstos, debiéndose establecer por la Intervención General de la Junta de Andalucía un procedimiento de control a posteriori.

En el referido marco jurídico esta Intervención General mediante Circular 6/1991, de 7 de mayo, estableció un sistema de control a posteriori para el examen de la legalidad y eficacia en la gestión de los tributos cedidos.

Actualmente, la regulación jurídica de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas ha sido objeto de reformas sustanciales, tanto en su régimen general como en el aplicable a cada Comunidad Autónoma, a partir de la modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre.

Por lo que se refiere al régimen de intervención y fiscalización en esta materia, las líneas básicas vienen establecidas en el artículo 52 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, incorporando la obligatoria rendición de cuentas anual de la Comunidad Autónoma a la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la “Cuenta de gestión de tributos cedidos”. También, y de forma expresa, se determina que estos controles se llevarán a cabo de acuerdo con los principios generales contenidos en la Ley General Presupuestaria.

Por otra parte, el ámbito material de la cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha visto notablemente ampliado, en virtud de la reforma del artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía operada por la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

En el referido marco jurídico esta Intervención General dictó la Instrucción 3/2003, de 23 de abril, con la que se configuró un nuevo marco de control a posteriori para el examen de la legalidad y eficacia en la gestión de los tributos cedidos. Con dicha norma se sustituyó el régimen de control establecido para los ejercicios anteriores a 2004, dictándose nuevas reglas para el ejercicio del control interno de los tributos cedidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la actualidad, existen determinadas circunstancias que aconsejan la revisión parcial del modelo de control establecido por la Instrucción 3/2003, precitada.
Tales circunstancias pueden resumirse de la siguiente manera:

a) La implantación del Sistema Unificado de Recursos (SUR), el 20 de febrero de 2005, en las Oficinas Liquidadoras conforme a lo previsto en el Convenio de 26 de julio de 1999 formalizado entre la Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores de la Propiedad.

b) La necesidad de contar con un sistema de selección de muestras que, en virtud de lo establecido en la Instrucción 3/2003, integre el universo de los actos de contenido económico incluidos en el alcance de los informes y adaptado a la aplicación del Sistema Unificado de Recursos (SUR).

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, el contenido del informe denominado de *Oficinas Liquidadoras* quedará integrado, a partir del ejercicio 2005, en el alcance de las actuaciones de control planificadas por la Intervención General respecto a los informes de legalidad y de gestión. Además, las Intervenciones actuantes seleccionarán la muestra a partir de una herramienta informática que le será habilitada por los Servicios de Contabilidad de este Centro Directivo.

Por todo ello, y al amparo de las facultades de dirección atribuidas a esta Intervención General por el artículo 72 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, se establecen las siguientes normas:

Primera. Control de tributos cedidos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se sustituye la fiscalización previa de los ingresos procedentes de los tributos cedidos por el control inherente a su toma de razón y por un control financiero y de gestión posterior, en los términos previstos en esta Instrucción.

Segunda. Ámbito objetivo.

1. Serán objeto de la fiscalización establecida en la presente Instrucción todos los actos, documentos y expedientes relativos a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

2. En el caso particular del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, la presente Instrucción sólo será de aplicación a partir del momento en que se haya procedido al traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de la gestión de dichos tributos.

Tercera. Contenido del control anual.

1. El ejercicio del control previsto en el artículo 81.4 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía dará lugar a la elaboración de los siguientes informes:

a) Informe de legalidad.
b) Informe de gestión.
c) Informe financiero.

2. Las Intervenciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda serán las unidades administrativas competentes para la emisión de los informes previstos en las letras a) y b) del punto 1.
3. Los informes citados anteriormente serán remitidos a la Intervención General de la Junta de Andalucía en un plazo no superior a seis meses a partir del 31 de diciembre del año objeto de control. Dicho Centro Directivo procederá a consolidar los mismos y a emitir el informe financiero.

Cuarta. Informe de legalidad.

1. Se elaborará un Informe de legalidad, de carácter anual, que tendrá por objeto verificar el cumplimiento de la misma en la tramitación de los expedientes.
2. Los Interventores incluirán en el informe los incumplimientos significativos que hayan sido detectados durante o en conexión con la auditoría y recogerán una mención expresa del grado de observancia de la normativa aplicable.
3. La información sobre el grado de cumplimiento deberá situarse en una perspectiva adecuada, con el objeto de que el lector pueda juzgar su importancia. Se debe señalar, por tanto, la relación que guardan los incumplimientos detectados con el universo o el número total de casos examinados y serán cuantificados en términos de valor monetario cuando sea posible y apropiado. Asimismo, se deberá hacer referencia expresa a aquella legislación en la que habitualmente se ha centrado la investigación auditora en materia de cumplimiento.
4. Los informes de legalidad deberán estar soportados por la cumplimentación de los cuadros normalizados que se relacionan en el Anexo I de la presente Instrucción, de acuerdo con las reglas que se indican en los mismos.

Quinta. Selección de la muestra.

1. Las Intervenciones actuantes seleccionarán la muestra a partir de una herramienta informática que le será habilitada por los Servicios de Contabilidad de la Intervención General. Dicha herramienta habilitará el

acceso a todos los actos de contenido económico integrados en el SUR, incluidos aquellos tributos gestionados por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. Ello posibilitará la selección de muestras a través de una serie de informes elaborados de acuerdo a hitos predeterminados y en función de porcentajes y criterios definidos en las actuaciones de planificación de los correspondientes controles.

2. La muestra seleccionada se refiere a un universo constituido por los siguientes elementos:
   - Expedientes administrativos tramitados a lo largo del ejercicio presupuestario en curso. En dicha expresión deberán entenderse incluidos todos aquellos expedientes relativos a los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía que hayan sido objeto de cualquier actuación administrativa de gestión, liquidación o recaudación durante el ejercicio objeto de control. Por lo tanto, el universo comprenderá los expedientes iniciados en el año, con independencia del estado de tramitación en el que se encuentren; los iniciados y concluidos en el año; y los concluidos en el año aunque se hubieran iniciado en ejercicios anteriores.
   - Documentos justificativos de ingresos materializados durante el ejercicio presupuestario en curso derivados de la recaudación de los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma, estén o no asociados a la existencia de un expediente administrativo.

3. Se entenderá por muestra el grupo de elementos del universo representativo del mismo, que va a ser seleccionado para ser revisado y generalizar los resultados de la revisión al total del universo.

4. Dentro del primer trimestre de cada ejercicio posterior al que es objeto de control, cada Intervención propondrá en forma motivada a la Intervención General de la Junta de Andalucía, para su aprobación, el alcance de las actuaciones de control, así como el tamaño de la muestra que se va a seleccionar, tanto en lo que se refiere al informe de cumplimiento como al informe de gestión, en la forma prevista en esta Norma.

5. A la vista de dichas propuestas la Intervención General resolverá sobre cada una de ellas, determinando, en su caso, los umbrales de materialidad de los informes de control financiero permanente.
6. La propuesta de selección de la muestra deberá observar los siguientes requisitos:
    a) La muestra deberá estar compuesta por un porcentaje de elementos de cada tributo equivalente a su importancia proporcional en el universo
    b) La propuesta incluirá el importe de la cuota a ingresar de todos los elementos que, en razón de su cuantía, integrarán en todo caso la muestra elegida.

Sexta.- Informe Financiero.

1. El informe financiero será emitido directamente por el Servicio de Control Financiero de esta Intervención General, y comprenderá un análisis del nivel de ejecución de los ingresos procedentes de tributos cedidos. Para ello, se harán constar en el mismo los siguientes aspectos:

a) Análisis de las cantidades reconocidas y recaudadas en relación con el volumen de expedientes tramitados y las previsiones de ingresos.
b) Evolución comparativa de la recaudación en relación con el último informe emitido con carácter anual. Estudio de la razonabilidad de las cifras de ingresos presentadas en la ejecución del presupuesto.
c) Análisis comparativo de las cantidades liquidadas con relación al coste del programa presupuestario creado para dar soporte económico a la gestión e inspección de tributos y demás medios afectos a tales fines.
d) Recomendaciones.

2. Los informes financieros deberán estar soportados por la cumplimentación de los cuadros normalizados que se relacionan en el Anexo II de la presente Instrucción, de acuerdo con las reglas que se indican en los mismos.

Séptima.- Informe de gestión.

1. El informe de gestión comprende la evaluación de los procedimientos seguidos en la tramitación de los tributos cedidos. Específicamente, se referirá a la determinación de los sistemas que existan para evaluar su calidad, así como las

medidas que se toman para la eliminación o corrección de las limitaciones que pudieran contener dichos procedimientos.

2. Este control operativo, por su complejidad técnica, se realizará con el apoyo directo de la Intervención General de la Junta de Andalucía que, a través del Servicio de Control Financiero, elaborará los programas de trabajo correspondientes a cada ejercicio económico.
3. Con carácter general, se analizará el grado de eficacia en la tramitación de los expedientes de los tributos cedidos. En particular, y a título meramente enunciativo, se podrán analizar las siguientes cuestiones:

a) Análisis de las medidas adoptadas para velar por que todos los obligados declaren, lo que se llevará a cabo con carácter global e individualizado por cada tipo de impuesto. En dicho apartado se motivarán las recomendaciones propuestas, que serán recogidas en un estudio comparativo con respecto a ejercicios anteriores.
b) Análisis del volumen de expedientes pendientes de tramitación, distinguiendo por tipología y situación. Para ello, se recabará dicha información del órgano gestor, determinándose la razonabilidad de las cifras obtenidas e incluyéndose todas las situaciones a que pueda dar lugar un expediente, desde que se presenta hasta que se archiva definitivamente.
c) Análisis de la eficacia del control llevado a cabo por las distintas Delegaciones Provinciales sobre las Oficinas Liquidadoras, así como sobre la actuación de las Oficinas Coordinadoras de ámbito provincial.
d) Existencia de medidas para conocer o valorar el nivel de fraude, analizar sus causas y actuar en consecuencia.
e) Análisis de los tiempos medios de tramitación de los expedientes en el caso de que la obtención de dicha información fuera posible, con diferenciación de la tipología y situación de cada tributo, mediante la oportuna ponderación de tiempos y números de expedientes.
f) Estudio del control que se realiza sobre la recaudación efectiva y sobre el análisis de posibles prescripciones de los derechos a cobrar.
g) Análisis de los procedimientos y tipos de reclamación.
h) Determinación de los posibles errores que pueden surgir en los tratamientos masivos de información y su incorporación a los diferentes sistemas informáticos.

i) Número de recursos existentes y porcentajes de admisión e inadmisión, así como estimación y desestimación de las pretensiones de los recurrentes.
j) Comprobación de la aplicación en todas las dependencias y/o delegaciones de sistemas y criterios homogéneos.
k) Estudio de la razonabilidad de los plazos de gestión de cada tributo.
l) Análisis de las cifras de ingresos presentadas en la ejecución del presupuesto.
m) Estudio comparativo de los medios utilizados y los resultados obtenidos en los diferentes centros gestores o en distintos periodos de tiempo.
n) Existencia de objetivos y nivel de cumplimiento.

4. Las actuaciones en las que se base el informe de gestión deberán estar soportadas por la cumplimentación de los cuadros normalizados que se relacionan en el Anexo III de la presente Instrucción, de acuerdo con las reglas que se indican en los mismos.

Octava.- Emisión de informes.

1. Los informes previstos en la presente Instrucción se emitirán de conformidad a las Normas de Auditoría del sector Público e incluirán con carácter mínimo los siguientes apartados:

   - Objetivos y alcance del trabajo desarrollado.
   - Resultados y conclusiones obtenidas.
   - Recomendaciones sobre el Informe anual.
   - Limitaciones encontradas en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.
   - Incumplimientos y otros aspectos significativos.
   - Descripción de los logros más notables alcanzados por el centro auditado.
   - Indicación de las posibles consecuencias negativas que puedan derivarse de no corregir las deficiencias señaladas.
   - Cumplimentación del trámite de alegaciones.

- Anexos.

Novena. Tramitación de informes.

Los informes se tramitarán de conformidad con las siguientes reglas:

1. Los informes de legalidad y de gestión serán remitidos para alegaciones a los titulares de las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda, quienes dispondrán de quince días para cumplimentar dicho trámite. Una vez que se hayan elevado a definitivos, se remitirán a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en el plazo descrito en el punto 3 de la Norma Tercera, para su consolidación.
2. La Intervención General remitirá el informe financiero para alegaciones a la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria, que dispondrá igualmente de quince días para manifestar lo que estime procedente.
3. La Intervención General de la Junta de Andalucía procederá a la consolidación de los informes remitidos por las Intervenciones Provinciales, a su integración con el informe financiero y a la remisión de todos ellos al titular de la Consejería de Economía y Hacienda y a la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.

Décimo primera. Norma transitoria y cesación de efectos.

1. La presente Instrucción será de aplicación a los informes que se emitan con respecto al ejercicio económico 2005.
2. Queda sin efecto para los ejercicios posteriores a 2005 la Instrucción 3/2003, de 23 de abril, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se dictan normas sobre el control posterior en materia de tributos cedidos y así como cuantas otras circulares, instrucciones y órdenes hayan sido dictadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía y se opongan al contenido de la misma.

INSTRUCCIÓN Nº 4/2006, DE 23 DE JUNIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA FISCALIZACIÓN POR MUESTREO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA NACIONAL POR SUPERFICIE A LOS PRODUCTORES DE FRUTOS DE CÁSCARA Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN

El artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su actual redacción dada por la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, establece que la función interventora podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas, entre otros, a los gastos de subvenciones (en términos similares se pronuncia el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía).

Asimismo, el apartado 3 del citado artículo 78 dispone que, a dichos efectos, la Intervención General determinará los actos, documentos y expedientes sobre los que la función interventora podrá ser ejercitada sobre una muestra y no sobre el total de los expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la selección, identificación y tratamiento de la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisión que pueda derivarse del ejercicio de esta función.

El sistema de muestreo parece razonable aplicarlo a actos de producción masiva y sometidos a procedimientos muy reglados, donde el mejor control resulta ser el ejercido por los propios servicios gestores mediante la revisión de los expedientes.

Esta circunstancia aconseja la agilización de los mecanismos de control, compatibilizando una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos públicos con los controles encaminados a verificar su uso adecuado, con el objetivo de alcanzar y dar cumplimiento, no sólo al principio de legalidad, sino también a los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir la gestión del gasto público, sin que por ello se vean afectados los principios de la función fiscalizadora. De este modo, el

procedimiento de gestión tan sólo se vería interrumpido en función del número de las deficiencias y de la singular importancia de las posibles irregularidades que se pongan de manifiesto en los actos, documentos o expedientes examinados.

La tramitación de los expedientes para la concesión de la ayuda nacional por superficie a los productores de frutos de cáscara reúne las características antes señaladas en orden al ejercicio de la función interventora mediante técnicas de muestreo, por lo que esta Intervención General dicta las siguientes

INSTRUCCIONES

PRIMERA.- OBJETO.

La presente Instrucción tiene por objeto establecer el régimen de fiscalización de los expedientes de subvenciones tramitados para la concesión de la ayuda nacional por superficie, financiada al cincuenta por ciento por la Consejería de Agricultura y Pesca y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los productores de frutos de cáscara, previstas en el artículo 49.3 de la Orden de 28 de enero de 2005, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se regulan determinados regímenes de ayudas comunitarias a la Agricultura para la campaña 2005/2006, los regímenes de ayudas comunitarias a la Ganadería, la prima láctea y los pagos adicionales para el año 2005, la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas para el año 2005, las declaraciones de superficies de tabaco, algodón y forrajes para desecación, así como las declaraciones de cultivo a efectos de las solicitudes de ayudas agroambientales, y en el artículo 41, apartados 4 a 7, del Real Decreto 2353/2004, de 23 de diciembre, sobre determinados regímenes de ayuda comunitarios a la agricultura para la campaña 2005/2006 y a la ganadería para el año 2005.

SEGUNDA.- FUNCIÓN INTERVENTORA.

1.- La función interventora respecto de los expedientes tramitados para la concesión de dichas subvenciones se efectuará por procedimiento de muestreo, con arreglo a lo que se determina en la presente Instrucción.

2.- La fiscalización previa por muestreo consiste en la fiscalización sobre muestras representativas del conjunto de los actos, los documentos y los expedientes susceptibles de producir obligaciones de naturaleza económica previamente a:

a) Su autorización.
b) La adquisición del compromiso de gasto.

3.- La fiscalización previa por muestreo implica, cuando la Intervención competente dé su conformidad, que ésta engloba todos los actos singulares que integran la totalidad del universo de la actividad controlada, con excepción de aquéllos que se devuelvan con informe de fiscalización de disconformidad.

TERCERA.- CONFIGURACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO.

1.- El procedimiento de muestreo a que se refiere la presente Resolución consistirá en la selección de expedientes de subvenciones que hayan de ser objeto de fiscalización, los cuales habrán de ser intervenidos sobre la base de la totalidad de la documentación incluida en los mismos, a fin de verificar que se han ajustado en su tramitación a las disposiciones que resultan de aplicación en cada caso.
2.- El universo o población, es decir, el conjunto de actos, documentos o expedientes integrados en la actividad controlada ya sea de manera singular y/o en un período determinado, estará constituido por el conjunto de expedientes a que se refiere la Instrucción Primera de esta Resolución que se sometan a fiscalización en un ejercicio presupuestario del que se ha de obtener la muestra representativa.

En base a ello, el muestreo deberá garantizar el examen de los mismos a medida que tienen entrada en la Intervención, por lo que, a los efectos de esta Resolución, estará constituido por los expedientes que pretendan remitirse a las Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca anualmente para su fiscalización.

CUARTA.- PORCENTAJE MINIMO.

Los expedientes a revisar se seleccionarán por muestreo, cubriendo, en todo caso y para cada ejercicio presupuestario, un porcentaje no inferior al 5 por 100 de los expedientes que se tramiten, que deberán representar, al menos, el 5 por ciento de los créditos presupuestarios que pretendan comprometerse, porcentajes que deberán respetarse en la selección de la muestra en base a la relación anual.

Sin perjuicio de lo anterior, habrá de respetarse el siguiente tamaño de muestra establecido según el número de expedientes que constituyan el correspondiente universo:

Nº de expedientes del universo	Nº de expedientes que constituyen la muestra
1-50	50%
51-100	Al menos el 10%
101 ó más	Al menos el 5%

QUINTA.- MÉTODO DE SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA.

1.- La Dirección General de la Producción Agraria remitirá, con periodicidad anual, una relación certificada de los expedientes de subvenciones que se pretendan someter a fiscalización a la Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca. Los expedientes deberán encontrarse en la fase de tramitación que corresponda al momento en que ha de realizarse la fiscalización previa y han de encontrarse a disposición de la citada Intervención.

Dicha relación anual será remitida a la Intervención mediante oficio, debiendo contener, al menos, los siguientes datos:

a) Nº de expediente.
b) Datos identificativos del beneficiario (nombre o denominación y CIF).
c) Importe de la subvención.

d) Concurrencia o no de la condición de agricultor profesional.
e) Datos de las parcelas: Plantación, superficie y provincia.

2.- Los expedientes a examinar se obtendrán de dicha relación, mediante la aplicación, con carácter general, del procedimiento de muestreo sistemático con arranque al azar[3].

3.- Seleccionada la muestra por la Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca, ésta dirigirá oficio al órgano gestor indicándole los expedientes seleccionados que han de someterse a fiscalización previa.

El órgano gestor remitirá a la Intervención, en un plazo máximo de tres días, la documentación completa[4] de los expedientes seleccionados que resulte exigible según lo establecido en la normativa reguladora de las presentes subvenciones, acompañando la preceptiva propuesta de documento contable "AD" a cada uno de ellos.

4.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la Intervención Delegada lo estimase oportuno, podrá aplicar el método de selección que considere más adecuado entre los siguientes:

- Muestreo sistemático con arranque aleatorio.
- Muestreo aleatorio simple.
- Muestreo numérico.

[3] Selección sistemática con arranque al azar: Este método consiste en dividir el número de elementos de la población por el número de elementos de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Si éste es, por ejemplo, de 10, y se fija al azar como punto de partida el tercer elemento, la muestra estará compuesta por los elementos 3, 13, 23, 33 y así sucesivamente. En la utilización de este método, el Interventor deberá asegurarse de que la población no está estructurada de tal forma que el intervalo de muestra coincida con un determinado patrón de la población.

[4] A los efectos de la presente Instrucción, la documentación a aportar respecto a los expedientes seleccionados en la fase de fiscalización previa consistirá en:

- Resolución de concesión de la ayuda comunitaria por superficie al productor de frutos de cáscara, dictada por la Dirección General del FAGA.
- Propuesta, de la Dirección General de la Producción Agraria, de resolución de concesión de la ayuda nacional por superficie al productor de frutos de cáscara.
- Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Acreditación, en su caso, del cumplimiento de la condición de agricultor profesional.
- Documento acreditativo de la inclusión de la subvención en la Base de Datos de Subvenciones.

5.- En el supuesto en que la Intervención utilizase un método de selección alternativo al previsto con carácter general, habrá de dejar constancia del mismo en el informe-resumen que deberá remitir anualmente a la Intervención General. Asimismo, para efectuar la selección deberá tener en cuenta estos criterios, a efectos de garantizar la aleatoriedad y objetividad del proceso de selección:

- Los expedientes seleccionados deben ser lo más representativos posible de la presente línea de ayudas.

- Con la muestra de expedientes que resultara seleccionada deberá cubrirse, como mínimo, el porcentaje establecido en la Instrucción Cuarta.

SEXTA.- FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS.

1.- Los expedientes seleccionados serán objeto de fiscalización previa sobre la base documental completa de los mismos[5], a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y extremos establecidos en la normativa aplicable a dichas subvenciones, así como los exigidos por la Ley General de la Hacienda Pública, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y demás normativa concordante en la materia, quedando los no seleccionados exentos de la aportación de la misma, salvo lo que se dispone sobre ellos más adelante para los supuestos en que sea precisa la ampliación de la muestra.

2.- El muestreo en la fase de fiscalización previa se realizará con base en una única relación anual, de forma tal que seleccionada la muestra, practicada de acuerdo con lo establecido en la presente Instrucción, y contabilizadas las correspondientes propuestas de documentos contables “AD”, el órgano gestor procederá a remitir, dictadas las resoluciones de concesión de las ayudas y notificadas a los productores beneficiarios, en un plazo máximo de quince días desde la contabilización del compromiso de gasto, a la Intervención Delegada las propuestas de documentos contables “OP” correspondientes a los expedientes seleccionados.

Dichas propuestas han de acompañarse de las resoluciones de concesión y del resto de la documentación exigida, en su caso, por la normativa reguladora y demás concordante en la materia.

3.- Las propuestas y los documentos contables correspondientes a expedientes que hayan sido seleccionados en aplicación del procedimiento de muestreo, (AD y OP), serán estampillados por el órgano que los expida a efectos de hacer constar en ellos: “Intervenido por muestreo. Expediente seleccionado”.

4.- Las propuestas de documentos contables correspondientes a expedientes seleccionados en fase de fiscalización previa y, por ende, en fase de intervención formal del pago, se grabarán en el Sistema Integrado Júpiter en el tipo 6 (subvenciones y transferencias), subtipo 1 (subvenciones regladas).

SÉPTIMA.- RESULTADO DEL MUESTREO Y DETECCION DE DEFICIENCIAS.

1.- Fiscalizados los expedientes seleccionados la Intervención seguirá respecto a ellos el trámite establecido con carácter general, emitiendo, en su caso, los informes de fiscalización que procedan respecto a los mismos.

2.- En el supuesto de que la revisión de los expedientes seleccionados pusiera de manifiesto deficiencias, irregularidades o anomalías, se procederá a su cuantificación.

Asimismo, se analizarán las anomalías y defectos detectados con el objeto de determinar:

a) Si tienen carácter sistemático, porque pueden afectar a todos los elementos que componen la población, entendiendo por tal la totalidad de los expedientes remitidos para su fiscalización;

[5] La enumerada en la nota al pie nº 2 anterior.

b) Si tienen carácter aislado, por afectar a una parte definida y delimitada de la población, o de la documentación aportada con los expedientes, única parte en la que podrían producirse o repetirse los defectos o anomalías detectados.

OCTAVA.- AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA.

1.- Cuando la Intervención considere graves las anomalías o defectos detectados en los expedientes revisados, así como, en todo caso, cuando su cuantía exceda del 5 por 100 del importe total de los expedientes de ayudas o subvenciones que han sido seleccionados y cuando de dichos defectos, de no subsanarse, pudiera derivarse la formulación de las correspondientes propuestas de inicio de expedientes de reintegro, se ampliará la muestra mediante una nueva selección sobre la base de la misma relación de expedientes objeto de la muestra respecto de la cual se detectó la deficiencia.

2.- La decisión de ampliar la muestra deberá ser trasladada al órgano gestor, según el modelo de comunicación que figura como Anexo I en la presente Instrucción, y a la Intervención General, haciendo constar el objeto, alcance y motivos de la ampliación especificando en base a qué concretas deficiencias observadas en los expedientes seleccionados inicialmente se ha ampliado la muestra, determinando los expedientes a los que afecta.

3.- El alcance de la revisión en los expedientes seleccionados como consecuencia de la ampliación prevista en el apartado anterior, se determinará atendiendo a la naturaleza de los defectos o anomalías detectados en los expedientes inicialmente seleccionados, de forma que:

a) Si los errores son sistemáticos, el alcance deberá ser el mismo que el aplicado en la revisión de los expedientes seleccionados inicialmente.
b) Si los errores son aislables a una parte de la población que reúna una serie de notas o caracteres propios que permita diferenciarla del resto de la población, o bien son propios de una determinada parte de la documentación presentada, los procedimientos de revisión pueden limitarse a la parte de la población o de la

documentación a la que únicamente puedan afectar los errores detectados en los expedientes seleccionados inicialmente.

NOVENA.- FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES NO SELECCIONADOS.

1.- Una vez realizada la fiscalización previa de los expedientes seleccionados, tanto inicialmente como, en su caso, aquellos que lo hayan sido a consecuencia de la ampliación de la muestra, se comunicará al órgano gestor a efectos de que por éste se prosigan las actuaciones procedimentales oportunas respecto a los expedientes no seleccionados.

2.- En este sentido, dictadas las resoluciones de concesión de las subvenciones y notificadas a los beneficiarios, el órgano gestor procederá a remitir a la Intervención competente, simultáneamente con la remisión de las propuestas de documentos contables “OP” de los expedientes seleccionados, las propuestas de documentos contables “ADOP” correspondientes a los expedientes no seleccionados de la muestra en cuestión, acompañadas de fotocopia compulsada de las resoluciones de concesión y de la “hoja de datos” acreditativa de la inclusión de los expedientes en la Base de Datos de Subvenciones.

Recibidas en la Intervención Delegada se procederá a su contabilización, previa comprobación de que las mismas corresponden a los expedientes que figuran en la correspondiente relación y sin perjuicio, en su caso, de las devoluciones de las propuestas que procedan por errores en su confección o por no aportar la documentación citada en el párrafo anterior, a efectos de su subsanación.

3.- Las propuestas y los documentos contables correspondientes a expedientes que no hayan sido seleccionados en aplicación del procedimiento de muestreo (ADOP), serán estampillados por el órgano que los expida a efectos de hacer constar en ellos: “Intervenido por muestreo. Expediente no seleccionado”.

4.- Las propuestas de documentos contables correspondientes a expedientes no seleccionados en fase de fiscalización previa y, por ende, en fase de intervención formal del pago, se grabarán en el Sistema Integrado Júpiter en el tipo 6

(subvenciones y transferencias), subtipo 24 (subvenciones muestreo en base de datos).

DÉCIMA.- INFORMACIÓN A LA INTERVENCIÓN GENERAL.

1.- La Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca deberá enviar a la Intervención General para seguimiento, control y perfeccionamiento de los procedimientos de fiscalización seguidos, y al órgano gestor, a fin de facilitar la toma de decisiones por éste, un informe-resumen, cuyo modelo figura como Anexo II en la presente Instrucción, del resultado de la aplicación del sistema de fiscalización por muestreo efectuada sobre los expedientes de subvenciones tramitados durante el ejercicio presupuestario, en el que se incluirá, como mínimo:

a) El porcentaje cubierto y el número de expedientes revisados en relación con el total de expedientes presentados y contabilizados.

b) El procedimiento utilizado en la selección de la muestra.

c) Las incidencias, anomalías o defectos detectados en las revisiones efectuadas, detallando los que fueron subsanados y, en su caso, aquéllos respecto a los cuales se formuló discrepancia. En su caso, se hará constar si alguno de los expedientes revisados debiera motivar un expediente de reintegro.

2.- Si la información contenida en el informe-resumen remitido a la Intervención General lo requiriese, se procederá a comunicar las conclusiones obtenidas de la aplicación del procedimiento de muestreo a la Dirección General de la Producción Agraria, a efectos de la adopción de las medidas oportunas tendentes a corregir las deficiencias advertidas.

UNDÉCIMA.- EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.

Con independencia de lo señalado en los apartados anteriores y de la aplicación del procedimiento de muestreo, se podrá determinar por el Interventor General el

sometimiento a fiscalización previa de aquellos expedientes que se considere oportuno por razón de las circunstancias especiales concurrentes en los mismos.

DUODECIMA.- COMIENZO DE LOS EFECTOS DE LA PRESENTE INSTRUCCIÓN.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su adopción, siendo de aplicación a aquellos expedientes que sean remitidos para su fiscalización previa a partir de dicha fecha.

ANEXO I

COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA NACIONAL POR SUPERFICIE A LOS PRODUCTORES DE FRUTOS DE CÁSCARA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA INSTRUCCIÓN 4/2006, DE 23 DE JUNIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

La Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 4/2006, de 23 de junio 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de expedientes relativos a la concesión de la ayuda nacional por superficie a los productores de frutos de cáscara y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se especifican a continuación, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

DATOS BASICOS DE LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS

Número de expedientes:
Fase contable de tramitación de los expedientes: (AD, OP).
Normativa reguladora de los expedientes: Orden de 28 de enero de 2005 de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Período de fiscalización:
Organo gestor:
Número de los expedientes fiscalizados (Nº de expediente Júpiter y beneficiario):

ALCANCE Y LIMITACIONES AL CONTROL

La fiscalización ha consistido en la verificación de los siguientes extremos:
.-
.-

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

.- Tipo de procedimiento aplicado:

.- Volumen de la muestra:

ANOMALÍAS O DEFICIENCIAS DETECTADAS

(Relación de deficiencias, así como el número de expedientes y la cuantía total de los expedientes afectados por las mismas, así como su identificación y la provincia en la que radica la parcela).

ALCANCE DE LA AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA

(Se determinará según se hayan detectado errores sistemáticos o aislables, siguiendo lo establecido en el apartado 8.3 de la presente Instrucción; identificándose los expedientes seleccionados de la relación remitida por el órgano gestor con indicación del número de expediente, los datos identificativos del tercero, el importe de la subvención propuesta y la provincia en la que se localiza la parcela).

ANEXO II

INFORME-RESUMEN DE FISCALIZACIÓN POR MUESTREO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA NACIONAL POR SUPERFICIE A LOS PRODUCTORES DE FRUTOS DE CÁSCARA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA INSTRUCCIÓN 4/2006, DE 23 DE JUNIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

La Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 4/2006, de 23 de junio de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de expedientes relativos a la concesión de la ayuda nacional a los productores de frutos de cáscara y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se han tramitado en el ejercicio económico de 20__, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

Porcentaje cubierto de expedientes:

Nº de expedientes revisados:

Nº de expedientes presentados:

Nº de expedientes contabilizados:

Procedimiento utilizado en la selección de las muestras:

.- ...

Alcance y limitaciones al control:

La fiscalización ha consistido en la verificación de los siguientes extremos:

.-

.-

Incidencias, anomalías o defectos detectados

(Relacionarlos, indicar los que fueron subsanados y, en su caso, aquellos respecto a los cuales se tramitó discrepancia. Detallar, asimismo, si alguno de los expedientes debería motivar un expediente de reintegro, indicando las circunstancias concurrentes e identificando individualizadamente el/los expediente/s en cuestión).

Resultado de la fiscalización

(Indicar el resultado. En caso de deficiencias, las actuaciones realizadas con indicación de las irregularidades e identificación de los informes emitidos).

INSTRUCCIÓN Nº 5/2006, DE 14 DE JULIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA FISCALIZACIÓN POR MUESTREO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE BONIFICACIONES DE LOS INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS DE MEDIACIÓN ICO DESTINADOS A PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SECTOR AGRARIO POR LAS HELADAS ACAECIDAS EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2005 Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN.

El artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su actual redacción dada por la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, establece que la función interventora podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas, entre otros, a los gastos de subvenciones (en términos similares se pronuncia el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía).

Asimismo, el apartado 3 del citado artículo 78 dispone que, a dichos efectos, la Intervención General determinará los actos, documentos y expedientes sobre los que la función interventora podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total de los expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la selección, identificación y tratamiento de la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisión que pueda derivarse del ejercicio de esta función.

El sistema de muestreo parece razonable aplicarlo a actos de producción masiva y sometidos a procedimientos muy reglados, donde el mejor control resulta ser el ejercido por los propios servicios gestores mediante la revisión de los expedientes.

Esta circunstancia aconseja la agilización de los mecanismos de control, compatibilizando una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos públicos con los controles encaminados a verificar su uso adecuado, con el objetivo de alcanzar y dar cumplimiento, no sólo al principio de legalidad, sino también a los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir la gestión del gasto público, sin que por ello

se vean afectados los principios de la función fiscalizadora. De este modo, el procedimiento de gestión tan sólo se vería interrumpido en función del número de las deficiencias y de la singular importancia de las posibles irregularidades que se pongan de manifiesto en los actos, documentos o expedientes examinados.

La tramitación de los expedientes para la concesión de las bonificaciones de intereses de los préstamos de mediación ICO, destinados a paliar los daños producidos en el sector agrario por las heladas acaecidas en los meses de enero a marzo de 2005, reúne las características antes señaladas en orden al ejercicio de la función interventora mediante técnicas de muestreo, por lo que esta Intervención General dicta las siguientes

INSTRUCCIONES

PRIMERA.- OBJETO.

La presente Instrucción tiene por objeto establecer el régimen de fiscalización de los expedientes de subvenciones tramitados para la concesión de la bonificación de ¡intereses de los préstamos de mediación ICO, dirigidos a las explotaciones agrarias afectadas por las heladas, destinados a la financiación de los costes de producción de los cultivos que se inicien con posterioridad a las fechas de las heladas y a la recuperación de la capacidad productiva de los cultivos leñosos que hayan sufrido daños en madera, según lo establecido en la Orden de 1 de junio de 2005, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen normas para la aplicación de las medidas para paliar los daños producidos en el sector agrario por la heladas de los meses de enero a marzo de 2005.

SEGUNDA.- FUNCIÓN INTERVENTORA.

1.- La función interventora respecto de los expedientes tramitados para la concesión de dichas subvenciones se efectuará por procedimiento de muestreo, con arreglo a lo que se determina en la presente Instrucción.

2.- La fiscalización previa por muestreo consiste en la fiscalización sobre muestras representativas del conjunto de los actos, los documentos y los expedientes susceptibles de producir obligaciones de naturaleza económica previamente a:

c) Su autorización.
d) La adquisición del compromiso de gasto.

3.- La intervención formal de la ordenación del pago por muestreo consiste en la fiscalización sobre muestras representativas del conjunto de cuantos documentos sean precisos para acreditar el derecho de quien haya de figurar como perceptor, previamente a:

a) El reconocimiento de la obligación.
b) La ordenación de los correspondientes pagos.

4.- La intervención de la aplicación de las subvenciones (justificación) por muestreo consiste en la fiscalización sobre muestras representativas del conjunto de documentos acreditativos de la inversión del importe de dichas subvenciones en las finalidades para las que se hubieran concedido.

5.- La fiscalización por muestreo, en cualquiera de las fases anteriormente señaladas de ejecución del gasto público, implica, cuando la Intervención competente dé su conformidad, que ésta engloba todos los actos singulares que integran la totalidad del universo de la actividad controlada, con excepción de aquéllos que se devuelvan con informe de disconformidad.

TERCERA.- CONFIGURACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO.

1.- El procedimiento de muestreo a que se refiere la presente Resolución consistirá en la selección de expedientes de subvenciones que hayan de ser objeto de fiscalización, los cuales habrán de ser intervenidos sobre la base de la totalidad de la documentación incluida en los mismos, a fin de verificar que se han ajustado en su tramitación a las disposiciones que resultan de aplicación en cada caso.

2.- El universo o población, es decir, el conjunto de actos, documentos o expedientes integrados en la actividad controlada ya sea de manera singular y/o en un período determinado, estará constituido por el conjunto de expedientes a que se refiere la Instrucción Primera de esta Resolución que se sometan a fiscalización en un ejercicio presupuestario del que se ha de obtener la muestra representativa.

En base a ello, el muestreo deberá garantizar el examen de los mismos a medida que tienen entrada en la Intervención, por lo que, a los efectos de esta Resolución, estará constituido por los expedientes que pretendan remitirse a la Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca anualmente para su fiscalización.

CUARTA.- PORCENTAJE MINIMO.

Los expedientes a revisar se seleccionarán por muestreo, cubriendo, en todo caso y para cada ejercicio presupuestario, un porcentaje no inferior al 5 por 100 de los expedientes que se tramiten, que deberán representar, al menos, el 5 por ciento de los créditos presupuestarios que pretendan ejecutarse o cuyos pagos hayan de justificarse, porcentajes que deberán tenerse en cuenta en la selección de la muestra en base a la relación anual.

Sin perjuicio de lo anterior, habrá de respetarse el siguiente tamaño de muestra establecido según el número de expedientes que constituyan el correspondiente universo:

Nº de expedientes del universo	Nº de expedientes que constituyen la muestra
1-50	50%
51-100	Al menos el 10%
101 ó más	Al menos el 5%

QUINTA.- MÉTODO DE SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA.

1.- La Dirección General de la Producción Agraria remitirá, con periodicidad anual, una relación certificada de los expedientes de subvenciones que se pretendan someter a fiscalización a la Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca. Los expedientes deberán encontrarse en la fase de tramitación que corresponda al momento en que ha de realizarse la fiscalización y han de encontrarse a disposición de la citada Intervención.

Dicha relación anual será remitida a la Intervención mediante oficio, debiendo contener, al menos, los siguientes datos:

f) Nº de expediente.
g) Datos identificativos del beneficiario (nombre o denominación y CIF).
h) Nº de reconocimiento de derecho a préstamo.
i) Datos del préstamo: Fecha de formalización, importe y plazo.
j) Importe de la subvención por los intereses bonificados.
k) Datos de la explotación: Cultivos y superficies afectadas por provincia.
l) Entidad colaboradora.

2.- Los expedientes a examinar se obtendrán de dicha relación, mediante la aplicación, con carácter general, del procedimiento de muestreo sistemático con arranque al azar[6].

3.- Seleccionada la muestra por la Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca, ésta dirigirá oficio al órgano gestor indicándole los expedientes seleccionados que han de someterse a fiscalización.

El órgano gestor remitirá a la Intervención, en un plazo máximo de tres días, la documentación completa de los expedientes seleccionados que resulte exigible según lo establecido en la normativa reguladora de las presentes subvenciones, acompañando la preceptiva propuesta de documento contable a cada uno de ellos.

[6] Selección sistemática con arranque al azar: Este método consiste en dividir el número de elementos de la población por el número de elementos de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Si éste es, por ejemplo, de 10, y se fija al azar como punto de partida el tercer elemento, la muestra estará compuesta por los elementos 3, 13, 23, 33 y así sucesivamente.

4.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la Intervención Delegada lo estimase oportuno, podrá aplicar el método de selección que considere más adecuado entre los siguientes:

- Muestreo sistemático con arranque aleatorio.
- Muestreo aleatorio simple.
- Muestreo numérico.

5.- En el supuesto en que la Intervención utilizase un método de selección alternativo al previsto con carácter general, habrá de dejar constancia del mismo en el informe-resumen que deberá remitir anualmente a la Intervención General. Asimismo, para efectuar la selección deberá tener en cuenta estos criterios, a efectos de garantizar la aleatoriedad y objetividad del proceso de selección:

- Los expedientes seleccionados deben ser lo más representativos posible de la presente línea de ayudas.

- Con la muestra de expedientes que resultara seleccionada deberá cubrirse, como mínimo, el porcentaje establecido en la Instrucción Cuarta.

SEXTA.- FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

1.- Los expedientes seleccionados serán objeto de fiscalización sobre la base documental completa de los mismos, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y extremos establecidos en la normativa aplicable a dichas subvenciones, así como los exigidos por la Ley General de la Hacienda Pública, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y demás normativa concordante en la materia, quedando los no seleccionados exentos de la aportación de la misma, salvo lo que se dispone sobre ellos más adelante para los supuestos en que sea precisa la ampliación de la muestra.

En la utilización de este método, el Interventor deberá asegurarse de que la población no está estructurada de tal forma que el intervalo de muestra coincida con un determinado patrón de la población.

2.- El muestreo en la fase de fiscalización previa se realizará con base en una única relación anual, de forma tal que seleccionada la muestra, fiscalizados los expedientes seleccionados, tanto inicialmente como, en su caso, aquellos que lo hayan sido a consecuencia de la ampliación de la muestra, sobre la base de la documentación completa de los mismos, y contabilizadas las correspondientes propuestas de documentos contables "AD"[7], el órgano gestor procederá a remitir, en un plazo máximo de quince días desde su contabilización, a la Intervención Delegada las propuestas de documentos contables "AD"[2] correspondientes a los expedientes no seleccionados, a las que deberá adjuntarse la preceptiva hoja de datos acreditativa de la inclusión de los expedientes en la Base de Datos de Subvenciones.

Recibidas en la Intervención se procederá a su contabilización, previa comprobación de que las mismas corresponden a los expedientes que figuran en la correspondiente relación, sin perjuicio de las devoluciones de las propuestas de documentos contables que procedan por errores en su confección o por no aportar la hoja de datos antes citada, a efectos de su subsanación.

3.- El muestreo en la fase de intervención formal del pago se practicará, igualmente, en base a una única relación anual de la cual se seleccionarán los expedientes con independencia de que éstos hubiesen resultado seleccionados o no en la fase de fiscalización previa del gasto. Comunicados al órgano gestor los expedientes seleccionados en esta fase, éste procederá a remitir a la Intervención las correspondientes propuestas de documentos contables "OP", cumplimentadas con los preceptivos datos de justificación diferida. Dichas propuestas han de acompañarse de las resoluciones de concesión y del resto de la documentación exigida, en su caso, por la normativa reguladora y demás concordante en la materia.

Fiscalizados los expedientes seleccionados, incluidos, en su caso, los que lo hubieran sido por la decisión de ampliación de la muestra, y contabilizadas las propuestas de documentos contables "OP" de éstos, el órgano gestor enviará, en un plazo de quince días desde su contabilización, las propuestas de "OP" de los

expedientes no seleccionados, acompañadas de las resoluciones de concesión de las subvenciones.

De esta forma, verificado por la Intervención que dichas propuestas han sido correctamente grabadas (con el preceptivo dato de justificación diferida), que corresponden a los expedientes incluidos en la relación sometida a fiscalización y que se adjuntan las citadas resoluciones, procederá a su contabilización.

4.- El muestreo en la fase de intervención de la aplicación de las subvenciones (justificación) abarcará todas las justificaciones pendientes, seleccionándose, de igual modo los expedientes en base a una única relación anual, confeccionada de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución, con independencia de que éstos hayan sido objeto o no de selección en las fases anteriores de fiscalización. A tal efecto, y como se indica en los apartados anteriores, deberá aportarse la documentación pertinente, entre la que deberá encontrarse la certificación acreditativa de la aplicación de la subvención a las finalidades para las que se concedió, según determina el artículo 40.1, párrafo segundo, del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, en los términos establecidos en el apartado segundo de la Instrucción 3/2002, de 30 de abril, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece el modelo de certificación acreditativa del empleo de subvenciones, a efectos de su preceptiva fiscalización y contabilización.

Contabilizadas las propuestas de documentos contables “J” correspondientes a los expedientes seleccionados, tanto inicialmente como, en su caso, los que lo fueran por la decisión de ampliación de la muestra, el órgano gestor procederá a remitir, en un plazo de quince días desde su contabilización, las propuestas de documentos contables “J” de los expedientes no seleccionados, acompañadas de las certificaciones acreditativas de la aplicación de la subvención a las finalidades para las que se concedió, citadas en el párrafo anterior.

3.- Las propuestas y los documentos contables correspondientes (AD, OP y J), serán estampillados por el órgano que los expida a efectos de hacer constar en

[7] Tanto la correspondiente al ejercicio corriente como las de anualidades futuras.

ellos, según proceda: “Intervenido por muestreo. Expediente seleccionado” o “Intervenido por muestreo. Expediente no seleccionado”.

4.- Las propuestas de documentos contables correspondientes a expedientes seleccionados en fase de fiscalización previa (“AD”) se grabarán en el Sistema Integrado Júpiter en el tipo 6 (subvenciones y transferencias), subtipo 1 (subvenciones regladas) y las correspondientes a expedientes no seleccionados en esta fase lo serán en el tipo 6 (subvenciones y transferencias), subtipo 24 (subvenciones muestreo en base de datos).

Las propuestas de documentos contables “OP” y “J”, con independencia de que los expedientes resulten o no seleccionados en la fase de intervención formal del pago o de intervención de la aplicación de las subvenciones, habrán de grabarse en el tipo 6 (subvenciones y transferencias), subtipo 1 (subvenciones regladas) ó 24 (subvenciones muestreo en base de datos), según el subtipo que haya debido ser utilizado en el documento contable “AD”.

SÉPTIMA.- RESULTADO DEL MUESTREO Y DETECCION DE DEFICIENCIAS.

1.- Fiscalizados los expedientes seleccionados la Intervención seguirá respecto a ellos el trámite establecido con carácter general, emitiendo, en su caso, los informes de fiscalización que procedan respecto a los mismos.

2.- En el supuesto de que la revisión de los expedientes seleccionados pusiera de manifiesto deficiencias, irregularidades o anomalías, se procederá a su cuantificación.

Asimismo, se analizarán las anomalías y defectos detectados con el objeto de determinar:

c) Si tienen carácter sistemático, porque pueden afectar a todos los elementos que componen la población, entendiendo por tal la totalidad de los expedientes remitidos para su fiscalización;

d) Si tienen carácter aislado, por afectar a una parte definida y delimitada de la población, o de la documentación aportada con los expedientes, única parte en la que podrían producirse o repetirse los defectos o anomalías detectados.

OCTAVA.- AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA.

1.- Cuando la Intervención considere graves las anomalías o defectos detectados en los expedientes revisados, así como, en todo caso, cuando su cuantía exceda del 5 por 100 del importe total de los expedientes de ayudas o subvenciones que han sido seleccionados y cuando de dichos defectos, de no subsanarse, pudiera derivarse la formulación de las correspondientes propuestas de inicio de expedientes de reintegro, se ampliará la muestra mediante una nueva selección sobre la base de la misma relación de expedientes objeto de la muestra respecto de la cual se detectó la deficiencia.

2.- La decisión de ampliar la muestra deberá ser trasladada al órgano gestor, según el modelo de comunicación que figura como Anexo I en la presente Instrucción, y a la Intervención General, haciendo constar el objeto, alcance y motivos de la ampliación especificando en base a qué concretas deficiencias observadas en los expedientes seleccionados inicialmente se ha ampliado la muestra, determinando los expedientes a los que afecta.

3.- El alcance de la revisión en los expedientes seleccionados como consecuencia de la ampliación prevista en el apartado anterior, se determinará atendiendo a la naturaleza de los defectos o anomalías detectados en los expedientes inicialmente seleccionados, de forma que:

c) Si los errores son sistemáticos, el alcance deberá ser el mismo que el aplicado en la revisión de los expedientes seleccionados inicialmente.

d) Si los errores son aislables a una parte de la población que reúna una serie de notas o caracteres propios que permita diferenciarla del resto de la población, o bien son propios de una determinada parte de la documentación presentada, los procedimientos de revisión pueden limitarse a la parte de la población o de la

documentación a la que únicamente puedan afectar los errores detectados en los expedientes seleccionados inicialmente.

NOVENA.- INFORMACIÓN A LA INTERVENCIÓN GENERAL.

1.- La Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca deberá enviar a la Intervención General para seguimiento, control y perfeccionamiento de los procedimientos de fiscalización seguidos, y al órgano gestor, a fin de facilitar la toma de decisiones por éste, un informe-resumen, cuyo modelo figura como Anexo II en la presente Instrucción, del resultado de la aplicación del sistema de fiscalización por muestreo efectuada sobre los expedientes de subvenciones tramitados durante el ejercicio presupuestario, en el que se incluirá, como mínimo:

d) El porcentaje cubierto y el número de expedientes revisados en relación con el total de expedientes presentados y contabilizados.

e) El procedimiento utilizado en la selección de la muestra.

f) Las incidencias, anomalías o defectos detectados en las revisiones efectuadas, detallando los que fueron subsanados y, en su caso, aquéllos respecto a los cuales se formuló discrepancia. En su caso, se hará constar si alguno de los expedientes revisados debiera motivar un expediente de reintegro.

2.- Si la información contenida en el informe-resumen remitido a la Intervención General lo requiriese, se procederá a comunicar las conclusiones obtenidas de la aplicación del procedimiento de muestreo a la Dirección General de la Producción Agraria, a efectos de la adopción de las medidas oportunas tendentes a corregir las deficiencias advertidas.

DÉCIMA.- EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.

Con independencia de lo señalado en los apartados anteriores y de la aplicación del procedimiento de muestreo, se podrá determinar por el Interventor General el

sometimiento a fiscalización previa de aquellos expedientes que se considere oportuno por razón de las circunstancias especiales concurrentes en los mismos.

UNDÉCIMA.- COMIENZO DE LOS EFECTOS DE LA PRESENTE INSTRUCCIÓN.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su adopción, siendo de aplicación a aquellos expedientes que sean remitidos para su fiscalización previa a partir de dicha fecha.

ANEXO I

COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE BONIFICACIONES DE LOS INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS DE MEDIACIÓN ICO DESTINADOS A PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SECTOR AGRARIO POR LAS HELADAS ACAECIDAS EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2005, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA INSTRUCCIÓN 5/2006, DE 14 DE JULIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

La Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 5/2006, de 14 de julio 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de expedientes relativos a la concesión de bonificaciones de los intereses de los préstamos de mediación ICO destinados a paliar los daños producidos en el sector agrario por las heladas acaecidas en los meses de enero a marzo de 2005 y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se especifican a continuación, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

DATOS BASICOS DE LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS

Número de expedientes:
Fase contable de tramitación de los expedientes: (AD, OP, J).
Normativa reguladora de los expedientes: Orden de 1 de junio de 2005 de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Período de fiscalización:
Organo gestor:
Número de los expedientes fiscalizados (Nº de expediente Júpiter y beneficiario):

ALCANCE Y LIMITACIONES AL CONTROL

La fiscalización ha consistido en la verificación de los siguientes extremos:

.-

.-

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

.- Tipo de procedimiento aplicado:

.- Volumen de la muestra:

ANOMALÍAS O DEFICIENCIAS DETECTADAS

(Relación de deficiencias, así como el número de expedientes y la cuantía total de los expedientes afectados por las mismas, así como su identificación y la provincia en la que radica la explotación).

ALCANCE DE LA AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA

(Se determinará según se hayan detectado errores sistemáticos o aislables, siguiendo lo establecido en el apartado 8.3 de la presente Instrucción; identificándose los expedientes seleccionados de la relación remitida por el órgano gestor con indicación del número de expediente, los datos identificativos del tercero, el importe de la subvención propuesta y la provincia en la que se localiza la explotación).

ANEXO II

INFORME-RESUMEN DE FISCALIZACIÓN POR MUESTREO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE BONIFICACIONES DE LOS INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS DE MEDIACIÓN ICO DESTINADOS A PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SECTOR AGRARIO POR LAS HELADAS ACAECIDAS EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2005, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA INSTRUCCIÓN 5/2006, DE 14 DE JULIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

La Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, en el artículo 4.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía y en la Instrucción 5/2006, de 14 de julio de 2006, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establece la fiscalización por muestreo de expedientes relativos a la concesión de bonificaciones de los intereses de los préstamos de mediación ICO destinados a paliar los daños producidos en el sector agrario por las heladas acaecidas en los meses de enero a marzo de 2005 y los procedimientos para su aplicación, ha realizado dicha fiscalización sobre los expedientes que se han tramitado en el ejercicio económico de 20__, al objeto de verificar si su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable.

Porcentaje cubierto de expedientes:

Nº de expedientes revisados:

Nº de expedientes presentados:

Nº de expedientes contabilizados:

Procedimiento utilizado en la selección de las muestras:

.- ...

Alcance y limitaciones al control:

La fiscalización ha consistido en la verificación de los siguientes extremos:

.-

.-

Incidencias, anomalías o defectos detectados

(Relacionarlos, indicar los que fueron subsanados y, en su caso, aquellos respecto a los cuales se tramitó discrepancia. Detallar, asimismo, si alguno de los expedientes debería motivar un expediente de reintegro, indicando las circunstancias concurrentes e identificando individualizadamente el/los expediente/s en cuestión).

Resultado de la fiscalización

(Indicar el resultado. En caso de deficiencias, las actuaciones realizadas con indicación de las irregularidades e identificación de los informes emitidos).

II. DE LA INTERVENCIÓN GENERAL Y OTROS CENTROS

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/2006, DE 24 JULIO DE 2006 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS Y DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS DE CONTROL SOBRE GASTOS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La importancia cuantitativa y cualitativa de los fondos europeos para la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos ha sido el motivo de que su gestión haya conllevado siempre la necesidad de extremar al máximo las medidas de control a aplicar sobre los gastos cofinanciados, a fin de garantizar que los fondos se utilicen de conformidad tanto con los objetivos fijados en las correspondientes Decisiones de aprobación y Programas como con las disposiciones vigentes en materia de subvencionabilidad de los gastos y de cumplimiento de las políticas comunitarias. El fin último de esta rigurosidad ha sido evitar la posibilidad de que, como consecuencia de algún control, se produzcan correcciones financieras que, eventualmente, pudieran mermar las asignaciones financieras programadas para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De esta forma, se dictaron, entre otras, la Instrucción nº 1, de 29 de enero de 1996, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen determinadas medidas de control de los proyectos de inversión financiados con recursos FEDER, la Instrucción nº 3, de 25 de julio de 1996, de la Intervención General de la Junta de Andalucía por la que se establecen determinadas medidas de control de proyectos de inversión financiados por el Fondo Social Europeo y la Instrucción Conjunta nº 1/97, de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se establecen determinadas medidas de control y seguimiento de los proyectos de inversión cofinanciados por el Fondo de cohesión y la actualmente en vigor Instrucción Conjunta nº 2/2005, de 22 de junio, de la Dirección General de Fondos Europeos y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen determinadas medidas de control sobre gastos cofinanciados por fondos europeos en el ámbito de la Junta de Andalucía.

Todas estas Instrucciones, salvo la última, se adoptaron en el ámbito del período de programación 1994-1999, haciendo referencia a los programas y normas vigentes en el citado momento. Pareció oportuno, mediante la Instrucción conjunta nº 2/2005, adaptar dicha reglamentación al actual período de programación 2000-2006, aprovechando para realizar una simplificación y racionalización de las mismas a la luz de la nueva normativa comunitaria, la cual, básicamente, establece dos niveles en el control: un primer nivel donde se asegure la realidad de las prestaciones, su subvencionabilidad y su compatibilidad con las políticas comunitarias (responsabilidad de los órganos gestores, así como de la Dirección General de Fondos Europeos, como órgano intermedio) y un segundo nivel donde se realice un control financiero (responsabilidad de la Intervención General del Estado y de las Intervenciones de las Comunidades Autónomas). Además, la Autoridad de pago también debe realizar controles sobre los gastos certificados que se tramiten ante la Comisión Europea.

La presente Instrucción de julio de 2006, básicamente con idéntico contenido a la de junio de 2005, sólo supone, ante las numerosas exigencias de la Comisión y de la Autoridad de Pagos, unas mínimas adaptaciones con la finalidad de culminar el nivel de confianza que ya ofrecía esta última y que consiste básicamente en la introducción en el Sistema de Contabilidad de la Junta de las listas de comprobación que ahora, además de tener soporte documental en papel, lo tendrán también en soporte informatizado a través del propio Sistema contable con las ventajas y garantía que ello conlleva a todos los efectos.
En cuanto al primer nivel de control, el Reglamento (CE) 1260/1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, en su artículo 34, atribuye a la autoridad de gestión la responsabilidad de asegurar la regularidad y eficacia de las operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos, mediante la aplicación de medidas de control interno; igualmente, le hace responsable de asegurar la compatibilidad de los gastos efectuados con las políticas comunitarias (contratación, competencia, medio ambiente e igualdad de oportunidades) y del respeto de las obligaciones en materia de información y publicidad.

La obligación de asegurar la eficacia de las operaciones se hace extensiva a la autoridad de pago y a los órganos intermedios, en virtud de los artículos 2 y 3 del

Reglamento (CE) 438/2001, y para ello, estos órganos habrán de dotarse de los sistemas de gestión y control que permitan asegurar el cumplimiento de los Reglamentos y normas comunitarias, obligación que se hace extensiva a los beneficiarios finales, definidos en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) 1260/1999.

A los efectos de garantizar el pleno cumplimiento de estas normas comunitarias por la Junta de Andalucía y en virtud de las competencias reconocidas a la Dirección General de Fondos Europeos, como centro directivo al que corresponde la programación, coordinación, seguimiento y evaluación de las intervenciones de los Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, programas e iniciativas establecidos por la Unión Europea, así como las declaraciones de los gastos, y a la Intervención General como centro de control interno de la actividad económico-financiera de la Junta de Andalucía, se establecen las siguientes reglas:

PRIMERA.- Imputación de expedientes de gasto a créditos financiados con fondos europeos o con recursos tributarios y propios que hayan sido objeto de asociación a una medida comunitaria o a una operación europea.

1. Para la correcta imputación de un expediente de gasto a créditos financiados con fondos europeos o a créditos financiados con recursos tributarios y propios asociados con anterioridad al inicio del expediente a una medida comunitaria, deberá atenderse no sólo a la literalidad de la aplicación presupuestaria y, en su caso, del proyecto de inversión, sino también, en función del código de medida comunitaria que se consigna en la propuesta de documento contable:

- En el supuesto de fondos estructurales, a la descripción que, de cada eje y medida comunitaria, se contiene en las fichas técnicas del Programa Operativo Integrado de Andalucía (2000-2006) y del Complemento de Programación, así como en los Complementos de Programación del Programa Operativo de Mejora de Estructuras y Sistemas de Producción Agrarios y del Programa Operativo de Intervenciones Estructurales en el Sector de la Pesca, debiendo considerarse el contenido de estos documentos como meramente aclaratorio. Dicha documentación se encuentra disponible en la página web de la Consejería de Economía y Hacienda: www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/fondos/seccfondos.htm .

- Al contenido de los Complementos de Programación y de las fichas de los proyectos aprobados, en su caso, cuando se trate de actuaciones cofinanciadas en el ámbito de los Programas de Iniciativa Comunitaria INTERREG III, EQUAL Y LEADER PLUS.

- Al detalle de los proyectos contenido en las Solicitudes de Ayuda al Fondo de Cohesión y en las Decisiones adoptadas por la Comisión de la Unión Europea en virtud de las cuales se aprueben tales proyectos para ser financiados por dicho Fondo.

- Al contenido de los nuevos Programas que se aprueben para el período 2007-2013.

A tales efectos, la Dirección General de Fondos Europeos remitirá a la Intervención General de la Junta de Andalucía copia de todas las Solicitudes de Ayuda al Fondo de Cohesión y de las citadas Decisiones aprobatorias de los proyectos, así como de sus posibles modificaciones, a efectos de que por la Intervención General se dé traslado a la

Intervención competente para la fiscalización de los correspondientes expedientes de gastos que se financien con dicho Fondo.

2. De existir dudas sobre la correcta imputación presupuestaria de un expediente de gasto a una medida comunitaria u operación europea, deberá solicitarse motivadamente por el órgano gestor, de oficio o a instancia de la Intervención competente para su fiscalización, informe a la Dirección General de Fondos Europeos sobre su adecuación.

SEGUNDA.- Imputación presupuestaria a ejercicio corriente de documentos contables por traspaso de anualidades futuras y de remanentes comprometidos a créditos financiados con fondos europeos o con recursos tributarios y propios que hayan sido objeto de asociación a una medida comunitaria o a una operación europea.

1. La imputación presupuestaria de documentos contables que se derive de las operaciones de traspaso de anualidades futuras y de remanentes comprometidos deberá realizarse a las mismas aplicaciones presupuestarias y, en su caso, proyectos de inversión a los que se hubiera imputado el gasto en el momento de su fiscalización previa.

En los supuestos en que en el ejercicio corriente no existiera dicha equivalencia los documentos contables deberán imputarse a cualquier otra adecuada a la naturaleza, finalidad y elegibilidad del gasto.

En caso de insuficiencia de crédito en las aplicaciones presupuestarias y, en su caso, proyectos de inversión, el órgano gestor deberá proceder a tramitar la preceptiva modificación presupuestaria.

2. De igual forma que se determina en la regla anterior, de existir dudas sobre la correcta imputación presupuestaria en las operaciones de traspaso de un documento contable a una aplicación presupuestaria o proyecto de inversión asociado a una medida comunitaria podrá solicitarse informe a la Dirección General de Fondos Europeos sobre su adecuación.

3. En aquellos supuestos en que se pretenda traspasar un documento imputado inicialmente a créditos financiados con recursos tributarios y propios a una aplicación presupuestaria y/o proyecto de inversión financiado con fondos europeos o con recursos tributarios y propios asociado a una medida comunitaria, deberá aportarse informe de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la subvencionabilidad de los gastos y el cumplimiento de las Políticas Comunitarias, en el que además se indique la operación europea correspondiente.

TERCERA.- Contratos administrativos

Los contratos administrativos en los que sea exigible la correspondiente publicidad conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, por tanto, en las Directivas Comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos, habrán de ser objeto de dicha publicidad tanto en la fase de licitación como en la fase de adjudicación.

En este sentido, se verificará especialmente por el representante de la Intervención General, como miembro de las Mesas de contratación, con carácter previo a la apertura de la documentación presentada por los licitadores, o por la Intervención competente en el momento de la fiscalización de la propuesta de adjudicación en los casos que no sea preceptiva la actuación del citado órgano, que se han adoptado como mínimo las siguientes medidas de publicidad:

- El anuncio de licitación indicará la participación financiera de la Unión Europea indicando el Fondo Estructural contribuyente y la tasa de cofinanciación.

- En los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en el clausulado o alternativamente en el anexo de características del contrato, se identificará igualmente el Fondo Estructural contribuyente y la tasa de cofinanciación, así como las obligaciones de información y publicidad que se deriven del contrato y que deban ser aplicadas por el adjudicatario, conforme a la reglamentación comunitaria.

Además de todo ello, el representante de la Intervención General, como miembro de las Mesas de contratación, verificará el debido cumplimiento de la obligatoria publicidad de las licitaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), de conformidad con lo establecido en los artículos 135, 177, 203 y 205 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

CUARTA.- Subvenciones

1.- Cumplimiento de las normas sobre información y publicidad:

Los órganos gestores deberán dar debido cumplimiento a las normas comunitarias sobre información y publicidad, establecidas en el Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales y en el Reglamento (CE) nº 621/2004 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, en lo que respecta a las medidas de información y publicidad referentes a las actividades del Fondo de Cohesión.

La Intervención competente deberá comprobar el correcto cumplimiento del deber de información y publicidad de la participación de la Unión Europea en la financiación de las subvenciones que se concedan, en los términos establecidos en el apartado 6.4 del Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, antes citado. En este sentido, deberá verificarse que en las resoluciones de concesión de las subvenciones se señala que la Unión Europea participa en la financiación de las mismas y, en su caso, se indicará la cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el fondo comunitario que corresponda.

2.- Subvenciones a empresas:

En los expedientes de gastos que se tramiten con la finalidad de conceder subvenciones a empresas, cualquiera que sea la procedencia de su financiación, deberá quedar acreditado que los correspondientes regímenes de ayuda o ayudas individuales y sus modificaciones han sido notificados a la Comisión de la Unión Europea para que se pronuncie sobre los mismos mediante Decisión con anterioridad a su ejecución, salvo que se acojan a un Reglamento de exención por categorías.

En este sentido, dado que en las subvenciones regladas el deber de notificación a la Comisión debe cumplirse en el trámite de elaboración de la norma reguladora, con carácter previo a su aprobación por el titular de cada Consejería, no se requerirá que la Intervención competente para la fiscalización del gasto verifique el cumplimiento de dicho extremo en este tipo de subvenciones.

No obstante, en los expedientes de gastos correspondientes a subvenciones tramitadas por el procedimiento de concesión directa, es decir, subvenciones nominativas y excepcionales, remitidos para su fiscalización previa a la Intervención, a favor de empresas, el órgano gestor deberá aportar a la Intervención competente bien la Decisión de la Comisión Europea sobre compatibilidad con el mercado común, es decir, aprobatoria de la ayuda individual, o en todo caso, la comunicación hecha a la citada Comisión, salvo que se ampare en un reglamento de exención por categorías y así se acredite en el expediente.

Dichos extremos deberán ser objeto de especial comprobación por la Intervención competente, a efectos, además, de verificar su correcta grabación en el Base de Datos de Subvenciones y Ayudas de la Junta de Andalucía (ARIADNA).

QUINTA.- Períodos elegibles

Los compromisos de gasto y las propuestas de pago que se tramiten con cargo a créditos financiados con fondos europeos o con recursos tributarios y propios asociados a una medida comunitaria, deberán adecuarse al período de elegibilidad establecido en las Decisiones aprobatorias de los correspondientes programas y de los proyectos financiados con el Fondo de Cohesión. En este sentido, no podrá ser fiscalizada de conformidad ninguna propuesta de documento contable fuera de los plazos determinados, salvo que conste la oportuna prórroga.

SEXTA.- Subvencionabilidad (elegibilidad) de gastos

Los gastos que se imputen a créditos financiados con fondos europeos o con recursos tributarios y propios asociados a una medida comunitaria deberán gozar de la condición de subvencionabilidad para su cofinanciación por los fondos europeos. Por tanto, los órganos gestores deberán velar por el cumplimiento de las condiciones para la subvencionabilidad de los gastos establecidas:

- En caso de tratarse de Fondos Estructurales, en las fichas técnicas del Complemento de Programación del Programa Operativo Integrado de Andalucía (2000-2006) y en los Complementos de Programación del Programa Operativo de

Mejora de Estructuras y Sistemas de Producción Agrarios y del Programa Operativo de Intervenciones Estructurales en el Sector de la Pesca, en el contenido de las fichas de los proyectos aprobados, en su caso, cuando se trate de actuaciones cofinanciadas en el ámbito de los Programas de Iniciativa Comunitaria INTERREG III, EQUAL Y LEADER PLUS, así como en las normas de subvencionabilidad de los gastos establecidas en el Reglamento (CE) nº 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 1685/2000, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1145/2003.

- En caso de Fondo de Cohesión, en la Decisión aprobatoria de los proyectos financiados por dicho Fondo y en el Reglamento (CE) nº 16/2003, de la Comisión, de 6 de enero de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo en lo que se refiere a la subvencionabilidad de los gastos de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo de Cohesión.
-

Asimismo, las distintas Intervenciones, al proceder a la fiscalización previa de los expedientes, deberán comprobar la subvencionabilidad de los gastos.

SÉPTIMA.- Certificación acreditativa del cumplimiento de la normativa comunitaria en expedientes de gastos.

1. Siempre que se impute gasto a una aplicación presupuestaria con código "Eurofon" (aplicaciones de los Servicios 11 a 17, en todo caso, y aplicaciones financiadas con recursos tributarios y propios de los servicios 01 a 09 que hayan sido objeto de asociación a una medida comunitaria o a una operación europea), toda propuesta de documento contable de pago en firme de justificación previa ("ADOP", "OP" y "P") y de documento contable "J", por la que se proceda a justificar un libramiento expedido con el carácter de "en firme de justificación diferida" o "a justificar", deberá ir acompañada, junto con la documentación que en cada tipo de expediente resulte procedente, de la certificación acreditativa de la comprobación del

cumplimiento de la normativa comunitaria, cumplimentada en el sistema "Júpiter", de acuerdo con los siguientes modelos:

A) El contenido en el Anexo I, en el caso de expedientes financiados con fondos estructurales.
B) El contenido en el Anexo II, en los supuestos de expedientes financiados con el Fondo de Cohesión.
No será necesario cumplimentar los modelos Anexo I y II, siendo de aplicación la Regla siguiente, en los siguientes casos:
- La Subvención Global de Andalucía 2000-2006.
- La Subvención Global de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales 2000- 2006.
- Las transferencias con asignación nominativa.
- Las encomiendas de gestión, tramitadas al amparo del artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a favor de empresas de la Junta de Andalucía.

2. Los expedientes a que se refiere el párrafo anterior que se remitan a la Intervención sin acompañar dicha certificación deberán ser objeto de devolución al órgano gestor con informe de fiscalización de disconformidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.c) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puesto que su aportación a las actuaciones debe considerarse un requisito o trámite esencial.

OCTAVA.- Certificación acreditativa del cumplimiento de la normativa comunitaria en gastos realizados por los organismos intermediarios responsables de la ejecución de la Subvención Global de Andalucía 2000- 2006 y de la Subvención Global de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales 2000-2006 y en gastos realizados por las empresas públicas de la Junta de Andalucía financiados con fondos europeos.

La cumplimentación de los anexos I y II citados en la regla anterior será de aplicación, observando las peculiaridades en cuanto a los procedimientos de pago que utilicen los organismos intermediarios responsables de su ejecución, a todos aquellos gastos que se realicen con cargo a la Subvención Global de Andalucía

2000-2006 y a la Subvención Global de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales 2000-2006.

Asimismo le será de aplicación a todas aquellas empresas públicas de la Junta de Andalucía que ejecuten operaciones cofinanciadas con los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, independientemente del carácter que tengan a efectos de lo dispuesto en la Instrucción Conjunta de 7 de julio de 2004, de diversas Direcciones Generales de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen Reglas para la Gestión y Coordinación de las Intervenciones Cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOVENA.- Publicidad

Los órganos gestores velarán por el debido respeto y cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, en especial, de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, y en el Reglamento (CE) nº 621/2004 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, en lo que respecta a las medidas de información y publicidad referentes a las actividades del Fondo de Cohesión.

DÉCIMA.- Planes de control financiero y verificación

1. La Intervención General, en el ámbito del Plan Anual de Control de Subvenciones, realizará un programa específico de control financiero de gastos cofinanciados con fondos estructurales y Fondo de Cohesión, tanto sobre los órganos responsables de su gestión como sobre los beneficiarios de subvenciones.
2. En virtud de lo dispuesto en la Regla 22 de la Instrucción Conjunta de 7 de julio de 2004, antes citada, la Dirección General de Fondos Europeos elaborará Planes de Verificación anuales que coordinará con el establecido en el apartado anterior por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

UNDÉCIMA.- Transitoriedad del uso exclusivo de la lista de comprobación documental.

Se permitirá la utilización exclusivamente documental de la nueva lista o certificado de comprobación (anexos I y II) hasta la implantación definitiva y obligatoria de la misma a través de medios informáticos del Sistema contable Júpiter.

DUODÉCIMA.- Cesación de efectos de comunicaciones e instrucciones anteriores

Quedan sin efecto la Instrucción conjunta 2/2005 de la Dirección General de Fondos Europeos y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen determinadas medidas de control sobre gastos cofinanciados por fondos europeos en el ámbito de la Junta de Andalucía[8].

[8] Los anexos correspondientes a esta Instrucción pueden consultarse en la web de la Consejería de Economía y Hacienda seleccionando la siguiente ruta: Información y servicios/Normativa/Instrucciones y Resoluciones.

III. DE OTROS CENTROS

RESOLUCION DE 18 DE ENERO DE 2006, LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA POR LA QUE SE DICTAN NORMAS SOBRE CONFECCION DE NOMINAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE ANDALUCIA PARA 2006.

La Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2006, fija las cuantías de las retribuciones para dicho ejercicio, del personal al servicio del sector público andaluz.

Con la finalidad de facilitar la confección de las nóminas que han de elaborarse para abonar las mencionadas retribuciones, se considera oportuno dictar las siguientes

INSTRUCCIONES

PRIMERA.- RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS CARGOS

La cuantía de las retribuciones mensuales de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía, serán las señaladas a continuación:

1. El Presidente de la Junta de Andalucía percibirá en doce mensualidades, la cuantía de 6.437,19 euros, sin derecho a pagas extraordinarias.
2. La personal titular de la Presidencia y las Consejeras y Consejeros con dedicación exclusiva del Consejo Consultivo de Andalucía percibirán en doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias, las siguientes retribuciones:

	PRESIDENCIA	**CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS DEDICACION EXCLUSIVA**
Euros /mes	8.719,49	7.954,10

La persona titular de la Secretaría General del Consejo Consultivo, percibirá las retribuciones establecidas para los Directores Generales en el punto 5 de la Instrucción primera.

3. La persona titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía y las Consejeras y Consejeros del mismo, así como la persona titular de la Secretaría General percibirán las retribuciones establecidas en la presente instrucción para los titulares de las Consejerías y Viceconsejerías, respectivamente.
4. Las personas titulares de las Consejerías, Viceconsejerías y asimilados percibirán en doce mensualidades las siguientes retribuciones:

	CONSEJEROSY ASIMILADOS	**VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS**
Euros/mes	5.799,74	5.071,94

Asimismo, tendrán derecho a la percepción a dos pagas extraordinarias al año, una en junio y otra en diciembre, por los siguientes importes:

	CONSEJEROS Y ASIMILADOS	**VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS**
JUNIO	2.594,42	2.293,74
DICIEMBRE	2.970,26	2.594,42

Los importes de las pagas extraordinarias se verán incrementados en la cuantía que, en concepto de trienios, pudieran tener reconocida como personal funcionario o personal empleado al servicio de cualquier Administración Pública.

5. El régimen retributivo para los puestos de Director General y Delegado Provincial o asimilados, será el establecido con carácter general para los

funcionarios públicos en el artículo 46 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a cuyo efecto se fijan las siguientes cuantías de sueldo, complemento de destino y complemento específico que resultan con el siguiente detalle:

	DIRECTORES GRLES. Y ASIMILADOS	DELEGADOS PROVINCIALES Y ASIMILADOS
Sueldo	1.091,02	1.091,02
C. Destino	1.202,73	1.134,39
C. Específico	1.977,95	1.129,01

Las pagas extraordinarias se devengarán de acuerdo con lo previsto en el art. 12.2 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006 y en el art. 23.2 párrafo segundo de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores los Directores Generales, Delegados Provinciales y asimilados podrán percibir un complemento de productividad, en las cuantías que a los mismos se asigne por el titular de cada Consejería, dentro del límite de los créditos consignados para cada una de las categorías, en los respectivos programas presupuestarios.

SEGUNDA.- RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL

1. El personal eventual de Gabinete, sin perjuicio de lo que en aplicación del art. 47 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía establezca el Consejo de Gobierno, percibirá las siguientes retribuciones mensuales:

	J. Gabinete Gabinete	Vocal A. Gabinete	Asesor Gabinete	T.
Sueldo	1.091,02	1.091,02	1.091,02	1.091,02
C. Destino	958,01	958,01	823,18	690,47
C. Específico	1.577,75	1.268,94	1.130,55	976,24

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 465/2004 de 27 de julio, por el que se establece la Composición y Retribuciones del Personal Eventual adscrito a los Gabinetes de los Titulares de las Consejerías de la Junta de Andalucía, y el art. 12.2 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, el personal eventual de gabinete tendrá derecho a la recepción de dos pagas extraordinarias por importe, cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios, más un 80% del complemento de destino mensual en la paga correspondiente al mes de junio, y el 100% de este complemento en la del mes de diciembre. Asimismo, podrán percibir el complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos por el titular del departamento, dentro del límite de los créditos consignados en las correspondientes aplicaciones presupuestarias de cada uno de los programas de gasto.

2. Las retribuciones del resto del personal eventual se incrementarán en el 2% en relación con las fijadas para el ejercicio 2005, sin perjuicio de lo dispuesto en el mencionado art. 12.2 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre citada. En cualquier caso, en los supuestos en los que el Acuerdo regulador de las retribuciones del personal eventual haga referencia a la asimilación a grupos de clasificación y nivel de complemento de destino de personal funcionario, se aplicarán los importes que la normativa correspondiente establezca para este personal (Anexo I y II de la presente Resolución).

TERCERA.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO

1. Funcionarios públicos que desempeñen puestos de trabajo para los que el Consejo de Gobierno ha aprobado la aplicación del régimen retributivo

previsto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

1.1. Percibirán las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías que se detallan en el anexo I y I de la presente Resolución.

1.2. Con carácter general y en términos anuales, el importe de los complementos específicos experimentará a partir del 1 de enero de 2006 un incremento del 2%. El importe mensual de los mismos será el resultante de dividir entre doce el que, referido a la anualidad, figure asignado a cada puesto de trabajo en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIRhUS).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del art. 10 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, por la Consejería de Justicia y Administración Pública se actualizarán los mencionados importes en las cuantías que resulten de la aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2005 (BOJA nº 249/2005). En los supuestos en los que se trate de complementos específicos de puestos no integrados en el mencionado Sistema, se actualizarán, en los porcentajes indicados, los importes de 2005, redondeándose al alza las cuantías mensuales correspondientes.

1.3. Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de los previstos en el art. 46 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía que, con otra denominación, cumpla una función análoga a aquellos, incluidos los complementos transitorios de antigüedad, serán absorbidos por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio, y los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación en los complementos de destino o específicos de los mismos.

A los efectos anteriores, no se considerarán el incremento general del 2% establecido en el Título II de la Ley 16/2005, de 28 de

diciembre, los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este punto 1.3 y a los efectos de la absorción prevista, para el ejercicio 2006, el incremento de retribuciones que pudiera derivarse, en su caso, de lo establecido en el número 5 del art. 10 de la Ley 16/2005 mencionada, sólo se computará en el 50% de su importe.

2. Funcionarios públicos que desempeñen puestos de trabajo para los que el Consejero de Gobierno no ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

   2.1. Hasta tanto no se disponga lo contrario en los Acuerdos del Consejo de Gobierno que aprueben dicha aplicación, percibirán las retribuciones mensuales aumentadas en el 2% con respecto a las reconocidas a 31 de diciembre de 2005, a igualdad de puestos de trabajo, con la misma estructura retributiva y con sujeción a la normativa vigente en dicho ejercicio, tendiendo en cuenta que las retribuciones que tuvieran el carácter de absorbibles por mejoras o incrementos se regirán por su normativa específica hasta la adaptación al nuevo régimen retributivo.

   Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la adecuación retributiva que, en su caso, corresponda, por efecto de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2005, antes mencionado.

   2.2. Las pagas extraordinarias se devengarán de acuerdo con lo previsto en el art. 12.2 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.

   2.3. Los complementos de dedicación exclusiva que se devenguen abonarán con cargo a los créditos que para otras retribuciones complementarias se incluyen en los Estados de Gastos.

3. Funcionarios de la Administración de Justicia.

El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante Real Decreto 141/1997, de 31 de enero, percibirá durante el ejercicio 2006 las retribuciones mensuales en los importes que se detallan en el anexo XI de la Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE nº 2 de 3/1/6).

Hasta tanto se produzca la definitiva implantación del nuevo modelo de oficina judicial, y se complete la aplicación del nuevo modelo retributivo correspondiente, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia percibirán las retribuciones complementarias que se hayan liquidado en el ejercicio 2005, por los importes previstos para las mismas en el año 2006.

CUARTA.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO

El personal interino al servicio de la Junta de Andalucía e incluido en el ámbito de la aplicación de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía percibirá, conforme determina el art. 48 de la citada Ley, las retribuciones que se deriven del puesto de trabajo que ocupe, sin que tenga derecho a la consolidación de grado ni a la percepción de trienios y siéndoles de aplicación lo previsto en la instrucción tercera punto 1.3 de la presente Resolución.

QUINTA.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL

El personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía incluido en el ámbito de la aplicación del VI Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito interprovincial de 15 de noviembre de 2002, percibirá las retribuciones que se detallan en el Anexo III de la presente Resolución. Las cuantías de los complementos de puesto de trabajo serán las que figuran asignadas a los mismos en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIRhUS), conforme a la distribución del incremento de la masa salarial acordada por la Comisión del Convenio.

De conformidad con lo que establece el art. 58.3 del vigente Convenio Colectivo, el personal laboral mencionado percibirá en los meses de junio y diciembre, una paga extraordinaria por importe, cada una de ellas, de una mensualidad de salario Base más la Antigüedad y el importe correspondiente al 80% del complemento de categoría mensual en el mes de junio del 2006 y el 100% en la del mes de diciembre de dicho complemento, según acuerdo de la Comisión de Convenio de 28 de diciembre de 2005.

SEXTA.- NORMAS DE CARÁCTER ESPECIAL

1. Cuando el sueldo se hubiera percibido en 2005 en cuantía inferior a la establecida con carácter general, se aplicarán los incrementos contemplados en las instrucciones anteriores, respecto del efectivamente devengado en dicho ejercicio.
2. Cuando en aplicación de la normativa vigente, el funcionario realice la prestación de su jornada de forma reducida, se reducirán sus retribuciones en los supuestos y en los porcentajes que establece el Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan las diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía, y la correspondiente normativa de desarrollo.
3. El devengo de las retribuciones básicas y complementarias, así como el de las pagas extraordinarias, se ajustará a lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía según la redacción dada por la Disposición Final Primera de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, y en el art. 130 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas.

4. Hasta tanto el Consejo de Gobierno no adecue el sistema retributivo de los funcionarios de los Cuerpos Sanitarios Locales que presten servicio en los

Partidos Sanitarios, Zonas Básicas de Salud, Hospitales Municipales o Casas de Socorro, a lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, mantendrán el mismo régimen retributivo que en el ejercicio 2005.

5. Conforme a lo establecido en el art. 11 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios o personal empleado al servicio de cualquier Administración Pública.

   El personal eventual tendrá derecho a la percepción de los trienios que pudiera tener reconocidos como funcionario, en aplicación de lo dispuesto en el Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

   Dichos trienios se aplicarán presupuestariamente a los subconceptos 120.05 o 130.05 del Servicio, Sección y Programa correspondiente.

6. El complemento por diferencia retributiva que establece la Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, se imputará con carácter presupuestario a los subconceptos 121.09 o 131.09 de la sección, servicio y programa correspondiente, según el tipo de vinculación previa a la Administración Pública del personal afectado.

SEPTIMA.- SITUACIONES DE PROVISIONALIDAD

En los casos en los que legalmente sea posible ocupar provisionalmente puestos de trabajo cuyo sueldo no coincida con el correspondiente al del Grupo a que pertenece el funcionario, éste percibirá un complemento personal por la diferencia.

Si el puesto de trabajo aparece adscrito a dos Grupos de clasificación de los enumerados en el art. 25 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el complemento citado se calculará por la diferencia entre el sueldo que corresponda al Grupo de pertenencia del funcionario y el de menor cuantía de los dos que tenga asignados el puesto ocupado provisionalmente.

En ambos casos, el sueldo y el complemento que resulten se aplicarán con carácter presupuestario al subconcepto de sueldo que corresponda al Grupo de adscripción del puesto de trabajo.

OCTAVA.- PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL

Los gastos ocasionados por el abono de las diferencias retributivas cuya percepción reconoce la Disposición Adicional Sexta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, se imputarán presupuestariamente a la aplicación 121.08 “Prestaciones por diferencias retributivas en Incapacidad Temporal”.

Cuando se trate de personal laboral, la imputación presupuestaria se hará al subconcepto 131.08 “Prestaciones por diferencias retributivas en Incapacidad Temporal”.

NOVENA.- Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente Resolución, se entenderán siempre hechas a retribuciones íntegras.

ANEXO I

FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS QUE EL CONSEJO DE GOBIERNO HA APROBADO LA APLICACIÓN DEL REGIMEN RETRIBUTIVO PREVISTO EN LA LEY 6/1985, DE 28 DE NOVIEMBRE

Retribuciones básicas

GRUPO	CUANTIA MENSUAL	
	SUELDO	TRIENIO
A	1.091,02	41,93
B	925,96	33,55
C	690,24	25,19
D	564,39	16,83
E	515,26	12,63

Las pagas extraordinarias se devengarán en cuantía igual, cada una de ellas, a una mensualidad de sueldo y trienios, más un 80% del complemento de destino mensual que perciba el funcionario, en la paga correspondiente al mes de junio, y el 100% de este complemento en el mes de diciembre, salvo los casos previstos en el art. 50.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

ANEXO II

FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS QUE EL CONSEJO DE GOBIERNO HA APROBADO LA APLICACIÓN DEL REGIMEN RETRIBUTIVO PREVISTO EN LA LEY 6/1985, DE 28 DE NOVIEMBRE

Complemento de destino

NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO	CUANTIA MENSUAL
30	958,01
29	859,31
28	823,18
27	787,03
26	690,47
25	612,60
24	576,47
23	540,34
22	504,18
21	468,09
20	434,82
19	412,62
18	390,40
17	368,18
16	346,03
15	323,80
14	301,61
13	279,39
12	257,17

ANEXO III

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VI CONVENIO COLECTIVO

CUANTÍAS MENSUALES

GRUPO	SUELDO BASE	ANTIGÜEDAD	COMP. CATEGORIA	C. DE CONVENIO	C.P. TRABAJO
I	1.091,02	44,74	468,09	398,41	131,64
II	925,96	44,74	412,62	364,65	120,41
III	690,24	30,98	390,40	250,41	95,97
IV	564,39	26,55	323,80	207,45	88.69
V	515,26	26,55	301,61	191,14	85,28

- **Productividad**: 394,20 € (efectiva de una sola vez en el mes de octubre).

- **Pagas extraordinarias**: Incremento del 80% del importe de una mensualidad del complemento de categoría en la paga extraordinaria del mes de junio y el 100% de este complemento en la paga del mes de diciembre según Acuerdo Comisión de Convenio de 28 de diciembre de 2005.

- **Complemento Puesto de Trabajo**: Se recogen los importes mínimos de cada grupo, que corresponde con el personal que ocupa puesto de funcionario.

OTROS COMPLEMENTOS

GRUPO	COMP. POR TRABAJOS NOCTURNOS	COMP. EN DOMINGOS Y FESTIVOS	COMP. DE TURNICIDAD	COMP. JORNADA DE TARDE	COMP. DE JORNADA PARTIDA
	Euros/hora	Euros/día	Euros/mes	Euros/mes	Euros/mes
I	4,77	28,90	235,71	70,72	70,72
II	4,77	28,90	235,71	70,72	70,72
III	3,82	23,12	152,52	45,77	45,77
IV	3,82	23,12	152,52	45,77	45,77
V	3,82	23,12	152,52	45,77	45,77

El importe de Plus de penosidad y toxicidad corresponde al 20% del Salario de cada grupo.

HORAS EXTRAS

SE COMPENSAN:	**SE ABONAN:**
DIAS LABORABLES	DIAS LABORABLES
1 hora de trabajo x 2 de descanso	Salario ordinario/1.582x1,75
DOMINGOS Y FESTIVOS	DOMINGOS Y FESTIVOS
1 hora de trabajo x 3 de descanso	Salario ordinario/1.582x2

- Cuadro actualizado con el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía (15 de noviembre de 2002)
- Incremento de 2% respecto a las retribuciones del año 2005, según la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2006.

INSTRUCCIÓN 2/2006, DE 24 DE ABRIL DE 2006, DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA REGULADA EN LOS ARTÍCULOS 22 Y SIGUIENTES DE LA LEY 3/2005, DE 8 DE ABRIL.

La Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, establece en los artículos 22 y siguientes, el derecho a la concesión de asignaciones económicas tras el cese a determinados Altos Cargos expresamente indicados, de acuerdo con la consideración de Alto Cargo que se determina en su artículo 2. La citada ley ha sido desarrollada por el Decreto 176/2005, de 26 de julio.

Con el fin de homogeneizar los criterios para la aplicación del reconocimiento de este nuevo derecho económico, así como su tramitación y gestión a través del Sistema de Información de Recursos Humanos, de acuerdo con lo establecido en la Disposición final segunda del Decreto 176/2005, de 26 de julio y en uso de las competencias atribuidas a esta Secretaría General para la Administración Pública por el artículo 7 del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, se dispone lo siguiente:

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, los ex presidentes de la Junta de Andalucía, los ex vicepresidentes, los ex consejeros, los ex altos cargos titulares de los centros directivos de los servicios centrales de las Consejerías y Organismos Autónomos, así como los ex Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, al cesar en el cargo, tendrán derecho a una asignación económica.

SEGUNDA.- La competencia para la concesión de la asignación económica recaerá en:

- La persona titular de la Consejería de la Presidencia, si el cargo fuera la Presidencia o Vicepresidencias de la Junta de Andalucía.
- La persona titular de las respectivas Consejerías, si el cargo fuera el de Consejero de la Junta de Andalucía, titular de los centros directivos de los servicios centrales de las Consejerías y Organismos Autónomos y Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía.

TERCERA.- El procedimiento de concesión de la asignación económica se iniciará, a solicitud de la persona interesada, según modelo homologado (se anexa a esta instrucción) y dirigido al órgano competente, de acuerdo con lo expresado en la instrucción anterior. Dicha solicitud, que podrá presentarse a partir del día siguiente al del cese en el cargo en el Registro General de la Consejería competente o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberá acompañarse de la siguiente documentación, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 3/2005, sobre incompatibilidades en la percepción de la asignación económica:

1.- Declaración jurada sobre la no percepción de otras retribuciones económicas como consecuencia del cese en el cargo en el que fundamenta la petición, así como compromiso de comunicar la designación como alto cargo de cualquier Administración Pública, durante el período de percibo de la asignación que corresponda.

2.- Aquellas personas que tengan derecho a la asignación económica como consecuencia del desempeño del cargo titular de centro directivo de los servicios centrales de las Consejerías u Organismos Autónomos o Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, deberán igualmente formular compromiso de comunicar el ejercicio de actividad retribuida en el sector público o privado, si éste acontece dentro del período de percepción de la asignación, así como la efectividad económica del ingreso o reintegro al servicio activo en la condición de empleado público, si se produce fuera del ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía.

En todos los casos, el derecho a la asignación económica decaerá al producirse alguna de las circunstancias expuestas durante el período de percepción de la misma.

CUARTA.- El procedimiento de concesión de la asignación deberá resolverse en el plazo máximo de un mes, y se tramitará y resolverá, de acuerdo con la Orden de 24 de septiembre de 1999, a través de la aplicación SIRhUS, acto A6, siempre y cuando la resolución sea favorable, debiendo seguirse la siguiente tramitación:

1.- Comprobado el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, la Consejería interesada solicitará del Servicio de Gestión de Situaciones de Personal de la Dirección General de la Función Pública, acompañando copia de la solicitud de la persona interesada y documentación anexa recogida en la instrucción Tercera, la habilitación del código numérico que permite la resolución del procedimiento mediante la aplicación informática.

2.- Comunicado el código numérico y tramitado el expediente hasta su estado final "Resolución favorable", se generará automáticamente en el subsistema de nóminas la asignación económica que corresponda percibir, en la que se incluirán los trienios que la persona interesada pudiera tener reconocido como empleado público al servicio de cualquier Administración Pública.

La retribución que corresponda por la asignación económica imputará en la aplicación presupuestaria 165.00, y la correspondiente a trienios en la 120.05 ó 130.05, según el régimen jurídico del empleado público, en ambos casos del presupuesto de gastos de la Consejería competente para autorizar el pago, según se expresa en la instrucción Segunda.

3.- A los efectos de las incompatibilidades en la percepción descritas en la instrucción Tercera, cuando las mismas deriven de situaciones que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento regulador del Registro General de Personal, deban ser objeto de inscripción registral, el posible decaimiento en el derecho a la asignación económica será detectado de manera automática por el Sistema de Información de Recursos Humanos.

QUINTA.- Para determinar el período de percibo de la asignación económica y la cuantía correspondiente, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.- Cuando el cargo que da derecho al mismo fuera el ejercicio de la Presidencia, Vicepresidencia o el de titular de las Consejerías de la Junta de Andalucía, abarcará desde el día siguiente al del cese hasta un período igual al que se hubiese desempeñado el cargo, ya sea de manera continuada o con interrupción, sin que este pueda ser superior a 24 mensualidades. El período de ejercicio del cargo inferior al mes se retribuirá proporcionalmente.

La asignación económica mensual consistirá en la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado.

2.- Cuando el cargo que fundamente la petición fuera el de titular de centro directivo de los servicios centrales de las Consejerías u Organismos Autónomos o el de Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, el derecho nacerá el día siguiente al del cese y consistirá en una mensualidad por cada año de servicio prestado en forma continuada o con interrupción, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce. La fracción adicional sobrante en el ejercicio del cargo tras el cómputo de años completos, inferior al año igual o superior a 6 meses, se entenderá como año completo de ejercicio.

La asignación económica mensual consistirá en una mensualidad de las retribuciones fijas y periódicas del cargo en que se cesa, incluyendo la parte proporcional de esas retribuciones cuyo devengo sea superior al mensual.

3.- En todos los supuestos, para el cómputo del período que corresponda, se tomarán como fechas de referencia las de toma de posesión y cese en el cargo, según la información de SIRhUS. Podrá acumularse el ejercicio de altos cargos con distinto rango jerárquico, quedando exceptuados de esta acumulación aquellos cargos que se hubieran hecho valer para el reconocimiento y percibo de igual

asignación económica, o aquellos otros no recogidos expresamente en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 3/2005, de 8 de abril.

4.- La asignación económica tiene carácter indemnizatorio, y no retributivo, lo que conlleva baja en el régimen de la Seguridad Social que le haya sido de aplicación. No obstante lo anterior, aquellos afectados con relación de servicios como empleado público de la Administración de la Junta de Andalucía, serán dados de alta en el Régimen que corresponda, siempre y cuando hayan solicitado previamente el reingreso al servicio activo.

SEXTA.- El derecho a la asignación económica tendrá vigencia desde el 8 de mayo de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.

INSTRUCCIÓN Nº3/2006, DE 4 DE OCTUBRE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL MANUAL DE DOCUMENTACIÓN DE ENTRADA RESPECTO DE DETERMINADOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OBJETO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE PERSONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

En el Manual de documentación de Entrada, aprobado en el punto Noveno de la Instrucción 4/2005, de 13 de octubre, de la Secretaría General para la Administración Pública, se determina que como documentación de los actos de inscripción registral referentes a las gratificaciones por servicios Extraordinarios, deberá acompañarse las correspondientes Resoluciones de los órganos competentes autorizando la realización de los correspondientes servicios, así como la justificación de existencia de crédito presupuestario y la certificación de la realización de los servicios encomendados.

Con carácter anual, el personal de la Consejería de medio Ambiente, a los que se les encomienda los servicios extraordinarios dentro del Plan INFOCA, vienen percibiendo a través del sistema SIRhUS, y tras la correspondiente inscripción registral, las retribuciones derivadas de la prestación de los servicios, mediante pagos de carácter mensual y una vez realizados los mismos al finalizar la campaña anual.

De conformidad con la Instrucción citada, para cada una de las personas y mensualidades, se acompaña la documentación ya citada, multiplicándose por tanto de manera repetitiva la justificación documental.

Hasta tanto se procede a elaborar en el Sistema SIRhUS un acto específico para la inscripción registral de las gratificaciones extraordinarias derivadas del Plan INFOCA, se ve conveniente la reducción de la documentación a aportar para la oportuna comprobación, tanto de los órganos competentes del Registro General de Personal de la Dirección General de la Función Pública, como de la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda.

Por ello de conformidad con lo establecido en el punto séptimo de la Instrucción 4/2005, ya citada, y oída la Intervención General de la Junta de Andalucía, se dispone lo siguiente:

PRIMERO.- Documentación de entrada para los servicios Extraordinarios del Plan INFOCA.

Los actos de gratificaciones por servicios extraordinarios derivados del Plan INFOCA, tramitados a través de la aplicación informática SIRhUS, para su preceptiva inscripción registral y su posterior percepción, quedan exentos de adjuntar la documentación de entrada.

SEGUNDO.- Justificación

Por los órganos competentes de la Consejería de Medio Ambiente, y con carácter previo a promover las correspondientes inscripciones registrales, remitirán, por una única vez, la correspondiente documentación, comprensiva de la oportuna Resolución de adscripción al personal e la Consejería al Plan INFOCA, Certificación de le existencia de crédito presupuestario y Certificación del órgano competente de la realización de los trabajos realizados y tiempo de los mismos, a los órganos competentes del registro General de Personal y de la Intervención general, de su ámbito competencial, para que por los mismos se efectúen las correspondientes comprobaciones.

TERCERO.- Temporalidad

La vigente instrucción será de aplicación durante el ejercicio económico de 2006, hasta tanto no se elabore el correspondiente acto específico en el sistema SIRhUS, para la inscripción y abono de las citadas gratificaciones por servicios extraordinarios del Plan INFOCA.

CUARTO.- Adaptación en SIRhUS.

Por los servicios correspondientes de la Dirección General de la Función Pública se adoptarán las medidas necesarias para la elaboración de los correspondientes actos de tramitación, a través del SIRhUS, de las gratificaciones por servicios Extraordinarios derivados del Plan INFOCA, con la totalidad de los procedimientos a realizar.

QUINTO.- Entrada en vigor.

La presente instrucción entrará en vigor a partir de que se inicien los trabajos de propuestas de inscripción de los correspondientes actos derivados del Plan INFOCA, del año 2006.

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO DEL EMPLEO, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2006, SOBRE ACREDITACIÓN DEL GRADO DE MINUSVALÍA EN SUBVENCIONES AL FOMENTO DEL EMPLEO EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

La Orden de 4 de octubre de 2002 [9], por la que se desarrollan los incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales de Empleo, establece, para la justificación de los pagos efectuados como consecuencia del incentivo, que deberá aportarse entre otros "fotocopia compulsada de los certificados de minusvalía o documentos acreditativos de su grado de discapacidad", respecto de aquellas personas sobre las que se pide el incentivo correspondiente.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establece en su artículo 1.2 que " A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En todo caso se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad".

La Disposición Final Primera de la citada orden autoriza al Director General de Empleo e Inserción a dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la ejecución de la presente orden en el ámbito de sus competencias específicas.

El artículo 10 del Decreto 203/2004 de 11 de mayo por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo establece las competencias de la Dirección General de Fomento del Empleo, entre

[9] Ver Decreto 58/2007, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido, que establece un régimen transitorio de aplicación de la Orden de 4 de octubre de 2002.

las que se encuentra “la propuesta, coordinación y ejecución de las actuaciones del Servicio Andaluz de Empleo encaminadas a incentivar la creación de empleo”.

En virtud de las competencias atribuidas a este Centro Directivo, se dicta Instrucción al objeto de considerar suficiente a los efectos previstos en el artículo 7.1 de la citada orden de 4 de octubre de 2002, como documento acreditativo de una discapacidad igual o superior al 33 % las certificaciones comprensivas en la Ley estatal y compatibles con el incentivo concedido, en tanto que capacitadas para desarrollar alguna actividad laboral, a las personas que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de retiro por incapacidad permanente para el servicio, siempre que se encuentren en edad laboral.

SENTENCIAS, DICTÁMENES E INFORMES

IV.1. PERSONAL

IV.1.1.- PERSONAL EN GENERAL

INFORME DE LA INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, DE 2 DE OCTUBRE DE 2006 SOBRE LA FORMA DE JUSTIFICAR LOS GASTOS DE VIAJE REALIZADOS CON MOTIVO DE UNA COMISIÓN DE SERVICIO, CUANDO EL BILLETE HA SIDO EMITIDO ELECTRÓNICAMENTE Y EL MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO SEA EL AVIÓN.

Se ha elevado a esta Intervención General consulta sobre la forma de justificar los gastos de viaje realizados con motivo de una comisión de servicio, cuando el billete ha sido emitido electrónicamente y el medio de transporte utilizado sea el avión.

Esta Intervención General, a la vista del objeto de la consulta y dadas las competencias que el artículo 10.1, epígrafes a) y b), del Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, atribuye a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, solicitó su parecer acerca de la determinación y requisitos de la documentación que deberá incluirse en la cuenta justificativa de la correspondiente comisión de servicio, en orden a justificar las cantidades invertidas en gastos de viaje, en sustitución de los billetes o pasajes originales a que se refiere el apartado 2.2.2 a) de la Orden de 8 de noviembre de 1994.

Debido al interés general de la cuestión y en aras de lograr una actuación homogénea en el ejercicio de la función de control, este Centro directivo estima conveniente dar a conocer el criterio manifestado por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en informes de fecha 29 de marzo y 3 de mayo de 2006, en los que se pronuncia sobre la insuficiencia del correo electrónico en el que constan la identificación del pasajero, número de reserva (código localizador), itinerario del viaje y el precio del billete, ya sea reenviado o impreso en papel, como documento que aisladamente justifica las cantidades invertidas. Así:

"3º.- El billete electrónico con un código de localizador, cuando la Compañía aérea confirma la reserva, (...) no constituye un billete original, al que se refiere la letra a) del apartado 2.2.2 de la Orden de 8 de noviembre de 1994 antes referida.

4º.- No obstante, el propio apartado 2.2.2 a) de la citada Orden recoge que en caso de extravío, deberá justificarse con una certificación de la correspondiente empresa de transporte aéreo, en que se acredite el precio del billete y la fecha de realización efectiva del viaje. Por ello, es posible justificar el importe del viaje con una certificación de la compañía aérea en la que conste la identidad del pasajero, itinerario, tarifa abonada y código localizador.

Se entiende que es, asimismo, suficiente justificación el correo electrónico de la citada compañía enviado al comisionado en el que se señalan los conceptos antes reseñados, siempre que el citado medio electrónico tenga las suficientes garantías, conjuntamente con la tarjeta de embarque, donde constan los datos identificativos del vuelo y la factura correspondiente de la agencia de viajes o compañía aéreas donde conste el importe abonado. Por otra parte, deberá tenerse constancia de que la comisión de servicios ha sido realizada debiendo adoptarse las comprobaciones que a este respecto correspondan."

De lo anterior se desprende que en los supuestos de utilización de billete electrónico la justificación a aportar en la cuenta será o bien la certificación de la correspondiente empresa de transporte aéreo, en que se acredite el precio del billete y la fecha de realización; o bien el correo electrónico más la tarjeta de embarque y la factura correspondiente de la agencia de viajes o compañía aérea donde conste el importe abonado.

Así puso de manifiesto la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en los términos transcritos, su criterio ante la cuestión planteada. Lo que ponemos en su conocimiento a efectos de la unificación de criterio en el ejercicio de las funciones de control encomendadas por la legislación vigente.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 4 DE OCTUBRE DE 2006, SOBRE IMPROCEDENCIA DE QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS CONSORCIOS PUEDAN SER RECONOCIDOS A EFECTOS DE TRIENIOS.

En fecha 12 de diciembre del pasado año se recibió en esta Consejería su escrito por el que se formulaba consulta sobre la posibilidad de proceder al reconocimiento de servicios previos por aquéllos prestados en un Consorcio, así como sobre la posibilidad de admitir certificados, a estos efectos, en los que no se hace constar que los servicios prestados están comprendidos en el artículo 29 de la Ley 30/84.

Analizada la cuestión planteada, esta Intervención General consideró oportuno formular consulta, en fecha 17 de febrero de 2006, sobre dichos extremos a la Secretaría General para la Administración Pública, en virtud de las competencias que dicho órgano tiene atribuidas, del siguiente tenor literal:

> *"Se ha recibido, en esta Intervención General, consulta planteada por la Intervención Provincial en la Delegación de la Consejería de Economía y Hacienda en Córdoba respecto a determinados aspectos de la Instrucción 3/2005 de esa Secretaría General para la Administración Pública, sobre reconocimiento de trienios y reconocimiento de servicios previos al personal funcionario y laboral, al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía.*
>
> *Concretamente, en relación con el contenido de la instrucción tercera y para el supuesto de servicios previos prestados en el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, de la provincia de Córdoba (Estatutos modificados publicados en el BOJA nº 146, de 19 de diciembre de 2000), se plantea si éstos deben ser considerados a efectos de su reconocimiento como servicios previos.*
>
> *Por otra parte, respecto a los certificados mencionados en la instrucción sexta se formula consulta en cuanto a la forma de acreditación en ellos, clara y taxativamente, de que los servicios prestados están comprendidos entre los*

establecidos en el artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública, al ser frecuente la expedición de certificados en los que no se incluye dicha mención expresamente, respecto a los cuales, considera esta Intervención General que, al no ajustarse a lo establecido en la citada Instrucción, deberían ser rechazados para su debida subsanación.

Respecto a la cuestión planteada en primer lugar, y siguiendo los preceptos mencionados en la instrucción tercera para delimitar el concepto de Administraciones Públicas (artículo 1.1 de la Ley 70/1978, artículo 2 de la Ley 30/1992, artículo 3.3 del Decreto 299/2002 y artículo 29.3 de la Ley 30/1984), nos encontramos con el siguiente elenco:

- *Administración General del Estado.*
- *Administraciones de las Comunidades Autónomas.*
- *Entidades que integran la Administración Local.*
- *Administración institucional.*
- *Administración de Justicia.*
- *Administración de la Seguridad Social.*
- *Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.*
- *Instituciones de la Unión Europea.*
- *Administración de los Estados miembros de la Unión Europea.*
- *Organismos o entidades del sector público, con la excepción de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas.*

Se plantea la duda de si los consorcios pudieran enmarcarse, a efectos de la anterior delimitación del concepto de Administraciones Públicas, bien entre las entidades que integran la Administración Local, bien entre las entidades de derecho publico con personalidad jurídica propia vinculada o dependiente de una Administración Pública o bien entre los organismos o entidades del sector público.

Según tiene declarado la jurisprudencia, "la problemática cuestión de la naturaleza jurídica de los consorcios debe resolverse en atención al marco jurídico, competencial y corporativo de cada uno, dada la heterogeneidad y amplitud de las funciones que estos entes cumplen" (STS de 19 de junio de 2002). La STS de 3 de noviembre de 1997 (por la que se revoca la STSJ de Asturias de 15 de mayo de 1991, en cuya decisión, según manifiesta el TS, "aunque elude pronunciarse sobre el tema de si el Consorcio tiene naturaleza de Ente Local, sin embargo establece una elaborada argumentación en la que en realidad subyace una plena equiparación con dichos Entes"), se dispone que "el precepto en que se marcan los elementos esenciales del régimen legal de los consorcios es el enunciado en el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, en uno de cuyos apartados se establece que «los estatutos de los Consorcios determinarán... las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero» de los mismos, lo que acredita que en atención a su carácter de entidades constituidas para atender a fines concretos y determinados, que tienen la nota de ser también competencia común de otras entidades, aunque en todo caso una de ellas debe ser una Administración Pública, el legislador no ha sometido rígidamente su organización a los tipos legalmente preestablecidos, sino que teniendo en cuenta la gran variedad de posibles fines y partícipes en los Consorcios y su consiguiente mayor o menor complejidad, la ha flexibilizado, encomendando a sus Estatutos la adopción de la que considere más idónea a las necesidades de su buen funcionamiento". Por otra parte, en la STS de 28 de junio de 2004, se añade que "hoy se tiene ya claro que hay organizaciones públicas instrumentales que realizan actividades privadas y que, además, y a ciertos efectos ejercitan potestades públicas, teniendo a estos efectos –y sólo en estos casos- el tratamiento de Administraciones Públicas".

Por tanto, no a todos los consorcios cabría atribuirles la misma naturaleza jurídica, no pareciendo desprenderse de la doctrina jurisprudencial que deban considerarse como Entes Locales, ni como Entidades de derecho público.

Restaría considerar la posibilidad de que constituyeran "organismos y entidades del sector público".

Para la delimitación del concepto "sector público", a efectos de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, quizá debiera estarse a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, que regula las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público, a cuyos efectos constituyen el sector público:

"....

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes de conformidad con los artículos 126.1 y 4 y 153.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

...

i) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local."

Aquí volveríamos a encontrar nuevamente la dificultad de determinar si los consorcios forman parte del "resto de organismos y entes del sector público local".

Dadas las dudas planteadas, considera este Centro Directivo necesario someter ambas cuestiones al criterio de esa Secretaría General, dadas las funciones que tiene atribuidas sobre la materia en virtud de lo dispuesto en el Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, según el cual se atribuye a esa Secretaría General la competencia sobre el régimen jurídico y retributivo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Por ello se interesa su criterio sobre:

1. *Si los servicios prestados en los consorcios y, específicamente, los prestados en el mencionado Consorcio Provincial de Desarrollo Económico podrían ser reconocidos a efectos de servicios previos.*

2. *Si deben admitirse certificados expedidos en los que no figure, clara y taxativamente, la acreditación de que los servicios prestados están comprendidos en los establecidos en el artículo 29 de la Ley 30/1984."*

Con fecha 2 de octubre de 2006 se ha recibido informe de la citada Secretará General sobre las cuestiones formuladas en el que se viene a manifestar que:

"Efectivamente, en el punto tercero de la Instrucción, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley 78/1978, y demás normativa legal de aplicación, se detalló el ámbito de la prestación de los servicios a reconocer, estableciéndose el correspondiente a las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, tal como determina la actual redacción del artículo 29.3.a) de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública.

La Instrucción 1/1996, de 15 de marzo, derogada por la Instrucción 3/2005, determinó claramente, en base a las diversas sentencias para unificación de doctrina del Tribunal Supremo, que los servicios a reconocer eran exclusivamente los prestados en las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La modificación efectuada por tanto, con respecto a este apartado del punto tercero de la Instrucción, ha venido derivada de la nueva redacción de la Ley 30/1984, ya citada, que efectivamente establece que "los funcionarios excedentes no devengarán retribuciones ni le será computable el tiempo de permanencia en tal situación a efecto de ascensos, trienios y derechos pasivos", si bien como establece el párrafo siguiente ... "se computará a efectos de trienios el período de prestación de servicios en organismos o

entidades del sector público, con la excepción de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas".

De esta redacción se deriva, por tanto, que los servicios a reconocer son los prestados en organismos o entes del sector público sometidos a la Ley 53/1984, de incompatibilidades en el sector público, ya que la excedencia contemplada en el artículo 29.3.a), y desarrollada en el artículo 15 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios, aprobado por el Real Decreto 365/1995, es en la que corresponde declarar al personal funcionario afectado por la Ley de Incompatibilidades en el sector público. Pero, además, se excluye a las sociedades participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas, y las minoritarias no estarían nunca dentro del artículo 29.3.a) citado.

Del análisis de los Consorcios, nos encontramos que no existe una regla homogénea en la constitución de los mismos, en cuanto a la participación de las Administraciones Públicas, ni qué Administraciones Públicas forman parte de los mismos, no pudiendo encuadrarse en el término exacto de organismos o entes del sector público, y no quedando afectados tampoco, de una manera clara y concisa, por la Ley de Incompatibilidades.

Por todo lo expuesto, esta Secretaría General estima que:

Los servicios prestados en los Consorcios NO PUEDEN ser reconocidos a efectos de trienios, al no encontrarse encuadrados en los Organismos o Entidades del sector público a que hace referencia el párrafo último del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del apartado sexto de la Instrucción 3/2005, los certificados expedidos por los organismos o entes del sector público, afectados por el artículo 29.3.a) de la Ley 30/1984, deberán hacer constar esta salvedad".

Lo que se le comunica a efectos de la resolución de la consulta formulada.

COMUNICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 25 DE OCTUBRE DE 2006, POR LA QUE SE ESTABLECE QUE A PARTIR DE ENERO DE 2007, LA NÓMINA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE TRAMITARÁ POR EL SISTEMA SIRHUS.

De acuerdo con las previsiones normativas que configuran el Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía (Sirhus) como sistema global, aplicable a todos los colectivos de personal que prestan servicios en el ámbito de esta Administración Pública, se ha fijado el horizonte del mes de enero de 2007, inicialmente, como aquel en que la nómina del personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma, que actualmente se tramita en SRP 4, se confeccione y gestione por el Sistema Sirhus.

Dicho colectivo (J) es actualmente objeto de fiscalización por las Intervenciones Provinciales de Economía y Hacienda.

Con objeto de garantizar la mayor depuración de datos que sean introducidos en el Sistema, se están llevando a cabo labores de carga de información y de contraste de la misma por parte del Servicio de Informática de la Consejería de Justicia y de los correspondientes órganos gestores del personal aludido, en las distintas provincias.

A fin de complementar esas tareas de validación, y posibilitar la futura edición de la nómina y la gestión de los actos de personal, se ha procedido, igualmente, a cargar en el Sistema las tablas retributivas de este colectivo, la estructura de puestos de trabajo, y la asignación de centros fiscalizables a las correspondientes Intervenciones Provinciales.

En el proceso de la nómina del mes de noviembre, se cargará para cada Intervención Provincial de Economía y Hacienda una nueva muestra comprensiva de las incidencias del personal de la Administración de Justicia, al tiempo que los órganos gestores comenzarán a tramitar en Sirhus los actos correspondientes.

La fiscalización previa de estos actos procede del mismo modo que con el personal del colectivo de Administración General.

Si bien la fiscalización previa de actos ha habrá de realizarse en Sirhus y, por ende, la gestión de los mismos, para su efectividad, las muestras e incidencias en nómina que resulten seleccionadas, tienen una virtualidad relativa, por el momento, pues se generan a los solos efectos de que por las diversas Intervenciones Provinciales se puedan ir comprobando las mismas, a fin de detectar incoherencias de información que hubiesen de ser depuradas antes de que la nómina Sirhus del colectivo aludido entre en producción.

Esta fase de edición de nóminas y muestras en paralelo abarcará las nóminas de noviembre y diciembre. Si el resultado del proceso fuese satisfactorio, previsiblemente se entraría en fase de producción en la nómina del mes de enero de 2007. En caso contrario, se retrasaría dicha entrada en producción lo que fuese necesario.

En consecuencia, en la fiscalización de las nóminas de este personal, de los meses de noviembre y diciembre del presente año, deberán solicitar de los órganos gestores que, junto con la nómina SRP 4, que es la que debe sustentar el pago de retribuciones, les hagan llegar la nómina editada en Sirhus, a fin de comprobar sobre el cuerpo de la misma que existe coincidencia de perceptores, retribuciones, descuentos, e imputaciones presupuestarias. Advertidas divergencias en dichos datos, se comunicarán a la Intervención de Gastos de Personal, mediante el pertinente informe detallado, a fin de proceder a su evaluación y corrección.

Para facilitar la tarea de verificación, las muestras fiscalización de este colectivo no están sometidas al cierre del período de fiscalización de incidencias, de modo que podrán ser fiscalizadas (siempre con el carácter paralelo y de prueba que se predica) hasta el mismo momento del cierre de la nómina general para proceder a su cálculo.

Cualquier aclaración o incidencia que surgiese en este proceso, pueden dirigirla directamente a la Intervención de Gastos de Personal.

IV.1.2.- ALTOS CARGOS

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2006, SOBRE CUANTÍA MÁXIMA MENSUAL DE LA INDEMNIZACIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X, por el que se viene a formular discrepancia, en virtud del art. 84.1.a) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHPA) y del art. 13 del Decreto 149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), respecto al informe de fiscalización de disconformidad emitido, (...) por el Interventor Provincial en la Delegación Y, en relación con un expediente de reposición de anticipo de caja fija, por el importe satisfecho (...) en concepto de indemnización por gastos de vivienda, al amparo del Acuerdo de 31 de octubre de 2000, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la concesión de indemnización específica por gasto de vivienda y alojamiento.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Recibida propuesta de documento contable "ADOP" nº ..., para reposición de anticipo de caja fija, correspondiente a la indemnización por gastos de vivienda a favor de (...) , por importe de 1.623,60 €, la precitada Intervención Provincial, en fecha 21 de abril de 2006, emite informe de fiscalización de disconformidad fundamentado en el motivo siguiente:

"La cuantía de dicha propuesta excede del importe a indemnizar definido en el punto primero del Acuerdo de 31 de octubre de 2000, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la concesión de indemnización específica por gastos de vivienda y alojamiento, en el que se especifica que la cantidad mensual máxima a indemnizar será el importe equivalente al 2,5 de las retribuciones brutas anuales establecidas para los Directores Generales en la Ley de Presupuestos de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, excluida la productividad e incluidas las retenciones y obligaciones fiscales a la que por estos conceptos le corresponda".

SEGUNDO.- Frente al mencionado informe de fiscalización de disconformidad, el Viceconsejero de X con él, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 18 de septiembre de 2006, al efecto de su resolución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 84.1.a) de la LGHPA y 13 de RIJA.

Las alegaciones en apoyo de su disentimiento pueden sintetizarse en la forma siguiente:

1º.- El mencionado Acuerdo establece como límite el 2,5% de las retribuciones anuales para los Directores Generales en la Ley de Presupuestos, siendo así que el alquiler en cuestión no lo sobrepasa ya que el mismo asciende a 1.320 € mensuales y el límite máximo para este ejercicio estaría en 1.390,90 € mensuales.

2º.- Que en el ejercicio 2000 y 2001 hubo unas actualizaciones y aclaraciones por la Intervención General, estableciendo la cuantía para 2001 en 201.341 pesetas.

3º.- Que en el último sexenio el precio de la vivienda ha sufrido un incremento exponencial, y con ello los arrendamientos de las mismas, siendo así que en el mismo no aparece haber modificación a efectos de indemnización.

> 4º.- Que (...) es una zona turística que sufre mayores incrementos del valor de la vivienda y, por ende en sus arrendamientos, y la proporción indemnizatoria debiera tener en cuenta esta y otras circunstancias sobre el valor de la vivienda.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Como cuestión preliminar, con relación a aspectos procedimentales en la tramitación de la presente discrepancia, ha de señalarse que según determina el art. 13 del RIJA, el plazo para interponer discrepancia es de diez días contados desde el siguiente a aquel en que el informe fiscalización de disconformidad sea recibido por el órgano gestor. Dado que el informe de disconformidad se emitió en fecha 21 de abril de 2006 (registro de salida de fecha 24.04.06), y que el escrito por el que se planea el disentimiento se recibe en esta Intervención General el pasado 20 de octubre, ha de concluirse que la discrepancia se ha presentado fuera del plazo establecido para ello.
No obstante lo anterior, al no entender dicho plazo como preclusivo, esta Intervención General entrará a conocer de la misma.

SEGUNDA.- La cuestión a resolver en la presente discrepancia será determinar si la cuantía de la indemnización para gastos de vivienda que se reconoce al Delegado Provincial (...), correspondiente al mes de abril, excede de la cantidad mensual máxima a indemnizar por este concepto, conforme a lo establecido en el Acuerdo de 31 de octubre de 2000, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la concesión de indemnización específica por gastos de vivienda y alojamiento.

TERCERA.- El citado Acuerdo del Consejo de Gobierno establece, en su punto primero, el importe máximo mensual de la indemnización específica por gastos de vivienda y alojamiento que nos ocupa, en los siguientes términos:

"...cantidad mensual máxima equivalente al 2,5% de las retribuciones brutas anuales establecidas para los Directores Generales en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excluida la productividad. En dicha cuantía máxima se consideran incluidas las retenciones y obligaciones fiscales a las que por estos conceptos pudieran corresponderles..."

Aplicando este porcentaje del 2,5% a las retribuciones brutas anuales previstas para los Directores Generales en el art. 10 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2006, resulta un límite indemnizatorio para el presente ejercicio que asciende a 1.390,18 € mensuales.

CUARTA.- En la documentación obrante en el expediente, consta certificado del Secretario General de la Delegación Provincial Y, en el que hace constar el abono al citado Delegado Provincial de la indemnización específica por gastos de vivienda correspondiente al mes de abril de 2006, por un importe total de 1.623,60 €, según la siguiente distribución: 1.320 € (alquiler mensual); 303,60 € (23% IRPF).

Este certificado pone de manifiesto que la indemnización excede del límite indemnizatorio previsto para este ejercicio, causa que aduce la Intervención Provincial (...) y fundamenta su informe de disconformidad, puesto que el límite indemnizatorio establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno comprende tanto el gasto de alquiler de la vivienda como las retenciones y obligaciones fiscales por este concepto.

Por consiguiente, este Centro Directivo no entiende el sentido de la discrepancia formulada por el órgano gestor, toda vez que de los propios documentos emitidos por éste se desprende el referido exceso en la indemnización, de lo que parece deducirse que dicho órgano gestor está olvidando incluir en el cómputo del límite indemnizatorio la cuantía correspondiente a la retención practicada en concepto de IRPF, cantidad que, como hemos indicado, forma parte de la propia indemnización por así establecerlo el Acuerdo de 31 de octubre de 2000, cuyo tenor literal se ha reproducido en la Consideración Tercera de este Informe, a la que nos remitimos.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el art. 84 de la LGHP y en el art. 13 del RIJA.

RESUELVE

Ratificar el informe de fiscalización de disconformidad del expediente de referencia por los motivos expresados en las consideraciones anteriores.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la LGHP y en el art. 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el art. 10 del citado Reglamento.

IV.2.- CONTRATOS

IV.2.1.- CONTRATOS EN GENERAL

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 5 DE JUNIO DE 2006 POR EL QUE SE RESUELVEN CONSULTAS ACERCA DE LA INTERPRETACIÓN DEL ART.3.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN SU REDACCIÓN DADA POR EL REAL DECRETO LEY DE 5/2005, DE 11 DE MARZO,DE REFORMAS URGENTES PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y PARA LA MEJORA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Se han recibido en esta Intervención General escritos planteando consulta acerca de la interpretación del artículo 3.1, del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP), en su redacción dada por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de Reformas Urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, distinguiéndose algunas cuestiones de carácter general y otras de índole particular referidas a convenios concretos.

Como cuestiones de carácter general se plantean las siguientes:

1. Delimitación de los supuestos de hecho contemplados en los apartados c), d) y l) del artículo 3.1 del TRLCAP.
2. Análisis de los requisitos configuradores de la encomienda de gestión.
3. El régimen jurídico de las encomiendas de gestión: competencia para acordarlas y régimen de fiscalización e intervención previa.

Como cuestiones particulares, se someten a consideración sendos convenios, con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA y con el INIA, planteándose su posible instrumentación a través de una encomienda de gestión de las referidas en el artículo 3.1 l) del TRLCAP.Con la finalidad de precisar las referidas cuestiones, este Centro fiscal estima conveniente realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

I.-

El artículo 3 del TRLCAP, tras la modificación introducida por el Real Decreto Ley 5/2005, dispone:

"Artículo 3. Negocios y contratos excluidos.- Quedan fuera del ámbito de la presente Ley (...)

c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera de ellos entre si, siempre que la materia sobre la que versen no sea objeto de un contrato de obras, de suministro, de consultoría y asistencia o de servicios, o que siendo objeto de tales contratos su importe sea inferior, respectivamente, a las cuantías que se especifican en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2.

d) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Quedarán asimismo excluidos de la presente Ley los convenios que sean consecuencia del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. (...)

l) Las encomiendas de gestión que se realicen a las entidades y a las Sociedades cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración Pública."

La modificación de este precepto tiene su origen en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 13 de enero de 2005, dictada en resolución de un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión, la cual consideró que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, entre otros motivos, "al excluir de forma absoluta del ámbito de aplicación del texto refundido y, en concreto, en el artículo 3, apartado 1, letra c), de éste, los convenios de colaboración que celebren las Administraciones Públicas con las demás entidades públicas y, por tanto, también los convenios que constituyan contratos públicos a efectos de dichas Directivas".

En relación con dicho incumplimiento el Tribunal efectúa las siguientes apreciaciones:

"Según las definiciones contenidas en el artículo 1, letra a), de las Directivas 93/36 y 93/37, un contrato público de suministro o de obras supone la existencia de un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre, por una parte, un proveedor o un contratista y, por otra, una entidad adjudicadora en el sentido del artículo 1, letra b), de dichas Directivas y que tenga por objeto la compra de productos o la ejecución de determinado tipo de obras.
Conforme al artículo 1, letra a), de la directiva 93/36, basta, en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por una parte, un ente territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta de éste. Sólo puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o entes que la controlan (sentencia Teckal, apartado 50).

Habida cuenta de la identidad de los elementos constitutivos de la definición de contrato en las Directivas 93/36 y 93/37, a excepción del objeto del contrato considerado, procede aplicar la solución adoptada así en la sentencia Teckal, antes citada, a los acuerdos interadministrativos a los que se aplica la Directiva 93/37.

En consecuencia, dado que excluye a priori del ámbito de aplicación del Texto Refundido las relaciones entre las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y, en general, las entidades de Derecho público no mercantiles, sea cual sea la naturaleza de estas relaciones, la normativa española de que se trata en el caso de autos constituye una adaptación incorrecta del Derecho interno a las Directivas 93/36 y 93/37".

La citada sentencia de 18 de noviembre de 1999, Teckal (C-107/98), vino a configurar los requisitos que han de concurrir para encontrarnos ante un supuesto de "in house providing", supuesto que implica la exclusión de la aplicación de los procedimientos de licitación establecidos en las directivas sobre contratación

pública. A este respecto se establecía que la directiva 93/63/CEE, del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, entonces vigente, "(...) es aplicable cuando una entidad adjudicadora, como un ente territorial, proyecta celebrar por escrito, con una entidad formalmente distinta de ella y autónoma respecto a ella desde el punto de vista decisorio, un contrato a título oneroso que tiene por objeto el suministro de productos, independientemente de que dicha entidad sea o no, en sí misma, una entidad adjudicadora, añadiendo que sólo puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes que la controlan".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mantenido este criterio en otros pronunciamientos posteriores, como en la sentencia de 7 de diciembre de 2000 (C-94/99), la de 8 de mayo de 2003 (C-349/97), la de 11 de enero de 2005 (C-26/03) y la mas reciente de 11 de mayo de 2006 (C-340/04).

A la vista de la nueva regulación contenida en el artículo 3.1 del TRLCAP, y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del Estado elaboró la Instrucción nº 2/2005, de 21 de julio, sobre el régimen jurídico aplicable a los convenios de colaboración y a los acuerdos de encomienda de gestión celebrados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y restantes entidades públicas y privadas del sector público estatal, cuyos criterios hace suyos esta Intervención General.

Dicha Instrucción dispone, en relación con los convenios a que se refiere el artículo 3.1 c) del TRLCAP, esto es los celebrados entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí, que deberán sujetarse al citado texto refundido aquéllos en los que concurran acumulativamente dos circunstancias: que la materia sobre la que versen constituya el objeto de un contrato de obras, de suministro, de consultoría y asistencia o de

servicios; y que su importe sea igual o superior a las cuantías especificadas en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 del ya citado texto refundido.

Por lo que se refiere a los convenios de colaboración con entidades de derecho privado, a que se refiere el artículo 3.1 d) del TRLCAP, éstos deberán sujetarse a la normativa contractual pública, independientemente de su cuantía, siempre que su objeto esté comprendido en los contratos que regula el TRLCAP o en otras normas administrativas especiales.

No obstante lo anterior, que debe configurarse como un principio de carácter general, según los criterios establecidos por la citada Instrucción 2/2005 de la Abogacía General del Estado, los convenios que de acuerdo con lo arriba señalado estarían sujetos al TRLCAP, podrán quedar excluidos de su ámbito de aplicación en el supuesto de que deba instrumentarse la relación de que se trate a través de una encomienda de gestión, en virtud del nuevo apartado 3.1 l) del TRLCAP, que se refiere a las encomiendas de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración Pública.

Tal y como señala la Instrucción de la Abogacía General del Estado, este apartado pretende contemplar los supuestos de "In house providing" que ha delimitado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias antes señaladas.

Por esta razón, la Instrucción considera que, a pesar de la escueta redacción del artículo 3.1 l), para que pueda darse el supuesto de la encomienda de gestión en él previsto, deben concurrir los siguientes elementos definidos por dicha jurisprudencia:

- que la Administración, Organismo o entidad pública que realiza la encomienda de gestión ejerza sobre la Entidad o Sociedad que la recibe un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y
- que esa Entidad o Sociedad en cuyo favor se acuerda la encomienda de gestión realice la parte esencial de su actividad con la Administración, Organismo o Entidad pública que la otorga.

La Instrucción argumenta esta exigencia señalando que "aun cuando estos dos requisitos establecidos por la doctrina del TUCE anteriormente expuesta no figuren recogidos explícitamente en la redacción del nuevo párrafo l) del artículo 3.1 del TRLCAP (únicamente puede considerarse que se alude a uno de ellos, el relativo al control análogo al ejercicio sobre los propios servicios, al mencionar, en el caso de las sociedades públicas, que su capital debe ser íntegramente de titularidad de al Administración encomendarte), se considera imprescindible que concurran en todo caso para poder considerar que las encomiendas de gestión a que se refiere ese precepto quedan excluidas de la aplicación del TRLCAP, lo que no sería posible, de acuerdo con esa doctrina jurisprudencial en los supuestos en que faltara cualquiera de esos requisitos".

Por otro lado, la Instrucción de la Abogacía General del Estado a la que venimos haciendo referencia, entiende que tampoco procede una interpretación literal del apartado l) del ya citado artículo 3, en relación con las entidades que pueden ser destinatarias de la encomienda de gestión. En este sentido y haciendo una interpretación extensiva del termino "entidad" utilizado por el precepto considera que también podrían incluirse las fundaciones públicas. Por otro lado, y respecto a las sociedades mercantiles estatales y la exigencia de que su capital pertenezca totalmente a la propia Administración Pública, la Instrucción establece que no es necesario que la entidad encomendante posea la totalidad del capital de la sociedad que recibe la encomienda, sino que (...) también es admisible la encomienda de gestión a una entidad o sociedad cuyo capital, siempre que sea exclusivamente público, pertenezca a varias Administraciones Públicas con competencia o fines concurrentes (sea mediante participación directa de esas Administraciones Públicas en el capital de la entidad o sociedad, sea mediante participación indirecta de las mismas en dicho capital) y sometida al control único y exclusivo, bien que conjunto, de dichas Administraciones Públicas. En todo caso, y también en estos supuestos, deberán darse, además, el resto de los requisitos consagrados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para los supuesto de "In house providing".

II.-

Delimitados los supuestos contemplados en los apartados c) y d) y l) del artículo 3.1 del TRLCAP, y admitido que este último supuesto implica la traslación a nuestro Derecho del "in house prodiving" a que se refiere la jurisprudencia comunitaria, conviene analizar los requisitos para que pueda operar dicha exclusión de la normativa contractual y nada mejor para ello que traer a colación las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que, en definitiva, se excluyen aquellos supuestos que, gozando de las mismas características de un contrato público, se celebran entre una entidad y otra jurídicamente distinta pero que se constituye como medio instrumental del contratante, completamente dependiente de él y sin una verdadera capacidad decisoria.

Así, la sentencia Teckal, de 18 de noviembre de 1999,antes citada, concretó los requisitos en:

- que el ente adjudicador ejerza sobre la persona con la que celebra el contrato un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.
- que esa persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o entes que la controlen.

Posteriormente, la sentencia de 8 de mayo de 2003 resulta particularmente relevante a nuestros efectos puesto que en sus considerandos 203 a 207, el Tribunal concluye que las autoridades españolas podían encomendar legítimamente a la sociedad estatal TRAGSA los trabajos relativos a la implantación del registro oleícola sin recurrir al procedimiento de licitación, al tratarse de un supuesto excluido de la aplicación de las directivas en materia de adjudicación de contratos públicos ("In House Providing"). El Tribunal consideró que este encargo a TRAGSA se encontraba dentro de los límites de la exclusión detallados en la sentencia Teckal, y señaló "Por lo que se refiere a las consecuencias de considerar a TRAGSA como parte de la Administración Pública, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha admitido una excepción a la aplicación de las directivas en materia de adjudicación de contratos públicos llamada "In House Providing", relativa a los contratos

celebrados por una entidad adjudicadora con determinados organismos públicos vinculados a ella.(...) Esto es lo que sucede en el presente asunto. En efecto, a tenor del artículo 88 apartado 4 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, TRAGSA, en tanto que medio propio instrumental y servicio técnico de la administración española, está obligada a realizar con carácter exclusivo, por sí misma o sus filiales, los trabajos que le encomienden la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los organismos públicos dependientes de ellas. (...)".

Dicha conclusión parece del todo lógica puesto que los supuestos de "in house providing" tienen como fundamento último la falta absoluta de autonomía de voluntad de una entidad en sus relaciones con otra entidad que, por tanto, ejerce un control total y efectivo sobre aquella. Pues bien, en el supuesto de TRAGSA, que, como ya se ha indicado, ha sido declarada expresamente por la jurisprudencia comunitaria como un supuesto de "in house providing", varias son las manifestaciones relativas a su carácter instrumental y falta de autonomía. En primer lugar, en el apartado Cuatro artículo 88 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. se señala que "TRAGSA, como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración, está obligada a realizar con carácter exclusivo, por sí misma o sus filiales, los trabajos que le encomienden la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los organismos públicos de ellas dependientes, en las materias que constituyen el objeto social de la empresa y, especialmente, aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren".

Asimismo, la ausencia de autonomía de TRAGSA y sus filiales en sus relaciones con las Administraciones de las que es medio propio queda patente en los apartados Cinco y Seis del mismo precepto, al señalar, respectivamente, que no podrán participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por dichas Administraciones, así como que el importe de los trabajos realizados por medio de TRAGSA se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes, que deberán ser objeto de aprobación por la Administración.

En consecuencia, en el caso concreto de TRAGSA, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ha calificado como supuesto de "in house prodiving", por lo que,

entiende esta Intervención General, cabría extender tal calificación a aquellos entes instrumentales que tienen una regulación similar a la de la citada sociedad, como así se ha manifestado expresamente este Centro respecto a SEGIPSA en escrito de 27 de febrero de 2006.

Por lo que concierne a los supuestos en que no hay una calificación expresa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las relaciones entre la entidad encomendarte y encomendada, en los que, por tanto, deberá hacerse un análisis caso por caso de la concurrencia de los requisitos, resulta oportuno transcribir las consideraciones efectuadas en la reciente sentencia de 11 de mayo de 2006 (asunto C-340/04) en las que se aportan ciertas pautas interpretativas.

El supuesto de hecho que en dicha sentencia se analiza, es el de un contrato adjudicado sin licitación por un municipio italiano a favor de una sociedad anónima participada al 100% por otra sociedad anónima holding en cuyo capital social participa en un 99,98% el municipio adjudicador y en el 0,02% restante otros municipios.

Así, por lo que se refiere al primer requisito, el Tribunal considera que "para apreciar si el poder adjudicador ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios... ha de resultar que la sociedad adjudicataria está sometida a un control que permite que el poder adjudicador influya en sus decisiones. Debe tratarse de una influencia potencialmente determinante, tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes de dicha sociedad...".

"El hecho de que el poder adjudicador posea, por sí solo o junto con otros entes públicos, la totalidad del capital de una sociedad adjudicataria tiende a indicar, sin ser un indicio decisivo, que dicho poder adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios".

En el análisis del caso concreto planteado, el Tribunal observa que ni los estatutos de la sociedad holding ni los de la adjudicataria reservan al municipio adjudicador "ninguna facultad de control ni le atribuyen ningún derecho de voto especial para restringir la libertad de acción reconocida a ambos consejos de administración...".

Además, observa el Tribunal que la eventual influencia del municipio adjudicador sobre la sociedad adjudicataria se ejerce a través de una sociedad holding y afirma que "según las circunstancias del caso, la intervención de un intermediario de este tipo puede debilitar el eventual control ejercido...".

Teniendo en cuenta ambas circunstancias, el Tribunal aprecia que en el caso concreto planteado no concurre el requisito del control efectivo.

Por lo que respecta al segundo requisito configurado del "in house prodiving", esto es, que el adjudicatario realice la parte esencial de su actividad con el ente o entes que la controlan, el Tribunal recuerda que "el objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos es la libre circulación de las mercancías y los servicios y su apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros", por lo que el requisito analizado tiene por objeto garantizar que la normativa contractual siga siendo aplicable "en el caso de que una empresa controlada por uno o varios de estos entes opere en el mercado y pueda competir, por tanto, con otras empresas". Por ello, se afirma en la sentencia, es preciso para entender cumplido el requisito analizado, que la actividad del adjudicatario "esté destinada principalmente a dicho ente territorial, de modo que el resto de su actividad tiene un carácter meramente marginal (...).

Para apreciar si concurre este supuesto, el juez competente debe tomar en consideración todas las circunstancias del caso, tanto cualitativas como cuantitativas (...) Las actividades de la empresa adjudicataria que procede tomar en consideración son todas las que dicha empresa realiza en el marco de una adjudicación efectuada por el poder adjudicador, y ello con independencia de la identidad del beneficiario, ya sea el propio poder adjudicador, ya el usuario de los servicios.

Carece de importancia la cuestión de quién remunera a la mencionada empresa, ya sea el ente territorial que la controla, ya los terceros usuarios de los servicios prestados en virtud de concesiones o de otras relaciones jurídicas establecidas por dicho ente territorial. También resulta irrelevante la cuestión de en qué territorio se prestan dichos servicios. (...). Puede resultar conveniente analizar la cuestión de si la

actividad que debe tomarse en consideración es la que la empresa adjudicataria realiza con todos los entes territoriales que la controlan o únicamente la actividad realizada con el ente territorial que actúe en cada caso como poder adjudicador. (...) Cuando son varios los entes territoriales que controlan una empresa, el requisito relativo a lo esencial de la actividad de ésta puede considerarse satisfecho si dicha empresa realiza lo esencial de su actividad, no necesariamente con uno u otro de estos entes territoriales, sino con dichos entes territoriales considerados en conjunto"

Continuando con el análisis de los requisitos configuradores de la encomienda de gestión, plantea la Intervención Delegada la necesidad de que, por un lado, el objeto de la encomienda de gestión entre dentro del ámbito de los fines o funciones de la entidad encomendada o en el supuesto de sociedades mercantiles, dentro de su objeto social y, por otro lado, que las entidades encomendadas tengan necesariamente medios propios suficientes para realizar la actividad encomendada.

En relación con la primera exigencia, esta Intervención General comparte la apreciación hecha por la Intervención Delegada y en numerosos informes ha destacado que la consideración de medio propio instrumental de sociedades como TRAGSA o SEGIPSA sólo se predica en relación con las actividades incluidas en el objeto social para el que han sido configuradas como medio propio.

Por otra parte, y por lo que a los organismos públicos se refiere, la necesidad de que cualquier actividad que se les encomiende entre en sus fines y funciones deriva de la propia LOFAGE, cuyo artículo 2.4 señala que "las potestades y competencias administrativas que en cada momento, tengan atribuidas la Administración General del Estado y sus Organismos públicos por el ordenamiento jurídico, determinan la capacidad de obrar de unos y otros".

En cuanto a la necesidad de que las entidades receptoras de la encomienda tengan medios propios suficientes para realizar la actividad encomendada, entiende esta Intervención General que, no contemplándose tal requisito por la jurisprudencia comunitaria, no procede su exigencia, salvo que la normativa específica de la entidad encomendada así lo disponga, como es el caso de TRAGSA, que tiene limitada su facultad de requerir la colaboración de empresarios particulares por el

artículo 88.4 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y por el artículo 6 del Real Decreto 371/1999, de 5 de marzo.

Para los supuestos en que la normativa específica no lo prevea, no cabe imponer limitación similar a la posibilidad de contratar con terceros, ya que ésta no deriva ni del apartado l) del artículo 3.1 del TRLCAP ni de la jurisprudencia comunitaria.

Así, resulta significativa la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo de 2003, que al calificar a TRAGSA como un caso de "in house providing" cita como fundamento algunos aspectos de su regulación en el antes citado artículo 88, sin mencionar como elemento a tener en cuenta en dicha calificación la limitación a la contratación con terceros para las actuaciones que se le encomienden.

Asimismo, cabe mencionar la sentencia de 11 de mayo de 2006: de los hechos en ella descritos resulta que el objeto de la encomienda fue, a su vez, licitado y adjudicado en su totalidad a terceras empresas por la sociedad encomendada. Pues bien, tal circunstancia no es destacada ni considerada por el Tribunal como obstáculo para apreciar el supuesto de "in house prodiving", en contraposición a otros datos fácticos que sí se traen a colación por el Tribunal para fundamentar la no concurrencia de alguno de los dos requisitos configuradores de tal supuesto.

III.-

En relación con la última de las cuestiones generales planteadas en los escritos de consulta, relativa al régimen jurídico aplicable a los expedientes de encomienda de gestión tramitados al amparo del artículo 3.1 l) del TRLCAP, cabe señalar que, de conformidad con el citado precepto, las encomiendas de gestión quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo cual debe interpretarse como una exclusión de la aplicación de las normas de dicho texto reguladoras de los contratos administrativos, siéndoles de aplicación, sin embargo, las normas que la Ley y el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas establecen para la ejecución de obras, fabricación de bienes y prestación de servicios por la propia Administración, por entenderse que

estas figuras jurídicas se constituyen como un verdadero supuesto de "in house providing".

En efecto, la ejecución de trabajos por la propia Administración, figura jurídica que, aun no teniendo naturaleza contractual, ha estado tradicionalmente regulada en la normativa contractual, (así, ya en la Ley de Contratos del Estado se regulaba la ejecución de obras por la propia Administración en sus artículos 60 y 61), tiene como principal característica que la ejecución de la obra, fabricación del bien o prestación del servicio es asumida directamente por la Administración, es decir, por sus propias estructuras o servicios con sus propios medios materiales y personales.

Tradicionalmente la utilización de esta figura jurídica afectaba fundamentalmente a casos de ejecución de trabajos por órganos o dependencias especiales no personificadas de la propia Administración. Sin embargo, esta situación ha ido evolucionando y hoy está consagrada y admitida la utilización de esta figura para realizar encargos a entes con personalidad jurídica distinta de la administración encomendarte. Un caso paradigmático lo encontramos en la creación de sociedades mercantiles que, aun teniendo personalidad jurídica propia, son calificadas por el legislador como medios propios instrumentales, de forma que su actuación se fundamenta en un encargo que la Administración le realiza para la ejecución de un determinado trabajo, trabajo cuya ejecución no acepta voluntariamente el ente instrumental sino que ha de ejecutar obligatoriamente. Vemos, por tanto, un gran paralelismo entre la esencia de la figura jurídica de "la ejecución de trabajos por la propia administración" y la de los supuestos de "in house providing", hasta el punto de poder afirmarse que estos últimos no son más que una categoría de aquellos, en el sentido de que los supuestos de "in house providing" se producirán cuando a los medios y estructuras con los que cuenta la Administración para ejecutar un determinado trabajo se les dota de personalidad jurídica, pero la Administración sigue teniendo sobre dicha persona un control efectivo análogo al que tiene sobre sus propios servicios y aquella realiza la mayor parte de su actividad para la administración de quien depende. En este sentido, este Centro ya se ha pronunciado en anteriores informes (14 de julio de 1999, 5 de febrero de 2001, entre otros) sobre la calificación de las relaciones de TRAGSA con la Administración General del Estado como de ejecución de trabajos por la propia Administración.

En consecuencia, a juicio de este Centro Fiscal, a las encomiendas de gestión a que se refiere el artículo 3.1 l) del TRLCAP, les será de aplicación, además de, en su caso, su normativa específica, las normas que sobre la ejecución de trabajos por la propia Administración se recogen en el citado texto refundido y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que resulten compatibles con la jurisprudencia comunitaria. Asimismo, y desde un punto de vista formal, les será de aplicación, de conformidad con la instrucción 2/2005 de la Abogacía General del Estado las normas que sobre la encomienda de gestión se establecen en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En concreto, en relación con el régimen jurídico aplicable a las encomiendas de gestión, se plantea la cuestión de cuál es el órgano competente para realizar dicho encargo.

A este respecto, y salvo lo que pudiera señalar la normativa específica que, en su caso, exista, de conformidad con los artículos 153 y 195 del texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, la competencia corresponderá al órgano competente para la aprobación del gasto.

Al hilo de lo anterior se cuestiona necesidad de que las relaciones jurídicas que se instrumenten a través de encomiendas de gestión se eleven a la autorización del Consejo de Ministros en virtud de lo dispuesto en el artículo 74.5 de la Ley General Presupuestaria, en tanto en cuanto la reforma operada por el Real Decreto Ley 2/2005 en el texto refundido de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, en particular el apartado c) y l) del citado precepto, ha tenido como efecto la exclusión del universo de los convenios de colaboración de determinadas relaciones jurídicas, en concreto aquellas que ahora deben instrumentarse o bien como contratos o bien como encomiendas de gestión.

El citado precepto dispone "Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de convenios de colaboración o

contratos-programas con otras Administraciones públicas o con entidades públicas o privadas necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el gasto que de ellos se derive sea de cuantía indeterminada o haya de extenderse a ejercicios posteriores.

Con carácter previo a la suscripción se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones a adquirir y, en caso de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución de anualidades".

En este sentido, habida cuenta que las encomiendas de gestión no pueden ser calificadas como convenios de colaboración de los previstos en las letras c) y d) del artículo 3.1 del TRLCAP, tal y como expresamente establece la Abogacía General del Estado en la ya citada Instrucción 2/2005, a juicio de esta Intervención General el órgano competente para acordar la encomienda no precisará la autorización de Consejo de Ministros prevista en el artículo 74.5 de la Ley General Presupuestaria

Tal enfoque que, en definitiva, consiste en aplicar la disciplina de los convenios de colaboración únicamente a aquellos acuerdos de voluntades que, además de tener tal denominación, no tienen encaje en otras figuras jurídicas, concuerda, por otra parte, con el enfoque que se desprende del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2002, sobre fiscalización e intervención previa de requisitos básicos.

Así, el apartado decimotercero, partiendo de la distinción entre los convenios del artículo 3.1c) y del artículo 3.1d) del TRLCAP, remite a las comprobaciones propias de los negocios jurídicos con naturaleza específica Contratos, subvenciones- cuando los convenios, aún con tal denominación, encierran esos otros negocios, lo cual da a entender que la categoría convenio de colaboración se diseña con un carácter residual.

Lo anteriormente expuesto permite responder a la última de las cuestiones planteadas en los escritos de consulta y que es la relativa al régimen de fiscalización de los acuerdos de la encomienda de gestión.

A este respecto, el artículo 152 de la Ley General Presupuestaria determina en su apartado primero que, para ciertos tipos de gasto que determina el Gobierno a propuesta de la IGEA, el régimen de fiscalización e intervención previa será el de requisitos básicos, sin perjuicio de lo señalado por su apartado segundo. Para los restantes tipos de gasto, el régimen de fiscalización e intervención previa será el general.

Habrá de acudirse, por tanto, al vigente Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2002, antes citado, que no contempla como tipo de gasto sujeto al régimen de requisitos básicos el derivado de las encomiendas de gestión previstas en el artículo 3.1 l) del TRLCAP como tales, puesto que es una denominación que, al menos con el alcance que se le ha dotado, resulta novedosa en nuestra legislación. Sin embargo, y como se ha señalado anteriormente, esta Intervención General considera que dichas encomiendas de gestión, al configurarse como supuestos de "in house providing", ya estaban contempladas en la legislación española bajo la denominación de ejecución de trabajos por la propia Administración.

En este sentido, el apartado undécimo del citado Acuerdo de Consejo de ministros se refiere a la ejecución de obras, fabricación de bienes y prestación de servicios por la propia Administración, por lo que las encomiendas de gestión deberán someterse a la fiscalización e intervención previa de acuerdo con lo establecido en este apartado.

Así pues, en relación con cualquier expediente relacionado con una encomienda de gestión, la Intervención correspondiente deberá verificar los extremos generales previstos en el artículo 152 de la LGP y en los apartados primero y segundo del Acuerdo, así como los extremos adicionales que el apartado undécimo haya podido prever. Este apartado prevé únicamente la verificación de extremos adicionales en los expedientes de aprobación y compromiso del gasto derivados del encargo y en los de reconocimiento de la obligación derivada de los abonos durante la ejecución de los trabajos o de la liquidación.

En consecuencia, y en relación con la cuestión planteada acerca del régimen de fiscalización e intervención previa de las modificaciones y prórrogas de las

encomiendas de gestión, debe concluirse que, puesto que el Acuerdo no prevé ningún extremo adicional a verificar al respecto, deberán comprobarse únicamente los extremos previstos en los apartados primero y segundo.

IV.-

A continuación, y teniendo en cuenta lo que con carácter general se ha expuesto en los apartados anteriores, procede analizar los dos expedientes concretos para determinar si pueden instrumentarse a través de una encomienda de gestión.

El primero de ellos afecta a la suscripción de un convenio para la prestación de servicios postales y telegráficos por parte de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

En relación con el mismo conviene destacar que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, se ha pronunciado en su informe 71/05, de 10 de noviembre de 2005, sobre la posibilidad de que tras la promulgación del Real Decreto Ley 5/2005, de 1 de marzo, la sociedad estatal "Correos y Telégrafos, SA" continúe celebrando convenios de colaboración con las Administraciones Públicas con el objeto de prestar a las mismas servicios postales, estableciendo en la conclusión de dicho informe que "Tras la reforma del artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio) operada por el Real Decreto Ley 5/2005, subsiste la posibilidad de que la sociedad estatal "Correos y Telégrafos, SA" siga celebrando con las Administraciones Públicas los convenios de colaboración a que se refiere el artículo 58 de la Ley 14/2000 para la prestación de todos los servicios relacionados con su objeto social que le encomienden y que deba asumir obligatoriamente de acuerdo con su objeto social, quedando tales convenios de colaboración excluidos del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de acuerdo con la letra d) del artículo 3.1 del mismo, no modificado por el citado real Decreto Ley 5/2005, y sin que sea de aplicación a los mismos la exclusión prevista en la nueva letra l) que la citada reforma legislativa ha introducido en aquel artículo."

Considera la Abogacía General del Estado que "siendo Correos una sociedad instrumental de la Administración del Estado cuyas relaciones con ésta no son contractuales, sino instrumentales, por razón del servicio público cuya prestación tiene legalmente encomendado, las mismas razones abonan la configuración como instrumentales, de las relaciones jurídicas que mantiene Correos con la propia Administración del Estado y las demás Administraciones Públicas a las que presta obligatoriamente los servicios que le encomienden relacionados con su objeto social también por imperativo legal. Esta obligatoriedad excluye, (...) el carácter contractual de la relación y, por ello, la aplicación del TRLCAP, a lo que se suma la exclusividad de las condiciones de prestación por Correos de los servicios necesarios para la práctica de las notificaciones administrativas, (...) exclusividad que determina la imposibilidad de que otros operadores presten los mismos servicios en idénticas condiciones y excluye, en consecuencia, la aplicación del TRLCAP (...). En definitiva, al no tratarse de una relación contractual ni, aunque lo fuera, ser susceptible de adjudicación en concurrencia por no poder estar el objeto comprendido en el de un contrato administrativo, la prestación por Correos a las Administraciones Públicas de los servicios que le encomienden relacionados con su objeto social puede y debe articularse a través de los convenios de colaboración a que se refiere el artículo 58 de la Ley 14/2000, que quedan excluidos del ámbito de aplicación del TRLCAP de conformidad con el apartado 1, letra d) del artículo 3 del mismo a que se remite aquel precepto, y sin que sea aplicable la nueva letra l) introducida en este artículo por el Real Decreto-Ley 5/2005."

En consecuencia, a la vista de la anterior conclusión, que este Centro asume, el convenio para la prestación de servicios postales y telegráficos por parte de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. referido en la consulta de la Intervención Delegada en el Ministerio de Medio Ambiente, deberá articularse como un convenio de colaboración excluido del TRLCAP y no como encomienda de gestión.

El segundo expediente concreto que plantea el escrito de consulta es el relativo a la celebración de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (MÍA), organismo público de

investigación con el carácter de organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia.

La cláusula primera del citado convenio dispone que su objeto "es la realización de un estudio para determinar los efectos del glifosato empleado en el cultivo del maíz transgénico en la flora adventicia y ruderal y en los artrópodos relacionados con el cultivo", siendo responsable de la realización del proyecto, conforme a la cláusula segunda del convenio, el INIA, y correspondiendo el pago de las actuaciones realizadas por el Organismo Autónomo a la Dirección General. Por tanto, el objeto de este convenio sería de naturaleza contractual, en particular equiparable al contenido de la prestación de un contrato de consultoría y asistencia, previsto en el artículo 196.2 de la CAP.

Por su parte, de conformidad con la cláusula tercera del proyecto de convenio, la contribución de la Dirección General comprende una serie de pagos al INIA cuyo importe total asciende a 632.132 euros.

Así pues, teniendo en cuenta que esta cuantía supera las establecidas por el artículo 203.2 del TRLCAP, si el objeto del convenio se corresponde efectivamente con el de un contrato de consultoría y asistencia, el Ministerio no puede suscribir un convenio de colaboración de estas características con el INIA al amparo del artículo 3.1 c) del TRLCAP.

Procede analizar si la anterior relación jurídica podría instrumentarse a través de una encomienda de gestión de las previstas en la letra l) del artículo 3.1 del TRLCAP, o lo que es lo mismo, determinar si el INIA, puede ser considerado como un supuesto de "in house providing" por concurrir en el mismo los dos requisitos que para ello exige la jurisprudencia comunitaria, esto es, si la Administración General del Estado ejerce sobre el MÍA un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y que el INIA realice la parte esencial de su actividad con la Administración General del Estado.

En relación al primero de los requisitos, conviene destacar que el INIA es un organismo público de investigación con el carácter de organismo autónomo,

siéndole, por tanto, de aplicación lo que respecto al objeto, fines y control de los organismos públicos y, en concreto, de los organismos autónomos, establece la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE en adelante).

A este respecto, el artículo 1 de la LOFAGE establece "Los Organismos públicos son las Entidades de derecho público que desarrollan actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta". Por su parte, el artículo 2.3 de la citada Ley dispone "Los Organismos públicos previstos en el Título III de esta Ley tienen por objeto la realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración General del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo público, al Ministerio competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine". Asimismo, el artículo 41 establece "Son Organismos públicos los creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del Estado, para la realización de cualquiera de las actividades previstas en el apartado 3 del artículo 2, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional". Todos estos preceptos declaran con carácter general, la dependencia, o lo que es lo mismo, el control que sobre estas entidades ejerce la Administración General del Estado, control cuyas manifestaciones o concreciones aparecen previstas en otros preceptos de la Ley. Así, y a modo de ejemplo en relación con los Organismos Autónomos, podría citarse como manifestaciones concretas del control efectivo que sobre los mismos ejerce la Administración General del Estado las siguientes:

- La dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad corresponden al Ministerio al que están adscritos (artículo 43.2 de la LOFAGE). En el caso del INIA, de acuerdo con el artículo 1 de sus estatutos, aprobados por Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, está adscrito actualmente al Ministerio de Educación y Ciencia al que corresponde su dirección estratégica, evaluación y el control de los resultados de su actividad.

- Por otra parte, el artículo 51 de la LOFAGE determina que "Los Organismos autónomos están sometidos al control de eficacia, que será ejercido por el Ministerio al que estén adscritos, sin perjuicio del control establecido al respecto por la Ley General Presupuestaria. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados".

- Finalmente, debe destacarse que, de conformidad con lo prevenido en los artículos 4 a 12 de los estatutos del INIA, sus órganos de gobierno son ocupados o por personas que desempeñan determinados cargos en la Administración General del Estado o bien son designados por éstas.

Todo lo anterior acredita, a juicio de esta Intervención General, la concurrencia del requisito del "control efectivo" de la Administración General del Estado sobre el INIA.

Por su parte, el segundo de los requisitos que ha de concurrir para que pueda darse el supuesto de la encomienda de gestión es que la entidad encomendada realice la parte esencial de su actividad con la entidad encomendarte.

En este sentido, para determinar si se puede considerar que el INIA realiza la parte esencial de su actividad con el ente encomendarte (la Administración General del Estado), debe acudirse con carácter previo a la definición sus funciones contenida en el artículo 3 de los Estatutos:

Son funciones del INIA las siguientes:

a) Gestionar y ejecutar las competencias de la Administración General del Estado en el área de investigación científica e innovación tecnológica en materia agraria y alimentaria, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

b) Representar al Departamento ante los órganos y organismos de carácter científico y tecnológico de ámbito nacional e internacional en materia de investigación agraria y alimentaria, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica y del Ministerio de Asuntos Exteriores.

c) Impulsar la cooperación nacional e internacional en el área de investigación agraria y alimentaria, en particular con las Comunidades Autónomas, a través de la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria, y sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.

d) Elaborar, coordinar y gestionar las acciones estratégicas que le correspondan, en relación con el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, de acuerdo con las directrices formuladas por la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.
e) Ejercer aquellas otras competencias que legalmente tenga atribuidas.

De la enumeración de las anteriores funciones se desprende que la actuación del INIA va dirigida a cumplir funciones que, de no existir, corresponderían a la Administración General del Estado, con lo cual, puede afirmarse que es ésta la destinataria de su actividad por lo que el convenio planteado, en tanto que referido al área de investigación científica e innovación tecnológica en materia agraria y alimentaria, debe considerarse, al concurrir también el requisito del control efectivo, reconducible al supuesto de encomienda de gestión, para lo cual será necesario el cumplimiento de los trámites referidos en el considerando tercero del presente escrito.

INFORME 47/06 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA), DE 11 DE DICIEMBRE DE 2006, SOBRE APLICACIÓN DE LA REVISIÓN DE PRECIOS EN CONTRATOS DE DURACIÓN INICIAL INFERIOR A UN AÑO CUANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN RESULTA SUPERIOR.

ANTECEDENTES

Por el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias se dirige a esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa el siguiente escrito de solicitud de informe.

«En aplicación del artículo 1.7 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se solicita informe sobre la cuestión que se expone a continuación.

Esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias celebra contratos de obras en los que, al estar previsto un plazo de ejecución inferior a doce meses, no se incluye la fórmula polinómica de revisión de precios en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En concreto, en los pliegos tipo estos, contratos se señala que "Para la revisión de precios se estará a lo indicado en el apartado G del cuadro resumen de características del contrato. En el caso de que se haya optado por la no inclusión de la citada cláusula se establecerá en resolución motivada la improcedencia de la misma. La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de acuerdo con le previsto en el artículo 103.1 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y concordantes de su Reglamento. Sólo en este caso será de aplicación la fórmula, o. fórmulas, tipo que se indique en el apartado G del cuadro resumen de características del contrato.

La cuestión se plantea respecto de contratos cuyos pliegos no contemplan la referida fórmula polinómica de revisión de precios en el cuadro resumen de características del contrato, pues el plazo inicial de ejecución previsto no superaba doce meses y que por causas no imputables al contratista han superado el plazo previsto.

Por ello, se solicita a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa informe sobre si los contratos en los que no se contempla fórmula polinómica de revisión de precios en el pliego de cláusulas administrativas particulares debido únicamente a la previsión inicial de que el plazo de ejecución no alcanzaba el plazo fijado en la Ley para proceder a la revisión de precios, sin que exista resolución motivada que acuerde su exclusión y que han superado el año desde su adjudicación, por causa no imputable al contratista, puede ser aplicada la revisión de precios una vez asimismo haya sido ejecutado el veinte por ciento de su importe.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Aunque la remisión de datos a esta Junta Consultiva resulta incompleta, dado que no se remite el pliego, ni el cuadro resumen de las características del contrato y, sobre todo, no se precisa la causa que determina la superación del año en la ejecución, limitándose a afirmar el escrito de consulta que lo ha sido "por causa no imputable al contratista" hay que intentar resolver la cuestión planteada a la vista de los preceptos de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y de las circunstancias detalladas en el escrito de consulta para, a continuación, por simple conjetura, apuntar otras soluciones que pueden desprenderse de los datos omitidos.

2. Prescindiendo de antecedentes más o menos remotos la revisión de precios aparece hoy regulada en los artículos 103 a 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los artículos 104 a 106 de su Reglamento de cuyos preceptos se deducen, para los contratos de obras que son los que ahora interesan, los siguientes requisitos para que tenga lugar la revisión de precios:

En primer lugar que el contrato tenga una duración superior a un año, dado que el artículo
103 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas determina que el primer año de ejecución no puede ser objeto de revisión y, en segundo lugar, tratándose de contratos de obras, que la fórmula de revisión de las aprobadas por el Consejo de Ministros, sea detallada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pues así resulta de los artículos 103.3 y 104.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 104.1 de su Reglamento.

En el presente caso no concurre ninguno de los requisitos reseñados porque en el momento de elaboración de pliegos y adjudicación del contrato la duración prevista es inferior a un año y, en consecuencia, no se incluye en los pliegos formula alguna de revisión, según manifestaciones vertidas en el propio escrito de consulta.

La primera conclusión que debe ser mantenida, por tanto es la de que en los contratos de
obra pactados por plazo inferior a un año no es posible aplicar la revisión de precios por impedirlo el artículo 103.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y al no haberse incluido en los pliegos la fórmula adecuada para la práctica de dicha revisión.

3. La conclusión anterior tiene que ser objeto de alguna aclaración o matización derivada del hecho de que el contrato, por causa no inmutable al contratista, tiene una duración superior al año, lo cual puede ser debido a múltiples circunstancias imputables a la Administración o acaso fortuito o fuerza mayor, ya que lo único que se expresa en el escrito de consulta es que la causa de la mayor duración no es imputable al contratista.

Sin poder entrar en detalle en el examen de las variadas circunstancias que pueden concurrir si puede afirmarse que las mismas pueden agruparse en dos grandes categorías - fuerza mayor o causa imputable a la Administración - lo que determinará la obligación de indemnizar al contratista o proceder a la resolución o modificación del contrato con los peculiares efectos previstos en la legislación de contratos de las

Administraciones Públicas para cada situación que nunca alcanzan a la práctica de la revisión de precios en el sentido examinado.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que en los contratos de obras a que se refiere la consulta no procede la práctica de revisión de precios por ser su duración inferior al año y no haberse determinado la fórmula de revisión aplicable, sin perjuicio de que las circunstancias determinantes de la duración superior (fuerza mayor, incumplimiento de la Administración, modificación o resolución del contrato) puedan producir efectos similares pero distintos a los de la revisión de precios.

IV.2.2.- CONTRATOS DE OBRAS

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, DE 5 DE MAYO DE 2006, SOBRE DETERMINADAS CUESTIONES SURGIDAS EN RELACIÓN CON EL APARTADO CUARTO DEL ARTº 146 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Se ha recibido en esta Intervención General su escrito por el que formula consulta sobre determinadas cuestiones surgidas en relación con el apartado cuarto del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

ANTECEDENTES

El apartado 4 del artículo 146 del TRLCAP prevé que el titular del Departamento Ministerial acuerde la continuación provisional de la ejecución de las obras objeto de la tramitación de un modificado cuando dicha tramitación exija la suspensión temporal parcial o total de las mismas y ello ocasione graves perjuicios para el interés público

Tal y como cita en su escrito de consulta la Intervención Delegada en el Ministerio de Medio Ambiente, la citada norma ha sido objeto de interpretación en diversos informes emitidos tanto por este Centro directivo (Informe de 8 de marzo de 2002) como por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Informes 8/98 y 49/01), en particular referidos a la exigencia de que estos expedientes sean informados por el Servicio Jurídico correspondiente, tal y como establece la Ley para las modificaciones de los contratos en general. En dichos informes se ha distinguido en la tramitación de estos expedientes dos fases:

- Una primera fase de autorización por el Ministro de la continuación provisional de las obras, en la que deberán cumplimentarse únicamente las actuaciones previstas expresamente en el artículo 146.4 del TRLCAP a estos efectos;

- una segunda fase, de aprobación del expediente del modificado, que tendrá lugar en el plazo máximo de ocho meses, en la que deberán incorporarse todos los documentos propios del mismo.

En relación con la tramitación descrita contemplada en el artículo 146.4, la Intervención Delegada formula algunas dudas relativas a la fiscalización de estos expedientes.

1º) En primer lugar, se cuestiona el momento en que debe ser ejercida la función interventora, puesto que se han diferenciado las dos fases a las que hemos aludido anteriormente.

La cuestión no ofrece duda alguna en cuanto a que la denominada segunda fase deba ser objeto de fiscalización, puesto que, de acuerdo con el criterio establecido en los Informes citados uno de los extremos a fiscalizar en esta fase será la existencia del preceptivo informe del servicio jurídico.

No queda claro, sin embargo, si además debería verificarse por la Intervención Delegada de alguna forma la concurrencia de los requisitos establecidos en la primera fase. En particular se argumenta:

"Si bien es cierto que la autorización del Ministro se soporta en aspectos de carácter eminentemente técnicos, cabría considerar la conveniencia de que se emitiera un informe de la intervención relativo a ciertos aspectos de la modificación de trascendencia económica.

Merecería especialmente la pena considerar dos circunstancias a este respecto, por un lado la existencia en la primera fase de una autorización del Ministro que se entiende, a salvo del criterio de la Intervención General, que implicaría autorización de gasto requiriendo retención previa y, por otro lado, el establecimiento de una limitación cuantitativa a la autorización inicial de continuación en la ejecución de las obras, el 20% como importe máximo del modificado en relación con el precio primitivo del contrato".

2º) Asimismo se cuestionan los efectos que pudieran derivarse del incumplimiento del plazo de ocho meses contemplado en el artículo 146.4 del TRLCAP en cuanto a la tramitación del expediente de modificado.

En opinión de la Intervención Delegada cabrían dos posibilidades:

- Una primera posibilidad supondría considerar que, transcurrido el plazo de ocho meses sin que el expediente se hubiera completado y, consecuentemente, este haya sido fiscalizado, cabría iniciar el procedimiento de convalidación establecido en el artículo 32 del RD 2188/1995

- Una segunda posibilidad sería la de considerar que la convalidación sólo procedería con respecto a aquellas actuaciones que se realicen con posterioridad al transcurso de los ocho meses y antes de que se apruebe el modificado. Por el contrario, sería admisible la tramitación de pagos referidos a obra ejecutada dentro del período de los ocho meses.

A la vista de las consideraciones efectuadas, se plantean ante esta Intervención General las siguientes

CUESTIONES

1. Momento en que debe efectuarse la fiscalización de los expedientes de modificado tramitados al amparo del artículo 146.4 del TRLCAP.

2. Efectos que deben atribuirse al incumplimiento del plazo de ocho meses para la tramitación y aprobación de los expedientes de modificado a los que nos venimos refiriendo previsto en la norma.

A efectos de resolver las cuestiones planteadas se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

I.

El artículo 146 del TRLCAP regula la modificación del contrato de obras, contemplando en su apartado 4 un supuesto específico en el que se permite acordar la continuación provisional de las obras durante la tramitación del modificado en los siguientes términos:

"4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasiones graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El expediente a tramitar al efecto exigirá exclusivamente las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figurará el importe aproximado de la modificación, así como la descripción básica de las obras a efectuar.

b) Audiencia del contratista.

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto y en el de ocho meses el expediente del modificado

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas en el contrato, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La autorización del Ministro para iniciar

provisionalmente las obras, que no podrá ser objeto de delegación, implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto."

En relación con la interpretación de este precepto se pronunció la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su dictamen 8/98, de 11 de junio de 1998. A la vista de los criterios expuestos por el citado órgano consultivo y con la finalidad de precisar diversas cuestiones planteadas en dicho pronunciamiento, esta Intervención General remitió, con fecha 20 de noviembre de 2002, consulta a dicho órgano manifestando su criterio al respecto y solicitando su parecer.

En el citado escrito remitido, esta Intervención General distingue dos fases o momentos en la tramitación de tales modificaciones, como queda expuesto en los antecedentes a los que nos remitimos. Asimismo se ponen de manifiesto los siguientes criterios: "Como se señala en el propio artículo 146.4, en un primer momento, en el que se autoriza la continuación provisional de las obras, no es necesario cumplimentar sino los trámites que específicamente se señalan y entre los que no figura el informe del Servicio Jurídico. Sin embargo, dado que se establece la necesidad posterior de aprobar técnicamente el proyecto y el propio expediente modificado dentro de los plazos a tal efecto previstos, en una segunda fase debe ser completado el expediente tanto técnico como económico con los requisitos generales propios de los mismos (proyecto, supervisión, replanteo, informe del servicio jurídico...); necesidad que parece corroborar asimismo la posibilidad a que hace referencia expresamente el artículo 146.4 en su último inciso de que deban realizarse ajustes en el momento de aprobar el expediente respecto de las previsiones contenidas inicialmente en la propuesta técnica, donde figura un "importe aproximado de la modificación" y una "descripción básica de las obras a realizar". Así, hasta que no se completa y se aprueba el expediente del modificado se estaría actuando conforme a unas actuaciones previas provisionales.

En tal sentido, la identificación del expediente del modificado exclusivamente con las actuaciones del expediente inicial (propuesta técnica motivada, audiencia del

contratista, conformidad del órgano de contratación y certificado de existencia de crédito), privaría de sentido el diferimiento de la aprobación del expediente del modificado al plazo de ocho meses, pues en tal caso realmente parece que ya se habría producido la aprobación del expediente por el Ministro en el momento de autorizar la continuación provisional de las obras. Dicha identificación haría incluso cuestionable la utilidad de tal aprobación del proyecto una vez que el expediente de modificado "simplificado" se hubiese aprobado por el Ministro."

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 49/01, de 30 de enero de 2002, expresamente se pronuncia en cuanto a que comparte el criterio reproducido expuesto por la Intervención General respecto a la interpretación del artículo 146.4.

Por tanto, la primera cuestión planteada ya ha sido resuelta por este Centro en dicha consulta al manifestar que en la primera fase sólo se cumplimentan los trámites que se señalan específicamente en el primer párrafo del artículo 146.4 del TRLCAP.

Ello es así en la medida en que en esa primera fase no existe un proyecto en torno al cual pueda tramitarse un expediente de gasto. En efecto, los expedientes de gasto de contratos de obras y, por tanto su fiscalización, aparecen siempre vinculados al proyecto cuya aprobación se pretende. Es por ello que los expedientes de modificación de obras de "saldo cero" o incluso de "saldo negativo", son objeto de fiscalización, puesto que en ellos se produce una modificación o cambio del proyecto que en su día, y como parte integrante del expediente administrativo del contrato de obras y fundamento del gasto, se fiscalizó. Así ha tenido ocasión de manifestarse esta Intervención General en su informe de fecha 15 de diciembre de 2003, en el que estableció "De estos preceptos se deduce que la modificación de un contrato, al suponer la alteración de las condiciones en que se producirá la prestación del contratista, supone igualmente la alteración de los actos administrativos de contenido económico que hubieron de ser fiscalizados en su día con motivo de la autorización del gasto; por tanto, aunque la modificación no implique aumento del gasto, o incluso suponga una disminución del mismo, deberá constituir igualmente objeto de fiscalización previa su aprobación.

De este modo, la fiscalización previa en el ámbito de las modificaciones contractuales no se limita a examinar el adicional de gasto al que eventualmente pueda darse lugar, sino que se extiende a la totalidad del gasto, que difiere del gasto originario fiscalizado en la medida en que se pretende modificar la prestación a cargo del contratista.", prestación ésta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del TRLCAP viene definida en los contratos de obras en el proyecto.

En relación con lo anteriormente expuesto, esto es la falta de un proyecto de obras en la primera de las fases de este tipo de modificado y su aprobación en la segunda, debe destacarse la diferencia entre las expresiones "aprobación del gasto" que conlleva la autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras y que tiene lugar en la primera fase y "aprobación del expediente de gasto" que tiene lugar en la segunda fase, lo que da a entender que las actuaciones de control ligadas siempre a la formalización de un expediente de gasto se difieren a un momento posterior.

Así debe considerarse dado que el expediente tramitado en la primera fase es, por una parte, un expediente provisional, sujeto por tanto a ajustes y, por otra, sumario, en el que se prescinde de trámites que, aún de evidente importancia desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero (carece, entre otros aspectos, de proyecto, fiscalización previa e informe del servicio jurídico), pueden demorar la actuación inmediata que se requiere por razones de interés público.

Situación similar se produce en los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia contemplados en el artículo 72 del TRLCAP, en los que razones de interés público habilitan al órgano de contratación para ordenar, sin obligación de tramitar expediente administrativo, la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido, sin que se lleve a cabo, por tanto, la fiscalización del expediente administrativo de contratación vinculado al gasto que en ese momento se aprueba. Cabe recordar que, aunque el referido artículo 72 no se pronuncia expresamente sobre la aprobación del gasto por el órgano de contratación, este Centro directivo en informe de 11 de diciembre de 1995 sobre la interpretación del apartado c) del artículo 73 del la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, cuya redacción coincide con la del actual artículo 72.1 c) del TRLCAP ya

señaló que "la aprobación del gasto... se realizó por el órgano de contratación de manera verbal al acordar la contratación". En consecuencia, en el momento en que el órgano de contratación ordena ejecutar lo necesario en la tramitación de emergencia, se está aprobando el gasto sin la correspondiente fiscalización previa, del mismo modo que, en el supuesto planteado del artículo 146.4, la autorización del Ministro para continuar provisionalmente las obras, implicando una aprobación del gasto, no se fiscaliza previamente en ese momento.

II.

En segundo lugar se plantea la cuestión relativa a la determinación de los efectos del incumplimiento del plazo fijado por la Ley para la tramitación de estos expedientes.

A este respecto, cabe señalar que el supuesto previsto en el artículo 146.4 no es sino un caso de modificación contractual que presenta cierta especialidad, la cual se concreta en la concesión de un plazo de ocho meses para llevar a cabo la tramitación del expediente de modificado, permitiendo que durante ese plazo continúe la ejecución de las obras. Ello supone que, al postponerse la tramitación del expediente, se postpone también la fiscalización del gasto que conlleva, si bien condicionado al plazo de los ocho meses que se concede para ello. Agotado ese plazo, si el expediente no se hubiera concluido y, por tanto, no se hubiera ejercido la función interventora, se produciría una omisión de la fiscalización que exigiría la correspondiente convalidación. En este sentido debe precisarse que el objeto del expediente que se tramita es la modificación en su conjunto y en modo alguno cabría entenderlo referido únicamente a las actuaciones que vayan a tener lugar con posterioridad al transcurso de los ocho meses. De ello se desprende que si la fiscalización debe comprender, como se ha señalado, la totalidad del gasto que implica la modificación y se ha omitido, la omisión hay que entenderla referida respecto del total y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria, procedería la convalidación respecto de la totalidad del gasto efectuado.

Cabe recordar que resulta similar la situación regulada en el artículo 160 del Reglamento de la Ley que contempla los denominados "adicionales de obra". En efecto, este precepto establece la posibilidad de que se introduzcan variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas sin previa aprobación cuando consistan en "la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato". Estas variaciones serán recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales o bien en la certificación final, procediendo la fiscalización de conformidad en tanto no se supere el porcentaje señalado. Superado este porcentaje, será necesaria la convalidación por el Consejo de Ministros del total de gasto correspondiente al adicional de obra, por entenderse que al superarse el 10 % del precio primitivo del contrato nos encontramos ante un modificado del contrato de obras que no se ha tramitado con arreglo al procedimiento legalmente establecido y que, en consecuencia, no ha sido objeto de la preceptiva fiscalización previa. Tanto en este supuesto como en el contemplado en el artículo 146.4 del TRLCAP se trata de modificaciones que se tramitan al margen del procedimiento general, sujetas en ambos caso a unos límites concretos. El matiz diferencial entre ambos casos viene determinado por la naturaleza del límite que opera en cada supuesto: cuantitativo en el supuesto previsto en el artículo 160 del Reglamento y temporal en el del artículo 146.4 del TRLCAP, pero en ambos casos, sobrepasados los límites que para la "tramitación especial" del modificado establece la normativa, serán de aplicación las normas generales relativas a los modificados, cuyo incumplimiento motiva la necesidad de emitir el informe del artículo 156 de la Ley General Presupuestaria con la extensión arriba determinada.

Efectuadas las anteriores consideraciones, esta Intervención General concreta su parecer en las siguientes

CONCLUSIONES

1ª) Los expedientes de modificación de los contratos de obras tramitados al amparo de lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCAP serán fiscalizados en la fase correspondiente a la aprobación del expediente de modificado y del expediente de

gasto, no estando sujeta a fiscalización la fase de autorización de la continuación provisional de las obras por el Ministro.

2ª) Si transcurrido el plazo previsto en la norma citada no se hubiera concluido la tramitación del expediente de modificado, se entiende omitida la función interventora, por lo que procedería la convalidación de la totalidad del gasto efectuado, tanto el realizado en el periodo de ocho meses como el realizado con posterioridad.

INFORME 16/06 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA), DE 30 DE OCTUBRE DE 2006, SOBRE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 160.1 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN CUANTO A SU APLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LAS MEDICIONES.

ANTECEDENTES

Por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Arges (Toledo) se dirige a esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa:

«Durante la realización de obras en ejecución de los diversos contratos de obra adjudicados se vienen produciendo desviaciones respecto a las mediciones de las unidades de obra, existiendo dos opiniones fundadas por parte de los Técnicos Municipales respecto a la necesidad de tramitar una modificación del contrato. Ante lo controvertido de las cuestiones parece conveniente elevar consulta al órgano que usted preside.

La interpretación que nos parece más acertada es la que mantiene que en aplicación del artículo 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP) - que literalmente establece que "sólo podrán introducirse variaciones sin previa aprobación cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido" para la aplicación de la exención de la necesidad de modificación del contrato sólo han de considerarse los excesos de medición, sin tener en cuenta en el cálculo del 10 % del precio los defectos de medición.

Como motivación adicional debemos referirnos tanto al artículo 160.2 del RGLCAP, en el que se determina la forma de tramitar las variaciones, estableciendo que "Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el límite previsto en el mismo, se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales, o ... en la certificación final", como al artículo 147 del RGLCAP que regula la forma en que se efectuará la "medición de las unidades de obra ejecutada", medición que sirve de base para la redacción de las relación valorada (artículo 145 del TRLCAP), y sobre cuya base se expedirá la certificación de obra, que, de conformidad con el artículo 145 del TRLCAP, comprende "la obra ejecutada".

Por tanto, de la literalidad de los anteriores preceptos parece desprenderse que la alteración del numero de unidades realmente ejecutadas únicamente debe entenderse referida a los excesos de medición, dado que son los únicos susceptibles de medirse, incluirse en las relaciones valoradas y certificarse, debiéndose tramitar las supresiones o reducciones de unidades por la vía de las modificaciones de contrato (artículo 146 del TRLCAP). Esto implica que para el cálculo del limite de las variaciones sin previa aprobación, y que se concreta en que el incremento del gasto no sea superior al del 10 por ciento del precio primitivo del contrato, se deberían tomar en consideración únicamente los excesos de medición, considerando las siguientes premisas:

1. En todo caso, habrán de ser referidos a la totalidad de las unidades que conforman el proyecto, calculándose de manera conjunta para todas las unidades que incluye el proyecto y no de manera independiente para cada una de ellas.

2. Únicamente se computan para el cálculo los excesos de medición sobre unidades de obra realmente ejecutada, sin que puedan compensarse los defectos de medición que se produzcan en otras unidades.

A la vista de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas respecto a las competencias que se le otorga a esa Junta Consultiva de Contratación Administrativa, y siguiendo las normas que se regulan en el artículo 17 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, de régimen orgánico y funcional de ese órgano

consultivo, se solicita a que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud, se tengan por formuladas las siguientes consultas, para que, tras los trámites oportunos, y en atención a lo expuesto, se dicte Informe sobre la interpretación adecuada del articulo 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre respecto a:

¿Las denominadas alteraciones en el número de unidades realmente ejecutadas únicamente hacen referencia a los excesos de medición, o deben entenderse referidas también a defectos de medición?.

¿Para el cálculo del limite del 10 % del gasto únicamente deben tomarse en consideración los excesos de medición producidos, o cabe la posibilidad de compensar excesos con defectos de medición en el cálculo de dicho límite?».

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Las cuestiones que se plantean en el presente expediente hacen referencia a la interpretación del artículo 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en concreto, y como primera cuestión, se plantea si lo previsto en el citado artículo es de aplicación únicamente a los denominados "excesos de medición", es decir, a la ejecución de más unidades de obra de las previstas en el proyecto, o si por el contrario, las previsiones de dicho artículo serían también de aplicación a los "defectos de medición" o los supuestos en los que el número de unidades realmente ejecutadas es inferior a las previstas en el proyecto.

En relación con lo anterior, conviene señalar que el citado artículo 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas bajo el título de "variaciones sobre las unidades de obras ejecutadas" declara que "solo podrán introducirse variaciones sin previa aprobación cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del

precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido".

Lo primero que resulta del examen del precepto es que el mismo se refiere a variaciones en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, lo cual implica tanto aumento como disminución en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto.

El único requisito que exige el reglamento para poder introducir estas variaciones sin necesidad de aprobación por el órgano competente y, por tanto, sin necesidad de tramitar el oportuno expediente administrativo, es que tales alteraciones no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato IVA excluido.
Es evidente que este último requisito negativo no puede darse en los supuestos de defectos de medición, lo que lleva a concluir que los mismos son aceptados por el reglamento sin someterlos a ninguna limitación, todo ello sin perjuicio del derecho de resolución del contrato que, en su caso, pueda ejercer el contratista de conformidad con lo previsto en el articulo 149 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas en el escrito de consulta sobre si cabe posibilidad de compensar excesos y defectos de medición a efectos del cómputo del limite del 10 por 100, entiende esta Junta Consultiva que no existe ningún impedimento para ello, puesto que el artículo 160 del RGLCAP se refiere a "variaciones" y no a aumentos o reducciones en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas de forma aislada. Por tanto, el límite del 10 por 100 ha de aplicarse sobre el saldo de dichos aumentos o reducciones, es decir teniendo en cuenta la variación total que se produce en el número de unidades ejecutadas.

CONCLUSIONES

Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, entiende que lo dispuesto en el artículo 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es de aplicación tanto al aumento como a las minoraciones en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas.

Por otro lado, la utilización del término "variaciones" en el ya citado artículo 160, implica la
posibilidad de compensar excesos en la ejecución de determinadas unidades de obra con defectos en la ejecución de otro tipo de unidades de obra sobre las realmente previstas, siendo el "exceso" o "defecto" de medición final aquel sobre el que se aplica el límite del 10 por 100 del precio primitivo del contrato.

IV.2.3.- CONTRATO DE SUMINISTROS

INFORME 7/2006, DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2006, SOBRE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO.

ANTECEDENTES

El Alcalde del Ayuntamiento de La Campana dirige escrito a esta Comisión Consultiva de Contratación Administrativa en petición de informe, con el siguiente contenido:

"En este Ayuntamiento se precisa la contratación de suministro de materiales de construcción para la ejecución de las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario o PFOEA, (antiguo PER). En años anteriores se ha redactado un pliego de condiciones administrativas particulares en el que, empleando el procedimiento abierto, tramitación urgente y la forma de concurso, se somete a licitación la entrega de una pluralidad de suministros sin que le pliego concrete las cantidades a suministrar ni el precio de la licitación, ya que no pueden concretarse de antemano las cantidades de material de obra que se van a necesitar, puesto que se trata de varias obras y no se ha redactado pliego de prescripciones técnicas en estos años. En este ejercicio, se ha informado por la Secretaría de la obligatoriedad de redactar el pliego de prescripciones técnicas que determina el precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado de las unidades a suministrar, aunque esta determinación reviste de gran complejidad para la oficina técnica por tratarse de varias obras que se ejecutan, por otra parte, a lo largo de dos ejercicios. Asimismo se ha informado por la Secretaría de la obligatoriedad de que conste en el expediente la certificación de existencia de crédito por el importe del contrato. Quisiera conocer su opinión al respecto y la forma más correcta de tramitar este expediente de contratación. Para mayor conocimiento se remite copia del pliego redactado en años anteriores".

INFORME

1.De los datos aportados se deduce que el contrato en cuestión es el típico de suministro a que se refiere el artículo 172.1 a) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, (TRLCAP), al disponer que son contratos de suministro, “Aquellos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración”.

Y sobre este tipo de contratos se plantean en el escrito de consulta varias cuestiones, sobre concreción de las cantidades a suministrar y precio, pliegos de prescripciones técnicas y certificado de existencia crédito.

En el artículo 11.2 del TRLCAP se contienen, entre otros, como requisitos para la celebración de los contratos, la determinación del objeto del contrato, la fijación del precio, la existencia de crédito adecuado y suficiente si del contrato se derivan obligaciones de contenido económico para la Administración, y la tramitación del expediente, al que se incorporarán los pliegos en los que la Administración establezca las cláusulas que han de regir el contrato a celebrar y el importe del presupuesto de gasto.

2. En relación con la concreción de las cantidades a suministrar y su precio, ha que destacar que lo que caracteriza a estos contratos es precisamente la existencia de un cierta incertidumbre en las unidades objeto del suministro, por eso el artículo 2.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RgLCAP), establece una excepción, para este tipo de contratos, cuando prohibe la celebración de contratos en los que la prestación del contratista esta condicionada a resoluciones o indicaciones administrativas posteriores a su celebración.

En íntima relación con las unidades a suministrar está el precio de estos contratos.

El Informe 3/2005, de 22 de julio, de esta Comisión Consultiva, sobre el límite máximo de gasto en los contratos de suministros previsto en el artículo 172.1 a), realizaba, entre otras, las siguientes consideraciones:

“Con respecto al precio de los contratos el artículo 14 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, (TRLCAP), dispone que “Los contratos tendrán siempre un precio cierto”.

En el ámbito del derecho administrativo de la contratación los contratos han de tener un precio cierto. Precio cierto no es precio fijo; no es lo mismo precio cierto que precio fijo, pues, con referencia a aquél, lo que ha dispuesto la legislación es la certeza de la concurrencia del precio, no sus contingencias. Cierto que el precio es susceptible de alteración, pero su alteración tiene sus propias reglas. (Consejo de Estado. Dictamen núm. 1409/1992, de 4 de marzo de 1993).

Ahora bien, no es que la cuantía o precio total del contrato no exista en el momento de la celebración del contrato, sino que es inexacto. Esta inexactitud en el precio total del contrato no libera a la Administración de hacer una previsión del mismo en función de las unidades que habrá de necesitar durante la vigencia del contrato, cuya justificación deberá constar en el expediente tal como pide el artículo 13 del TRLCAP en atención a su necesidad para los fines del servicio público correspondiente. En todo caso esta previsión no puede ser arbitraria ni contraria al principio de buena administración.

¿Pero esa inexactitud tiene límites?. El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RgLCAP), dispone en su artículo 67.5 c) que

los pliegos de cláusulas administrativas particulares contendrán en los contratos comprendidos en el artículo 172.1 a) de la Ley, el límite máximo del gasto que para la Administración pueda suponer el contrato, y en el artículo 71.6 b) exige que estos contratos contengan el importe máximo limitativo del compromiso económico de la Administración.

Conforme al artículo 3.1 del Código Civil, el sentido propio de las palabras utilizadas por la norma, “límite máximo” o “importe máximo limitativo”, pone de manifiesto una voluntad clara de poner a esa inexactitud un límite, siquiera en su tope máximo, cuya superación nos situaría en las modificaciones contractuales.

Por otra parte la incertidumbre en que se mueve el precepto que se viene analizando no se limita exclusivamente al número de unidades a suministrar y que incide sobre le precio total del contrato, sino también al momento, durante la vigencia del contrato, en que surge la necesidad para la Administración.

La fijación de ese precio total, aunque inexacto, no lo es indiferente al licitador. La economía de costes constituye uno de los elementos determinantes de la fijación de los precios que se manifestará en las ofertas presentadas, por lo que el precio total del contrato, aún aproximado, influirá en la fijación de los precios unitarios ofertados.

El precio unitario no es único elemento definitorio del contrato, también lo es el precio total del mismo, aunque insistimos en forma inexacta. De no ser así las peticiones ilimitadas de suministros por parte de la Administración conculcarían los principios básicos de publicidad y concurrencia.

La cuantificación de un precio total en estos contratos viene también confirmada por el artículo 189 del RgLCAP, dedicado a la cuantía de los contratos de suministros, conteniendo en su apartado b) las reglas para su determinación en los contratos que tengan carácter de regularidad, permitiendo optar entre realizar el cálculo en atención al valor real o al valor estimado.”

3. El artículo 13 del TRLCAP dispone que “El objeto de los contratos será determinado y su necesidad para los fines del servicio público correspondiente se justificará en el expediente de contratación.”

Es precisamente el pliego de prescripciones técnicas el documento al que se le confiere la tarea de precisar el objeto del contrato y la ejecución de la prestación.

El artículo 51.1 del TRLCAP dispone que “Serán elaborados con anterioridad a la autorización del gasto los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la ejecución de la prestación.”

IV.2.4.- CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 25 DE ABRIL DE 2006, SOBRE NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA UNIVERSIDAD A SU PROFESORADO PARA LA IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS O CESIÓN DE DERECHOS LIGADOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (en adelante CARL) por el que formula consulta sobre la necesidad o no de que los profesores universitarios soliciten autorización previa a la Universidad en la que prestan sus servicios para poder impartir una conferencia o para ceder los derechos económicos ligados a la propiedad intelectual (los derechos de autor de un artículo o libro, por ejemplo editado en papel o electrónicamente por el CARL, en su colección editorial o en su página web), de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2000, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU) y en los Estatutos de las distintas Universidades.

Según se expone en el citado escrito de consulta, de entre las actividades llevadas a cabo por dicho Consejo destacan las derivadas de la colaboración entre la Consejería de Empleo y las Universidades Andaluzas para el estudio de temas laborales de actualidad (jornadas, cursos ...). Es por ello que de manera habitual los profesores que imparten las conferencias en las jornadas sean, en su mayoría, profesores titulares o catedráticos de Universidades, especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. De igual modo, se realizan, desde hace años, una serie de publicaciones relativas al mundo de las relaciones laborales en general, cuyos autores son profesores universitarios expertos en la materia.

La Secretaría General del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales considera que, atendiendo a lo establecido en los artículos 68 y 83 de la LOU y en el artículo 19, letras f) y h) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, ni la impartición de conferencias o cursos de carácter profesional, ni la cesión de derechos de autor para una publicación, necesitan autorización del Rector correspondiente, al estar exceptuados del régimen de incompatibilidades.

Analizado el asunto objeto de la consulta esta Intervención General emite el siguiente

INFORME

PRIMERO.- La primera de las cuestiones planteadas por el CARL va referida a la necesidad de autorización de los trabajos y de los contratos a celebrar por el profesorado por parte Universidad y surge de la aplicación del artículo 83 de la LOU, que establece lo siguiente:

> *"1. Los Grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicadas a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de los trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.*
>
> 2. *Los Estatutos en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan."*

Dada esta regulación se deberá determinar el tipo de contrato al que se está refiriendo el artículo 83 de la LOU para saber si sus preceptos son de aplicación al supuesto planteado por el CARL.

El mencionado artículo 83 está regulando los contratos que puede suscribir la Universidad, bien en nombre propio, bien a través de otras personas por cuenta de ella, para el fomento de la investigación y la transferencia de los resultados de la

misma a la sociedad mediante la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

Es significativo el hecho de que este precepto esté incluido en el Título XI, dedicado al régimen económico y financiero de las Universidades públicas, y esto es así porque estos contratos constituyen una fuente de financiación propia de las Universidades, dejando que cada una de ellas establezca, mediante sus Estatutos, los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan, ya que corresponde a la Universidad, en todo caso, percibirlos.

La necesidad de autorización que se requiere antes de la formalización de estos contratos, según dispone el apartado segundo del artículo 83, será matizada por los Estatutos de las distintas Universidades que dictarán sus normas propias respecto a los procedimientos y con referencia a los órganos competentes, en la forma que consideren conveniente. Autorización que estará referida tanto a la celebración del contrato como al contenido de los trabajos que serán objeto del mismo y que supone para el profesor, fundamentalmente, la atribución de una competencia, o si se prefiere, el otorgamiento de un poder de representación para suscribir un contrato por cuenta de la Universidad, que en principio no tiene, además de permitirle la utilización de medios materiales y humanos de la universidad. Esta actuación se enmarca dentro de una relación de empleo o servicio del profesor con la universidad, al atribuirles funciones que no tienen por la simple realización de su actividad docente.

Se han analizado los Estatutos de diez Universidades andaluzas (las de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía), respecto a la celebración de contratos al amparo del artículo 83 de la LOU, comprobando que, con carácter general, se requiere autorización cuando un profesor los formaliza en nombre de la Universidad, pero es más, en los Estatutos de las Universidades de Almería, Córdoba, Jaén, Sevilla y Pablo de Olavide, cuando un profesor, al amparo del artículo 83 de la LOU, suscribe un contrato en nombre propio también requiere autorización de la Universidad, y ello es así porque dicho contrato surge como

consecuencia de una relación de empleo o servicio con dicha Universidad, de su condición de docente- investigador que le permitirá realizar, en el seno universitario, la actividad objeto del contrato (durante su tiempo de dedicación y, si procediera, con la utilización de los medios materiales y humanos de la misma).

Sirva a modo de ejemplo lo previsto en el artículo 184 ("Autorización y procedimiento") de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre:

1. "*Los contratos a que se refiere el artículo anterior podrán ser suscritos por:*

   a) El Rector, en nombre de la Universidad.
   b) Los Directores de los departamentos.
   c) Los Directores de los Institutos Universitarios de Investigación.
   d) Los profesores en su propio nombre.
   e) Los investigadores responsables de los grupos de investigación.

2. *En el supuesto de la letra a) del número anterior, serán necesarios los informes previos de los Vicerrectores con competencias en materia de Ordenación Académica, y de Investigación y del Gerente.*

   En los supuestos c) y e) del número anterior, será necesaria la autorización del Rector previo informe de los Vicerrectores con competencias en materia de Ordenación Académica, y de Investigación y del Gerente.

   En los supuestos b) y d) del número anterior, será necesaria la autorización del Rector previo informe de los Vicerrectores con competencias en materia de Ordenación Académica, y de Investigación y del Gerente, así como la conformidad del correspondiente Consejo de Departamento.

3. *(...)*

4. *Del importe de los recursos que se obtengan de dichos contratos, se detraerá un porcentaje que será fijado, con carácter general por el Consejo de Gobierno, y que se destinará en dos tercios a cubrir los gastos generales de la Universidad y un tercio a los departamentos o Institutos universitarios de Investigación.*

5. *La totalidad de los bienes que se obtengan con cargo a los citados contratos, pasarán a formar parte del patrimonio de la Universidad de Almería, de acuerdo con los criterios que resulten de las normas básicas que al respecto dicte el Gobierno."*

La especificidad de los contratos del artículo 83 de la LOU también queda patente por otro aspecto regulado en todos y cada uno de los Estatutos analizados, en términos casi idénticos, como es la titularidad de los resultados de la investigación.

En cuanto a la cesión de los derechos de autor es imprescindible llamar la atención sobre la necesidad de que ese Consejo, para cada caso concreto, en atención a la naturaleza de los trabajos que vaya a difundir, reproducir o publicar, así como al contenido de los estatutos de la Universidad de que se trate, tenga la certeza de a quién corresponde la titularidad de los derechos sobre la propiedad intelectual de dichos trabajos (si a la Universidad o al profesor), ya que no es posible que, sobre la base de su escrito, en el que indistintamente se habla de "colaboración con las Universidades" o de la "participación de un profesor", esta Intervención General pueda dar una respuesta única a priori y con carácter general.

No obstante, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, determina en su artículo 6.1 que se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

Por otra parte, el artículo 2 del mismo texto legal, establece que la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Por lo anterior, si el profesor es el autor de la obra técnica o científica podrá celebrar, respecto a la misma, cualquier tipo de contrato, sin necesidad de autorización de la Universidad correspondiente.

De nuevo ejemplificaremos el asunto con lo estipulado al respecto por los Estatutos de la Universidad de Almería, en su artículo 180 ("Titularidad de los resultados de la investigación"):

1. *"Los miembros de la Universidad de Almería harán constar su pertenencia a la misma cuando realicen publicaciones que contribuyan a la difusión de los resultados de la investigación desarrollada en el ámbito universitario.*

2. *La Universidad de Almería dispondrá de los mecanismos necesarios para proteger la propiedad intelectual e industrial derivada de la actividad científica de investigación y desarrollo realizada en su seno, especialmente en lo que se refiere a la reproducción ilegal de obras científicas.*

3. *La titularidad de los resultados de las investigaciones realizadas por los miembros de la Universidad de Almería en su tiempo de dedicación en uso de los recursos materiales y humanos de la misma pertenecen a la Universidad en los términos establecidos por la legislación vigente, salvo declaración expresa en contrario."*

A la vista de las consideraciones anteriores, la celebración de un contrato de los referidos en el artículo 83 de la LOU por un profesor universitario por cuenta de la Universidad, al celebrarse como consecuencia de una relación de empleo o servicio, requerirá autorización previa de la Universidad correspondiente.

A sensu contrario, cualquier otro tipo de contrato suscrito por un profesor universitario en nombre y por cuenta propia, al resultar una actuación ajena a dicha relación de empleo o servicio, no precisará autorización de la Universidad para su celebración.

En todo caso, habrá de estarse a lo dispuesto en los Estatutos de las distintas Universidades sobre la materia.

SEGUNDO.- Cuestión distinta de la anterior es la referida a la compatibilidad.

- Para el caso de la ejecución de los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU la compatibilidad está reconocida por la propia Ley en el artículo 68, que ya hemos transcrito:

  "1. El profesorado de las Universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación será en todo caso compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83, de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria."

  así como en el artículo 4.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:

  "La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de reforma Universitaria en los términos previstos en la misma (actualmente artículo 83 de la LOU).

  Por tanto, la compatibilidad de la docencia universitaria con las actividades reguladas en el artículo 83 de la LOU se entiende otorgada por Ley, sin que, en este supuesto, deba ser declarada expresamente.

- Para el resto de los contratos deberá estarse a lo establecido en la Ley de Incompatibilidades.

  Recordamos para ello el contenido del artículo 19, letras f) y h) que establece que quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades las actividades siguientes:

f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

h) La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.

Si los supuestos planteados por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales se ajustan a lo anterior podrán llevarse a cabo sin necesidad de previo reconocimiento de la compatibilidad.

Es importante subrayar que dichas actividades serán compatibles cuando la producción artística, técnica o científica no se hayan originado como consecuencia de una relación de empleo o prestación de servicios; que la colaboración o asistencia a congresos, seminarios, conferencias o cursos tenga carácter ocasional y que el desempeño de estos trabajos no menoscabe ni impida el estricto cumplimiento de las obligaciones del interesado en su actividad principal en la Universidad.

En caso contrario, si media relación laboral o encargo para la prestación de servicios, requerirán del reconocimiento expreso de compatibilidad y quedarán sujetos al régimen establecido en la Ley de Incompatibilidades.

TERCERO.- Por último, atendiendo a la naturaleza jurídica del gasto y a su articulación contractual debemos distinguir, nuevamente, los dos supuestos de hecho planteados. De una parte la participación en cursos y seminarios y de otra la cesión de los derechos económicos ligados a la propiedad intelectual.

- La participación en seminarios y conferencias responde al contenido típico de los contratos de consultoría y asistencia regulados en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que en el artículo 196.2 define como contratos de consultoría y asistencia a aquellos que tengan por objeto, entre

otros, *"cualesquiera otras prestaciones directa o indirectamente relacionadas con las anteriores y en las que también predominen las de carácter intelectual, en particular los contratos que la administración celebre con profesionales, en función de su titulación académica, así como los contratos para el desarrollo de actividades de formación del personal de las Administraciones Públicas"*.

Asimismo, el artículo 200 del TRLCAP, dispone, en su apartado 1, que: *"En los contratos regulados en este Título que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato"*, continuando su apartado 3 estableciendo que: *"Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la designación o nombramiento por autoridad competente."*

- Por lo que respecta al segundo supuesto, "la cesión de derechos económicos ligados a la propiedad intelectual", al formularse la consulta en términos genéricos y no disponer de documentos ni expedientes referidos a hechos concretos no resulta posible determinar la naturaleza administrativa o privada de este tipo de contratos.

  No obstante, sea cual sea la calificación jurídica de los mismos, en la preparación y adjudicación serán aplicables, con carácter general, bien de forma directa o supletoria por ausencia de normativa específica al respecto, los preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  Es todo cuanto se ha de informar.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006, SOBRE SUPERVISIÓN DE FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

Tras la implantación de la Red Corporativa han sido numerosas las consultas recibidas en este Centro Directivo relativas a la facturación de servicios aún no integrados en la misma.

Por ello se consideró oportuno trasladar a la Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas la necesidad de contar con una relación exhaustiva sobre éstos, a fin de que las distintas Intervenciones pudieran ejercer sus competencias de fiscalización con la seguridad suficiente sobre el adecuado cumplimiento de los términos contractuales que rigen la prestación de los servicios integrados en la Red.

En respuesta a las conversaciones mantenidas sobre el particular, la citada Dirección General ha comunicado a esta Intervención General que por parte de la Dirección de los Servicios de Red Corporativa, para la que designó a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, SAU (SADESI), se va a proceder a supervisar las facturas de los servicios de telecomunicaciones aún no integrados en los contratos vigentes de Red Corporativa[10].

Esta supervisión:

- Verificará que los servicios corresponden a sedes aún no integradas en la Red Corporativa.

[10] Se recuerda que los diferentes servicios de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía están contratados actualmente con las siguientes empresas:
- Servicio de datos: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
- Servicios de Telefonía Fija: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
- Servicios de Telefonía Móvil: VODAFONE ESPAÑA, S.A.
- Servicio de Red de Accesos Periféricos: IBERBANDA, S.A.
- Servicio de Nodo de Interconexión, Seguridad y Acceso: TELVENT INTERACTIVA, S.A.
- Servicios de Video: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

- Será operativa desde la facturación correspondiente al mes de junio de 2006, las cuales serán entregadas a SADESI en la primera quincena de julio.

- Abarcará la verificación de que las tarifas aplicadas en concepto de tráfico de voz, en el caso de la facturación de Telefónica, son correctas y coincidentes con las establecidas en el catálogo de telefonía fija. (Las tarifas aplicadas por el resto de conceptos y operadores no podrán ser verificadas al no disponer de información sobre los precios vigentes en los distintos contratos, si bien si se comprobará que los servicios correspondan a sedes aún no integradas en Red).

Por tanto, se le comunica que no podrá ser fiscalizado de conformidad ningún expediente de gasto correspondiente a servicios de telecomunicaciones cuyas facturas no hayan sido supervisadas por SADESI en los términos antes expuestos.

IV.3.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

COMUNICACIÓN DE 5 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, SOBRE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 58 Y 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.

La Ley General de Subvenciones (LGS) establece que en el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria deberá contemplar la "cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones", así como que "no podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria".

En desarrollo de tales previsiones y con el objetivo de lograr una mas eficaz gestión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, el Reglamento de la citada Ley, aprobado el pasado 21 de julio (RGS), contiene algunas medidas que cobran especial relevancia en relación con el fenómeno comúnmente conocido como de "overbooking" o "lista de espera" en la concesión de subvenciones y que consiste en la existencia de solicitantes que cumplen las condiciones para ser beneficiarios de la subvención y que han sido evaluados y objeto de prelación por el órgano colegiado competente para ello entre todas las solicitudes presentadas y aceptadas, pero a los que no puede concederse la subvención por hallarse cubierto el límite de crédito fijado en la convocatoria por otros solicitantes mejor evaluados, circunstancia ésta conocida por los solicitantes excluidos, ya sea antes de la concesión de la subvención (propuesta de resolución provisional o definitiva), ya sea después de la resolución de concesión. En concreto, las medidas a que se ha hecho referencia se encuentran contempladas en los artículos 58 y 63 del RGS.

a) Fase anterior a la concesión de la subvención (artículo 58 del RGS)

El artículo 58 del RGS establece que, excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de nueva convocatoria, siempre y cuando se prevea obtener la financiación necesaria para

cubrir dicha cuantía suplementaria en cualquier momento anterior a la resolución de concesión y dicha financiación provenga de sobrantes de convocatorias anteriores, cuyos créditos se puedan transferir por el Ministerio convocante, o de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito.

La efectividad, por tanto, de dicha cuantía adicional, que permite que el límite cuantitativo por el que inicialmente se aprobó el gasto se incremente, depende de que se obtenga la financiación adicional antes de la concesión, condición ésta que deberá hacerse constar expresamente en la convocatoria y cuyo cumplimiento se deberá publicar, asimismo, con carácter previo a la concesión.

De lo expuesto se desprende que a través del mecanismo diseñado en el artículo 58 del RGS se puede disminuir el impacto del overbooking puesto de manifiesto antes de la resolución de concesión.

b) Fase posterior a la concesión de la subvención (artículo 63 del RGS)

La resolución de concesión, de conformidad con la LGS, deberá contener, además de los solicitantes a los que se concede la subvención, la desestimación expresa del resto de las solicitudes, creando la notificación de la resolución el correspondiente derecho a favor de los primeros.

En este aspecto, el artículo 63 del Reglamento introduce una precisión con incidencia en el tema que nos ocupa. Así, dicho precepto contempla la posibilidad de que las bases reguladoras prevean que la resolución de concesión, además del contenido antes descrito, incluya una relación ordenada, con su correspondiente puntuación, de las solicitudes que, cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiario, hayan sido desestimadas por rebasarse la cuantía fijada en la convocatoria, para que, en el supuesto de renuncia de alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acuerde la concesión de la subvención, siempre y cuando se haya liberado crédito en la cuantía necesaria, al solicitante o solicitantes que se encuentren mejor posicionados en la lista de espera, y ello sin necesidad de nueva convocatoria, con la agilización del procedimiento que ello implica.

De lo anterior se desprende que, así como la virtualidad del artículo 58 se despliega antes de la resolución de concesión, la del artículo 63 se plasma después de dicha resolución, lo cual permite que en una misma convocatoria puedan operar ambos artículos.

c) Efectos de la posible concurrencia de los artículos 58 y 63 del RGS

Sin perjuicio de lo anterior, esto es, la compatibilidad de la previsión en una misma convocatoria de los artículos 58 y 63, parece oportuno apuntar algunas matizaciones sobre el juego simultáneo de ambos preceptos en otros supuestos, todo ello en el interés, como se verá, de evitar eventuales reclamaciones concurrentes sobre un mismo crédito, por lo que resultaría conveniente que el órgano de control, al informar las bases reguladoras o conocer la convocatoria, advirtiera al correspondiente órgano gestor con el fin de introducir en las mismas las oportunas cautelas.

En este sentido, ya se ha señalado antes que, establecida la aplicación del artículo 63 en una determinada convocatoria -que denominaremos convocatoria A-, la renuncia de un beneficiario al que se hubiese concedido una subvención, con la consiguiente liberación de crédito suficiente, obliga al órgano concedente a dictar resolución en favor del solicitante o solicitantes que quedaron en la “lista de espera” mejor situados.

A su vez, la aplicación del artículo 58 en otra convocatoria - que denominaremos convocatoria B- implica que la obtención de financiación adicional procedente, por ejemplo, de la renuncia a una subvención concedida en el marco de una convocatoria anterior, acrezca la cuantía máxima a conceder en la convocatoria B y obligue al órgano concedente a resolver a favor de los solicitantes mejor posicionados en la “lista de espera”. A este respecto, debe precisarse que en ningún caso cabría computar a estos efectos como crédito liberado que acrezca a la convocatoria B el procedente de la convocatoria A, antes referido, pues sus correspondientes solicitantes en “lista de espera” gozan de preferencia, tal como se desprende de la interpretación conjunta de los preceptos analizados.

Cabe señalar que el artículo 63 no prevé un plazo durante el cual las renuncias de los beneficiarios obligan a la concesión a los solicitantes en lista de espera, por lo que, de no establecerse ningún plazo en las bases reguladoras o la convocatoria, las eventuales renuncias estarían afectas sine die a dicha “lista de espera”, lo cual podría mermar la eficaz gestión de los créditos.

Por lo anterior, sería conveniente que los órganos de control recomendaran a los órganos gestores la introducción de un plazo durante el cual despliegue su virtualidad el artículo 63 en la correspondiente convocatoria, con la cautela expresa de que durante dicho plazo los créditos que eventualmente se liberen no podrán financiar las cuantías adicionales que en otras convocatorias se hayan podido contemplar al amparo del artículo 58.

Asimismo, similares matizaciones cabe realizar cuando la previsión de aplicación del artículo 58 se contempla en más de una convocatoria a fin de evitar que la obtención de financiación adicional (por ejemplo, el sobrante de una convocatoria anterior) permita invocar hipotéticos derechos excluyentes sobre la misma.

Por ello, sería conveniente que el órgano de control advirtiera al órgano gestor que en el supuesto de que se establezca el procedimiento del artículo 58 en varias convocatorias, las mismas especifiquen el orden de prelación o sistema de distribución entre ellas de la financiación suplementaria, o, de resultar imposible fijar en tal momento las prioridades, señalar que la determinación de la convocatoria o convocatorias a las que acrecerán los créditos adicionales obtenidos se producirá posteriormente, cuando se dé publicidad a la declaración de disponibilidad de los mismos, sin que pueda entenderse generado derecho alguno con anterioridad y al margen de dicha determinación.

Desde la perspectiva de la **función interventora**, cabe realizar las siguientes consideraciones sobre las particularidades que implica la aplicación en una convocatoria de las previsiones contenidas en los artículos 58 y 63 del RLGS analizados anteriormente.

a) Fiscalización previa del gasto derivado de convocatorias en las que se haya previsto la cuantía adicional del artículo 58.

En las convocatorias que hayan fijado, además de la cuantía total máxima, una cuantía adicional al amparo de lo previsto en el artículo 58, la fiscalización previa de la aprobación del gasto se realizará en dos momentos, atendiendo al desglose que se produce en la citada fase del procedimiento de ejecución del gasto público.

Así, habida cuenta que "con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá tramitarse el oportuno expediente de gasto por la cuantía total máxima en ella fijada", el expediente deberá ser remitido a la Intervención para su fiscalización previa en el momento inmediatamente anterior a la aprobación de la convocatoria y del gasto por la cuantía total máxima. Los aspectos a verificar serán, además de los establecidos en el artículo 152 de la LGP y apartado Segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2002, los requisitos establecidos en el apartado Decimocuarto del citado Acuerdo en los términos señalados en la Comunicación de 29 de julio de 2004, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre aplicación del régimen transitorio previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El único matiz será la circunstancia de que los requisitos de carácter financiero, en concreto, la existencia de crédito adecuado y suficiente y la competencia para la aprobación del gasto, se limitarán a la "cuantía total máxima".

Posteriormente, una vez obtenida la financiación adicional y previamente al acto de aprobación del gasto complementario en el que se declara la existencia de crédito disponible y su afectación a la convocatoria (y que, según el artículo 58.5 RLGS debe ser objeto de publicación), se fiscalizará el correspondiente expediente de gasto por la cuantía suplementaria mediante la verificación de los siguientes extremos:

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone.

La competencia del órgano al que se eleva la aprobación del gasto.

Las demás fases del procedimiento, compromiso del gasto derivado de la resolución de concesión y reconocimiento de la obligación, no se ven afectadas por el hecho de que la convocatoria haya previsto la aplicación del artículo 58. En consecuencia, la fiscalización previa de cada una de estas fases no reviste especialidad, por lo que resultan aplicables las indicaciones realizadas al respecto en la Comunicación de 29 de julio de 2004, antes citada.

b) Fiscalización previa del compromiso del gasto derivado de convocatorias en las que se haya previsto la aplicación del artículo 63.

Las peculiaridades en este caso se centran en la fase de fiscalización previa del compromiso. Así, con carácter previo a la resolución de concesión deberá procederse a su preceptiva fiscalización, comprobando, además de los extremos establecidos en el artículo 152 de la LGP y en el apartado Segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2002, los requisitos previstos en el apartado Decimocuarto del citado Acuerdo en relación a la fase correspondiente al acuerdo de concesión, en los términos que se expusieron en la Comunicación de 29 de julio de 2004, con las siguientes particularidades:

Al verificar si la propuesta de resolución expresa el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, deberá asegurarse que quedan debidamente diferenciadas, de una parte, el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención así como su cuantía y, de otra, la relación ordenada y ponderada de todas las solicitudes respecto de las cuales, a pesar de cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladas, se propone su desestimación por rebasarse la cuantía fijada en la convocatoria.

En la comprobación del informe del órgano colegiado correspondiente, habrá que analizar que el mismo recoge no sólo la valoración del solicitante o solicitantes propuestos sino también la correspondiente a los solicitantes incluidos en la “lista de espera”.

Si posteriormente a la resolución de concesión, alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención concedida, previamente a que el órgano concedente, al amparo de lo dispuesto en la convocatoria por aplicación del artículo 63, acuerde la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes que quedaron en la "lista de espera" mejor situados, deberá remitirse el expediente a la Intervención para su preceptiva fiscalización. En este momento, el examen de los extremos establecidos en el artículo 152 de la LGP y en el apartado Segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2002, así como de los requisitos recogidos en el apartado Decimocuarto, en los términos analizados en la Comunicación de 29 de julio de 2004, se realizará teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

Al examinar que el compromiso que se propone corresponde a un gasto aprobado y fiscalizado previamente, deberá analizarse, entre otros aspectos, que el expediente contiene la oportuna liberación de crédito por el importe de la renuncia, el cual habrá de ser suficiente para atender las solicitudes de la "lista de espera" respecto de las que se propone su concesión, lo que se acreditará mediante el documento contable D/ (de signo negativo) registrado en el sistema de información contable a efectos de la toma de razón de la precitada renuncia.

La comprobación de que la propuesta de resolución expresa el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, deberá realizarse analizando comparativamente la resolución de concesión anterior y la nueva propuesta que deberá respetar el orden de prelación de la "lista de espera" que figuraba en aquella.

Desde la perspectiva del **procedimiento contable** derivado de estas actuaciones cabe señalar lo siguiente:

a) Procedimiento contable derivado del artículo 58.

El procedimiento contable estará en función de cuál sea el origen de la financiación adicional, ya se derive de sobrantes de convocatorias anteriores ya provenga de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito:

1. Sobrantes de convocatorias anteriores

Si se trata de sobrantes de convocatorias anteriores generados en los mismos créditos presupuestarios con cargo a los que se hace la convocatoria receptora, se tendrán que realizar las actuaciones necesarias para transformar esos sobrantes en créditos disponibles. Es decir, si se encontraban, por ejemplo, en fase D, pendientes de reconocimiento de obligación, la declaración de disponibilidad de dichos sobrantes debe implicar la cancelación de las fases D, A y de la retención de crédito RC que se efectuó al inicio del expediente en el que se produjo el sobrante.

Si el sobrante se ha producido en créditos que se encontraban pendientes de concesión de la subvención pero aprobado el gasto, es decir en la fase A, para poder declarar su disponibilidad habrá de cancelarse dicha fase y la previa retención de crédito RC que se realizara al inicio del expediente.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la cancelación de dichos sobrantes se registrará en el SIC con base en los documentos contables de signo negativo que correspondan en función de la situación en la que se encontrasen los créditos cuyo sobrantes se pretende incorporar que irán acompañados de los justificantes establecidos en la Instrucción de operatoria a seguir en la ejecución del gasto del Estado. Pudiéndose distinguir los siguientes supuestos:

Cuando la financiación adicional provenga del supuesto previsto en el apartado 2.a).1º del art. 58 (presentación de solicitudes por importe inferior al gasto inicialmente previsto) será preciso expedir los documentos contables A/ y RC/ (de signo negativo) en relación con la convocatoria en la que se produce el sobrante, justificándose ambos con el certificado del órgano designado para la instrucción del procedimiento a que se refiere dicho precepto. Ya que dicho certificado quedará unido al documento contable A/ (negativo) anterior, se expresará en el texto libre del RC/ (negativo) una referencia a la contabilización de aquél.

Cuando la financiación adicional provenga del supuesto contemplado en el apartado 2.a).2º del art. 58 (resolución de convocatorias por importe inferior al previsto), será preciso expedir los documentos contables A/ y RC/ (de signo negativo) en relación

con la convocatoria en la que se produce el sobrante, aportándose como justificante de los mismos la resolución de la concesión de la que resulta un importe inferior al inicialmente convocado. Como la resolución de la concesión quedará unida al documento contable D (positivo) se expresará en el texto libre del A/ (negativo) una referencia a la contabilización de aquél y en el texto libre del RC/ (negativo) una referencia a la contabilización del A/ (negativo).

Cuando la financiación adicional provenga del supuesto previsto en el apartado 2.a).3º del art. 58 (haberse reconocido obligaciones por importe inferior a la subvención concedida) será preciso expedir los documentos contables D/, A/ y RC/ (de signo negativo) en relación a la convocatoria en la que se produce el sobrante, lo que debería justificarse, según los casos, con la renuncia del beneficiario unida a la resolución del servicio gestor en la que se da por presentada dicha renuncia, con la resolución por la que se declara la pérdida del derecho al cobro de la subvención, con la resolución por la que se declara la invalidez del acto de concesión de la subvención o con la resolución en la que se acuerda un reajuste de anualidades. La resolución que corresponda quedará unida al D/ (de signo negativo) por lo que se expresará en el texto libre del A/ (negativo) una referencia a la contabilización de aquél y en el texto libre del RC/ (negativo) una referencia a la contabilización del A/ (negativo).

Si el sobrante no se produce en los mismos créditos presupuestarios sino en otros créditos cuya transferencia pueda acordar el Ministro que gestiona la subvención, además de las actuaciones anteriores deberá tramitarse la correspondiente modificación presupuestaria que permita la aplicación del crédito disponible a los créditos presupuestarios a los que se refiere la convocatoria receptora. Una vez aprobada la transferencia de crédito se expedirán dos documentos contables MC: un MC/ (de signo negativo) en los créditos en los que se ha producido el sobrante de convocatorias anteriores y un MC de signo positivo para los créditos presupuestarios a que se refiere la convocatoria receptora. La justificación de la transferencia de crédito estará constituida por la resolución aprobatoria de la misma.

2. Generaciones, ampliaciones o incorporaciones de crédito

Cuando la financiación adicional provenga de las fuentes contempladas en el apartado 2.a).4º del art. 58 (generaciones, ampliaciones o incorporaciones de crédito), deberá tramitarse la correspondiente modificación presupuestaria. Una vez aprobada esta, se expedirá el documento contable MC de signo positivo que se justificará con la resolución aprobatoria de la misma.

Una vez registradas en el Sistema de Información Contable las actuaciones de los apartados anteriores, mediante la captura de los documentos contables a los que se ha hecho referencia en los mismos, se habrá incrementado el saldo de crédito relativo a la convocatoria receptora, con lo que podrán tramitarse con cargo al mismo la retención de crédito disponible y la correspondiente aprobación del gasto adicional (Documentos contables positivos RC y A).

b) Procedimiento contable derivado del artículo 63.

Cuando se produzca la renuncia a la subvención por alguno de los beneficiarios y con el fin de justificar la liberación de crédito suficiente para acordar la concesión de la subvención al solicitante siguiente de la lista, se expedirá el documento D/ (negativo) con base en la renuncia del beneficiario y la resolución del servicio gestor en la que se da por presentada dicha renuncia, por el importe de la misma.

Una vez aprobado el nuevo acto de concesión a favor del siguiente o siguientes solicitantes de la lista y con base en el mismo se expedirá el correspondiente documento D de compromiso de gasto para su registro en el Sistema de Información Contable.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 2 DE FEBRERO DE 2006, SOBRE CAMBIO DE TITULARIDAD EN UN PROCEDIMIENTO SUBVENCIONAL DERIVADO DE UNA FUSIÓN SOCIETARIA.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X, por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP) y del artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, respecto al informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial (...) , en relación a un expediente de gasto relativo a una solicitud de ayuda a la creación de empleo estable.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente, se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Recibida propuesta de documento contable "AD" correspondiente al referido expediente de gasto, la Intervención Provincial (...), en fecha 21 de abril de 2005, emite informe de fiscalización de disconformidad fundamentado en el motivo siguiente:

- Con la documentación presentada no se acredita el cumplimiento de la Comunicación 6/1992, de 7 de septiembre, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, relativa a la sustitución en el cobro de las subvenciones del beneficiario de la misma por un tercero.

Posteriormente, remitida propuesta de documento contable "AD" correspondiente al mismo expediente de gasto, la citada Intervención Provincial, en fecha 26 de septiembre de 2005, emite informe de fiscalización de disconformidad fundamentado en los motivos siguientes:

- Se reitera la nota de reparo de 21 de abril de 2005.

- La solicitud se presenta el 17 de diciembre de 1999 por " YYYY, S.A.", que es quien contrata al trabajador y solicita, dentro del plazo establecido, en la Delegación Provincial (...) en base al Decreto 199/1997 y la Orden de 30 de septiembre de 1997. La propuesta de resolución se realiza a nombre de " ZZZZ, S.A.", no cumpliendo el beneficiario las condiciones establecidas en los artículos 3, 5.1 y 28 e incumpliéndose las normas de procedimiento de los artículos 20, 25 y 29 de la Orden de 30/09/97.

- No se mencionan en la propuesta de Resolución de subvención las disposiciones derogatorias contenidas en el Decreto 141/2002 y la Orden 30 de septiembre de 1997.

SEGUNDO.- Frente al mencionado informe de fiscalización, el Viceconsejero X no conforme con él, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 4 de noviembre de 2005, al efecto de su resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 de la LGHP y 13 del RIJA.

Las alegaciones en apoyo de su disentimiento pueden sintetizarse en la forma siguiente:

- Con fecha 17 de diciembre de 1999 la entidad "YYYY, S.A." formuló, en tiempo y forma, solicitud de subvención, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 199/1997, como consecuencia de haber procedido a la contratación de carácter estable y/o transformación de un contrato de duración determinada en contrato de carácter estable de un trabajador.

- Mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2004, notificado el 25 del mismo mes, se requiere a la empresa la aportación de documentación imprescindible para continuar con la tramitación del expediente, recibiéndose en fecha 2 de noviembre de 2004, acompañada de la relativa a la fusión por absorción de la

empresa solicitante por la entidad “ZZZZ, S.A.”, formalizada mediante escritura de fecha 27 de diciembre de 2001.

- Conocida la fusión, se requiere nuevamente la subsanación de la solicitud y la documentación anexa, recibiéndose el 10 de marzo de 2005.

- El 19 de julio de 2005 se presenta para su fiscalización la correspondiente propuesta de documento contable “AD”, acompañada de la propuesta de resolución favorable y documentación anexa a favor de la entidad absorbente, al considerar que, del estudio de la misma, se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, recayendo informe de fiscalización de disconformidad por entender la Intervención que no se ha dado cumplimiento a lo previsto en la Comunicación 6/92, de 7 de septiembre, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, relativa a la sustitución en el cobro de las subvenciones del beneficiario de la misma por un tercero.

- La Comunicación referenciada alude al supuesto de que el beneficiario de una subvención pretenda que el crédito generado por la concesión de la misma sea percibido por un tercero. En estos casos, la Intervención General rechaza la posibilidad de transmisión de créditos, arbitrando para estos casos la alternativa del representante debidamente autorizado o comisión de cobranza, con lo cual no se transmite la obligación.

- En el caso que nos ocupa estamos ante un supuesto de fusión por absorción, previsto en el Capítulo VIII del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y consta, debidamente acreditado, que se produce con anterioridad al nacimiento del crédito derivado de la concesión de la ayuda, es decir, no hay un nuevo titular al que se cede el derecho sino que éste nace ya a favor de la entidad absorbente “ZZZZ, S.A.” quien, con carácter exclusivo, asume ante la Administración el deber y responsabilidad del cumplimiento de la obligación de hacer y, en caso contrario, la devolución de las cantidades satisfechas.

- La entidad absorbente reúne los requisitos previstos en la normativa para ser beneficiaria de la subvención de referencia.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Como cuestión preliminar, en relación a aspectos procedimentales en la tramitación de la presente discrepancia, ha de señalarse:

1º.- Que, según determina el artículo 13 del RIJA, el plazo para interponer discrepancia es de diez días contados desde el siguiente a aquel en que el informe fiscalización de disconformidad sea recibido por el órgano gestor. Dado que el último informe de fiscalización fue emitido en fecha 26 de septiembre de 2005 y que el escrito por el que se plantea disentimiento se remite el pasado 2 de noviembre, ha de concluirse que esta discrepancia ha sido presentada fuera de plazo establecido para ello.

2º.- Que recibido por el órgano gestor un informe de fiscalización de disconformidad éste puede, o bien conformarse con su contenido y subsanar las actuaciones a efectos de remitirlos nuevamente a la Intervención competente, o bien disentir y formular discrepancia en término no superior a diez días, tal y como dispone el artículo 13 del RIJA, sin que proceda remitir el expediente nuevamente a la Intervención persistiendo el motivo que se expresaba en el primer informe de fiscalización evacuado.

No obstante los anterior, esta Intervención General entrará a conocer de la misma.

SEGUNDA.- Las cuestiones a dilucidar en la presente discrepancia se centran en determinar:

1. Si la tramitación del presente expediente contraviene lo dispuesto en la Comunicación 6/92, de 7 de septiembre, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, relativa a la sustitución en el cobro de las subvenciones del beneficiario de la misma por un tercero; y

2. Si, en su caso, habría además de considerarse que la propuesta de resolución de concesión de la ayuda contraviene lo dispuesto en los artículos 3, 5.1, 20, 25, 28 y 29 de la Orden de la Consejería de Trabajo e Industria, de 30 de septiembre de 1997, de desarrollo y convocatoria de ayudas públicas para la creación de empleo estable para inserción laboral de jóvenes y colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

TERCERA.- Será preciso concretar la situación planteada en el presente expediente antes de entrar a analizar las cuestiones expuestas en la consideración anterior.

1.- La entidad "YYYY, S.A." procedió a la contratación con carácter indefinido de un joven desempleado menor de 30 daños en fecha 29 de octubre de 1999, solicitando en fecha 17 de diciembre del mismo año, dentro del plazo concedido por la Orden de 30 de septiembre de 1997 antes citada, la concesión de la subvención establecida para el fomento de la creación de empleo estable.

2.- Por circunstancias no explicitadas en las actuaciones, la resolución administrativa que debió recaer sobre dicha solicitud no se emite en el plazo determinado para ello en la normativa reguladora (seis meses desde la presentación de la solicitud), formulándose la propuesta de resolución de concesión, que se adjunta al expediente, en fecha 13 de julio de 2005.

3.- En dicho lapso de casi cinco años que media entre la formulación de la solicitud y la propuesta de resolución de concesión se han producido los siguientes hechos y situaciones jurídicas:

a) El trabajador cuya contratación es objeto de fomento con la presente subvención, que inició la relación laboral subvencionable con la empresa "YYYY, S.A." en fecha 29 de octubre de 1999, se mantuvo en situación de alta en dicha empresa

hasta el 28 de febrero de 2002, fecha a partir de la cuál continúa contratado con carácter indefinido por la entidad “ZZZZ, S.A.”, sociedad absorbente en la fusión producida entre ambas mercantiles.

b) La fusión por absorción de “YYYY, S.A.”, como sociedad absorbida, y “ZZZZ, S.A.”, como absorbente, operación que, dada la condición de sociedad íntegramente participada de la primera por la segunda, ha de calificarse como “fusión impropia”, regulada en el artículo 250 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante LSA), y que produce la integración del patrimonio de la sociedad absorbida con el de la absorbente y la disolución sin liquidación de la entidad absorbida.

CUARTA.- Conforme a los antecedentes reproducidos y tal como se recoge en las consideraciones anteriores, una vez solicitada la subvención por la entidad “YYYY S.A. Unipersonal” y con anterioridad a la resolución de concesión de la subvención tuvo lugar la fusión por absorción referida, de tal modo que la mercantil “ZZZZ, S.A.”, adquirió por sucesión universal los distintos derechos y obligaciones que integraban el patrimonio de la sociedad absorbida, es decir, de “YYYY, S.A.”.

La transmisión universal (*“in universum ius*”), en bloque y en único acto, determina la adquisición por la sociedad absorbente del total de los elementos del activo y del pasivo integrantes del patrimonio de la sociedad que se extingue (artículo 233 LSA). En virtud del principio de la transmisión universal *“ipso iure”* se traspasan patrimonialmente todos los bienes, derechos y obligaciones de la entidad que se extingue a la sociedad absorbente y, en general, todas y cada una de las relaciones jurídicas en las que participa, sin que sea preciso el cumplimiento de las formalidades que se exigirían, por su propia ley de circulación, para la transmisión de cada uno de ellos si la misma no se produjera por la vía de la fusión, sino por otro título jurídico (compraventa, cesión de créditos, endoso, etc.).

Se produce el cambio de la titularidad de las relaciones jurídicas y de la estructura empresarial de la entidad que se extingue, cambio que tiene lugar por disposición legal, con continuidad de esta organización y estructura empresarial en el tráfico jurídico, si bien, integrado en una estructura más amplia que es la propia de la

entidad resultante en el proceso de fusión. Es decir, se produce la unificación de patrimonios, de socios y de relaciones jurídicas, sin que quepa confundir esta operación jurídica con otras afines desde una consideración económica general, que no jurídica, como pueden ser los acuerdos de cesión de la gestión, la administración conjunta, la adquisición de todas las acciones de otra sociedad...

La transmisión tiene, además de un carácter puramente obligacional, otros efectos, por afectar tanto a las sociedades que participan en el proceso de fusión como a los terceros involucrados y afectados por cada una de las relaciones jurídicas, bienes y derechos objeto de transmisión.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que la modificación subjetiva de las relaciones contractuales preexistentes producida a consecuencia del fenómeno de sucesión universal puede justificar, en algunos supuestos, el reconocimiento de un derecho de rescisión del contrato a favor de los terceros contratantes con la sociedad que se extinga por virtud de la fusión. Tal puede ser el caso de los contratos celebrados "*intuitu personae"* o de los contratos de tracto sucesivo, por razón de la incidencia que la sustitución de uno de los sujetos por otro tengan en la relación de confianza subyacente en la relación contractual establecida con anterioridad a la fusión.

En otros casos, en cambio, el legislador ha previsto expresamente la continuidad de la relación contractual preexistente, bien de modo directo (artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores), bien declarando que la operación de fusión no se considera una cesión del contrato (artículo 32.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos).

QUINTA.- El artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), modificado parcialmente por la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, regula expresamente la "sucesión de empresa" en el seno de las relaciones laborales. Existe sucesión de empresa cuando se produce una transmisión que afecta a una unidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extingue por sí

mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior.

La sucesión en la posición de empleador se liga a una transmisión de empresa. Ésta constituye un fenómeno relativamente complejo, porque se desarrolla en varios planos: el negocio jurídico a través del cual se produce la transmisión y el efecto de ésta sobre los contratos de trabajo suscritos con el empresario. Lo específico del artículo 44 ET es que la transmisión de la empresa en el plano patrimonial se vincula a un cambio de empresario en el ámbito del contrato de trabajo, refiriéndose expresamente el apartado 3 del citado artículo a las transmisiones “inter vivos”, vía de transmisión en la que se incluyen, además de las cesiones contractuales, la venta y el arrendamiento de empresas y negocios como las fusiones y escisiones de sociedades.

La sucesión de empresa produce efectos diversos entre los que pueden citarse: el mantenimiento de la vigencia de la relación laboral, la conservación del contenido contractual “pro futuro” y su asunción por el cesionario, la responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario en las obligaciones anteriores a la sucesión... En este sentido, la primera garantía para los trabajadores en la sucesión de empresa es el mantenimiento del vínculo laboral, lo cual requiere, no sólo la conservación de la relación contractual, sino, lógicamente, la imputación a otra persona de la posición empresarial.

SEXTA.- Aplicando lo anteriormente expuesto al caso de referencia, ha de concluirse que producida la fusión societaria, con los efectos expuestos en consideraciones anteriores, el trabajador contratado por la mercantil “YYYY, S.A. Unipersonal”, en fecha 29 de octubre de 1999, conserva con la sociedad absorbente “ZZZZ, S.A.” su vínculo contractual, tras la subrogación del nuevo empleador, y así se acredita en el informe de vida laboral del empleado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 28 de octubre de 2004, en el que se constata el cumplimiento de la obligación de mantenimiento de la contratación durante un período mínimo de 4 años cubierto por ambas mercantiles.

SÉPTIMA.- En otro orden de cosas, la Orden de 30 de septiembre de 1997 reguladora de la presente subvención establece en los artículos cuyo incumplimiento señala la Intervención Provincial en su informe, lo siguiente:

- Artículo 3: Podrán ser beneficiarios de estas medidas de fomento las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, respecto a los empleos creados en sus centros de trabajo localizados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

    - El empleo en cuestión se creó en el centro de trabajo de la mercantil "YYYY, S.A. Unipersonal" sito en (...).

- Artículo 5.1: Las ayudas consistirán en una subvención a tanto alzado al empleador por una cuantía de 500.000 ptas. por cada contrato indefinido a tiempo completo realizado con jóvenes menores de treinta años o por transformación de un contrato de duración determinada en indefinido a tiempo completo. Cuando se trate de un contrato de nueva incorporación deberá suponer un incremento neto de la plantilla existente al 21 de abril de 1997.

    - Tras la fusión operada el empleador del trabajador afectado es la entidad "ZZZZ, S.A.", dicho trabajador fue contratado en su día con carácter indefinido por ser un joven desempleado menor de 30 años, certificando el Jefe del Servicio de Empleo en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (...), en fecha 27 de junio de 2005, que dicha contratación supuso un incremento de la plantilla en el sentido exigido por la norma reguladora.

- Artículo 20: La solicitud y la documentación que debió acompañarla debe ser la presentada en su día por la entidad "YYYY, S.A.", al margen de la documentación adicional que deba solicitarse referida a la fusión de sociedades que nos ocupa y al cumplimiento de las condiciones requeridas en la norma reguladora, especialmente el mantenimiento del contrato indefinido por un período mínimo de cuatro años.

- Artículo 25: La concesión de las ayudas se efectuará preferentemente siguiendo el orden establecido en el artículo 2 del Decreto 199/1997 respecto de los colectivos afectados y todo ello en el marco de las disponibilidades presupuestarias existentes. Las solicitudes no resueltas al cierre de un ejercicio presupuestario podrán ser atendidas en siguientes ejercicios, circunstancia que se produce en el presente caso.

- Artículo 28: Las ayudas e incentivos no se aplicarán en los supuestos de contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la contratación, hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas mediante un contrato por tiempo indefinido o en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador con empresas a las que el solicitante de los beneficios haya sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

    - La subvención pretende concederse por la contratación del trabajador efectuada por la mercantil “YYYY, S.A. Unipersonal” en su día, por lo que no le resultarían de aplicación estas exclusiones.

- Artículo 29: El plazo para la resolución de las solicitudes se fija en seis meses desde su presentación, pudiendo entenderse desestimadas si no recae resolución expresa en dicho plazo. Este artículo no puede entenderse vulnerado por una resolución expresa extemporánea, dado lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

OCTAVA.- Por su parte, la Comunicación 6/1992, de 7 de septiembre, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, relativa a la sustitución en el cobro de las subvenciones del beneficiario de la misma por un tercero, basada en el informe emitido por el Gabinete Jurídico en fecha 10 de junio de 1992, establece la imposibilidad de admitir la cesión a terceros de créditos generados por la concesión de subvenciones, partiendo dicha Comunicación del supuesto de una subvención ya concedida, caso diferente al debatido, pues en el que nos ocupa lo que pretende es

concederse la subvención a favor de un titular distinto al que presentó la solicitud sobre la que ha de recaer resolución.

La relación jurídico subvencional es una relación de derecho administrativo que surge tras la tramitación de un determinado procedimiento administrativo, sometido a una serie de requisitos, condicionamientos y plazos, procedimientos administrativos que tienen carácter esencial para la regular y formal constitución de una concreta relación entre la Administración que otorga la subvención y una persona, física o jurídica, pública o privada, que se convierte en beneficiario de la misma, asumiendo tal posición jurídica, con las consecuencias, tanto en el plano de los derechos como en el de las obligaciones, que ello lleva consigo.

Siendo ello así, sin la existencia de un precepto expreso que lo permita, no será posible la transmisión a un tercero ni de la posición de solicitante o interesado en un procedimiento subvencional ni la de beneficiario de una subvención concedida. No es posible que el interesado en un procedimiento transmita a un tercero ni su situación jurídica, configurada normativamente en una relación de derecho público, ni alguno de sus aspectos o elementos.

No obstante, esta regla general podrá sufrir alguna modulación en aquellos supuestos en los que propiamente no existe una transmisión o cesión autónoma de la posición jurídica de solicitante de una subvención, sino que ésta sería consecuencia accesoria de otro negocio jurídico, como sería el planteado en la presente discrepancia: la conclusión de una operación de fusión societaria. En estos casos, podrá defenderse la subrogación de la sociedad absorbente en el lugar de la sociedad absorbida siempre que las circunstancias concurrentes, a juicio de la Administración, justificaran el otorgamiento de la subvención en las condiciones previamente determinadas.

En los supuestos de fusión por absorción, como ya hemos indicado, la sociedad absorbente adquiere el patrimonio de la sociedad absorbida, por lo que debe producirse un cambio de titularidad en las relaciones jurídicas existentes entabladas por la sociedad absorbida. En el caso de un procedimiento subvencional, el cambio de titularidad produce también una alteración de las circunstancias de la subvención,

que deben ser ponderadas por la Administración, porque no es indiferente a la Administración las condiciones subjetivas de las empresas en liza que deban tomarse en consideración, a pesar de que una sociedad fuese titular de la totalidad de las acciones de la solicitante de la subvención previamente a la operación de fusión.

En líneas generales, esta posición viene avalada por diversas sentencias del Tribunal Supremo, entre las que pueden citarse las de 12 de julio de 2001 y 9 de febrero de 2004, que si bien se refieren a subvenciones ya concedidas, siguiendo los criterios que se exponen en ellas podemos decir que, concebida esta línea de subvenciones como un instrumento administrativo de fomento de acciones empresariales que creen empleo estable, es precisamente el cumplimiento real y efectivo de dicho fin, el objetivo primordial que ha de ser valorado y que en este caso se hizo realidad. El hecho de que en los últimos años del período en que las condiciones debían satisfacerse, una nueva entidad haya sucedido a la empresa originaria y mantenido la creación de empleo, no puede erigirse en obstáculo formal que determine el incumplimiento de todas las obligaciones asumidas y sucesivamente realizadas por una y otra empresa. En definitiva, bien sea de forma directa o indirecta, el factor de producción que era preciso incentivar se ha llevado a efecto, sin que deba olvidarse que el cambio de titularidad del empresario conlleva la subrogación de los trabajadores que existían con anterioridad, a tenor de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y, siendo la finalidad de los incentivos económicos que nos ocupan la de crear y mantener puestos de trabajo permanentes, el esfuerzo realizado por “YYYY, S.A.” en cuanto a la creación del empleo, se completa con el de la empresa absorbente que ha mantenido la contratación durante del período establecido en la normativa reguladora, es decir, se ha llevado a cabo sucesivamente por ambas empresas.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

Rectificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial (...), en fecha 26 de septiembre de 2005, al expediente de gasto de referencia.

De no estar conforme con la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, poniéndolo en conocimiento del titular de la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 8 DE FEBRERO DE 2006, SOBRE POSIBLE EXISTENCIA DE NORMA REGULADORA QUE IMPEDIRÍA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN EXCEPCIONAL.

Se ha recibido en esta Intervención General escrito de la Consejería X, por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley General de la Hacienda Pública (en adelante LGHP) y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), respecto al informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Delegada (...), en relación con el expediente instruido para la concesión de una subvención excepcional, a favor del Ayuntamiento X, para la reparación de los forjados del edificio en donde su ubican las dependencias municipales del mismo, por importe de 132.342,08 €.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Intervención Delegada (...), con fecha 15 de diciembre de 2005, emitió informe de fiscalización de disconformidad al expediente de referencia, fundamentado en el motivo siguiente:

- El objeto de la subvención se encuentra en el ámbito de aplicación de la Orden de la Consejería de Gobernación, de 25 de enero de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones y la distribución de transferencias de capital del programa 8.1.A., Coordinación con las Corporaciones Locales, de la Dirección General de Administración Local, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción nº 5/1997, de 6 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se dictan normas para la fiscalización previa de los expedientes de las subvenciones otorgadas con carácter excepcional y en supuestos especiales, modificada por

Instrucción nº 1/2001, de 22 de mayo, no procederá la calificación y tramitación de la presente subvención como excepcional.

SEGUNDO.- Frente a dicho informe, el Viceconsejero de X, no conforme con él, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 9 de enero de 2006, a efectos de su resolución, formulando las siguientes alegaciones:

- Para la financiación genérica de infraestructuras municipales, en el programa presupuestario 8.1.A (Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales), del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2005, se contempla una aplicación, la 765.00, de infraestructuras que financia una Orden de subvenciones que se convoca anualmente y se somete a concurrencia competitiva, y otra aplicación, la 765.02, denominada Actuaciones extraordinarias en materia de infraestructuras, que aparece por primera vez en el ejercicio 2005 y que no dispone de regulación específica.

- Mediante Orden de 25 de enero de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones y la distribución de transferencias de capital del programa 8.1.A, se convocaron las subvenciones para infraestructuras, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 11 de marzo. Las destinadas a actuaciones extraordinarias en infraestructuras se han contemplado como una previsión para atender situaciones extraordinarias y excepcionales que se planteen a los entes locales a lo largo del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- La situación de urgencia provocada por desplome de forjados que motivó la solicitud de subvención del Ayuntamiento X se produjo con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes de subvenciones previsto en la Orden de 25 de enero de 2005, por lo que cabe perfectamente que, por la urgencia se acoja a las ayudas de carácter excepcional, teniendo en consideración que las obras a subvencionar se calificaron como de emergencia por el arquitecto técnico municipal.

- Independientemente de solicitarse fuera de plazo, la situación producida en el Ayuntamiento solicitante por el citado desplome se considera asimismo, que por la gravedad y urgencia, debe ser considerada como actuación extraordinaria que no tendría que entrar en un procedimiento competitivo, sino que debería ser subvencionada y resuelta por la gravedad de la misma, sin necesidad de competir con otras subvenciones para actuaciones previsibles y programadas por los ayuntamientos.

- Por todo lo cual y de acuerdo con lo previsto en la Instrucción nº 5/1997, de 6 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se dictan normas para la fiscalización previa de los expedientes de subvenciones otorgados con carácter excepcional y en supuestos especiales, modificada por Instrucción nº 1/2001, de 22 de mayo, se estima que las actuaciones subvencionables que han sido reparadas por la Intervención Delegada (...) y que son objeto de esta discrepancia, se encuentran perfectamente previstas y encajan absolutamente en la misma cuando afirma que "se considerará que concurre el carácter excepcional cuando los objetivos o finalidades subvencionables que motiven el otorgamiento de la ayuda sean imprevistos y revistan tal carácter de urgencia que la ejecución de las actividades necesarias para la consecución de tales fines no pueda demorarse a la aprobación de la oportuna normativa reguladora".

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El único motivo de disconformidad que puede inferirse del informe de fiscalización emitido por la Intervención actuante es el carácter excepcional que el órgano gestor atribuye a la subvención, excepcionalidad no apreciada por la Intervención que argumenta, aludiendo genéricamente a la Instrucción nº 5/1997, de 6 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se dictan normas para la fiscalización previa de los expedientes de las subvenciones

otorgadas con carácter excepcional y en supuestos especiales, modificada por la Instrucción nº 1/2001, de 22 de mayo, que el objeto de la subvención se encuentra en el ámbito de la Orden de 25 de enero de 2005, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones y la distribución de transferencias de capital del programa 8.1.A., Coordinación con las Corporaciones Locales, de la Dirección General de Administración Local.

De acuerdo con lo anterior, y según establece el artículo 29.1.a) de la Orden mencionada serán subvencionables, entre otras, las siguientes actuaciones en materia de mejora de las infraestructuras municipales:

> "a) Obras de edificación: primer establecimiento, reforma, reparación, conservación y demolición de Casas Consistoriales u otras dependencias municipales o edificios destinados a la prestación de servicios públicos de las entidades locales."

Por lo cual, a juicio de esta Intervención General, las obras para las que solicita la subvención el Ayuntamiento X, consistentes en la reparación de los forjados del edificio donde se ubican las dependencias municipales, serían subvencionables al amparo de lo dispuesto en el mencionado artículo.

Constatado lo anterior y en aplicación de lo previsto en el artículo 15.2 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, de acuerdo con el cual "en los expedientes de concesión se acreditará la finalidad pública o las razones de interés social o económico, así como la inexistencia de bases reguladoras específicas a la que pueda acogerse", podemos afirmar, en principio, que en la subvención objeto de esta discrepancia, no queda acreditada la concurrencia de uno de los requisitos exigidos por la normativa vigente para la concesión de una subvención excepcional.

En este mismo sentido se expresa el apartado quinto de la Instrucción de la Intervención General referida en el párrafo primero, en la cual se manifiesta que el carácter excepcional “se considerará acreditado en el caso de inexistencia de normativa específica reguladora del objeto de la subvención y, en especial, cuando los objetivos o finalidades subvencionables que motiven el otorgamiento de la ayuda, de utilidad e interés social o económico, sean imprevistos y revistan tal carácter de urgencia que la ejecución de las actividades necesarias para la consecución de tales fines, no puedan demorarse a la aprobación de la oportuna normativa reguladora”.

SEGUNDA.- Ha de señalarse que en el escrito de discrepancia no se encuentra argumento alguno tendente a desvirtuar de plano el motivo expresado en el informe de fiscalización de disconformidad, ya que no se mantiene por el órgano discrepante que las obras que se pretenden subvencionar no puedan serlo al amparo de la Orden de la Consejería de Gobernación, de 25 de enero de 2005; bien al contrario, todas las alegaciones formuladas van referidas a aspectos circunstanciales que afectan al expediente, como hemos indicado: la financiación presupuestaria, la terminación del plazo de presentación de presentación de solicitudes y el carácter de emergencia de las obras.

TERCERA.- En primer lugar, el órgano discrepante acude al argumento de la inexistencia de norma reguladora para las subvenciones que se imputen a la aplicación presupuestaria 765.02 (“actuaciones extraordinarias en materia de infraestructuras”), ya que las que se otorguen en virtud de lo dispuesto en la Orden de 25 de enero de 2005 se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria la 765.00 (“infraestructuras”).

Con esta afirmación se está confundiendo el procedimiento de gestión presupuestaria con el procedimiento administrativo y los créditos presupuestarios con los actos administrativos y las disposiciones normativas que generan obligaciones de contenido económico. Debemos recordar que el Presupuesto, en la vertiente del gasto, recoge, tan solo, el límite máximo de las obligaciones que puede reconocer la Junta de Andalucía; por ello, para ejecutarlo se requiere de actos jurídicos concretos que no vienen predeterminados (salvo supuestos especiales,

entre los que podría citarse el caso de las subvenciones nominativas) con la aprobación de los créditos iniciales de ese Presupuesto.

Por tanto, no es correcto afirmar que queda justificado el carácter excepcional de la subvención al estar financiada por la aplicación 765.02, que "no dispone de regulación específica".

Asimismo, cuando, en la alegación segunda, el órgano discrepante manifiesta que la aplicación presupuestaria 765.02, denominada "actuaciones extraordinarias en materia de infraestructuras", "se ha contemplado como una previsión para atender situaciones extraordinarias y excepcionales que se planteen a los entes locales a lo largo del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de subvenciones", vuelve a confundir el plano presupuestario con el del procedimiento administrativo, como si la existencia de dicha aplicación presupuestaria justificara, en sí misma, el carácter excepcional en la concesión de las subvenciones que van a financiarse a través de ésta (se llega incluso a identificar "actuación extraordinaria" con "procedimiento excepcional").

Continuando con el mismo análisis, la financiación de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 25 de enero de 2005 debe hacerse a través de los créditos consignados en los conceptos presupuestarios 765.00 y 765.01, del programa presupuestario 8.1.A, de la Consejería de Gobernación, porque así lo establece el artículo 31.1 de la mencionada Orden, no porque a ello obligue el Presupuesto aprobado para el año 2005.

De todo lo anterior ha de concluirse que no es el concepto presupuestario el que predetermina el carácter reglado o excepcional de una subvención, por lo que la alegación formulada por la Consejería de Gobernación en este sentido no puede prosperar.

CUARTA.- Por lo que respecta a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, esta Intervención General considera que no justifica en sí misma la tramitación de la subvención con el carácter de excepcional; es más, el propio artículo 5.2, segundo párrafo, de la Orden de la Consejería de Gobernación, de 25

de enero de 2005, determina que: “No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Por consiguiente, la solicitud presentada fuera del plazo establecido debería tenerse por no presentada, ya que, si bien el órgano concedente de una subvención ostenta la potestad de establecer las bases reguladoras de una subvención y realizar para su otorgamiento la correspondiente convocatoria pública, dentro de los límites legalmente previstos, una vez establecidas, dichas bases reguladoras y las condiciones esenciales para su concesión vinculan tanto al órgano concedente como al posible beneficiario que la solicita.

Ha de señalarse que según ha dictaminado el Consejo de Estado (Dictamen 4667/1997, de 16 de octubre de 1997) una solicitud de ayuda presentada fuera del plazo establecido para ello incumple uno de los requisitos establecidos para la concesión de la subvención en las normas aplicables.

En cualquier caso, la finalización del plazo de presentación de solicitudes no ha de significar “per se” la imposibilidad de conceder la presente subvención con el carácter de reglada si en el presente ejercicio 2006 se instituyera nuevamente esta línea y se previera, como se hace en el artículo 29.3 de la Orden de 25 de enero de 2005, la posibilidad de subvencionar proyectos cuya ejecución se haya iniciado en ejercicios anteriores en los casos en que exista compromiso por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante instrumentos protocolarios, convencionales o de cualquier otra naturaleza que acrediten fehacientemente la intención de participar en su financiación, si éstos se suscribieran, o en el caso de que la norma reguladora que se dictara admitiera como subvencionables los proyectos iniciados en el ejercicio anterior.

QUINTA.- Por último, quedaría abordar la última alegación realizada por esa Consejería relativa al carácter de emergencia de las obras para las que solicita la

subvención el Ayuntamiento, a efectos de valorar dicha circunstancia como habilitante para la tramitación de la presente subvención como excepcional.

Según se expone en la memoria justificativa incorporada al expediente, suscrita por el Ilmo. Sr. Director General de Administración Local, en fecha 11 de noviembre de 2005, con fecha 26 de septiembre del citado año, el Ayuntamiento X solicitó una subvención excepcional para afrontar la reparación de los forjados del edificio donde se ubican las dependencias municipales y, consciente de la urgencia y gravedad de la situación que supone la deformación estructural del edificio de la Casa Consistorial con riesgo de desplome, de acuerdo con el informe emitido por los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación (...), la Administración Autonómica considera oportuno participar en la realización de las obras de emergencia que se están llevando a cabo, con el objeto de paliar las diversas situaciones deficitarias y con ello, por un lado, evitar futuros daños irreversibles que pudieran afectar a personas y bienes, y, por otro, garantizar a los ciudadanos unos mínimos en la prestación de los servicios que competen al Ayuntamiento en cuestión.

Las obras de emergencia se contrataron por el Ayuntamiento con la mercantil "YYYY, S.L." y se iniciaron en fecha 30 de junio de 2005, con un plazo de ejecución de 145 días, por un importe de 104.612,88 €, al que ha de añadirse la cantidad de 27.729,80 € en que se presupuestan unas obras complementarias a ejecutar por administración, con un plazo de realización de 90 días; si bien ha de señalarse que se desconoce, por no mencionarse en el expediente, la fecha en que se detectó la circunstancia que motivó dicha declaración de emergencia.

No cuestiona esta Intervención General la calificación como "de emergencia" que haya debido atribuir el Ayuntamiento afectado a las obras que se pretenden subvencionar, pero si ha de manifestarse que no se aporta al expediente documentación alguna que avale dicha calificación, justificando que ésta haya sido provocada a causa de un acontecimiento catastrófico o de situaciones que supongan un grave peligro, en el sentido exigido por el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante LCAP), debiendo tenerse presente que la tramitación de emergencia es un supuesto excepcional, por lo que han de examinarse los supuestos de hecho determinantes de la aplicación de

este régimen con rigor, sin que baste la existencia de un acontecimiento de excepcional importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del hecho en cuestión, como se recoge en la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la tramitación de emergencia.

Por otra parte, la tramitación de un expediente de contratación de emergencia no debe conducir a atribuir a la subvención que se conceda para la realización del objeto del contrato el carácter de excepcional. La tramitación de emergencia no es más que una clase de expediente de contratación regulada en el artículo 70.3 y 72 de la LCAP, que permite a la Administración a quien competa contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la citada Ley.

Asimismo, ha de indicarse que no se justifican en el expediente los motivos que condujeron al Ayuntamiento afectado a no solicitar la subvención para dichas obras dentro del plazo establecido en la norma reguladora, desconociéndose, por tanto, si fue debido a imprevisión de la Corporación Local o a al acaecimiento de un acontecimiento catastrófico en el breve plazo que medió entre la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes y el inicio de las obras. En este sentido, ha de señalarse que la norma reguladora, en su artículo 33.2, permite presentar hasta cuatro solicitudes si el importe de la subvención solicitada no excede de 150.000,00 € y, según los datos obrantes en el Sistema Integrado Júpiter, el Ayuntamiento X tiene créditos comprometidos a su favor, en virtud de la concesión de subvenciones tramitadas al amparo de la Orden de la Consejería de Gobernación, de 25 de enero de 2005, que ascienden a un importe total de 56.733,08 €, para ampliación del cementerio municipal y para acondicionamiento de solar para zona ajardinada.

SEXTA.- En definitiva, en el marco normativo en el que ha de desenvolverse la política de la actividad administrativa y del gasto subvencional, corresponde a los

órganos de la Administración adoptar las decisiones oportunas dirigidas al establecimiento de una línea de subvenciones, su creación mediante la determinación de los supuestos de hecho que las originan, a través de la fijación de sus aspectos material, subjetivo y temporal.

En este sentido, la Consejería de Gobernación, a la hora de diseñar su política de fomento y apoyo a las Corporaciones Locales en materia de infraestructura se decantó por hacerlo a través de la oportuna norma reguladora, mediante el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones previsto en el artículo 22.1 de la LGS, es decir, el de concurrencia competitiva. Según el preámbulo de la Orden de esa Consejería, de 25 de enero de 2005, esta regulación pretende una más adecuada selección de las actuaciones subvencionables y una mejor gestión de los expedientes, estableciendo, en su artículo 4, los principios a los que se ajustará la gestión de las ayudas, en línea con lo establecido en la citada LGS: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, entre otros, para cuya consecución se adopta como procedimiento de concesión el de concurrencia competitiva.

Adoptada la decisión por el órgano competente en la materia sobre el procedimiento a seguir para gestionar estas subvenciones, siguiendo criterios del Tribunal Supremo (sentencias de 5 de octubre de 1998 y 13 de enero de 2003), podemos decir que: “El establecimiento de subvenciones puede ser discrecional para la Administración, pero una vez reguladas por la correspondiente norma y anunciadas, termina la discrecionalidad y comienza la regla y el reparto concreto que escapa del puro voluntarismo de la Administración”. Además, el otorgamiento de subvenciones ha de estar determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario, resultaría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica.

Por ello, no podría entenderse que, decidida la concesión de las subvenciones para unas determinadas finalidades y beneficiarios a través del procedimiento de concurrencia competitiva, se adoptara, en el mismo ejercicio y simultáneamente con el otorgamiento de las subvenciones tramitadas al amparo de la norma reguladora, la decisión de conceder subvenciones que tendrían cabida en ésta mediante el

procedimiento de concesión directa, que supondría la aplicación para un caso particular de un régimen jurídico singular y diferenciado del resto de potenciales beneficiarios.

En consecuencia, estima esta Intervención General que el órgano competente para establecer las bases de la concesión de estas subvenciones debiera considerar la oportunidad de: o bien optar en su futura regulación por el procedimiento de concesión de concurrencia no competitiva con un plazo abierto durante todo el ejercicio para la presentación de las solicitudes, o bien por establecer dos líneas de subvenciones diferenciadas en la norma reguladora - la destinada a financiar actuaciones previsibles y programadas en infraestructura de las Corporaciones Locales y la correspondiente a actuaciones extraordinarias e imprevisibles en dichas infraestructuras.

SÉPTIMA.- La Instrucción nº 5/1997, de 6 de febrero, de esta Intervención General, modificada por la Instrucción nº 1/2001, de 22 de mayo, se dictó en un momento en el que aún no se había producido el desarrollo reglamentario de la habilitación legal, contenida en el artículo 107 de la LGHP, para la concesión de subvenciones excepcionales.

En la actualidad, las previsiones contenidas en el precitado artículo 107 se han visto completadas con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Subvenciones, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre; sin olvidar que al presente expediente le será de aplicación, en lo procedente, lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).

El procedimiento de concesión directa de subvenciones es aplicable únicamente en los supuestos previstos en la LGS, es decir, cuando se trate de subvenciones en que se acredite la dificultad de su convocatoria pública o existan razones excepcionales de interés público, social, económico o humanitario que la desaconsejen, y se caracteriza por la no exigencia del cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, pues si la convocatoria pública es compatible con el interés público debe prevalecer este cauce.

Las subvenciones excepcionales se perfilan en el RS del siguiente modo:

- Son aquéllas que se conceden con carácter excepcional y en supuestos especiales, sin necesidad de promover concurrencia.
- Se conceden por razones de finalidad pública o interés social o económico, circunstancias que deben acreditarse en el expediente.
- Para su concesión se deberá acreditar la inexistencia de bases reguladoras específicas a las que pueda acogerse la solicitud de subvención.

Esta regulación no ignora el necesario respeto al principio de igualdad y de acceso a las subvenciones en las mismas condiciones de objetividad de todos los posibles beneficiarios, sino que se configura en razón a exigencias de superior rango a dichos principios, derivadas del interés público, que pueden prevalecer excepcionalmente sobre alguno de los principios rectores en materia de subvenciones, permitiéndose el empleo del procedimiento de concesión directa.

El supuesto de hecho habilitante para la utilización de este procedimiento de concesión directa de subvenciones, la concurrencia de un “supuesto especial” que permite conceder una subvención “con carácter excepcional”, no es preciso y determinado, por lo que la aplicación de esta norma no puede entenderse como una tarea meramente técnica, limitada a la confrontación entre el hecho acaecido y el previsto por el legislador. Incluir el primero en el ámbito del segundo es producto de un proceso, que obliga al aplicador del Derecho a un esfuerzo que podría calificarse de creativo, en tanto perfila, para un supuesto concreto, el previsto ambiguamente en la norma.

La aplicación de los preceptos citados requerirá una interpretación jurídica que habrá de realizar quien haya de decidir y tomar posición ante la situación planteada con la subvención solicitada.

En materia de aplicación de las normas jurídicas, el artículo 3.1 del Código Civil dice que “las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del

tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu o finalidad de aquéllas".

De este modo, si acudimos a uno de los criterios hermenéuticos a que alude el Código Civil, la interpretación gramatical, nos encontraremos con que los términos "excepcional" y "especial" aluden a algo singular o particular, que se diferencia de lo común o general, que ocurre rara vez.

Por tanto, habrá de considerarse la valoración que de la solicitud de subvención en cuestión haya realizado el órgano concedente de la ayuda que le conduce a atribuirle el carácter de excepcional.

A tales efectos, la Consejería de Gobernación manifiesta que, en materia de subvenciones a infraestructuras de Corporaciones Locales, la Orden de 25 de enero de 2005 viene a amparar aquellas "actuaciones previsibles y programadas por los ayuntamientos", no "situaciones extraordinarias y excepcionales que se planteen a los entes locales a lo largo del ejercicio". No obstante la conclusión a la que, tras la interpretación realizada, llega el Departamento autor de la disposición en cuestión, este Centro Directivo no comparte dicho criterio ya que no se extrae la misma consecuencia de la lectura completa de su contenido.

Ello es así por cuanto, del texto de la Orden, no se colige que las obras a subvencionar deban revestir el carácter de ordinarias y programadas por las Corporaciones Locales solicitantes; es más, mediante el presente expediente pretenden subvencionarse no sólo las obras declaradas de emergencia, sino también las consideradas por el Ayuntamiento obras complementarias de aquélla, respecto a las cuales ha de señalarse igualmente que, sin entrar a valorar los criterios seguidos por la Corporación Local solicitante, de la documentación que obra en el expediente (entre la que no se encuentra el proyecto de las obras que permita concluir que estas actuaciones no figuran en el mismo y resulta necesaria su ejecución como consecuencia de circunstancias imprevistas), no alcanza a comprenderse que los trabajos relativos a instalación eléctrica, falso techo de escayola, solado y pintura revistan dicha calificación.

En este sentido, considera esta Intervención General que si la interpretación que da el órgano discrepante ha de tenerse por válida, debería recogerse con claridad en la norma reguladora correspondiente, como ya se ha manifestado con anterioridad.

OCTAVA.- No obstante lo expuesto, esta Intervención General ya tuvo ocasión de pronunciarse, en su resolución de fecha 10 de enero de 2001 (BIJA nº 43, pág. 127-131), sobre los aspectos de carácter material y formal que han de tenerse en cuenta al analizar la acreditación por parte del órgano gestor del expediente del carácter excepcional de una subvención.

Siguiendo los criterios allí establecidos, podemos decir que, desde el punto de vista formal, los expedientes de concesión de subvenciones excepcionales requieren, por imperativo del artículo 107 de la LGHP, la aportación al mismo de los documentos en que se plasme, por una parte, el carácter excepcional de la subvención, y, por otra, la finalidad pública o interés social o económico que la justifique. Desde el punto de vista material, habrá de analizarse si se trata verdaderamente de una subvención de carácter excepcional, considerando esta Intervención General que debe ser el órgano competente en cada momento para conceder una concreta subvención el que debe valorar las concretas circunstancias concurrentes en un supuesto de hecho determinado y, en su caso, apreciar si tal realidad fáctica puede quedar subsumida en los conceptos jurídicos indeterminados de “carácter excepcional” y “supuestos especiales” contemplados en el artículo 107 de la LGHP.

Esta apreciación, que se debe efectuar por los órganos previstos en el artículo 104 de la LGHP, en ejercicio de una competencia específica inherente a la propia concesión de subvenciones, debe venir acompañada de la formal acreditación en el expediente administrativo de las circunstancias a que se ha hecho referencia anteriormente, es decir, de la concurrencia de la finalidad pública o interés social o económico que justifique su concesión y de la inexistencia de bases reguladoras específicas a las que pueda acogerse la solicitud de subvención. En el expediente examinado consta la preceptiva memoria justificativa relativa dichos extremos, a cuyo contenido se ha hecho referencia en la consideración quinta, en la que se expresan los motivos por los cuales se considera acreditada la concurrencia de un “supuesto especial” para el otorgamiento con carácter excepcional de la presente

subvención, al margen de que dicha motivación sea o no compartida por el órgano fiscalizador.

Todo ello fundamentado en el principio de que es al órgano competente en materia de gasto al que le corresponde valorar la oportunidad del mismo, sin que dichos criterios de oportunidad deban ser cuestionados con motivo de la fiscalización de los actos sometidos a este trámite. Ahora bien, ha de recordarse que toda decisión administrativa ha de respetar los requisitos de validez de los actos, aún cuando nos encontremos ante el ejercicio de potestades discrecionales.

En cualquier caso, la Intervención actuante podrá formular las observaciones que sobre el particular estime pertinentes, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda se ajuste a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable a cada caso y sin perjuicio de que, si se considera necesario, se requiera al órgano gestor, al amparo de lo dispuesto en el artículo 80.2.b) de la LGHP, la aportación a las actuaciones de informe del Gabinete Jurídico sobre los aspectos cuestionados, dadas las consecuencias que de la vulneración de las normas vigentes en materia de concesión de subvenciones pueden derivarse.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

Rectificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Delegada (...), por cuanto, teniendo en cuenta la documentación correspondiente al expediente de referencia aportada a las actuaciones, se considera que las razones alegadas para fundamentar el citado informe debieron motivar la emisión de un informe de fiscalización de conformidad con observaciones.

De no estar de acuerdo con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las

actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 17 DE FEBRERO DE 2006, SOBRE PRESPUESTO ACEPTADO TRAS EL TRÁMITE DE REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X, por el que se viene a formular discrepancia, en virtud del artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP) y del artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, respecto al informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial (…), en relación con el expediente de propuesta de resolución de concesión de una subvención reglada, a favor del Ayuntamiento Y, por importe de 5.405,00 €, para la realización del proyecto denominado "Servicio de Atención al inmigrante: información y asesoramiento".

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En relación con el referenciado expediente, la citada Intervención Provincial, con fecha 14 de diciembre de 2005 (registro de salida del día 21 del mismo mes), emitió informe de fiscalización de disconformidad fundamentado en el motivo siguiente:

- El importe de "subvención solicitada" por el Ayuntamiento Y asciende a 6.955,99 €. La propuesta de resolución de concesión se formula por importe de 5.405,00 €, cuando la única partida que se puede considerar subvencionable, según lo establecido en el artículo 3.2 de la Orden de 17 de febrero de 2005, es la correspondiente a la adquisición de dos equipos informáticos, por importe de 1.955,99 €.

SEGUNDO.- Frente al mencionado reparo, el Viceconsejero de X, no conforme con él, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 30 de diciembre de 2005, al efecto de su resolución, formulando las siguientes alegaciones en apoyo de su disentimiento:

- La nota de reparo de la Intervención Provincial no ha lugar porque la finalidad para la que el Ayuntamiento Y solicita la subvención entra dentro de los conceptos subvencionables recogidos en el artículo 3.2 de la Orden de 17 de febrero de 2005, de la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, concretamente el equipamiento mobiliario e informático de un servicio destinado a personas inmigrantes.

- Por otra parte, la nota de reparo citada hace referencia a la documentación que acompañaba a la propuesta de documento contable "AD" (…) que tuvo entrada, con fecha 30 de noviembre de 2005, en la Intervención Provincial, siendo rechazada a petición de la Delegación del Gobierno (…), sin que su contenido guarde relación con la propuesta de "AD" (…), presentada en la Intervención Provincial el 12 de diciembre de 2005, a la que se adjuntaban dos presupuestos, uno referente a mobiliario y el otro a equipamiento informático, ajustándose plenamente el expediente a la Orden reguladora de esta subvención.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter previo ha de manifestarse que tanto el informe de fiscalización de disconformidad de la Intervención Provincial, como el escrito de alegaciones del órgano discrepante, adolecen en su redacción del suficiente detalle en el devenir del expediente que nos permita determinar con precisión la cuestión que se pretende plantear en esta discrepancia, que parece derivar de la distinta

documentación incorporada a aquél en cada una de las ocasiones en que fue remitido a la Intervención competente para su fiscalización.

A la vista de las actuaciones, esta Intervención General entiende que la cuestión a dilucidar en el presente trámite de discrepancia se limita a determinar las inversiones cuyo importe ha de tenerse en cuenta a efectos de cuantificar el presupuesto aceptado que servirá de base para el cálculo de la subvención otorgable.

SEGUNDA.- Del análisis efectuado, parece desprenderse que en la documentación aportada por el beneficiario, dentro del plazo de presentación de solicitudes establecido por la norma reguladora, constan como inversiones del proyecto la adquisición de dos equipos informáticos, material de imprenta, material de papelería, material de reprografía, material didáctico, material de limpieza, suministros, amortización de materiales y equipos técnicos, así como la contratación de un monitor para formación y de dos técnicos.

En la realización de proyectos, en la modalidad de infraestructuras, a la que se acoge el Ayuntamiento solicitante, la referida Orden de 17 de febrero de 2005 dispone, en su artículo 3.2, que son conceptos subvencionables la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de Centros y servicios destinados a personas inmigrantes (objetivo 4.1 del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía).

Según lo anteriormente expuesto, habrían de considerarse no subvencionables en virtud del citado artículo, la adquisición de material no inventariable, los gastos de amortización de materiales y equipos técnicos y los gastos de personal. Por tanto, la única partida que resultaría subvencionable en el presupuesto presentado por el Ayuntamiento Y sería la de adquisición de dos equipos informáticos, presupuestados en 1.955,99 €, que debería constituir el importe máximo del presupuesto aceptado.

TERCERA.- Según consta en el expediente, con fecha 16 de septiembre de 2005 (registro de salida del día 20 del mismo mes), el Presidente de la Comisión de Baremación, acumulando dos trámites que según la norma reguladora y la LGS no deben producirse simultáneamente ni por dicho órgano, remite al Ayuntamiento Y

escrito solicitando la subsanación de su solicitud (artículo 9.2 de la Orden de 17 de febrero de 2005) e instándole, si lo considerara oportuno el beneficiario, a la reformulación de su solicitud.

Con fecha 10 de octubre de 2005, el Ayuntamiento aporta la documentación requerida en trámite de subsanación de la solicitud y acepta los términos de la propuesta de subsanación, sin proceder a su reformulación.

No obstante, es cierto que al expediente, con fecha 12 de diciembre de 2005 -es decir, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y el otorgado para la subsanación y reformulación de la solicitud- se incorporan dos presupuestos, remitidos por la Corporación Local en cuestión a la Delegación del Gobierno (…) vía fax: uno que modifica el importe del anteriormente presentado para la adquisición de dos equipos informáticos (con presupuesto de 1.608,22 €) y otro referente a la adquisición de diverso mobiliario (por importe de 3.798,77 €).

No consta en las actuaciones en que forma y a que trámite del procedimiento se acoge la presentación de esta última documentación.

CUARTA.- La posibilidad de que el beneficiario pueda ajustar su solicitud a la subvención otorgable sólo tendría cabida legal dentro de la figura de la reformulación, figura que constituye una novedad introducida por el artículo 27 de la LGS, según el cual:

> *"1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.*
>
> *2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.*

3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones."

De esta regulación se extraen los siguientes requisitos para su aplicación:

- El trámite de reformulación de solicitudes ha de estar previsto en la norma reguladora.

- La solicitud inicial ha de haber sido ya valorada favorablemente por el órgano colegiado.

- Con este trámite sólo se pretende "*ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable"*, por tanto, deberá ir dirigido a identificar de entre las actuaciones o inversiones propuestas en la solicitud aquellas cuyo compromiso se mantiene y que van a ser la únicas destinatarias de la financiación pública, excluyendo las demás, que dejan de ser objeto de la subvención. En esta fase no pueden admitirse actuaciones o inversiones que no fueron incluidas en la solicitud y que, en consecuencia, no fueron objeto de valoración.

- La reformulación de las solicitudes exige necesariamente la conformidad del órgano colegiado con carácter previo a la resolución de concesión.

QUINTA.- Analizando la concurrencia de estos requisitos en el expediente objeto de la presente discrepancia extraemos las siguientes conclusiones:

- La posibilidad de reformulación de la solicitud está recogida en el artículo 12.3 de la Orden de 17 de enero de 2005, siendo un trámite procedimental que se produce una sola vez en la tramitación del expediente. Dicho precepto dispone:

  "Previamente a la resolución de concesión, cuando el importe que se prevé conceder sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del solicitante su aceptación o, en su caso, la

reformulación de la solicitud, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones."

- La solicitud había sido valorada favorablemente por la Comisión de Baremación.

- La Corporación Local había aceptado la propuesta de subvención, sin reformular su solicitud en fecha 10 de octubre de 2005.

- La pretendida reformulación que se extrae de la documentación presentada en fecha 12 de diciembre de 2005 excede el contenido de este trámite, al pretender incluirse inversiones que no se contenían en la solicitud y que, por tanto, no fueron objeto de valoración.

- No consta la conformidad del órgano colegiado a dicha reformulación.

SEXTA.- Por lo anteriormente expuesto y dado que el trámite de reformulación sólo puede tener lugar por una sola vez y que el contenido de la documentación presentada por el Ayuntamiento Y, en fecha 12 de diciembre de 2005, no se adecua a la finalidad otorgada por la normativa vigente al mismo, habrá de considerarse que el único concepto subvencionable del presupuesto presentado sería el de adquisición de dos equipos informáticos, con un importe máximo de 1.955,99 euros.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA,

RESUELVE

Ratificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial en la Delegación Provincial (…), con fecha 14 de diciembre de 2005, al expediente de referencia.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 1 DE MARZO DE 2006, SOBRE INCIDENCIAS EN EL TRÁMITE DE SUBSANACIÓN DE UNA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN REGLADA Y SOBRE DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES SUBVENCIONABLES.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X, por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP) y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, respecto al informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial (…), en relación con el expediente de propuesta resolución de concesión de subvención reglada, a favor del Ayuntamiento Y, para el proyecto denominado "Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes", por importe de 64.595,00 €.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La mencionada Intervención Provincial, con fecha 14 de diciembre de 2005 (registro de salida del día 21 del mismo mes), formula informe de fiscalización de disconformidad al expediente de referencia, fundamentando en los motivos siguientes:

1. La solicitud de subvención no ha sido suscrita por la persona representante de la Corporación Local.

2. El importe de la subvención solicitada (894.571,96 €) coincide con el coste total del proyecto, a pesar de existir subvenciones solicitadas y concedidas para el mismo proyecto por 79.200,00 €.

3. El total financiación (1.693.711,96 €) reflejado en la solicitud es superior al coste del proyecto.

4. En el importe de la subvención solicitada se ha incluido como subvencionable una partida en concepto de gastos de personal que asciende a 320.571,96 €.

5. Se incumple el artículo 7.2.h) de la Orden de 17 de febrero de 2005, pues no se aporta el presupuesto detallado de la inversión a realizar, sólo se indica que la partida de reacondicionamiento es de 500.000,00 € y que el proyecto está en ejecución.

6. No se aporta la declaración prevista en el artículo 7.2.i) de la Orden*.*

7. No procede la propuesta de subvención, pues el propio beneficiario en el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras reconoce la inviabilidad de la remodelación del edificio.

SEGUNDO.- Frente al mencionado reparo, el Viceconsejero X, no conforme con él, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 30 de diciembre de 2005, al efecto de su resolución, formulando las siguientes alegaciones en apoyo de su disentimiento:

- La nota de reparo de la Intervención Provincial no ha lugar porque la finalidad para la que el Ayuntamiento Y solicita la subvención se incluye entre los conceptos subvencionables recogidos en el artículo 3.2 de la Orden de 17 de febrero de 2005, de la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, concretamente el reacondicionamiento de inmueble y material inventariable para la construcción, reforma, reparación y equipamiento de albergues destinados al alojamiento temporal de personas inmigrantes.

- Por otra parte, la nota de reparo citada hace referencia a la documentación que acompañaba a la solicitud inicial de subvención, que fue subsanada por el Ayuntamiento Y en fechas 3 y 25 de octubre de 2005 y no tiene relación con la propuesta de documento contable “AD” (…) objeto de reparo, con fecha de entrada en la Intervención Provincial el 12 de diciembre de 2005, al haber sido solicitado el rechazo de las anteriormente tramitadas (la xx y la yy, que tuvieron entrada en Intervención el 2 y el 30 de noviembre de 2005, respectivamente), a la que se adjuntaba la documentación presentada por el Ayuntamiento durante el mes de octubre y que subsanaba las deficiencias que se hacen constar en el informe de fiscalización, por lo que los motivos que se consignan en el mismo carecen de consistencia.

- Respecto a la inviabilidad de la remodelación del inmueble, el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 25 de octubre de 2005, reconoce que no es posible la reforma del mismo, siendo necesaria la construcción de un edificio de nueva planta, siendo éste un proyecto subvencionable conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la citada Orden de 17 de febrero de 2005.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter previo ha de manifestarse que tanto el informe de fiscalización de disconformidad de la Intervención Provincial, como el escrito de alegaciones del órgano discrepante, adolecen en su redacción del suficiente detalle en el devenir del expediente que nos permita determinar con precisión la cuestión que se pretende plantear en esta discrepancia, que parece derivar de la distinta documentación incorporada a aquél en cada una de las ocasiones en que fue remitido a la Intervención competente para su fiscalización.

SEGUNDA.- A la vista de las actuaciones, esta Intervención General entiende que son dos las cuestiones a dilucidar en el presente trámite de discrepancia:

1. Si la subsanación de defectos que alega el órgano gestor se realizó en tiempo y forma, respetando el procedimiento legalmente establecido.

2. Las inversiones que han de tenerse en cuenta en la concesión de la subvención.

TERCERA.- Del análisis efectuado de las actuaciones remitidas se desprenden las siguientes vicisitudes en la tramitación del expediente:

1. La solicitud presentada por el Ayuntamiento Y al objeto de que le fuera subvencionado el proyecto denominado "Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes", por un importe total que ascendía a 894.571,96 €, -consistente en reacondicionamiento del inmueble del Centro Social de C/ San Pablo (…), habilitando parte de las dependencias en dormitorios, sala de usos múltiples, despachos, cocina, comedor y aseos (500.000,00 €), equipamiento de oficina, lavandería y cocina y mobiliario diverso (74.000,00 €) y gastos de personal (320.571,96 €)- por un lado, padecía errores en su cumplimentación y, por otro, no adjuntaba determinada documentación exigida por la norma reguladora.

2. Según consta en el expediente, con fecha 16 de septiembre de 2005 (registro de salida del día 20 del mismo mes), el Presidente de la Comisión de Baremación, acumulando dos trámites que según la norma reguladora y la Ley General de Subvenciones no deben producirse simultáneamente ni por dicho órgano, remite al Ayuntamiento de Y escrito solicitando, en un plazo de 10 días, la subsanación de su solicitud (artículo 9.2 de la Orden de 17 de febrero de 2005) e instándole, si lo considerara oportuno el beneficiario, a la reformulación de ésta (artículo 12.3 de la norma reguladora). En concreto, en dicho documento denominado "requerimiento de subsanación y aceptación de presupuesto y subvención" se manifiesta:

    - Que han de ser objeto de subsanación determinadas deficiencias, que coinciden con las señaladas en los apartados 1, 2, 3, 5 y 6 del informe de fiscalización objeto de la presente discrepancia, al que se ha hecho antes referencia.

- Que, dado que el presupuesto presentado asciende a 894.571,96 €, la cuantía de subvención solicitada a 95.371,96 € (este Centro Directivo no ha podido constatar este importe de subvención en la documentación remitida) y la cuantía de la propuesta de subvención a 64.595,00 €, deberá proceder a aceptar dicha propuesta o a reformular la solicitud.

3. Con fecha 30 de septiembre de 2005, el Ayuntamiento remite a la Delegación del Gobierno (…) nuevo impreso de solicitud en el que se subsanan las deficiencias referidas a:

- La firma de ésta, aún cuando no queda acreditado en el expediente que la Concejal que la suscribe, que ostenta el cargo de Segundo Teniente de Alcalde, tenga atribuida las facultades de representación del Ayuntamiento (punto 1 de la nota de reparo);

- El importe de subvención solicitada, si bien han sido eliminados los datos relativos a otras subvenciones solicitadas y concedidas para la misma finalidad, circunstancia que deberán ser analizadas por el órgano concedente (punto 2 del informe de fiscalización);

- El importe del apartado “total financiación” (punto 3 del mencionado informe);

- La exclusión del presupuesto del proyecto los gastos de personal (punto 4 de la nota de reparo), reduciéndose a 64.595,00 € el coste del material inventariable solicitado; y,

- La aportación de declaración expresa responsable sobre destino del inmueble durante 7 años a la finalidad que sirve de fundamento a la solicitud, si bien no se menciona la obligación de mantener dicho destino para el resto de los bienes que pretenden subvencionarse durante 4 años (parcialmente se subsana el punto 6 de la nota de reparo).

Por otra parte, se aporta documento de aceptación de la subvención por importe de 64.595,00 €, consignando un coste del proyecto que asciende a 614.595,00 € y comprometiéndose la Corporación Local a financiar el resto del coste (550.000,00 €).

Ha de señalarse que ignora esta Intervención General si la citada documentación se incorporó al expediente al ser remitido por última vez para su preceptiva fiscalización.

4. En fecha 20 de octubre de 2005, el Presidente de la Comisión de Baremación vuelve a requerir a la entidad solicitante la aportación de la memoria detallada de las obras a ejecutar, preproyecto de obras y presupuesto desglosado, otorgándole un plazo para ello de 72 horas, sin citarse el precepto normativo en que se ampara para ello.

   Dicho requerimiento es atendido mediante la remisión, el día 25 del citado mes, de:

- El presupuesto estimado por capítulos de demolición del inmueble actual y construcción de un edificio de nueva planta en C/ San Pablo, elaborado, en fecha 24 de octubre de 2005, por el Jefe de Servicio del Departamento de Arquitectura de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento Y, que asciende a la cantidad de 996.948,00 € (IVA incluido).

- El proyecto de asignación de espacio suscrito, en fecha 23 de octubre de 2005, por el Jefe de Sección de Gestión de Centros del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento Y.

5. Con fecha 26 de octubre de 2005, la Comisión de Valoración, entendiendo subsanadas las deficiencias advertidas, eleva propuesta de resolución de concesión de una subvención al Ayuntamiento Y, por un importe de subvención 64.595,00 € y un presupuesto aceptado de 996.948,00 €, para el proyecto denominado “”Centro de Acogida Temporal”, siendo las partidas subvencionables

el reacondicionamiento de inmueble y dependencias y la adquisición de material inventariable.

CUARTA.- De lo anteriormente expuesto se deduce que -dejando al margen la adecuada o inadecuada tramitación puramente procedimental del expediente, en lo relativo al órgano competente y al momento temporal en que se requirió la subsanación de la solicitud y la aportación de los documentos preceptivos exigidos por la norma reguladora y al hecho de haberse evacuado dicho trámite en dos ocasiones, prorrogando de tal forma un plazo legalmente improrrogable-, persisten deficiencias señaladas en el informe de fiscalización emitido respecto a las que nada alega el órgano discrepante, cuales son:

- No se aporta el presupuesto detallado de la obra de reacondicionamiento general del inmueble -que según la propuesta de concesión de la subvención es la que se pretende subvencionar-, sito en C/ San Pablo, (…), de la cual su presupuesto total ascendía en la solicitud formulada a 550.000,00 €. Ello es así por cuanto el presupuesto estimativo por capítulos aportado se refiere a una obra de demolición del inmueble existente y de construcción de edificio de nueva planta en la misma ubicación por un importe total de 996.948,00 € (IVA incluido).

- No se aporta la declaración expresa responsable exigida por el artículo 7.2.i) de la norma reguladora referida al mantenimiento del destino del material inventariable subvencionado por un período de 4 años.

- No procedería conceder una subvención para unas obras de remodelación de un edificio, según la solicitud y la propuesta de resolución de concesión de subvención, cuando la misma Corporación Local reconoce la inviabilidad de éstas.

Por otra parte, ignora esta Intervención General las partidas del presupuesto presentado tenidas en cuenta por la Comisión de Valoración al elaborar su propuesta de resolución para determinar un presupuesto aceptado por importe de 996.948,00 €; puesto que en el trámite de reformulación de solicitudes el Ayuntamiento Y presentó un presupuesto que, en cuanto a los conceptos

subvencionables, ascendía a un total 614.595,00 € (documentación recibida en esa Delegación del Gobierno en fecha 3 de octubre de 2005).

No obstante, se colige de las actuaciones que se hace coincidir el importe del presupuesto aceptado con el presupuesto estimado de las obras de demolición de inmueble y construcción de un edificio de nueva planta, presentado en fecha 25 de octubre de 2005, si bien no se alcanza tampoco a comprender el motivo por el cual, en primer lugar, se acepta dicho presupuesto, al diferir del aceptado en el trámite de reformulación para la obra, y, en segundo lugar, no se incluye en el mismo la cantidad en que se presupuesta la adquisición del material inventariable que se pretende igualmente subvencionar.

QUINTA.- Queda probado en el expediente que el Ayuntamiento Y no disponía en el momento de presentación de su solicitud (31 de marzo de 2005), ni en el de aceptación del presupuesto y del importe de subvención a conceder (3 de octubre de 2005), del presupuesto detallado de las obras para las que se solicitó la subvención; documento del que tampoco disponía esa Delegación del Gobierno al momento de formular la propuesta de concesión de la subvención, ya que tan sólo se redactó, en fecha 24 de octubre de 2005, un presupuesto estimativo de obras de demolición y construcción de edificio de nueva planta, al no haberse elaborado aun el proyecto de las obras, siendo este documento el que pone de manifiesto la inviabilidad de las obras de reacondicionamiento incluidas en la solicitud.

Siendo ello así, queda también acreditado que la Comisión de Valoración no dispuso siquiera de dicho presupuesto estimado cuando, en fecha 14 de septiembre de 2005, procedió a valorar favorablemente la presente solicitud, cuando la “calidad y coherencia del proyecto” se establece como uno de los criterios de valoración en el artículo 10 de la norma reguladora, debiendo ser uno de los aspectos a tener en cuenta para atribuir la puntuación correspondiente a este apartado el “presupuesto detallado”. Por este motivo no alcanza a comprenderse en base a qué criterios pudo ser informada favorablemente la solicitud, -debiendo señalarse que no se adjunta a las actuaciones la puntuación otorgada por cada uno de los criterios de valoración-; pero, en cualquier caso, causa extrañeza el carácter favorable de ésta cuando no se acreditaba siquiera la viabilidad técnica de la pretendida inversión.

Según se establece en materia de subsanación de solicitudes en el artículo 9.2 de la Orden de 17 de febrero de 2005, si en el plazo concedido para dicho trámite no se acompañaban los documentos requeridos se tendría a la entidad solicitante por desistida de su solicitud. Respecto a esta previsión, ha de hacerse constar que el Ayuntamiento Y no aportó el presupuesto detallado de las obras de reacondicionamiento solicitadas en la remisión de documentación realizada para la subsanación de la solicitud en fecha 30 de septiembre, presentándose un presupuesto estimado el 25 de octubre de 2005, tras la reiteración del requerimiento (con lo que se infringió lo dispuesto en el artículo 23.5 de la LGS, según el cual el plazo de diez días para la subsanación de solicitudes tiene el carácter de máximo e improrrogable, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley 30/1992), y refiriéndose a un tipo de obras a realizar en el inmueble diferentes a las solicitadas y con un presupuesto superior al previsto.

Por otra parte, entiende este Centro Directivo que, tratándose de subvenciones para la ejecución de obras, el presupuesto detallado de éstas debe corresponder con el que se forma parte del proyecto de ejecución de éstas, en el caso de Corporaciones Locales en base a lo dispuesto en el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Asimismo, llama la atención que no estando redactado siquiera dicho proyecto de obras a fecha 25 de octubre de 2005 pueda admitirse el plazo de ejecución de las inversiones determinado por el Ayuntamiento Y en su solicitud: Inicio en septiembre-octubre 2005/ Finalización en enero-febrero 2006.

SEXTA.- En atención a la documentación y circunstancias concurrentes en el expediente, esta Intervención General extrae las siguientes conclusiones:

1. La Corporación Local no disponía a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (31 de marzo de 2005) de toda la documentación requerida por la norma reguladora.

2. No se ha aportado al expediente la declaración responsable relativa al mantenimiento de los bienes inventariables al destino para el que se solicita la subvención durante un plazo de 4 años (artículo 7.2.i. de la norma reguladora).

3. No se aporta presupuesto detallado, tan sólo un presupuesto estimativo de unas obras de tipo diferente al que constan en la solicitud de subvención y por un importe total superior al solicitado y al contenido en la reformulación de la solicitud.

4. No se acredita la representación que ostenta la persona que suscribe la solicitud.

5. La tramitación procedimental del expediente ha vulnerado las disposiciones vigentes en cuanto al trámite de subsanación de deficiencias.

6. La propuesta de concesión de subvención que realiza la Comisión de Baremación presenta las siguientes irregularidades:

- Consigna como objeto de la subvención las obras de reacondicionamiento de un inmueble, cuando la Corporación Local solicitante aporta un documento en que se determina la inviabilidad de dicha obra y la necesidad de demolición del edificio y el levantamiento de otro de nueva planta.

- Establece como presupuesto aceptado el presupuesto estimado de las obras de demolición y construcción en lugar de las de reacondicionamiento que son las que se pretenden subvencionar, debiendo señalarse que en el trámite de reformulación de solicitudes el Ayuntamiento había aceptado la propuesta de subvención en base a la realización de obras de reacondicionamiento y por el presupuesto de éstas últimas y de adquisición de material inventariable en una cantidad que ascendía a 614.595,00 €.

  Asimismo, ha de indicarse que dado el presupuesto total de la obra pública que se pretende subvencionar (996.948,00 €) ésta de someterse a la reserva presupuestaria del 1% cultural, según lo dispuesto en el artículo 87 y ss. de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de

Andalucía, y en el artículo 88 y ss. del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero.

- En el presupuesto aceptado no se incluye el presupuesto de adquisición del material inventariable.

6. Puesto que, finalmente, se aceptan unas inversiones y un presupuesto que difieren a los solicitados por la Corporación Local inicialmente y tras el trámite de reformulación, las cantidades y la descripción de la inversión que constan en la propuesta de resolución incurren en incongruencia con la solicitud presentada.

7. No se aporta el documento en que debe contenerse la baremación realizada por la Comisión para cada uno de los criterios establecidos en la norma reguladora.

8. No se aporta proyecto de resolución de concesión de la subvención a efectos de verificar que su contenido se ajusta a lo exigido por el artículo 13.2 del Reglamento de Subvenciones.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA.

RESUELVE

Ratificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial (…), con fecha 14 de diciembre de 2005, al expediente de referencia.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros,

por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 4 DE MARZO DE 2006, SOBRE PRESENTACIÓN, FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, DE SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE BECAS.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X , por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP) y del artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril (en adelante RIJA), respecto a los informes de fiscalización de disconformidad emitidos por la Intervención Delegada en dicha Consejería a expedientes relativos a propuestas de resolución de concesión de prórroga de las becas otorgadas a favor de Dª. AAA, D. BBB y D. CCC.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fechas 28 de octubre, 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2005, la Intervención Delegada (…) emite informes de fiscalización de disconformidad a los expedientes de referencia, fundamentándose en el siguiente motivo:

- La documentación exigida por las normas reguladoras para la concesión de prórroga de las becas ha sido presentada transcurrido el plazo establecido, tanto en el artículo 5.2 de la Orden de 20 de marzo de 2002, de la Consejería de Educación Y Ciencia, por la que se convocan, dentro del III Plan Andaluz de Investigación, ciento cincuenta becas de Formación de personal Docente e Investigador en las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía, como en el artículo 11.2 b de la Orden de 18 de mayo de 2004, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la formación de doctores en Centros de

Investigación y Universidades Andaluzas y se convocan las correspondientes al 2004.

SEGUNDO.- Frente a los citados informes, el Viceconsejero X, no conforme con ellos, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General en fecha 13 de febrero de 2006.

El órgano discrepante admite la concurrencia en los referidos expedientes de la deficiencia puesta de manifiesto por la Intervención Delegada en sus informes, si bien entiende que ello debió motivar la evacuación de un informe de fiscalización de conformidad con observaciones, en lugar de un informe de fiscalización de disconformidad, en base a las siguientes alegaciones:

- Los becarios han manifestado su voluntad expresa de continuar con la beca. El hecho de que en la convocatoria se establezca un plazo y un lugar para realizar esta manifestación responde más al objetivo de canalizar el procedimiento conociendo de antemano quienes van a disponer del derecho de prórroga y que quienes han hecho uso tengan disponible en el momento oportuno los medios para disfrutar de él, que a un mecanismo de publicidad y concurrencia.

- El otorgar las prórrogas, no perjudica a terceros ni produce ningún menoscabo a la Administración, ya que estos becarios no compiten en el procedimiento ni con terceros ni entre ellos mismos.

- En el presupuesto de la Consejería, en la partida correspondiente, están previstos los créditos para dar cobertura a estas prórrogas, que si bien se podrían utilizar para otras actividades, lo cierto es que dejarían de utilizarse para lo que inicialmente estaban previstos.

- El no otorgar estas prórrogas, en principio, produce una distorsión en el cumplimiento de los objetivos perseguidos con estas becas, ya que el solicitante de la beca y su director consideran que el desarrollo de su trabajo no está conseguido en plenitud y, por tanto, esta ampliación en el periodo de disfrute es fundamental para que éste llegue a buen termino.

- La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido no es un trámite o requisito esencial, ya que lo que debe resaltarse es el acuerdo de las partes de prorrogar la relación jurídica antes de que ésta se haya extinguido.

A la vista de los expedientes y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter previo ha de manifestarse que la discrepancia se ha formulado fuera del plazo establecido para ello, ya que el artículo 13 del RIJA establece un plazo de 10 días para presentarla, contados desde que fue recibido el reparo por el Órgano Gestor, plazo que ha sido superado en relación con los tres expedientes sobre los que recayó informe de fiscalización de disconformidad.

No obstante, dado que el plazo no debe entenderse como preclusivo, esta Intervención General entrará a conocer del asunto planteado.

SEGUNDA.- Las becas objeto del presente informe se encuentran reguladas por la Orden de 20 de marzo de 2002, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan ciento cincuenta becas de Formación de Personal Docente e Investigador en las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía, en su artículo 5.2, y en la Orden de 18 de mayo de 2004, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la formación de Doctores en Centros de Investigación y Universidades de Andalucía. En concreto, el régimen de prórroga esta establecido en los artículos 5.2 y 20, respectivamente, con un contenido similar en ambos casos, por lo que se procede a realizar el estudio de los tres expedientes de manera conjunta.

Establece el artículo 5.2 de la Orden de 20 de marzo de 2002 que:

"Las solicitudes de renovación de las becas, dirigidas a la Secretaría General de Universidades e Investigación, se formalizarán dos meses antes de que finalice cada período concedido, y en el impreso normalizado establecido al efecto, acompañado de una Memoria en que se especifique la tarea realizada (con una extensión máxima de 300 palabras), un informe del Director/a de la tesis doctoral, el curriculum vitae actualizado del solicitante y el V.º Bº. del organismo receptor del becario/a. Las solicitudes se resolverán y motivarán por la Secretaría General de Universidades e Investigación dentro del último mes del período concedido, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe de la Dirección del Proyecto de Investigación. Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta convocatoria pudiendo ser modificadas sus condiciones en las sucesivas prórrogas, según lo que se establezca en la convocatoria del correspondiente año.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la existencia de la correspondiente consignación presupuestaria".

Por su parte, la regulación establecida al respecto por la Orden de 18 de mayo de 2004 es la siguiente:

Artículo 8. Duración de las ayudas:

"La duración de las ayudas será:

a) Primera fase: Las becas se concederán por un período de un año prorrogable por otro más. Con carácter excepcional y por razones justificadas, podrá autorizarse que el período de beca se extienda hasta 12 meses más de prórroga. Para ello, será necesaria la presentación de solicitud razonada, avalada por el Director/a del trabajo y emitirse resolución expresa al respecto de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.
b) ...".

Artículo 20. Procedimiento de prórroga:

1. *“La prórroga de las ayudas deberá solicitarse expresamente por las personas y entidades beneficiarias de las mismas.*
2. *La solicitud de prórroga de las ayudas podrá presentarse por cualquiera de las vías establecidas en el apartado 1 del artículo 11 y deberá dirigirse al/la titular de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.*
3. *La solicitud de prórroga de las ayudas, deberá realizarse anualmente, debiendo formalizar la misma en el plazo máximo de los dos meses anteriores a que finalice el período de beca o de ayuda para contratación concedido.*
4. *La solicitud de prórroga de las ayudas se realizará en impreso normalizado que se establecerá al efecto y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, debiéndose acompañar de la siguiente documentación según las fases: ...*

   ...
5. *El/la titular de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, a la vista de la documentación citada, resolverá por delegación del/de la titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, no obstante, previamente podrá recabar de órgano externo independiente juicio técnico y especializado.*
6. *Las cuantías de las becas y ayudas correspondientes a las prórrogas concedidas serán las indicadas en el apartado del artículo 7 de la presente Orden.*
7. *Las ayudas prorrogadas o renovadas se regirán por lo establecido en la presente Orden, en la resolución de prórroga y por cualquier otra regulación que se establezca al efecto.*
8. *En cualquier caso, la prórroga de las ayudas estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente, así como a las disponibilidades presupuestarias existentes”.*

Es decir, en ambos casos se establece la necesidad de la presentación de la solicitud de prórroga de las becas, de forma expresa, y dentro de un determinado plazo.

TERCERA.- El órgano discrepante admite abiertamente que las tres solicitudes de prórroga de las becas concedidas se han presentado fuera del plazo establecido en las mencionadas Órdenes, por lo que la cuestión a dilucidar mediante la presente discrepancia es el alcance de una presentación fuera del plazo establecido en las bases reguladoras de las ayudas y hasta que punto es un trámite esencial para la continuidad del procedimiento que pueda motivar la emisión de un informe de fiscalización de disconformidad por parte de la una Intervención Delegada.

Para analizar si la concesión de la prórroga de las becas en cuestión depende de la presentación de la solicitud para ello dentro del plazo será preciso determinar las consecuencias que dicho plazo tiene en la relación jurídica.

Entiende esta Intervención General que las normas reguladoras establecen un plazo preclusivo para la presentación de las solicitudes de prórroga, el cual exige que los actos que puedan dar lugar a relaciones jurídicas hayan de efectuarse dentro del mismo. Por consiguiente, nos encontramos ante un plazo de caducidad, lo que implica que la falta de ejercicio de la facultad conferida dentro del plazo establecido conlleve la extinción directa y automática de la misma, tal como indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de mayo de 1990: "... tratándose del instituto de la caducidad, una constante doctrina jurisprudencial viene reconociendo su actuación automática, siempre apreciable de oficio, de forma que opera ex lege para determinar la pérdida de un derecho o acción por su no ejercicio durante el plazo señalado por la Ley, sin que las partes y los tribunales puedan contener su actividad y sus consecuencias extintivas, que se producen por el mero transcurso del tiempo, sin más...".

En consecuencia, no puede concederse la prórroga de las citadas becas a aquellas personas que lo solicitaron con posterioridad al plazo establecido por las normas reguladoras, ya que ello violaría lo dispuesto en la propia regulación de las presentes subvenciones y su concesión supondría una actuación discrecional de la

Administración, manifiestamente contraria a la normativa vigente, al reconocer, por voluntad de un órgano de la Administración, un derecho que, sujeto a un plazo preclusivo, se ha instado concluido el mismo.

El plazo constituye un presupuesto o elemento esencial del acto, cuyo incumplimiento supone el de uno de los requisitos establecidos en las normas aplicables para la concesión.

En estos supuestos no puede aplicarse el principio de autonomía de la voluntad, al tratarse de una materia regulada por normas imperativas cuya causa y finalidad trascienden al interés particular de las personas directamente afectadas, debiendo prevalecer el principio de legalidad –expresamente recogido en los artículos 9.1 y 3 de la Constitución, con carácter general, y en los artículos 103.1 y 133.4, específicamente en relación con la actividad de la Administración Pública y con las obligaciones financieras que ésta pueda contraer- que impone la aplicación de la normativa reguladora a todos los sujetos sometidos a la misma.

Las alegaciones del órgano discrepante con las que pretende fundamentar que el establecimiento de un plazo para la presentación de solicitudes de prórroga carece de cualquier consecuencia jurídica, efecto o virtualidad sobre las relaciones jurídicas a las que afecta no pueden compartirse por esta Intervención General. Para poder aceptar dichos argumentos sería preciso que las normas reguladoras no hubiesen establecido ningún plazo preclusivo, pero al establecerlo imposibilitan la concesión de prórrogas a quiénes lo solicitaron fuera de plazo, ya que hacerlo, además de suponer una conculcación de la normativa vigente, resultaría contrario a la equidad respecto de aquellos otros posibles becarios que no hayan presentado su solicitud de prórroga por entender, de acuerdo con lo dispuesto en las normas reguladoras, que pasado el plazo ya no tenían derecho a ella.

Entiende esta Intervención que si el órgano concedente de las becas considera que *“el no otorgar estas prórrogas, en principio, produce una distorsión en el cumplimiento de los objetivos perseguidos con estas becas, ya que el solicitante de la beca y su director consideran que el desarrollo de su trabajo no está conseguido en plenitud y por tanto esta ampliación en el periodo de disfrute es fundamental para*

que éste llegue a buen termino", y, por tanto, considera imprescindible la prórroga de las mismas, deberá abrir, mediante Orden o Resolución publicada en el BOJA, un nuevo plazo para todos los posibles beneficiarios y no sólo para los que presentaron su solicitud de prórroga fuera de plazo.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

Ratificar los informes de fiscalización de disconformidad emitidos por la Intervención Delegada (…), con fechas 28 de octubre, 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2005, a los expedientes referenciados.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 8 DE MARZO DE 2006, SOBRE POSIBLE EXISTENCIA DE NORMA REGULADORA QUE IMPEDIRÍA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN EXCEPCIONAL.

Se ha recibido en esta Intervención General escrito de la Consejería X por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley General de la Hacienda Pública (en adelante LGHP) y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), respecto al informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Delegada en dicha Consejería, en relación con el expediente instruido para la concesión de una subvención excepcional, a favor del Ayuntamiento Y (Granada), para la construcción de un edificio multifuncional–Centro de Día, en el barrio "AAA", por importe de 250.000 €.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Intervención Delegada (…), con fecha 15 de diciembre de 2005, emitió informe de fiscalización de disconformidad al expediente de referencia fundamentado en el motivo siguiente:

- El objeto de la subvención se encuentra en el ámbito de aplicación de la Orden de la Consejería de Gobernación, de 25 de enero de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones y la distribución de transferencias de capital del programa 8.1.A., Coordinación con las Corporaciones Locales, de la Dirección General de Administración Local, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción nº 5/1997, de 6 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se dictan normas para la fiscalización previa de los expedientes de las subvenciones otorgadas con carácter excepcional y en supuestos especiales, modificada por la

Instrucción nº 1/2001, de 22 de mayo, no procederá la calificación y tramitación de la presente subvención como excepcional.

SEGUNDO.- Frente a dicho informe, el Viceconsejero X, no conforme con él, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 9 de enero de 2006, a efectos de su resolución, formulando las siguientes alegaciones:

- Para la financiación genérica de infraestructuras municipales, en el programa presupuestario 8.1.A (Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales), del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2005, se contempla una aplicación, la 765.00, de infraestructuras que financia una Orden de subvenciones que se convoca anualmente y se somete a concurrencia competitiva, y otra aplicación, la 765.02, denominada "Actuaciones extraordinarias en materia de infraestructuras", que aparece por primera vez en el ejercicio 2005 y que no dispone de regulación específica.

- Mediante Orden de 25 de enero de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones y la distribución de transferencias de capital del programa 8.1.A, se convocaron las subvenciones para infraestructuras, a través de las que se financian inversiones destinadas a la prestación de servicios públicos obligatorios, señalados en el artículo 26 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local.

- La solicitud de subvención formulada por el Ayuntamiento Y, presentada en el registro de la Consejería de Gobernación en fecha 19 de octubre de 2005, tiene por finalidad la construcción de un edificio en el que acoger todas las necesidades del barrio "AAA" en el ámbito de cultura, bienestar social y juventud, ya que las actividades en estas materias se vienen desarrollando en un edificio en régimen de alquiler y semiacondicionado para el uso establecido, que no ofrece la calidad adecuada a los usuarios, ni tampoco la cobertura de demanda que se ha originado en la zona donde, debido a la densidad de una población en continuo crecimiento, se arrastra un déficit de equipamiento de toda índole derivado del abandono histórico y de la degradación y marginación de la misma.

- Por el carácter de los servicios que se pretenden satisfacer en el edificio a construir, esta actuación no encaja en el objeto subvencionable de la Orden citada de convocatoria de subvenciones. Por ello, desde la Dirección General de Administración Local se ha considerado que la importancia de las actividades a atender y la gravedad y la urgencia de las necesidades planteadas en la localidad, hacen conveniente y adecuado dar respuesta a la solicitud de subvención extraordinaria y excepcional, que se encuentra posibilitada por lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Por todo lo cual y, de acuerdo con lo previsto en la Instrucción nº 5/1997, de 6 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía por la que se dictan normas para la fiscalización previa de los expedientes de subvenciones otorgadas con carácter excepcional y en supuestos especiales, modificada por la Instrucción nº 1/2001, de 22 de mayo, se estima que las actuaciones subvencionables que han sido reparadas por la Intervención Delegada (...) y que son objeto de esta discrepancia, se encuentran perfectamente previstas y encajan absolutamente en la misma cuando afirma que “se considerará acreditado el carácter excepcional en el caso de inexistencia de normativa específica reguladora del objeto de la subvención”.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter preliminar, se pone de manifiesto que dado que al mismo tiempo que la presente discrepancia se ha recibido otra interpuesta igualmente por esa Consejería y relativa al expediente instruido para la concesión de una subvención excepcional a favor del Ayuntamiento Z y siendo el motivo del informe de disconformidad emitido por la Intervención Delegada el mismo y algunas de las alegaciones formuladas en el escrito de discrepancia idénticas, en la presente resolución se reproducirán argumentaciones ya expresadas en la dictada por esta

Intervención General con fecha 8 de febrero de 2006, que interesen al expediente que nos ocupa.

SEGUNDA.- El órgano discrepante utiliza, en primer lugar, el argumento de la inexistencia de norma reguladora para las subvenciones que se imputan a la aplicación presupuestaria 765.02 ("actuaciones extraordinarias en materia de infraestructuras"), ya que las que se otorguen en virtud de lo dispuesto en la Orden de 25 de enero de 2005 se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 765.00 ("infraestructuras").

Respecto a este extremo, ha de darse por reproducido el contenido de la consideración tercera de la resolución emitida por esta Intervención General el pasado 8 de febrero, a la que se ha hecho mención en la consideración primera anterior:

> *"... Con esta afirmación se está confundiendo el procedimiento de gestión presupuestaria con el procedimiento administrativo y los créditos presupuestarios con los actos administrativos y las disposiciones normativas que generan obligaciones de contenido económico. Debemos recordar que el Presupuesto, en la vertiente del gasto, recoge, tan solo, el límite máximo de las obligaciones que puede reconocer la Junta de Andalucía; por ello, para ejecutarlo se requiere de actos jurídicos concretos que no vienen predeterminados (salvo supuestos especiales, entre los que podría citarse el caso de las subvenciones nominativas) con la aprobación de los créditos iniciales de ese Presupuesto.*
>
> *Por tanto, no es correcto afirmar que queda justificado el carácter excepcional de la subvención al estar financiada por la aplicación 765.02, que "no dispone de regulación específica"...*
>
> *Continuando con el mismo análisis, la financiación de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 25 de enero de 2005 debe hacerse a través de los créditos consignados en los conceptos presupuestarios 765.00 y 765.01, del programa presupuestario 8.1.A, de la Consejería de Gobernación,*

porque así lo establece el artículo 31.1 de la mencionada Orden, no porque a ello obligue el Presupuesto aprobado para el año 2005.

De todo lo anterior ha de concluirse que no es el concepto presupuestario el que predetermina el carácter reglado o excepcional de una subvención, por lo que la alegación formulada por la Consejería de Gobernación en este sentido no puede prosperar".

TERCERA.- El segundo de los argumentos utilizados por la Consejería X para desvirtuar el criterio expresado en el informe de fiscalización consiste en la mera aseveración de que el objeto de la subvención no se corresponde con el objeto subvencionable por la Orden de 25 de enero de 2005, afirmando, para ello, que la concesión de las subvenciones convocadas por esta norma reguladora financian inversiones destinadas a la prestación de los servicios públicos obligatorios señalados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

El preámbulo de la citada norma expresa que ésta se dicta para el cumplimiento de una de las finalidades de la Consejería X, cual es la de "promover la cooperación con las Corporaciones Locales con objeto de dotar a todos los municipios de la Comunidad Autónoma de la infraestructura y el equipamiento básicos, y garantizar un nivel satisfactorio en la prestación de servicios". Asimismo, explicita que "en relación con las ayudas para mejora de infraestructuras, se han ampliado las actuaciones subvencionables, incluyéndose, además de la línea de Casas Consistoriales y otras dependencias municipales, otras obras de infraestructura básica tales como alumbrado, alcantarillado, acceso a núcleos de población, cementerios y parques municipales".

En este sentido, el artículo 29 (Actuaciones subvencionables en materia de mejora de infraestructuras municipales) de la mencionada Orden establece: *"Serán subvencionables las siguientes actuaciones:*

a. *Obras de edificación: primer establecimiento, reforma, reparación, conservación y demolición de Casas Consistoriales u otras dependencias municipales o edificios destinados a la prestación de servicios públicos de las entidades locales.*

b. *Obras de infraestructura básica: alumbrado público, alcantarillado y acceso a núcleos de población.*

c. *Obras de otros equipamientos y servicios: Construcción, ampliación o reforma de cementerios y parques municipales.*

   Las subvenciones que se otorguen para alguna de las actuaciones señaladas en los apartados anteriores, incluirán, en su caso, los gastos derivados de honorarios por redacción de proyectos técnicos, estudios de seguridad y salud, dirección facultativa de obras y ensayos geotécnicos preceptivos.

d. *Equipos y vehículos para servicios de recogida de residuos y limpieza viaria.*

e. *Adquisición de solares o edificios.*

f. *Adquisición de otros bienes inventariables destinados a la prestación de servicios públicos obligatorios señalados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, siempre que dicho objeto subvencionable no disponga de otra línea específica de subvención incluida en otras secciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía".*

Si atendemos a la literalidad del transcrito artículo 29 de la Orden de 25 de enero de 2005, de la Consejería de Gobernación, se advierte que no aparece en el texto mención alguna a los "servicios públicos obligatorios", alegados por el órgano discrepante, salvo en su apartado f), referido a las "adquisiciones de otros bienes inventariables".

En cualquier caso, ha de reconocerse que, si bien las infraestructuras enumeradas en los apartados b) y c) del artículo 29 se recogen entre los servicios públicos

obligatorios enumerados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, resulta, por el contrario, del apartado a) del precitado artículo una determinación más amplia de las actuaciones subvencionables en esta materia, al referirse genéricamente a obras relativas a edificios destinados a la "prestación de servicios públicos de las entidades locales", sin exigir la concurrencia del requisito antes citado, es decir, que se trate de servicios públicos obligatorios.

Sobre este punto ha de mencionarse que, según establece el artículo 85.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, "son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de la competencia de las Entidades Locales"; disponiendo, por su parte, el artículo 25.1 del mismo texto legal que "el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal".

CUARTA.- No obstante no poder prosperar las alegaciones efectuadas por el órgano discrepante para desvirtuar el criterio expresado por la Intervención competente, observa esta Intervención General que, en la documentación presentada por el Ayuntamiento, se manifiesta que la subvención solicitada será destinada a construcción de un edificio multifuncional-Centro de Día que acoja todas las necesidades del barrio "AAA" en el ámbito de cultura, bienestar social y juventud (solicitud suscrita por el Alcalde de Y, en fecha 18 de octubre de 2005), con destino a uso público, específicamente a equipamiento comunitario (...) (certificados de la Arquitecta Jefe del Servicio de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento Y, de fecha 14 de noviembre de 2005), en el que se contendrán: Centro de Día, peluquería, cafetería, centro juvenil (juegos recreativos e información), centro de video, sede de asociaciones de vecinos, talleres, salón multiusos, oficina municipal, comunicaciones y aseos (Anexo nº II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de proyecto y obras redactado por el Ayuntamiento Y).

Los bienes de las Entidades Locales, según la normativa vigente, se clasifican en bienes de dominio público y bienes patrimoniales. A su vez, los bienes de dominio público serán de uso o servicio público. Son bienes de uso público local los caminos,

plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general, cuya titularidad sea de la Entidad Local. Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de las competencias o fines públicos de responsabilidad de las Entidades Locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales, sedes de las Juntas Vecinales, mercados, museos, montes catalogados de utilidad pública, escuelas, cementerios, piscinas y zonas de deporte y, en general, cualesquiera otros bienes destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos.

Por tanto, si el edificio que se construya no será destinado a la prestación de servicios públicos, sino al uso público, tal como se indica en la documentación remitida, habría de concluirse la posible tramitación de esta subvención con el carácter de excepcional, siempre que no exista otra norma reguladora para los pretendidos fines, ya que dicha inversión no resultaría subvencionable en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la Orden de la Consejería de Gobernación, de 25 de enero de 2005, salvo que la utilización de dicho edificio de uso público sea requisito necesario para la prestación de un servicio público local, en cuyo caso, la conclusión sería justamente la contraria, es decir, su subvencionabilidad al amparo del citado precepto.

Sin embargo, ha de señalarse que, al menos, la prevista ubicación en el edificio de un Centro de Día y de oficinas municipales determinaría, al menos en parte, que éste se destinaría a la prestación de servicios públicos, supuesto este en el que habría de mantenerse su subvencionabilidad a través de la Orden antes citada.

En otro orden de cosas, ha de mencionarse que en la documentación aportada por el Ayuntamiento se hace incidencia especial en que dicho edificio constituirá equipamiento comunitario del barrio, con destino a uso público, mientras que de la propuesta de resolución de concesión parece desprenderse que se trataría de un edificio destinado a su uso privativo por asociaciones, al denominar la inversión subvencionada como “Centro Multifuncional de Asociaciones”.

En consecuencia esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

Rectificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Delegada (…), en fecha 15 de diciembre de 2005, al expediente de referencia, si bien deberá aportarse a las actuaciones certificado, expedido por el órgano competente del Ayuntamiento Y, acreditativo de que el edificio cuya construcción se pretende subvencionar no será destinado a la prestación de servicios públicos de su competencia.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, al Consejo de Gobierno, en función de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 30 DE MARZO DE 2006, SOBRE SUPERACIÓN DEL LÍMITE TEMPORAL MÁXIMO ESTABLECIDO PARA EL DISFRUTE DE UNA BECA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X, por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP) y del artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, respecto al informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Delegada en esa Consejería, en relación con un expediente de gasto relativo a una propuesta de resolución de concesión de una beca de Investigación.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente, se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Recibida propuesta de documento contable "AD" correspondiente al referido expediente de gasto, la Intervención Delegada competente, en fecha 3 de febrero de 2006, emite informe de fiscalización de disconformidad fundamentado en el motivo siguiente:

- La beneficiaria excede del limite establecido en el artículo 7.3 de la Orden de 27 de septiembre de 2001, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas de Formación e Investigación, ya que la finalidad y la materia por las que se concede coincide con las anteriormente desarrolladas.

SEGUNDO.- Frente al mencionado informe de fiscalización, el Viceconsejero X no conforme con él, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 14 de febrero de 2006, al efecto de su resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 de la LGHP y 13 del RIJA.

Las alegaciones en apoyo de su disentimiento pueden sintetizarse en la forma siguiente:

La Orden de 27 de septiembre de 2001 por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas de Formación e Investigación de la Consejería de Gobernación, dispone en su artículo 7.3.-"Si se hubieran disfrutado con anterioridad becas de la misma finalidad y materia que la convocada, en ningún caso la acumulación máxima entre esta y las anteriores podrá exceder de treinta y seis meses".

Las distintas becas del ámbito de la Administración Local convocadas, han versado sobre diferentes materias y finalidades:

- La beca convocada en 2001, que se adscribió al Servicio de Gobierno Local, se destina de manera genérica al tratamiento estadístico de datos locales autonómicos, estatales y europeos.

- Las becas convocadas en el ejercicio 2003 se destinaron al análisis de datos económicos contenidos en el sistema de información de la Dirección General de Administración Local (SIDGAL), que corresponden a subvenciones incluidas en el Plan de Cooperación Municipal, cuyo análisis y, seguimiento corresponde al Servicio de Cooperación Económica, adscribiéndose a este las tres becas concedidas con esta finalidad.

- Y finalmente la convocatoria de becas realizada mediante Resolución de 19 de septiembre de 2005, con la finalidad y materia denominada "Análisis, tratamiento y explotación estadística de datos presupuestarios y de infraestructura en el ámbito local", está destinada a realizar tareas de investigación en dos actividades estadísticas oficiales que se incluyen en los Programas Estadísticos Anuales como responsabilidad de la Consejería X.

Dª AAA resultó adjudicataria de dos becas distintas, correspondientes a las citadas convocatorias de 2001 y 2003. Dichas becas tuvieron una duración de 12 meses cada una y ambas fueron prorrogadas por igual periodo.

Dª AAA, ha participado en el proceso de selección de la convocatoria de becas realizada mediante Resolución de 19 de septiembre de 2005, cuya finalidad y materia no coincide con las anteriormente disfrutadas, obteniendo una puntuación en ambas fases que le permite acceder a la beca cuya concesión es objeto de la presente discrepancia.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La cuestión a dilucidar en la presente discrepancia se centra en determinar si efectivamente se excede o no del limite establecido en el citado artículo 7.3 de la Orden de 27 de septiembre de 2001, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas de Formación e Investigación y se convocan para el ejercicio de 2001 (normas reguladoras en adelante.)

Para ello será preciso concretar qué se entiende por "finalidad" y "materia" de las becas concretas que se convocan. A este respecto, en base al artículo 3 de la Orden de 27 de septiembre de 2001, puede hablarse de una finalidad y materia que podemos calificar general o común a todas las becas que se convoquen conforme a las normas reguladoras. El citado artículo establece que "Las becas que se regulan en esta Orden, tendrán como finalidad la formación de personas físicas o la realización de estudios y trabajos de investigación en materias de la competencia de la Consejería X."

Por otro lado el artículo 4.2 e) de la Orden de 27 de septiembre de 2001 relativo al contenido mínimo de las convocatorias anuales futuras, se refiere como mención obligatoria a la "finalidad y materia de las becas", referida concretamente a cada una de las becas que se convoquen.

SEGUNDA.- Atendiendo a la distinción expuesta en el apartado anterior, se puede observar que en cada una de las convocatorias realizadas en el marco de la precitada norma reguladora, en las que ha participado Dª AAA, no coincide la finalidad y materia concreta de las becas:

- Apartado 5.e) de la Disposición Adicional Unica de la Orden de 27 de septiembre de 2001. Convocatoria de becas para el año 2001:

  "Finalidad y materia: Explotación estadística en el ámbito de La Administración Local"

- Apartado 6.2 del Anexo de la Orden de 3 de noviembre de 2003 :

  Finalidad y materia: Formación e investigación en materia de Administración local andaluza: análisis y tratamiento económico y estadístico de la información municipal recogida en el SIDGAL (Sistema de Información de La Dirección General de Administración Local).

- Apartado 6.2 del Anexo de la Resolución de 19 de septiembre de 2005:

  Finalidad y materia: Análisis, tratamiento y explotación estadística de datos presupuestarios y de infraestructura en el ámbito local.

TERCERA.- Conforme al tenor literal de artículo 7.3 de la Orden de 27 de septiembre de 2001, la limitación temporal del disfrute de las becas a treinta y seis meses, viene referida a aquellas que tengan la misma finalidad y materia que la convocada y en consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, al no concurrir dicho requisito en el caso concreto objeto de la presente discrepancia, este Centro Directivo entiende que la beneficiaria no excede del límite temporal pudiendo en su caso resultar adjudicataria de la beca convocada en 2005.

CUARTA.- No obstante lo anterior, este Centro Directivo estima pertinente realizar una observación, por cuanto partiendo de la consideración de estas becas como instrumento destinado, según se señala en el preámbulo de la mencionada Orden de la Consejería de Gobernación, de 27 de septiembre de 2001, a aportar al titulado universitario con estudios recientemente concluidos una experiencia en las áreas de la competencia de la Consejería X que facilite su posterior incorporación al mercado Laboral, resulta por lo menos llamativo la continuidad de una misma persona durante 4 años como becaria, periodo al que en su caso habrá que añadir al menos un año más correspondiente a la beca convocada en 2005, así como las que pudieran adjudicarse en el futuro en virtud de convocatorias posteriores, más sus prórrogas.

La alternancia en el disfrute de las becas, dando La oportunidad a otras personas a acceder a ellas, favorece el cumplimiento del principio de igualdad real entre todos los que pudiendo acceder a las becas no fueron seleccionados en convocatorias anteriores evitando, por otra parte, la perpetuación en su disfrute de quienes al acumular más méritos, por haber accedido a ellas siempre, resultan seleccionados en detrimento de los demás aspirantes.

Por ello pudiera resultar oportuno fijar criterios de selección que favorezcan el cumplimiento de la finalidad y motivación que impulsaron a esa Consejería al establecimiento de las precitadas becas.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con I0 establecido en el artículo 84 de La LGHP y en el artículo 13 del RDA

RESUELVE

Rectificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Delegada (…), en fecha 3 de febrero de 2006, al expediente de gasto de referencia.

De no estar conforme con la presente Resolución de conformidad con I0 dispuesto en el artículo 84 de La LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las

actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, poniéndolo en conocimiento del titular de la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 4 DE MAYO DE 2006, SOBRE LA FORMA EN QUE HA DE JUSTIFICARSE UNA SUBVENCIÓN.

Se ha recibido en esta Intervención General su escrito del pasado 13 de marzo, recibido el día 31 del referido mes, relativo a la justificación de la subvención excepcional resuelta mediante Orden del Consejero X de fecha 03.09.2003, a favor de la ONGD AAA, por importe de 1.505.056,06 euros, para la realización del proyecto "ayuda de emergencia para la población iraquí".

En dicha comunicación se pone de manifiesto, de forma simplificada, que dada la complejidad del análisis pormenorizado de todos los más de 2.284 documentos justificativos, de los nueve tomos recibidos de la mencionada ONGD y la incapacidad de esa Agencia para efectuar las traducciones de los documentos justificativos redactados en su mayoría en el idioma kurdo y en inglés,"...se propone que, a la vista de las especialidades del expediente que nos ocupa, se autorice por ese Centro, la comprobación de la documentación justificativa a través de la verificación de la relación de documentos remitida por la Entidad y del análisis del informe final del proyecto remitido, acompañado de una certificación del máximo responsable de la ONGD que haga constar que las facturas justificativas responden efectivamente a pagos realizados y derivados de la finalidad para la que se concedió la subvención, que la ONGD los asume como propios, que los originales quedan depositados en la sede central de la ONGD donde estarán disponibles para cualquier inspección, que la entidad los presentará a la Agencia en el caso de que los requiera y que no han sido presentados ante otras Administraciones Públicas como justificante de ayudas concedidas por aquellas en los que respecta a partidas presupuestarias financiadas con cargo a la subvención de la Consejería X".

De la anterior subvención es necesario poner de relieve, como se hace en el escrito referenciado, que según la Orden de concesión, la justificación económica del proyecto se realizaría por la ONGD beneficiaria en el plazo de tres meses desde fin de la ejecución, "...mediante la presentación de un informe final de carácter técnico

acompañado de los documentos acreditativos del gasto realizado que serán originales o copias compulsadas".

Examinadas las cuestiones planteadas, esta Intervención General, considera de aplicación los siguientes preceptos normativos:

1º. Una de las obligaciones esenciales de los beneficiarios de las subvenciones concedidas por los órganos de la Administración de la Junta y de sus Organismos Autónomos es, además de realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y los plazos establecidos, la de justificar ante la entidad concedente tal realización. En tal sentido se pronuncian preceptos legales tales como los artículos 105.b) y 108.f) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o el artículo 14.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2º. El Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA), en sede de intervención de la aplicación de las subvenciones, y como desarrollo reglamentario de los preceptos legales anteriores, contempla que los beneficiarios de subvenciones deberán justificar documentalmente, ante la Consejería u Organismo que haya otorgado la subvención, que ha sido ejecutada la obra, realizado el servicio o cumplida la finalidad que haya motivado la concesión (artículos 39 y 40.1). También debe tenerse en cuenta, en este mismo nivel de jerarquía normativa, lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

3º. El mencionado artículo 40.1 del Reglamento de Intervención, en su párrafo segundo, establece que: "La Dirección General correspondiente o, en su caso, la Delegación Provincial, a efectos de la justificación de la subvención ante la Intervención, remitirá a ésta, certificación acreditativa de la aplicación de la subvención a las finalidades para las que se concedió. No obstante, la Intervención podrá, en cualquier momento, requerir la documentación a que se refiere el párrafo anterior". Esta última previsión reglamentaria ha sido objeto de la Instrucción 3/2002,

de 30 de abril, de esta Intervención General, por la que se establece el modelo de certificación acreditativa del empleo de subvenciones.

De toda la anterior normativa jurídica se deducen las siguientes consideraciones relacionadas con las cuestiones planteadas en su escrito:

PRIMERA.- Corresponde en exclusiva al órgano competente de la Consejería X la valoración de los documentos justificativos de la realización de la actividad subvencionada presentados por la entidad beneficiaria, de acuerdo con el marco normativo general antes descrito y las condiciones establecidas en la propia Orden de concesión de la subvención. El resultado de tal valoración deberá concretarse, si fuese favorable, en la emisión de la certificación acreditativa de la aplicación de la subvención concedida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.1 del RIJA.

SEGUNDA.- Existiendo un marco jurídico obligatorio regulador de la justificación de las subvenciones, y siendo objeto de la resolución de concesión de subvención tanto la forma como el plazo de justificación por parte del beneficiario de la aplicación de los fondos percibidos, esta Intervención General carece de la competencia necesaria para prestar la autorización requerida por esa Dirección.

TERCERA.- Es necesario tener en cuenta que tanto las bases reguladoras como, en su defecto, las resoluciones de concesión de subvenciones excepcionales, deberán establecer tanto el plazo como la forma de justificación de las subvenciones concedidas, debiendo ponderarse en este último extremo las peculiaridades de la actividad subvencionada y, en su virtud, determinarse el concreto sistema de justificación de entre los contemplados en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a saber: cuenta justificativa del gasto realizado, módulos o presentación de estados contables.
Es cuanto esta Intervención General debe informar.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 7 DE JULIO DE 2006, SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LOS PERCEPTORES DE LAS AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA, EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A TRABAJADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS, ACREDITEN, CON ANTERIORIDAD A DICTARSE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN, QUE SE HALLAN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Con fecha 6 de junio de 2006 se ha recibido en esta Intervención General escrito de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, de la Consejería de Empleo, de fecha 2 de junio, por la que se viene a formular consulta en relación con las ayudas previas a la jubilación ordinaria, en el Sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, reguladas actualmente por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994.

En dicha consulta se pone de manifiesto que esta Intervención General, en fecha 22 de enero de 1998, y en contestación a otra consulta de la correspondiente Intervención Delegada, consideró que tales ayudas tienen un claro carácter asistencial y sus beneficiarios, por tanto, están exonerados de la obligación de acreditar, antes del cobro, de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.

Teniendo en cuenta este antecedente, la Dirección General ahora consultante expone que: “Como quiera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones introduce en su artículo 14.1.e) la obligación del beneficiario de acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, por la presente, en consideración al carácter asistencial de tales ayudas previas a la jubilación ordinaria, elevamos consulta si ha de entenderse o no que tales beneficiarios deben acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, teniendo en cuenta que ya se

estima están exonerados de dicha obligación antes del cobro, según la respuesta de esta Intervención de fecha 22 de enero de 1998".

Antes de abordar directamente, la cuestión sometida a consulta, es necesario poner de manifiesto la falta de vigencia del informe-contestación de este Centro Directivo emitido el pasado 22 de enero de 1998.

En efecto, dicho informe se fundamentaba, como no podía ser de otra manera, en disposiciones normativas generales vigentes al día de su emisión como por ejemplo, y de manera significativa, la **Orden de 31 de octubre de 1996**, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social por los beneficiarios de subvenciones y ayudas y los supuestos de exoneración de tal acreditación. Pero esta Orden fue expresamente derogada (Disposición derogatoria única) por la Orden de 12 de septiembre de 2003 que vino a sustituir su regulación en esta misma materia. Esta última Orden, a pesar de no haber sido objeto de una derogación de carácter expreso, debe entenderse que en la actualidad también ha perdido su vigencia en la mayor parte de su regulación, debido a la entrada en vigor del nuevo régimen jurídico de las subvenciones establecido en el artículo 28 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas tributarias, administrativas y financieras y de la Disposición derogatoria única de esta norma ("Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley..."). En este sentido, y tras la implantación del mencionado nuevo régimen de las subvenciones derivado, efectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos en los que queda derogada la regulación de la Orden de 12 de septiembre de 2003 (y, por tanto, de aquellos otros aspectos contenidos en el informe de la Intervención General de 22 de enero de 1998 que, no obstante tener su fundamento en la Orden de 31 de octubre de 1996, pudieran quedar también amparados por aquella):

a) La obligación del beneficiario de cualquier subvención de acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudor en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, debe cumplirse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión (artículo 14 de la Ley 38/2003 y 29 de la Ley 3/2004).

b) Las normas reguladoras de cada subvención son las que podrán establecer, de manera justificada, la obligación de acreditar, antes de proponerse el pago, que los beneficiarios se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como que no son deudores de la Comunidad Autónoma por cualquier otro ingreso de Derecho Público (artículo 32 de la Ley 3/2004).

c) En ninguna de las obligaciones contempladas en los apartados anteriores es posible que la Consejería de Economía y Hacienda establezca exoneración subjetiva alguna de carácter general y subjetivo. En este sentido, además de la derogación de la letra e) del artículo 105 de la Ley General de la Hacienda Pública, que contemplaba el establecimiento por dicha Consejería de los supuestos de exoneración (Disposición derogatoria única de la Ley 3/2004), debe tenerse en cuenta que solo la normativa reguladora de cada subvención podrá, en atención a la naturaleza de la misma, exceptuar de las prohibiciones establecidas legalmente para poder adquirir la condición de beneficiario (artículo 29 de la Ley 3/2004).

Concluida la falta de vigencia del informe de esta Intervención General de 22 de enero de 1998 debido, como se acaba de exponer, a la derogación de las normas generales que fundamentaron su emisión, procede ahora abordar la cuestión planteada que no es otra que si es posible entender que los beneficiarios de las ayudas de que se trata deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social antes de dictarse la propuesta de concesión.

A fin de dar una correcta respuesta a la anterior cuestión, y junto a toda la normativa examinada hasta ahora, se deben tener en cuenta dos importantes consideraciones a cerca de la Orden de 5 de octubre de 1994, del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, reguladora de estas ayudas previas a la

jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social, a favor de trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, a saber:

1ª.- Las ayudas objeto del presente informe reúnen todos los requisitos necesarios para considerarlas subsumidas en el concepto legal de subvención que viene recogido en todas las normas de aplicación (Artículos 2 de la Ley 38/2003 y 103 de la Ley General de la Hacienda Pública). Por otra parte, ninguno de los supuestos previstos en la mencionada Ley estatal básica carentes del carácter de subvención, ni tampoco aquellos otros de exclusiones de su ámbito de aplicación, tienen clara aplicación a las ayudas examinadas. Finalmente debe tenerse en cuenta la Disposición Final Tercera de la Orden Ministerial que establece la aplicación supletoria de la anterior normativa estatal en materia de subvenciones) en todo aquello que no venga dispuesto en la misma.

2ª.- La Orden Ministerial de aplicación no establece exoneración alguna de las prohibiciones establecidas con carácter general para la obtención de la cualidad de beneficiarios.

Si se examinan las dos anteriores consideraciones, no cabe otra respuesta a la cuestión planteada que en tanto se mantenga la actual redacción de la Orden Ministerial de 5 de octubre de 1994, los beneficiarios de las ayudas contempladas en la misma deben acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución de concesión, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que esté establecido en la actualidad.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2006, SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE EXONERAR DE FISCALIZACION PREVIA LOS GASTOS POR TRANSFERENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES PARA LA NIVELACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Se ha recibido en esta Intervención General su comunicación de fecha 26 de octubre pasado, en la que se pone de manifiesto que con motivo de la próxima aprobación de una modificación presupuestaria por el Consejo de Gobierno que incrementaría los créditos previstos para transferencias incondicionadas por nivelación de servicios mínimos, y a la vista de los plazos contemplados en la Orden de 10 de octubre de 2006, sobre cierre del ejercicio presupuestario del citado año, se solicita que se excepcione a este tipo de transferencias del trámite de fiscalización previa para su gestión en documento contable "ADOP". Subsidiariamente, y si hubiera de mantenerse la fiscalización previa, se solicita la ampliación del plazo para las propuestas de documentos contables que se generen con ocasión de esta modificación presupuestaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Orden.

En otro orden de cuestiones, y atendiendo fundamentalmente al texto del proyecto de Estatuto de Autonomía en el que se prevé que una Ley regulará la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se somete a la consideración de esta Intervención General la posibilidad de que se trate de manera homogénea a las futuras transferencias incondicionadas, con lo que bastaría la realización del mencionado documento contable "ADOP" para llevar a cabo la gestión de las mismas.

En relación con las cuestiones planteadas por esa Dirección General, es necesario poner de relieve las siguientes consideraciones:

A) Con respecto a la solicitud de excepcionar de la fiscalización previa a los gastos por transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios municipales, es preciso tener en cuenta, en primer

lugar, que tales gastos se encuentran contemplados, para el actual ejercicio presupuestario, en las Ordenes de la Consejería de Gobernación de 24 de febrero de 2006, por la que se regula la distribución de las transferencias a los Ayuntamientos andaluces, para la nivelación de los servicios municipales, así como en la de 27 de junio de 2006, dictada con carácter complementario de la anterior y referida a servicios municipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes.

En relación con la solicitud planteada debe tenerse en cuenta que en artículo 80.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prescribe el sometimiento a la intervención previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, quedando recogidos en el artículo 81.1 del mismo cuerpo legal aquellos tipos de gastos que no están sometidos a intervención previa, entre los que no cabe incluir los derivados de las órdenes antes mencionadas. Por vía reglamentaria, y como establece el apartado 2 del segundo de los mencionados artículos, podrán ser excluidos de intervención previa y sometidos a control posterior, aquellos otros gastos recogidos en dicho apartado.

De lo expuesto se colige la imposibilidad de que esta Intervención General pueda exonerar, sin quiebra de la legalidad vigente, a los gastos mencionados de la preceptiva fiscalización previa.

B) En cuanto a la segunda de las solicitudes relativa a la ampliación del plazo para la tramitación de las propuestas de documentos contables, debe tenerse en cuenta que, en efecto, el artículo 4 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 10 de octubre de 2006, sobre cierre del ejercicio presupuestario 2006, contempla la posibilidad de ampliación de los plazos regulados en la misma respecto las diversas propuestas de documentos contables de gestión de gastos. Sin embargo, la competencia para acordar tal ampliación corresponde a la Dirección General de Presupuestos, una vez oído este propio Centro Directivo.

En consecuencia, y dado que para acordar la referida ampliación es necesario una solicitud razonada del correspondiente órgano gestor, se sugiere la reproducción de esta segunda solicitud ante la mencionada Dirección General de Presupuestos, para su correspondiente tramitación. En la correspondiente audiencia que motive dicha solicitud, este Centro Directivo no tendrá inconveniente alguno en la ampliación que se solicite, siempre que la misma afecte a un número no masivo de documentos contables y no se sobrepasen fechas que puedan comprometer el cierre del ejercicio económico de 2006.

C) Finalmente, y en cuanto al procedimiento para tramitar los futuros gastos de participación de los municipios andaluces en los ingresos de la Comunidad Autónoma, parece razonable que para abordar tal cuestión deba esperarse a que se conviertan en realidad, tanto la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, como de la Ley que regulará tales participaciones.

En todo caso, esta Intervención General muestra su total disponibilidad para examinar, en su momento oportuno, la manera de gestionar y fiscalizar los nuevos gastos.

Es todo cuanto esta Intervención General debe informar respecto a las solicitudes planteadas.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 28 NOVIEMBRE DE 2006, SOBRE IMPOSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES DE BIENES ACCEDAN A LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIAS DE UNA SUBVENCIÓN SIN PREVISIÓN EXPRESA EN LA NORMA REGULADORA.

Se ha recibido en esta Intervención General escrito de la Consejería X por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP), y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, respecto al informe de fiscalización de disconformidad, emitido por la Intervención Provincial (…), en relación con el expediente de propuesta de resolución de concesión de una subvención reglada, a favor de la empresa "AAA COMUNIDAD DE BIENES", por importe de 6.000,00 €, para incentivar la contratación de dos trabajadores con carácter indefinido.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La citada Intervención Provincial, con fecha 20 de Julio de 2006, emitió informe de fiscalización de disconformidad al expediente de referencia fundamentado en el motivo siguiente:

- El artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone que las Comunidades de Bienes podrán acceder a la condición de beneficiaria cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras de la subvención. Esta prevención legal no se recoge en la Orden de la Consejería de Empleo, de 21 de julio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos a la contratación con carácter indefinido reguladas en el Decreto 149/2005, de 14 de junio.

SEGUNDO.- Frente al mencionado informe el Viceconsejero X, no conforme con el, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 18 de septiembre de 2006, al efecto de su resolución, formulando la siguiente alegación en apoyo de su disentimiento:

- La citada Orden de la Consejería de Empleo, de 21 de julio de 2005, no contiene una referencia explícita a las Comunidades de Bienes por cuanto que la misma recoge la terminología establecida por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuyo artículo 1.2, literalmente se dispone que:

  "A los efectos de esta Ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas."

  Por tanto, cuando en las bases reguladoras de la referida Orden de 21 de julio de 2005, se hace referencia a "empresarios o entidades empleadoras" debe entenderse, que en dicha expresión, también están incluidas las empresas cuyo estatuto jurídico es el de Comunidad de Bienes, lo que hace innecesario y redundante una mención explícita a dicha figura.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter previo ha de manifestarse que la presente discrepancia se ha formulado fuera del plazo establecido para ello, ya que el artículo 13 del RIJA establece un plazo de 10 días para presentarla, contados desde que fue recibido el informe de fiscalización de disconformidad por el órgano gestor. No obstante, dado

que el plazo no debe entenderse como preclusivo, esta Intervención General resuelve conocer del asunto planteado.

SEGUNDA.- La cuestión debatida, objeto del presente trámite de discrepancia, es determinar si las Comunidades de Bienes pueden ser perceptoras de subvenciones cuyas bases reguladoras no tengan expresamente previsto la posibilidad de que dichas Comunidades puedan acceder a la condición de beneficiarias.

Sobre este particular, ha de señalarse que el citado informe de disconformidad de la Intervención Provincial no cuestiona la condición de empresa de la Comunidad de Bienes, ni que dentro de su ámbito de organización y dirección reciba prestaciones de servicios por parte de trabajadores de forma voluntaria y retribuida por cuenta de dicha Comunidad, que es lo que viene a establecer el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, alegado por el órgano discrepante.

Tampoco se discute en dicho informe, que las Comunidades de Bienes puedan ser beneficiarias de subvenciones, siempre y cuando se cumplan para ello todos los requisitos legalmente establecidos, entre los cuales debe incluirse lo dispuesto en el referido artículo 11.3 de la LGS.

TERCERA.- El Estatuto de Comunidad de Bienes es un modelo de contrato asociativo mediante el cual la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas.

La Comunidad de Bienes no tiene personalidad jurídica propia y se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en materia de derechos y obligaciones.

Esta singularidad jurídica de la Comunidad de Bienes y de otras agrupaciones que también se caracterizan por carecer de personalidad jurídica y por tener una economía o patrimonio separados puede generar dificultades, para determinar que personas y en que porcentajes asumen la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones adquiridas como consecuencia de la concesión de una subvención, dicha singularidad jurídica es tenida en cuenta por el artículo 11.3 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), al establecer como requisito necesario para que esta clase de solicitantes puedan acceder a la condición de beneficiario de subvenciones, lo siguiente:

> *"Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.*
>
> *Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, publicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de esta Ley."*

CUARTA.- Analizada la norma reguladora y la documentación incorporada al expediente, se constata que:

1º.- La Orden de 21 de julio de 2005 no prevé expresamente que las comunidades de bienes puedan ser beneficiarias de las subvenciones que regula.

2º.- Tanto la solicitud presentada por la empresa, como la propuesta de resolución de concesión de la ayuda, carecen de los requisitos exigidos en el párrafo segundo del citado artículo 11.3 de la LGS. Dichos

requisitos constituyen, en el procedimiento de concesión de subvenciones, el instrumento de protección previsto por la LGS para asegurar las responsabilidades de estos beneficiarios atendiendo a su referida singularidad jurídica.

QUINTA.- En definitiva, al no contemplarse ninguna excepción en la aplicación de la norma del artículo 11.3 de la LGS, no puede darse por sobreentendida la previsión que contempla dicho artículo y, por tanto es preciso que, en todo caso, en las bases reguladoras se realice de forma expresa la mencionada previsión para que las Comunidades de Bienes puedan acceder a la condición de beneficiaria de la subvención de que se trate, con independencia de la actividad subvencionable que desarrollen.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

Ratificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial (…), el 20 de julio de 2006, al expediente de referencia.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

MODELO INDICATIVO DE ACREDITACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES.

El artículo 14, apartado 1.e), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) dispone que el beneficiario de una subvención está obligado a "acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente". En el mismo sentido, el antecedente artículo 13, apartado 2.e), LGS, dispone que no podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta ley, las personas o entidades en quienes concurra, entre otras circunstancias, la de "no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes". Ambos preceptos tienen carácter básico y son de aplicación en los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados a raiz de la vigencia de la LGS, conforme a las Disposiciones Transitorias 3ª y 4ª de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (BOE núm. 176, de 25 de julio), acaba de entrar en vigor el 28 de julio. Conforme a las prácticas conocidas, el párrafo 2º del artículo 22 del Reglamento dispone que el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se acreditarán mediante la presentación por el solicitante de *certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente* (en este caso, la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS), añadiendo que "se emitirán preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos" (párrafo 3º del artículo 22), cuando no deba suplirse por *declaración responsable.*

Razones diversas de índole práctico han conducido a que algunas Consejerías hayan adoptado la iniciativa de adherirse al servicio ofrecido por la TGSS, consistente en la cesión de información a las Administraciones Públicas, y basado en el intercambio de ficheros de modo seguro. Con ello se ha encontrado una fórmula intermedia entre recabar masivamente los certificados al día relativo a cada

interesado, y el acceso telemático a los datos de la Seguridad Social, por el momento no disponible por razones tecnológicas.

Este modo de proceder sin embargo plantea problemas prácticos de acreditar ante las Intervenciones los datos obtenidos de la TGSS, sin que ello suponga poner en duda la validez de la información que se desprende de la consulta por pantalla de la oficina virtual de la Seguridad Social.

A fin de implantar, de manera estrictamente provisional, un sistema de acreditación en los expedientes de concesión de subvenciones, de las obligaciones con la Seguridad Social que, aprovechando la agilidad del servicio de cesión de información, cumpla unas exigencias mínimas de seguridad para la función interventora, se propone en anexo a esta comunicación, un **modelo indicativo de certificado**, que expedirá cualquier responsable de la gestión de la subvención que en cada caso se tramite, con un nivel mínimo de jefe de servicio. A este propósito deberá tenerse presente que:

1. La acreditación del interesado de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social deberá realizarse normalmente, y con preferencia, mediante certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (incluso en su modalidad de firma autorizada).

2. Excepcionalmente, cuando se presenten dificultades prácticas que ocasionen trastornos a la gestión y molestias innecesarias a los interesados, especialmente en el caso de que deban renovarse los certificados que hayan caducado en el curso de la tramitación de los procedimientos, podrá recurrirse al modelo de certificación que aquí se propone con carácter indicativo, siempre que, lógicamente, la Consejería u Organismo Autónomo gestor se encuentre adherido al servicio prestado por la TGSS.

3. La forma sugerida en la presente comunicación tiene carácter provisional, hasta tanto no se establezca, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el sistema definitivo de acreditación del cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.

ANEXO: MODELO PROVISIONAL DE CERTIFICACIÓN

D./Dª....., JEFE DE SERVICIO DE.... (DIRECCIÓN GENERAL DE...) DE LA CONSEJERÍA DE... / DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE... *(indíquese lo que proceda)*

CERTIFICA

Que una vez efectuada, de conformidad con la vigente normativa de aplicación, consulta telemática el día.... *(indíquese fecha de consulta)* de los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, y según el fichero de respuesta descargado que se acompaña como anexo al presente certificado, se desprende que el solicitante en el expediente de solicitud de subvención que se mencionan a continuación se encuentra al corriente de pagos y no tiene reclamación de deuda vigente, a los efectos de acreditar que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Expediente:

Solicitante:

CIF/DNI

Lo que se hace constar, para que surta los efectos oportunos ante la Intervención... *(indíquese la Intervención: Central, Delegada o Provincial).*

En... , a ... de... de 200...

Fdo. ....

IV.4.- OTROS GASTOS

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 3 DE FEBRERO DE 2006, SOBRE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA (PNC) DE INVALIDEZ.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP), y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, a los informes de fiscalización de disconformidad emitidos por la Intervención Provincial (…), al expediente nº 00000, de pensión no contributiva (en adelante PNC) de invalidez correspondiente a D. AAA Y D. BBB.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En relación con el referenciado expediente, tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería X, por el que se formula propuesta de resolución de concesión de una PNC de invalidez, por importe de 280 euros mensuales y una liquidación de atrasos del período computable del 01/03/2005 al 30/11/2005, por importe de 3.032,30 euros, a favor de D. AAA, la Intervención Provincial competente, con fecha 13 de octubre de 2005, formula informe de fiscalización de disconformidad, fundamentándose en el motivo siguiente:

"El perceptor ha cumplido 65 años en el mes de Agosto del 2005, por lo que le corresponde cobrar los atrasos desde el mes siguiente de la solicitud hasta el mes de Agosto del presente año."

SEGUNDO.- Frente al mencionado reparo, el Jefe de Sección de Gestión y Control de Pensiones de la Delegación Provincial de la Consejería X emite informe, con fecha 8 de octubre de 2005, que se adjunta al expediente que se vuelve a remitir

para su fiscalización, donde se pone de manifiesto el desacuerdo con dicho reparo en los siguientes términos:

"Aunque efectivamente los atrasos se generan desde el mes siguiente al de la solicitud, el derecho, una vez comprobado que reúne los requisitos, persiste hasta el momento de la Resolución y posteriormente mientras no concurra alguna circunstancia que determine la pérdida del derecho o modificación de la cuantía reconocida.

Conforme al RD 357/1991, de 15 de marzo, regulador de las prestaciones no contributivas, los requisitos deben cumplirse en el momento de la solicitud. Esto determina que si en el momento de presentar la solicitud el interesado no había cumplido los 65 años ésta deba tramitarse, si reúne los requisitos, como una pensión de invalidez, siendo posteriormente a su resolución cuando se proceda a convertir dicho expediente en uno de jubilación.

No entendemos, por tanto, que sea posible dividir un expediente en dos distintos durante su tramitación."

TERCERO.- En fecha 17 de noviembre de 2005, la citada Intervención Provincial, formula nuevamente informe de fiscalización de disconformidad, fundamentándose en los motivos siguientes:

"*El expediente en cuestión ha sido objeto de nota de reparo nºxx , y de informe de la gestión relativo a esa nota de reparo. Ambos informes son correctos en el fondo puesto que comparten los mismos argumentos.*

El solicitante tiene derecho al reconocimiento de su pensión de invalidez desde el mes siguiente a la presentación de la solicitud y hasta el mes en que cumple los 65 años, pudiendo ser perceptor a partir de esa fecha de la pensión de jubilación. Habiendo cumplido ya el beneficiario los 65 años (agosto de 2005), entendemos que el reconocimiento del derecho a la pensión por invalidez debe alcanzar hasta ese mes; y este extremo (ya cumplido en el pasado mes de agosto) debe de recogerse en la resolución concedente."

CUARTO.- A la vista del reparo, referido en el antecedente anterior, el Jefe del Servicio de Gestión Económica de Pensiones de la Delegación Provincial de la Consejería X, con objeto de instar la interposición de la correspondiente discrepancia emite informe, con fecha 23 de noviembre de 2005, en los siguientes términos:

"La pensión de invalidez fue solicitada el 16-febrero-2005, cuando el interesado tenía la edad de 64 años.

Comprobados los requisitos para tener derecho a la pensión, se emite propuesta-resolución en septiembre. Se da la circunstancia que en agosto el solicitante cumple los 65 años. Los efectos que se le da en la citada propuesta es lógicamente desde 1 de marzo/05, mes siguiente a la presentación de la solicitud.

La propuesta es reparada por la Intervención Provincial por un motivo que este órgano de gestión no entiende. Se le remite Informe de 08-10-05 intentando explicar el criterio seguido y nueva propuesta con fecha octubre/05 en los mismos términos que la anterior, siendo otra vez reparada considerando este Servicio que la circunstancia aducida en el reparo no afecta ni a la cuantía ni a los efectos de la pensión."

QUINTO.- Frente a los mencionados informes de fiscalización de disconformidad, el Viceconsejero de la Consejería X, no conforme con ellos, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 20 de diciembre de 2005, al efecto de su resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 de la LGHP Y 13 del RIJA, adjuntando para ello informe relativo a la discrepancia respecto a los mencionados reparos formulado por la Secretaria General Técnica de esa Consejería, con fecha 20 de diciembre de 2005, en el que se ponen de manifiesto los siguientes argumentos:

"Entre los requisitos exigidos para acceder al derecho a la P.N.C./I el art. 144.1 del R.D.L. 1/1994, de 20 de junio y el art. 1.1 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo establecen:

Tendrán derecho a la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad.

.....

Entendiéndose por el término "las personas que cumplan", que las personas que formulan la solicitud de Pensión no Contributiva de invalidez han de tener cumplido el requisito que se especifica, es decir tener los dieciocho años cumplidos y no haber cumplido los 65 años, en el momento de la presentación de dicha solicitud.

En el caso de D. AAA, en la fecha que formuló la solicitud, reunía el requisito de edad exigido por la norma dado que tenía más de dieciocho años y no había cumplido los 65 años, en consecuencia al reunir el resto de los requisitos que marca la ley, en esa fecha, la resolución de la solicitud debe tener sentido aprobatorio de derecho a Pensión no Contributiva de Invalidez.

Una vez reconocido el derecho a ser beneficiario de Pensión no Contributiva de Invalidez, siempre que este continúe reuniendo los requisitos que le dieron derecho a ello, continuará siendo pensionista no contributivo por invalidez con independencia de que cumpla la edad de 65 años y de que a efectos estadísticos y presupuestarios sea considerado a partir de esa edad como pensionista por jubilación (Expedientes J3), (Art.º 148.3 del R.D.L. 1/1994, de 20 de junio).

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, y teniendo presente la documentación obrante en el expediente, D. AAA formuló solicitud de PNC/I el 16-02-2005 por lo que una vez reconocido el derecho procederá:

- *Fijar la fecha de efectos económicos de la pensión reconocida en el 01-03-2005.*

- *Establecer los atrasos a abonar en concepto de pensión, desde el día de la fecha de efectos inicial del derecho hasta el último día del mes en el que el beneficiario causa alta en la nómina incluyendo en los atrasos tanto las mensualidades ordinarias como las extraordinarias si hubiera lugar. En el caso*

que nos ocupa desde 01-03-2005 hasta 31-12-2005, según consta en la propuesta de resolución 28-10-2005, que consta en el expediente.

- *Codificar a efectos estadísticos el expediente como J3, al haber cumplido el beneficiario 65 años, una vez que éste ha causado alta en la nómina de beneficiarios de PNC. Esto no conlleva la reconversión de la PNC/I en PNC/J, ni en ningún caso, la extinción de la PNC/I que el interesado venía percibiendo."*

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados, han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter previo ha de manifestarse que la discrepancia se ha formulado fuera del plazo establecido para ello, ya que el artículo 13 del RIJA establece un plazo de 10 días para presentarla, contados desde que fue recibido el reparo por el Órgano Gestor. No obstante, dado que el plazo no debe entenderse como preclusivo, esta Intervención General resuelve conocer del asunto planteado.

SEGUNDA.- Las pensiones de invalidez y jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, establecidas por la Ley 26/1990, en desarrollo del principio rector contenido en el artículo 41 de la Constitución, están reguladas actualmente en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) y por el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materias de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

El ámbito de protección de estas pensiones no contributivas, garantiza a las personas que no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones de nivel contributivo una renta económica, la asistencia médica y farmacéutica y los servicios sociales complementarios, siempre que se encuentren en situación de necesidad protegible en los términos de la LGSS.

Conviene precisar, que las PNC de invalidez y jubilación se financian a través de las aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el presupuesto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, y abonándose las pensiones a través de la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), excepto para la Comunidades de Navarra y el País Vasco.

La competencia sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social y por tanto de las pensiones no contributivas corresponde al Estado de forma exclusiva según se dispone en el artículo 149.1.17ª de la Constitución, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas, esta posibilidad es la que se contempla en cuanto a la gestión de las pensiones no contributivas en la Disposición Adicional Decimoctava de la LGSS, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 57 de la LGSS, que otorga la gestión de estas pensiones al Instituto Nacional de Servicios Sociales (en adelante INSERSO), esta entidad pasó a denominarse por Real Decreto 140/1997, de 31 de enero Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (en adelante IMSERSO).

La Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto y el Real Decreto 991/1992, de 31 de julio, asumió las transferencias de las funciones y servicios del INSERSO, actualmente denominado IMSERSO.

TERCERA.- El artículo 144.1 de la LGSS, dispone que tendrán derecho a la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad.
b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
c) Estar afectadas por una minusvalía o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al sesenta y cinco por ciento.
d) Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que no existen rentas o ingresos suficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación

por pensión de invalidez no contributiva que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Con respecto al último requisito indicado, la Ley 2/2004, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en su artículo 38 determinó inicialmente, para el año 2005, una cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que se fijó en 3.984,26 euros íntegros anuales, esta cuantía fue posteriormente revalorizada por el Real Decreto 2350/2004, de 23 de diciembre sobre revalorización de las pensiones para 2005, que dispuso en su artículo 16 que la cuantía de las pensiones de la Seguridad Social por jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, que se hayan reconocido con anterioridad al 1 de enero de 2005 o puedan reconocerse a partir de dicha fecha, queda fijada en 4.043,06 euros anuales.

Por su parte el artículo 167 de la LGSS, dispone que *"Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que, habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 144, residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación."*

CUARTA.- En la argumentación de su discrepancia el Órgano Gestor cita el apartado 3 del artículo 148 de la LGSS que dice textualmente: *"Las pensiones de invalidez no contributivas, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que viniesen percibiendo."*

El referido apartado fue añadido al texto de la LGSS, por el artículo 22.seis de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la exposición de motivos de esta ley se dice: "*Las pensiones de invalidez no contributivas pasan a denominarse pensiones de jubilación a partir del momento en que el perceptor cumpla sesenta y cinco años, al igual que ocurre con las*

pensiones contributivas", por tanto el argumento que justifica el añadir este apartado 3 al artículo 148 de la LGSS, no es otro que seguir el mismo criterio que con las pensiones de invalidez en su modalidad contributiva, conociendo ese criterio sabremos cual es el alcance y contenido del apartado en cuestión.

Efectivamente, en el apartado 4 del artículo 143 de la LGSS se establece: *"Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo."*

Este apartado 4 fue añadido al citado artículo, por la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, que tenía como uno de sus objetivos principales separar, ordenar y clarificar la financiación de las prestaciones del Sistema.

El Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, antes citada, abordó el desarrollo reglamentario de algunas de las reformas introducidas en materia de prestaciones, para facilitar su aplicación, detallando y aclarando aquellos aspectos que se derivaban de las modificaciones incorporadas a la LGSS, precisando en relación con el precepto que nos interesa, en su artículo 7:

> *"1. Las pensiones de incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación, ..., no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo."*
>
> *"2. La nueva denominación de las pensiones de incapacidad permanente no alterará el régimen jurídico de las prestaciones que puedan derivarse de aquellas."*

Debemos deducir de la lectura de este artículo y del contexto legal en que fue redactado, que su finalidad no va más allá de una simple ordenación financiera, presupuestaria y estadística del Sistema de prestaciones de la Seguridad Social.

Por todo lo expuesto, entendemos que el cambio de denominación de la PNC de invalidez, al cumplir el perceptor los 65 años, y pasar a denominarse PNC de jubilación, no tiene repercusión ni jurídica, ni económica, ni de ningún otro tipo que pudiera afectar al pensionista y por tanto no puede originar en ningún caso la necesidad de tramitar una nueva solicitud, ni requiere un nuevo procedimiento, ni una nueva resolución expresa al respecto, ni una liquidación de la PNC de invalidez al cumplir el perceptor los 65 años.

No podría ser de otra manera, pues de lo contrario podría darse la paradoja que reuniendo los requisitos para obtener una PNC de invalidez y siendo esta concedida, al cumplir el perceptor los 65 años no tuviese el requisito exigido en cuanto al período de carencia de residencia legal en territorio español, que es superior al exigido para la PNC de invalidez y no tuviese derecho a la PNC de jubilación, quedando desprotegido por el sistema, cuando su situación de necesidad sigue siendo la misma.

En definitiva, resulta acertada en nuestra opinión la argumentación del Órgano Gestor basada en el artículo 148.3 de la LGSS que se expone en el antecedente quinto de esta Resolución.

QUINTA.- Si bien no existe discrepancia en cuanto a la fecha de inicio del efecto económico de la PNC de invalidez, si puede parecer que la hay en cuanto a su duración, a este respecto debemos señalar que el R.D. 357/1991, de 15 de marzo, ya referido en la consideración segunda, establece en su artículo 7: *"El derecho a la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, se extinguirá cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias* :

a) *Perdida de su condición de residente legal o traslado de su residencia fuera de territorio español por tiempo superior al límite establecido.....*

b) Mejoría de la Minusvalía o enfermedad crónica padecidas que determine un grado inferior al 65 por 100.

c) Disponer de rentas o ingresos suficientes, ...

d) Fallecimiento del beneficiario."

Tal como se argumenta por el Órgano gestor, en ninguno de los apartados de este artículo se establece que el hecho de que el perceptor de una PNC de invalidez cumpla los 65 años tenga que ser considerado causa de extinción de la misma, cuestión esta que tampoco se aborda con claridad en los informes de fiscalización de disconformidad.

Lo cierto es que a lo sumo podría haberse exigido un cambio de denominación que, por otra parte, debe constar en la aplicación informática que gestiona la tramitación de la nómina de este tipo de pensiones.

SEXTA.- Esta Intervención General mediante la Circular 9/1991, de 3 de julio, reguló la fiscalización de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, atendiendo al hecho particular de este tipo de expedientes en que la gestión de dichas prestaciones ha sido encomendada a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero no obstante, como se ha explicado anteriormente en la consideración segunda, los créditos con cargo a los cuales se satisfacen las citadas pensiones no son objeto de transferencia a la Comunidad Autónoma, encontrándose presupuestados en los estados de gastos del INSERSO (actual IMSERSO).

En la referida Circular, se consideró conveniente el establecimiento de un procedimiento de control previo de los expedientes que dan lugar al reconocimiento de estas prestaciones, así en su instrucción segunda se establece que los Interventores comprobarán los extremos a que se refieren los apartados a) y e) del artículo 7.1 del RIJA, es decir, limita el acto de fiscalización previa a comprobar que la obligación o gasto se genera por aprobación del órgano competente y que consten los informes preceptivos que deben figurar en el expediente, añade además, que deberá comprobarse para cada tipo de expediente los extremos que se determinan en esa misma instrucción segunda, que coinciden con los requisitos para

tener derecho a PNC de invalidez y jubilación, establecidos en los artículos 144.1 y 167 de la LGSS transcritos en la consideración segunda de esta Resolución.

Queda excluida, por tanto, de la fiscalización previa de estos expedientes, la comprobación referente a que el crédito al que se pretende imputar el gasto u obligación es el adecuado a su naturaleza, así como que exista remanente suficiente en el crédito indicado para dar cobertura al gasto u obligación, esto obedece al hecho de que se trata de créditos del Estado, no transferidos a la Comunidad Autónoma. Por todo lo expuesto y en referencia a la materia que nos ocupa los informes de fiscalización de disconformidad emitidos por la Intervención Provincial (…) no podrían motivarse en los apartados b), c) y d) del artículo 7 del RIJA.

Con el fin de evitar cargas administrativas innecesarias que dificulten la deseada agilidad en la gestión de las prestaciones no contributivas, sin que ello suponga merma alguna en el control interno de la gestión, y al objeto fundamental de conseguir la necesaria coordinación y homogeneidad en las tareas de control atribuidas, desde la Circular 9/1991, la Intervención General dictó la Instrucción 5/2001, de 19 de octubre, por la que se determinan los expedientes sobre pensiones no contributivas que deben ser sometidos a fiscalización previa.

Esta instrucción, al igual que ya hizo la referida Circular de 1991, tiene presente la circunstancia, de que la competencia en la gestión de las PNC corresponde a la Comunidad Autónoma, siendo el abono de las prestaciones económicas derivadas de tal gestión competencia de la TGSS, con cargo al presupuesto estatal.

La Instrucción 5/2001 establece que “están sometidos a fiscalización previa, antes de que se dicte el correspondiente acuerdo, todos aquellos expedientes, actos o documentos, relativos a la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, que den lugar al reconocimiento de obligaciones de contenido económico” y de manera enunciativa, cita algunos actos, entre ellos el procedimiento de reconocimiento inicial del derecho, la resolución de reconocimiento o aprobación de la pensión.

Esta Instrucción establece que no deben ser objeto de fiscalización previa todos aquellos actos propios de la gestión de las PNC, que por no representar un nuevo o mayor gasto, queden fuera de las previsiones contenidas en el párrafo anterior.

Por tanto y en relación con el caso concreto que nos ocupa, un cambio de denominación de la PNC que se está percibiendo, que no afecta a su contenido económico, ni a su régimen jurídico, estaría exenta de fiscalización previa.

En cualquier caso, no se ajusta el instrumento utilizado al problema de fondo que se discute, contra el que no cabe reparo, sino a lo sumo una observación sobre el necesario cambio en la denominación de la PNC, sobre todo pensando en que la escasa importancia de la cuestión debe estar supeditada al interés público en juego.

SEPTIMA.- En cuanto a los dos informes de fiscalización de disconformidad emitidos por el Interventor Provincial (…), que básicamente no difieren en su contenido en cuanto que en ambos se mantiene que *"el solicitante tiene derecho al reconocimiento de su pensión de invalidez desde el mes siguiente a la presentación de la solicitud y hasta el mes en que cumple los 65 años (agosto de 2005)"* y que a partir de entonces podría ser perceptor de la pensión no contributiva de jubilación, debiendo recogerse este extremo en la resolución, ha de señalarse que no indican el precepto jurídico en que se fundamentaría la finalización de la prestación de PNC por invalidez a los 65 años.

Podría plantearse qué incidencia puede tener, sobre todo lo expuesto hasta ahora, el hecho de que el solicitante de la PNC de invalidez cumpliese los 65 años durante la tramitación del procedimiento, ya que, hasta su resolución, no podríamos hablar de la existencia de una PNC de invalidez, ni por tanto de un derecho del perceptor a mantener la prestación, después de cumplir los 65 años, ni modificar un régimen jurídico que aún no le ha sido reconocido, como parece plantear la Intervención Provincial (…).

La solución a esta cuestión podemos encontrarla en el R.D. 357/1991, de 15 de marzo al disponerse en su artículo 22: "*El procedimiento para el reconocimiento del derecho a las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, por invalidez o*

jubilación, se iniciará por el interesado ..... y se ajustará a lo dispuesto en el presente Real Decreto y a lo previsto, con carácter general, en la Ley de Procedimiento Administrativo" y en el artículo 23.1 que al referirse a la comprobación del cumplimiento de los requisitos, establece *".... los requisitos que el interesado debe reunir en el momento de la solicitud, ..."*

A este respecto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 89.2 establece:

"En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede."

En consecuencia, podemos afirmar que la resolución del procedimiento para el reconocimiento de la PNC de invalidez, iniciado por el interesado el día 16 de febrero de 2005, debía ajustarse como se hizo, a la petición formulada y a los requisitos que el interesado cumplía el día en que presentó la solicitud.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA.

RESUELVE

Rectificar los informes de fiscalización de disconformidad nº xxx e yyyy formulados por la Intervención Provincial (…), en fecha 13 de octubre y 17 de noviembre de 2005 respectivamente, relativo al expediente nº 000000 de PNC de invalidez correspondiente a D. AAA, al considerar que la cuestión planteada no puede ser objeto de reparo, sino a lo sumo de observación.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las

actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 11 DE MAYO DE 2006, SOBRE ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A PERCIBIR UNA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA (PNC) E INVALIDEZ DE UN DNI CADUCADO A EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD.

Se ha recibido en esta Intervención General escrito de la Consejería X por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP), y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, a los informes de fiscalización de disconformidad emitidos por la Intervención Provincial (...), a veintiséis expedientes de solicitudes de pensiones no contributivas a favor de: xxxx, yyyy, zzzz, ...

De dicho escrito, así como de la documentación aportada a los expedientes se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En relación con los referenciados expedientes, tramitados por la Delegación Provincial (...), por los que se formulan propuestas de resolución de concesión de pensión no contributiva (en adelante PNC) de jubilación y de invalidez, la Intervención Provincial competente (con fechas de registro de salida de los días 5, 9, 12 y 14 de diciembre de 2005) emitió informes de fiscalización de disconformidad, fundamentado en el motivo siguiente:

- No se aporta a los expedientes correspondientes la declaración o certificado del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas año 2004, a efectos de justificar la percepción o no de ingresos.

Asimismo, respecto al expediente correspondiente a Dña. xxxx, se indica que el DNI de la solicitante se encuentra caducado.

SEGUNDO.- Frente a los mencionados informes el Viceconsejero X, no conforme con ellos, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 3 de febrero de 2006 (registro de entrada en esta Consejería en fecha 6 de febrero), al efecto de su resolución, formulando las siguientes alegaciones en apoyo de su disentimiento:

- Los artículos 144.1 y 167 del RDL 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, disponen que uno de los requisitos exigidos para tener derecho a acceder a la PNC tanto de jubilación como de invalidez, es carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación a que se refiere el artículo siguiente (el artículo, al que se hace referencia, es el 145.1 del mismo texto legal, que dispone: "*La cuantía de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva se fijará, en su importe anual, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado).*

- El Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, especifica en su artículo 11 que: *"se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes, cuando los que disponga o se prevea que va a disponer el interesado, en cómputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, también en cómputo anual, de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado"*.

  Entendiéndose por la expresión "en cómputo anual de enero a diciembre" que los ingresos que han de tenerse en cuenta para determinar tanto el derecho a la pensión como la cuantía de ésta, son los que el interesado y/o su unidad económica de convivencia reciban durante el año en el que formula la solicitud de la pensión contado desde enero a diciembre.

- El artículo 23.1 del referido Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, establece la forma de comprobar el cumplimiento de los requisitos que el interesado debe reunir para acceder o conservar el derecho a la PNC de invalidez o jubilación, en concreto, para el requisito de "carecer de rentas o ingresos suficientes", el apartado d) del citado artículo dispone: "*La insuficiencia de recursos, mediante declaración del interesado, referida a las rentas o ingresos propios y, en su caso, a los de cada uno de los miembros integrantes de la unidad económica en que se encuentre inserto, sin perjuicio de las comprobaciones que puedan llevarse a cabo, cuando las mismas se estimen necesarias".*

- Además la Circular Nº 5/92, de 22 de junio, de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sobre la forma de acreditación de las circunstancias que deben concurrir en los solicitantes de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, dictada en su día tras acuerdo alcanzado con la Intervención Central, en sus instrucciones Primera.4 y Segunda.4, establece como forma de acreditar la insuficiencia o carencia de recursos o rentas la "declaración del interesado efectuada en el impreso de solicitud", teniendo como punto de referencia el artículo 23.1 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, antes mencionado.

- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, para la tramitación y resolución de las solicitudes de PNC, la insuficiencia de rentas o recursos quedaría acreditada mediante la declaración que el interesado haya formulado en el impreso oficial de solicitud. No obstante, si la Administración deseara constatar la referida declaración con otra documentación, ésta debería corresponderse con el año en que se presenta la solicitud.

- En los supuestos que nos ocupan, si bien el artículo 23 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, posibilita requerir del interesado la aportación de la declaración anual del I.R.P.F., no es procedente solicitar la correspondiente al año 2004, ya que los expedientes corresponden a solicitudes de PNC formuladas en el año 2005, y ello, teniendo en cuenta que:

- La resolución de estos expedientes ha de efectuarse en el plazo máximo de 3 meses.

- Los recursos o ingresos económicos a computar son los que se tengan o prevean van a tenerse de enero a diciembre del año 2005.

- La posibilidad con posterioridad de una regularización de cuantías de pensión percibidas en el año inmediatamente anterior, como consecuencia de la realización del Control Anual establecido en el artículo 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo y en los artículos 149 y 170 del R.D.L. 1/1994 de 20 de junio.

- En cuanto al expediente 29/000782-J/2005 correspondiente a Dña. xxxx, respecto al cual se argumenta por la Intervención la caducidad del DNI de la solicitante, entendemos que dicha caducidad es de tipo administrativo y que en ningún momento supone la no acreditación de la identidad de la persona a quien corresponde, y ello sin entrar en la obligación del interesado, ante los órganos de Seguridad del Estado, de regularizar su situación, a lo que desde el Servicio de Gestión Económica de Pensiones se le orientará e instará, solicitándole que, una vez regularizada, aporte el nuevo documento al expediente que tratamos.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter previo ha de manifestarse que la presente discrepancia se ha formulado fuera del plazo establecido para ello, ya que el artículo 13 del RIJA establece un plazo de 10 días para presentarla, contados desde que fue recibido el informe de fiscalización de disconformidad por el órgano gestor. No obstante, dado que el plazo no debe entenderse como preclusivo, esta Intervención General resuelve conocer del asunto planteado.

SEGUNDA.- Esta Intervención General entiende que la cuestión debatida, objeto del presente trámite de discrepancia, versa sobre la documentación que, a efectos

de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, deben presentar los interesados en el momento de solicitar el reconocimiento de una PNC y, en concreto:

a) Mediante que documentación debe acreditarse el requisito de insuficiencia de recursos.

b) La virtualidad de un DNI cuyo plazo de validez ha transcurrido para acreditar la personalidad del solicitante.

TERCERA.- Las pensiones de invalidez y jubilación de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, están reguladas actualmente en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) y en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materias de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

En la normativa antes citada no se establece documentación alguna que haya de adjuntarse a la solicitud formulada.

Ha de indicarse que el modelo oficial de solicitud sólo exige la aportación de:

- Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.

- Fotocopia compulsada del DNI del representante y acreditación de su representación cuando la solicitud se suscriba por persona distinta del posible beneficiario.

- En caso de extranjeros: fotocopia compulsada del pasaporte y de la tarjeta, permiso o justificante de residencia en España, referente tanto a la residencia actual, como a los períodos que se alegan.

No obstante, al amparo del artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el solicitante puede aportar cualquier otro documento que considere oportuno para acreditar los datos declarados en la solicitud, referidos a residencia, recursos económicos propios y de las personas con las que conviva, así como de dicha convivencia.

CUARTA.- En relación con la citada documentación que debe aportar el solicitante y al objeto de resolver la cuestión debatida sobre el expediente nº 00000, reparado por la Intervención Provincial (...), por encontrarse caducado el DNI de la solicitante, debemos realizar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, la solicitud de PNC de jubilación se presentó con fecha 28 de julio de 2005, estando aún vigente el Decreto 196/1976, de 6 de febrero, por el que se regula el documento nacional de identidad, modificado por los Reales Decretos 1189/1978, de 2 de junio; 2002/1979, de 20 de julio; 2091/1982, de 12 de agosto; y 1245/1985, de 17 de julio, del que extraemos los siguientes preceptos:

"Artículo 1.- El documento nacional de identidad es el documento público que acredita la auténtica personalidad de su titular, constituyendo el justificante completo de la identidad de la persona.

Será imprescindible para justificar por sí mismo y oficialmente la personalidad de su titular, haciendo fe, salvo prueba en contrario, de los datos personales, que en él se consignen.

Será obligatorio y gozará de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorguen las leyes penales y el presente Decreto.

Disposiciones adicionales:

Primera.- Aparte de la identidad de su titular, el documento nacional de identidad servirá para acreditar, salvo prueba en contrario:

- *La nacionalidad española del titular.*

- *Su nombre y apellidos.*
- *El nombre de los padres.*
- *El sexo, el lugar y fecha de nacimiento y, por deducción de esta última, su edad.*
- *El domicilio.*

.....

Tercera.- Ninguna Oficina Pública, en el ámbito de aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, podrá requerir la presentación de documentos distintos del documento nacional de identidad, para acreditar los datos que consten en el mismo.

Cuarta.- Las indicadas Oficinas no admitirán la presentación o exhibición de documentos nacionales de identidad caducados, deteriorados o falsos .....”

En segundo lugar, el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en su artículo 23.1.a) dispone, que la comprobación del cumplimiento del requisito de edad se efectuará preferentemente mediante el documento nacional de identidad.

En tercer lugar, la entrada en vigor, con fecha 25 de diciembre de 2005, del Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, que ha derogado la normativa reglamentaria, anteriormente citada, sobre esta materia, dispone en su artículo 7.1 (párrafo primero) que: “*Transcurrido el período de validez ....., el Documento Nacional de Identidad se considerara caducado y quedarán sin efecto las atribuciones y efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico, estando su titular obligado a proceder a la renovación del mismo*.”

En consecuencia, entendemos que el DNI caducado no puede admitirse como documento que acredite la personalidad del solicitante, ni los demás datos que consten en el mismo.

QUINTA.- El artículo 144.1.d), de la LGSS, dispone que para tener derecho a la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, debe cumplirse el siguiente requisito:

“Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación a que se refiere el apartado 1 del artículo siguiente. (El citado apartado se refiere a la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, cuya cuantía en computo anual se fija cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado).

Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, en los términos señalados en el párrafo anterior, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de aquélla sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenidos conforme a lo establecido en los apartados siguientes”
En relación con el citado requisito, los apartados 4, 5 y 6 del mencionado artículo disponen lo siguiente:

“4. Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.

5. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional.

Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo.

6. Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, por razón de convivencia en una misma unidad económica, ... condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella"

En cuanto a la PNC de jubilación, el artículo 167 de la LGSS, dispone lo siguiente: *"Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que,..... ....., carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 144....."*

El artículo 23.1.d) del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, (citado por el órgano discrepante aunque no con su redacción actual, pues fue modificado por el Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social, que dispuso en su artículo único, dar una nueva redacción a los apartados 1.d) y 2 del referido artículo 23), tiene el siguiente contenido:

"Artículo 23. Comprobación del cumplimiento de los requisitos.

1. La comprobación del cumplimiento de los requisitos que el interesado debe reunir en el momento de la solicitud, así como las circunstancias determinantes de la conservación del derecho a la pensión o su cuantía, se efectuará preferentemente:
.....

d) La insuficiencia de recursos en los términos a que se refieren los artículos 11 y 12 del presente Real Decreto, quedará acreditada cuando el órgano gestor obtenga por medios informáticos de la Administración tributaria la información necesaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 113.1.d) de la Ley General Tributaria. Sin perjuicio de lo anterior el órgano gestor podrá solicitar o el interesado aportar voluntariamente otros documentos acreditativos de distinta procedencia a la de la Administración tributaria del cumplimiento del citado requisito.
.....

2. Podrán comprobarse en todo momento las circunstancias que acreditan el derecho a la pensión, a su conservación y a la cuantía reconocida. A efectos de lo

dispuesto en este artículo la entidad gestora realizará todas las comprobaciones pertinentes."

En relación con lo anteriormente expuesto, debemos indicar que la causa que justificó la modificación del citado artículo 23.1.d), podemos hallarla en la exposición de motivos del mencionado Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, donde se dice textualmente: *"La gestión y revisión de las citadas prestaciones no contributivas requiere la comprobación del cumplimiento de los requisitos que debe reunir el solicitante o pensionista para evitarse posibles situaciones de fraude,..... haciendo necesaria la adopción de medidas para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos."*

Es cierto que, con la anterior redacción del mencionado artículo 23.1.d), el órgano gestor debía comprobar que el solicitante de la PNC reunía los requisitos económicos para el reconocimiento y conservación de la prestación, basándose preferentemente en la declaración del interesado, referida a sus rentas o ingresos propios, y en su caso, a los de cada uno de los miembros integrantes de la unidad económica de convivencia, siendo facultativo del órgano gestor, bajo su criterio de oportunidad y necesidad, efectuar la comprobación de los datos contenidos en dicha declaración con sus propios medios y sin poder exigir al interesado la aportación de documentos que pudiera obtener la Administración por si misma.

La actual redacción del referido artículo 23.1.d), como queda dicho en la citada exposición de motivos, tiene por objetivo principal evitar incurrir en posibles situaciones de fraude, por ello se modifica el procedimiento para comprobar la insuficiencia de recursos económicos alegada por el interesado, adoptándose como medio preferente para efectuar dicha comprobación la información obtenida informáticamente por el órgano gestor, a través de la Administración Tributaria, es decir, se sustituye la referida declaración del interesado, por la información que puede aportar la Administración Tributaria sobre los recursos económicos del solicitante y de cada uno de los miembros de su unidad económica de convivencia, sin perjuicio, como se ha indicado, de que el órgano gestor solicite o el interesado aporte voluntariamente otros documentos, de distinta procedencia a la Administración Tributaria, que acrediten el cumplimiento del citado requisito.

Asimismo, el artículo 113.1.d) de la Ley General Tributaria mencionado en el artículo 23.1.d) del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, fue derogado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (en adelante LGT) esta nueva LGT reproduce básicamente en su artículo 95.1.d), el contenido que tuvo el ya derogado artículo 113.1.d) permitiendo que se puedan ceder o comunicar los datos, informes o antecedentes, obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, con objeto de colaborar con las Administraciones públicas en la lucha contra el delito fiscal y el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos.

La vigente LGT en su disposición derogatoria única, apartado 3, establece que: *"Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta ley que regulan la misma materia que aquellas".*

Por lo tanto, la referencia que contiene el artículo 23.1.d) del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, al artículo 113.1.d) de la anterior LGT, debe entenderse efectuada actualmente al artículo 95.1.d) de la vigente LGT.

Sorprende, en el informe del órgano discrepante, la omisión de datos esenciales normativos, básicos en esta materia, como son la referida modificación del artículo 23 del Real Decreto 357/1991, por el Real Decreto 118/1998, y en relación con dicha modificación, la Instrucción de 5 de marzo de 1998, de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, norma esta última de carácter singular, dictada como consecuencia de la modificación introducida por el R.D. 118/1998, que debe considerarse vigente en la actualidad.

En dicha Instrucción se establece que mientras no se efectúe la normalización del sistema de comprobación informática, dispuesto por el Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, la acreditación del cumplimiento del requisito de insuficiencia de recursos se hará de la manera indicada en la propia Instrucción, es decir, mediante los documentos que atendiendo al origen de las rentas o ingresos que se declaren, puedan ser acreditativos de los recursos económicos que el interesado y sus

familiares perciban realmente (nóminas, certificado del INEM, justificante bancario o cualquier otro documento que pueda cumplir el fin pretendido).

Asimismo, la citada Instrucción dispone que en el supuesto de no poder acreditarse mediante alguno de los referidos documentos la insuficiencia de recursos, para tener derecho a la pensión correspondiente, se admitirá, excepcionalmente, declaración responsable del interesado, sin perjuicio, en su caso, de la posterior comprobación que proceda efectuar en cualquier momento.

Debemos señalar que, en los años transcurridos desde la adopción de la mencionada Instrucción, se han ido implantando a través de distintos ficheros públicos importantes avances en los sistemas informáticos de consulta y cruce de datos, que permiten ampliar y verificar la información y los datos alegados por los solicitantes de las PNC, por tanto, sería conveniente que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social dictase nuevas instrucciones, para la comprobación del requisito de insuficiencia de recursos, que estén adaptadas a la disponibilidad de los actuales medios de comprobación informática.

En definitiva, para comprobar que el solicitante de la PNC cumple con el referido requisito, de carecer de rentas o ingresos suficientes, el órgano gestor que la tramita, antes de dictar resolución de reconocimiento de la prestación, debe obtener una amplia y detallada información de los recursos económicos (rentas de trabajo por cuenta propia o ajena, pensiones o prestaciones de régimen público o privado, rentas de capital de bienes muebles e inmuebles, etc.) no solo del solicitante, sino también de todos los miembros de la denominada unidad económica de convivencia. Solo excepcionalmente, y en el supuesto de que no pueda quedar acreditado la insuficiencia de recursos mediante los documentos procedentes se admitirá declaración responsable del interesado.

SEXTA.- Lo anterior no obsta a la realización de las comprobaciones oportunas, sobre los datos que figuren en la solicitud, que debe realizar el órgano gestor.

El Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en su articulo 11.1 dispone: *"Se considerará que existen rentas o ingresos suficientes cuando los que disponga o se*

prevea va a disponer el interesado, en cómputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, también en computo anual, de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado."

Además, como indica el propio órgano discrepante en su argumentación, las diferencias que puedan existir entre las rentas o ingresos previstos del solicitante de la PNC y las renta o ingresos que, una vez finalizado el año, haya percibido efectivamente, están sujetas a un proceso de regularización de la cuantía de la pensión percibida, conforme a los artículos 16.2 y 17 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo y los artículos 149 y 170 de la LGSS.

No obstante, cuando el solicitante de la PNC aporte con su solicitud una información más actualizada de los ingresos y rentas propios y de los demás miembros de su unidad económica de convivencia, que la proporcionada por la Administración Tributaria, el órgano gestor puede comprobar en base a dicha información y tras efectuar las verificaciones oportunas, que el solicitante cumple el requisito de carencia de rentas e ingresos suficientes.

Siendo ello así, y hasta tanto se establezca el sistema de comprobación de requisitos que se contempla en el Real Decreto 118/1998, es el órgano gestor, teniendo en cuenta el origen de las rentas o ingresos declarados y de los documentos aportados por el solicitante, el que deberá recabar aquellos otros documentos acreditativos de las cantidades percibidas realmente. Solo en el supuesto de que no pueda aportarse dicha documentación o deducirse, de la presentada, la insuficiencia de recursos será admisible, con carácter excepcional y de forma motivada por el propio gestor, la simple declaración responsable del interesado.

En conclusión, la Intervención no puede disponer que la acreditación del requisito de insuficiencia de recursos se efectúe aportando un concreto documento, cuando la normativa aplicable no exige dicho documento de forma expresa, sino que tan solo establece los medios preferentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos a los solicitantes de las PNC, pero sin limitar los documentos de

prueba para ello, sin perjuicio de las comprobaciones que en todo momento pueda efectuar el órgano gestor.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

Rectificar los informes de fiscalización de disconformidad emitidos por la Intervención Provincial (...), en diciembre de 2005, a los expedientes de referencia, en cuanto a la documentación en ellos exigida para acreditar el requisito de insuficiencia de recursos, sin perjuicio de las consideraciones que sobre dicha acreditación se efectúan en la presente Resolución.

Y ratificar, en los términos expuestos en la consideración cuarta de esta Resolución, el informe de fiscalización de disconformidad en la parte que se refiere a la virtualidad de un DNI cuyo periodo de validez ha transcurrido.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 15 DE MAYO DE 2006, SOBRE RETROCESIÓN DE CUANTÍAS ABONADAS INDEBIDAMENTE CON POSTERIORIDAD AL FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO DE UNA PENSIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL.

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X, por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública (en adelante LGHP) y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, (en adelante RIJA), respecto al informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial (…), al expediente de devolución de ingresos indebidos, promovido por la entidad financiera CAJA Y, en concepto de retrocesión de cuantías abonadas indebidamente con posterioridad al fallecimiento del beneficiario, D.AAA, de las pensiones derivadas del Fondo de Asistencia Social.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente, se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Intervención Provincial (…), con fecha 31 de octubre de 2005, emitió informe de fiscalización de disconformidad al expediente de referencia, fundamentado en los motivos siguientes:

> *Tal como se expuso en la nota de reparo de 13 de junio de 2005, y tal como dispone el artículo 1 del Real Decreto 1163/90, por el que se regula el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos, modificado por el artículo 14 del Real Decreto 520/05, tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos los obligados, así como sus sucesores.*

En este caso el beneficiario de la ayuda era D. AAA; no obstante, al fallecer éste el 14/12/2001, la devolución no va a poder realizarse a su titular inicial, trasmitiéndose el derecho a los herederos o causahabientes del mismo, para lo cual habrán de acreditar dicha condición mediante testamento o declaración de herederos así como haber presentado a liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones como consecuencia del fallecimiento anterior. Todo ello en virtud de lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley 29/1987, por la que se aprueba el Impuesto de SYD.

Asimismo habrán de aportar certificado de una cuenta bancaria conjunta de todos los titulares del derecho a la devolución donde deseen recibir la transferencia de la misma.

En caso de que los titulares deseen cobrar a través de un representante autorizado, habrán acreditar su representación mediante poder otorgado en forma legal y bastanteado por el Gabinete Jurídico en base a lo dispuesto en el artículo 40 de Decreto 46/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos.

En cualquiera de los casos, en la propuesta de devolución habrá de indicarse expresamente que la devolución se va a realizar al heredero o apoderado, en calidad de sucesor o representante del titular inicial.

SEGUNDO.- Frente a dicho informe, recibido por el órgano gestor en fecha 7 de noviembre de 2005, el Viceconsejero X, no conforme con él, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 21 de diciembre de 2005, a efectos de su resolución, formulando las siguientes alegaciones:

- *Este órgano gestor en cumplimiento de lo establecido en el Artículo sexto. 3 de la Orden de 2 de julio de 1990 de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se regula el sistema de pago de las ayudas económicas individualizadas y de carácter periódico con cargo al Fondo de Asistencia Social, a favor de ancianos o inválidos incapacitados y de las ayudas complementarias procedió a recabar de la Entidad Financiera citada, la retrocesión de las mensualidades*

abonadas indebidamente con posterioridad al fallecimiento del mencionado beneficiario, comprendidas en el periodo mayo/2001 a septiembre/2002, por importe de 3.440,05 €, ingreso que efectuó CAJA Y en la cuenta restringida especial FAS, con fecha 30 de diciembre de 2003.

- *En la documentación pertinente a dicho trámite se advierte que se consignó erróneamente este periodo, ya que el fallecimiento tuvo lugar el 14 de diciembre de 2001 procede declarar, con efectos del mes siguiente al hecho causante, la extinción del derecho a la pensión que tenía reconocida y, por tanto, la cuantía a retrotraer por CAJA Y se ha de corresponder con el periodo de enero a septiembre de 2002, por importe de 1.633,38 €, promoviendo dicha entidad financiera la reclamación del ingreso indebidamente efectuado.*

- *Este Servicio entiende que no procede la devolución a los herederos de D.AAA, como indica la Intervención Provincial, toda vez que el beneficiario percibió correctamente las mensualidades de mayo a diciembre de 2001, sino a CAJA Y , quién, a nuestra instancia y por el error ya mencionado, devolvió en exceso la cuantía inicialmente solicitada que fue oportunamente liquidada a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda mediante el documento 0000000.*

- *El Decreto 165/1987, de 26 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos, dispone en su artículo 2º,1 que procederá la devolución cuando la Administración, de oficio o a instancia del interesado, rectifique errores de hecho o aritméticos.*

TERCERO.- Analizado el expediente, este Centro Directivo para la resolución de la discrepancia, en uso de la facultad que le otorga el artículo 80.2 b) de la LGHP y el artículo 2.3 b) del RIJA, con fecha 11 de enero, solicitó que se acreditara de forma fehaciente, mediante los documentos oportunos suscritos por los responsables de las oficinas correspondientes de la Entidad Financiera *CAJA Y* , que el beneficiario de la pensión, D. AAA, no solo percibió correctamente las mensualidades de mayo a diciembre de 2001, sino que dichas cantidades no fueron detraídas de la cuenta

corriente de la que era titular el beneficiario, ni, en su caso, reclamadas a los herederos.

Con fecha 10 de marzo de 2006, se ha recibido, en esta Intervención General, la documentación requerida.

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Como cuestión preliminar, en relación con aspectos procedimentales en la tramitación de la presente discrepancia, ha de señalarse que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del RIJA, el plazo para interponer discrepancia es de diez días contados desde el siguiente a aquél en el que el informe de fiscalización de disconformidad sea recibido por el órgano gestor. Dado que éste se recibió en fecha 7 de noviembre 2005 y el escrito por el que se plantea el disentimiento tuvo entrada en esta Intervención General el pasado 20 de diciembre, ha de concluirse que la discrepancia se ha presentado fuera del plazo establecido para ello.

No obstante, este Centro Directivo procederá a conocer de la misma, al no entender dicho plazo como preclusivo.

SEGUNDA.- La única cuestión que se trata de dirimir es la titularidad del derecho a la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente; planteándose en el expediente disparidad de criterios entre la Intervención y el órgano discrepante, al mantener la primera que debe efectuarse a favor de los herederos del beneficiario de la pensión, D.AAA, mientras el segundo considera que debe realizarse a favor de la entidad financiera *CAJA Y* .

TERCERA.- Para resolver dicha cuestión, es preciso atender al procedimiento establecido en la Orden de 2 de julio de 1990, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se regula el sistema de pago de las ayudas individualizadas y

de carácter periódico con cargo al Fondo de Asistencia Social, a favor de ancianos y enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo y de las ayudas complementarias de carácter extraordinario reguladas por el Decreto 261/89, de 19 de diciembre.

Según dicha disposición, el pago de las pensiones se verificará en virtud de nómina y su abono, sea cual sea la modalidad de pago elegida por el beneficiario (giro postal, ingreso en cuenta corriente o libreta de ahorro o por mediación de los Directores Administrativos de las instituciones que acogen a los beneficiarios), se realizará a través de una entidad financiera que será, según lo previsto en su artículo quinto "la depositaria de los fondos y la centralizadora del pago de las nóminas libradas al efecto (...) ".

Corresponde a esta entidad financiera efectuar las transferencias precisas para abonar al beneficiario el importe de su pensión, así como proceder a la devolución a la Administración del importe correspondiente a las pensiones no satisfechas o devueltas por cualquier causa.

Cuando por causa imputable a las entidades financieras, elegidas por los beneficiarios para la domiciliación de la pensión, se haya satisfecho indebidamente una pensión o ayuda, el importe correspondiente deberá ser reintegrado por éstas a la Administración a través de la entidad financiera centralizadora del pago, según dispone el apartado 3 del artículo sexto de la citada Orden.

CUARTA.- De los documentos obrantes en el expediente resultan acreditados los siguientes hechos:

- La Consejería de Asuntos Sociales considerando que la fecha de fallecimiento de D. AAA, beneficiario de una pensión FAS, fue el 2 de abril de 2001, mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2003, reclama a la entidad financiera *CAJA Y*, oficina 000, el ingreso en la "Cuenta restringida de ingresos especias FAS" de las mensualidades de la pensión que le fueron abonadas indebidamente, ascendiendo la cantidad reclamada a 3.440,00 €, por el período comprendido entre mayo de 2001 y agosto de 2002, ambos inclusive.

- La entidad financiera *CAJA Y* , según consta en fotocopia simple de documento bancario, ingresa, con fecha 30 de diciembre de 2003, en la "Cuenta restringida de ingresos especial FAS" *CAJA Y* – 000 la cantidad de 4.399,11 €, reclamada por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (en adelante IASS), de las cuales 3.440,00 € corresponden a la pensión de D.AAA y el resto a otros beneficiarios.

- De acuerdo con la fotocopia simple del documento de ingreso MOD 046, la Consejería de Asuntos Sociales, con fecha 5 de enero de 2004, ingresa la cantidad de 69.838,04 €, en concepto de reintegro de pensiones fondo asistencia social–ayuda extraordinaria. En la cantidad total ingresada, de acuerdo con el apunte nº 000 del listado de consolidación de cuenta restringida, se incluye el importe de 4.399,11 €, cantidad ingresada por la entidad financiera *CAJA Y* en concepto de retrocesión de las pensiones pagadas indebidamente y reclamadas por el IAAS.

- Con fecha 6 de febrero de 2004, *CAJA Y* comunica el error advertido sobre la fecha de fallecimiento del beneficiario, que realmente acaeció el 14 de diciembre de 2001, según atestigua el certificado de defunción del que adjuntan fotocopia simple, y solicita se revise el importe de las pensiones ingresadas.

- Según consta en el extracto bancario de la cuenta de la que fue titular D.AAA, se ingresaron correctamente las pensiones hasta diciembre de 2001, mes de su fallecimiento.

- De acuerdo con lo solicitado por este Intervención General, el apoderado de la Sucursal "0000" de la entidad *CAJA Y* , en la cual el beneficiario tenía domiciliada la pensión, declara que la cantidad reclamada por *CAJA Y* a la Consejería X por la cuantía devuelta en exceso "no ha sido retraída al cliente ni solicitada a ninguno de sus herederos."

De acuerdo con lo antecedentes y conforme al procedimiento de gestión para el pago de las ayudas con cargo al Fondo de Asistencia Social previsto en la mencionada Orden de 2 de julio de 1990, y más concretamente en su artículo 6.3, que establece que las entidades financieras que hayan satisfecho indebidamente

una pensión o ayuda deberán reintegrar el importe correspondiente al Instituto Andaluz de Servicios Sociales a través de la entidad financiera centralizadora del pago, queda acreditado que de las cantidades ingresadas en la "CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS. ESPECIAL FAS", correspondientes a las pensiones de D. AAA, se efectuaron por la entidad financiera *CAJA Y* , a requerimiento del Instituto Andaluz de Servicios Sociales en al año 2003.

Asimismo, de la cantidad reclamada, como consecuencia de un error de hecho (confusión en la fecha del fallecimiento del beneficiario), la entidad financiera *CAJA Y* reintegró, en exceso, las mensualidades de la pensión correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 2001, ambos inclusive, periodo en el que aún vivía el beneficiario y que, por tanto, fueron percibidas por el beneficiario.

Por lo anterior, la entidad financiera *CAJA Y* , está legitimada para solicitar la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente, por ser la titular de estos derechos económicos.

QUINTA.- Al margen de lo anterior, se observa que en la propuesta de resolución sometida a fiscalización no se recoge ninguno de los hechos expuestos que acreditan el derecho de la entidad financiera *CAJA Y* a la devolución en lugar de los herederos del beneficiario fallecido.

Por lo anterior, se recomienda al órgano gestor que, en lo sucesivo, las propuestas de resolución relacionen convenientemente los hechos tenidos en cuenta en relación al asunto sobre el que recaen y que determinan el sentido del acto cuya adopción se postula, de forma que el Interventor actuante tenga adecuado conocimiento de las circunstancias que acaecen en cada supuesto concreto que le permitan valorar la conformidad o no de los actos que les sean sometidos a fiscalización.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

Rectificar el Informe de fiscalización de disconformidad emitido por la Intervención Provincial (…).

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, en función de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 25 DE MAYO DE 2006, SOBRE ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A PERCIBIR UNA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA (PNC).

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP), y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, a los informes de fiscalización de disconformidad emitidos por la Intervención Provincial (…), a dos expedientes de solicitudes de pensiones no contributivas a favor de: AAA, BBB Y CCC.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada a los expedientes, se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La citada Intervención Provincial, con fecha 2 de febrero y 6 de marzo de 2006, emitió sendos informes de fiscalización de disconformidad a los expedientes de referencia fundamentados en los motivos siguientes:

1. En relación con el expediente de AAA :

- La solicitante sobrepasa el límite de acumulación de recursos propios previsto para dos beneficiarios de PNC. Asimismo, la suma de los ingresos de los integrantes de la unidad económica de convivencia supera el límite de acumulación de recursos de ésta. No se cumple, por tanto, el requisito de carencia de rentas establecido en el artículo 11, del Real Decreto de 15 de marzo de 1991, que desarrolla en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre por la que se establecen prestaciones no contributivas.

2. En relación con el expediente de D. BBB:

- Los recursos propios del interesado computables en el 2005 son superiores al importe de la PNC a reconocer para dos perceptores, por lo que no tendría derecho a una PNC.

SEGUNDO.- Frente a los mencionados informes, el Viceconsejero X , no conforme con ellos, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 22 de marzo de 2006, al efecto de su resolución, formulando las siguientes alegaciones en apoyo de su disentimiento:

- En primer lugar, los fundamentos en que se basan los informes de fiscalización de disconformidad son difícilmente comprensibles, debido a lo escueto e impreciso de sus contenidos, tanto en lo que se refieren a los recursos propios del solicitante, como en lo referente a los recursos de la unidad económica de convivencia.

- En el informe de fiscalización de disconformidad referido al expediente de Dª. AAA hay que tener en cuenta dos cuestiones:

✓ La primera cuestión planteada es que la solicitante sobrepasa el límite de acumulación de recursos propios previsto para dos beneficiarios:

> A este respecto hay que tener presente que de acuerdo con el artículo 167.1 en relación con el artículo 144.1.d), párrafo primero, y completado por el artículo 145.1, párrafo primero, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el límite de acumulación de recursos propios del solicitante, para considerar que carece de rentas y que, por tanto, cumple con dicho requisito, es, con carácter general, la cuantía de la pensión no contributiva en importe anual que fije cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta norma se aplica a todos los solicitantes de PNC,

independientemente de que convivan o no con otras personas que sean beneficiarias de una PNC.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, año en que se formula la solicitud, fijó en 4.043,06 euros la cuantía anual de la PNC de invalidez y jubilación, siendo éste el límite que, conforme a las normas anteriormente citadas, debe aplicarse a cualquier solicitante/beneficiario de una PNC, para determinar si con los recursos económicos propios de que dispone o prevé va a disponer, en dicho año, cumple con el requisito de carencia de rentas.

En el caso concreto que nos ocupa la solicitante dispone de unos ingresos económicos personales, en el año 2005, que ascienden a 3.457,80 euros, por lo tanto, al no sobrepasar dichos ingresos el mencionado límite de 4.043,06 euros anuales, queda acreditado que la solicitante atendiendo a los recursos propios de que dispone cumple con el requisito de carecer de rentas o ingresos suficientes para poder obtener una PNC.

✓ En cuanto a la segunda cuestión planteada, al indicarse que: *"... la suma de los ingresos de los integrantes de la unidad económica de convivencia supera el límite de acumulación de recursos de ésta.",* debe tenerse en consideración lo establecido en el artículo 167.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con el artículo 144.2 del mismo texto legal, que dispone:

> *"Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán equivalentes a la cuantía, en computo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el setenta por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno".*

Como ya se indicó anteriormente, la cuantía anual de la pensión, a la que se hace referencia en el citado artículo, es la establecida anualmente por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para la PNC de

invalidez, conforme se establece en el artículo 145.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

En este caso, la unidad económica de convivencia (U.E.C.) está formada por la solicitante y su cónyuge, en base a esto y a las normas antes mencionadas el límite de acumulación de recursos de la U.E.C. vendrá dado por la aplicación de la siguiente fórmula:

"Cuantía anual máxima + (70% de cuantía anual máxima x nº de convivientes – 1)"

En dicha fórmula, la cuantía anual máxima es la cuantía de la PNC de invalidez que, como ya se dijo anteriormente se fija cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en importe anual y con carácter general para cualquier solicitante, no haciendo el artículo 144.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio, salvedad ni excepción alguna respecto a las U.E.C. en las que los solicitantes/beneficiarios de PNC convivan con otros beneficiarios de dichas prestaciones, sin que les sea por tanto de aplicación una cuantía diferente para calcular el limite de acumulación de recursos de su U.E.C., para determinar si se cumple o no el requisito de carecer de rentas.

Como se indicó anteriormente, la cuantía de la PNC fijada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2005, es de 4.043,06 euros anuales.

De la aplicación de la fórmula antes expuesta obtenemos el siguiente límite de acumulación de recursos (L.A.R.), para el año 2005, de la U.E.C. que nos ocupa:

L.A.R.= 4.043,06 + (70% de 4.043,06 x 1) = 6.873,20 euros anuales.

Una vez fijado dicho límite de acumulación de recursos, hay que determinar los recursos económicos de que dispone esta U.E.C. en el año 2005: Si tenemos en cuenta que los recursos propios de la solicitante ascienden a

3.475,80 euros y que su cónyuge percibe una PNC en cuantía máxima porque carece de recursos propios y que dicha pensión no se computa como ingresos del conviviente, resulta que los recursos totales de esta U.E.C. son de 3.475,80 euros anuales, cuantía que no supera el anteriormente calculado L.A.R. de 6.873,20 euros anuales, cumpliéndose por tanto el requisito de carencia de rentas e ingresos suficientes por parte de la U.E.C. a la que pertenece la solicitante.

- En cuanto al informe de fiscalización de disconformidad referido al expediente de D. BBB, hay que tener en cuenta:

✓ En primer lugar, respecto a lo afirmado en dicho informe sobre que "*los recursos propios del interesado computables en el 2005 son superiores al importe de la PNC a reconocer para dos perceptores, por lo que no tendría derecho a PNC"*, debe decirse que, de acuerdo con los artículos 167, 144.1.d), párrafo primero, y 145.1, párrafo primero, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que ya fueron citados en el caso anterior, el límite de acumulación de recursos (L.A.R.) propios del solicitante está fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2005 en 4.403,06 euros anuales, cuantía que, como se indicó anteriormente, se aplica sin excepción alguna a todos los solicitantes/beneficiarios de PNC, convivan estos o no con otros beneficiarios de dichas pensiones, para determinar si con los recursos económicos propios de que dispone o prevé va a disponer el solicitante en ese año, cumple con el requisito de carencia de rentas, para poder obtener una PNC.

✓ En segundo lugar, los ingresos económicos personales del solicitante en el año 2005 ascienden a 3.784,57 euros, cuantía que resulta inferior al referido L.A.R. fijado para dicho año en 4.043,06 euros anuales, por tanto, queda acreditado que, atendiendo a sus recursos económicos, el solicitante cumple con el requisito de carecer de rentas o ingresos suficientes para obtener una PNC.

- Por último, la gestión realizada por el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se fundamenta en la interpretación de las normas por las que se rigen las PNC de jubilación e

invalidez, que fue adoptada a nivel nacional desde el inicio de la gestión de dichas pensiones, esta interpretación ha sido corroborada recientemente, por el Área de Prestaciones Económicas del Servicio de Asistencia Técnica e Informes de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2006, ante la consulta efectuada al efecto desde los Servicios Centrales de dicha Consejería.

Esta interpretación normativa que sirve de base para el establecimiento de los criterios de gestión a seguir en la tramitación y resolución de las PNC, es de carácter vinculante, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Convenio del Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre coordinación de la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (Ley 26/1990), publicado mediante Resolución de 12 de julio de 1991, de la Subsecretaría del mencionado Ministerio (BOE nº 228 de 23 de septiembre de 1991), en la que se establece:

> *"Homogeneización de criterios .- El Instituto Nacional de Servicios Sociales promoverá la homogeneización de los criterios a aplicar en la gestión relativos a los aspectos técnicos, jurídicos y médicos a través de los cauces habituales de comunicación administrativa, así como mediante reuniones conjuntas, cuya periodicidad será, al menos, bimensual."*

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter previo ha de manifestarse que la presente discrepancia se ha formulado fuera del plazo establecido para ello, ya que el artículo 13 del RIJA establece un plazo de 10 días para presentarla, contados desde que fue recibido el informe de fiscalización de disconformidad por el órgano gestor. No obstante, dado que el plazo no debe entenderse como preclusivo, esta Intervención General resuelve conocer del asunto planteado.

SEGUNDA.- La cuestión debatida, objeto del presente trámite de discrepancia, es determinar si los referidos solicitantes cumplen con el requisito de carecer de rentas o ingresos suficientes para tener derecho a una PNC.

Las pensiones de invalidez y jubilación de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, están reguladas actualmente en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) y en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materias de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

En el párrafo primero del artículo 144.1.d) de la LGSS, se dispone que para tener derecho a la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, debe cumplirse el siguiente requisito:

> *"Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación a que se refiere el apartado 1 del artículo siguiente."* (El citado apartado se refiere a la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, cuya cuantía en computo anual se fija cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado).

En relación con el importe de dicha prestación, el artículo 38 de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, determinó inicialmente para dicho año una cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que se fijó en 3.984,26 euros íntegros anuales, esta cuantía fue posteriormente elevada por el Real Decreto Ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la citada Ley de Presupuestos, disponiendo en su artículo único, apartado uno, dar una nueva redacción al referido artículo 38, situando la cuantía de dicha pensión en 4.043,06 euros íntegros anuales.

Asimismo, el Real Decreto 2350/2004, de 23 de diciembre sobre revalorización de las pensiones para 2005, dispuso en su artículo 16 que la cuantía de las pensiones de la Seguridad Social por jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, que se hayan reconocido con anterioridad al 1 de enero de 2005 o puedan reconocerse a partir de dicha fecha, queda fijada en 4.043,06 euros anuales.

Además, el mencionado artículo 144.1.d) dispone en su párrafo segundo:

> *"Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, en los términos señalados en el párrafo anterior, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de aquélla sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenidos conforme a lo establecido en los apartados siguientes".*

En relación con el citado requisito de carencia de recursos económicos el mencionado artículo 144 de la LGSS continua disponiendo lo siguiente:

> *"2. Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán equivalentes a la cuantía, en computo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el setenta por cien de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.*
>
> *3. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de recursos serán equivalentes a dos veces y media de la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado 2.*
>
> *4. Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.*

5. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional.

...

6. Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, por razón de convivencia en una misma unidad económica, ... condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella"

En cuanto a la PNC de jubilación, el artículo 167 de la LGSS, dispone lo siguiente:

"1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 144.....

2. Las rentas e ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de convivencia en una misma unidad económica, ..., condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella."

En el desarrollo reglamentario de dichas normas legales, el artículo 11 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, dispone:

"1. Se considerará que existen rentas o ingresos suficientes cuando los que disponga o se prevea va a disponer el interesado, en cómputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, también en computo anual, de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando el solicitante carezca de rentas o ingresos suficientes, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido dicho requisito cuando la suma de las rentas o ingresos computables de todos los integrantes de aquélla, en los términos previstos en el número anterior, sea inferior al límite de acumulación de recursos, equivalente a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión más el resultado de multiplicar el 70 por 100 de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.

Cuando la convivencia dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes consanguíneos o por adopción en primer grado, el límite de acumulación de recursos será equivalente a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el primer párrafo".

Podemos deducir, por tanto, del conjunto de los preceptos anteriormente expuestos, que el requisito de carecer de rentas o ingresos suficientes exigido al solicitante de la PNC debe cumplirse atendiendo a las siguientes condiciones diferenciadas y consecutivamente exigidas:

1ª La suma de los ingresos o rentas personales del solicitante debe ser inferior a una determinada cuantía fijada cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2ª Además de la anterior, en el supuesto de que el solicitante se encuentre inserto en una unidad económica de convivencia, la suma de las rentas e ingresos de todos sus integrantes debe ser inferior a una cuantía calculada conforme a una fórmula legalmente establecida, que varía en función del número de convivientes y del grado de parentesco que una al solicitante de la PNC con los demás miembros de dicha U.E.C.

Lo anteriormente expuesto deberá aplicarse a los dos casos planteados en la presente discrepancia para dirimir si los solicitantes cumplen o no con el referido requisito de insuficiencia de recursos económicos.

TERCERA.- Respecto a la solicitud de PNC de jubilación presentada con fecha 31 de marzo de 2005, por D. AAA debemos considerar:

En primer lugar, en el año 2005, la suma total de los ingresos personales de la solicitante asciende a 3.457,80 €, percibidos en su totalidad en concepto de prestación y de subsidio por desempleo, por tanto, al ser el importe de dichos ingresos inferior a 4.043,06 € íntegros anuales, que como ya hemos expuesto en la consideración tercera de esta resolución es la cuantía legalmente fijada para dicho año como límite de acumulación de recursos propios para cualquier solicitante, debemos determinar que, en este caso, se acredita la primera condición para el cumplimiento del requisito de insuficiencia de recursos.

En segundo lugar, la suma de rentas e ingresos de los dos componentes de la U.E.C., en el año 2005, fue de un total de 3.457,80 €, procedentes en su totalidad de los ingresos propios de la solicitante, pues la PNC que percibió su cónyuge ese año, por importe de 4.043,06 €, no tiene a estos efectos el carácter de renta o ingreso computable.

Este criterio, seguido por el órgano gestor, de no incluir los importes de las PNC de otros beneficiarios entre los ingresos y rentas computables de la U.E.C., queda corroborado en el informe de fecha 13 de marzo de 2006, emitido por el Área de Prestaciones Económicas del Servicio de Asistencia Técnica e Informes de la Subdirección General de Gestión del IMSERSO, que fue elaborado en contestación a una consulta planteada por los Servicios Centrales del órgano gestor, en relación con la existencia de varios beneficiarios de PNC en una misma unidad económica concretamente, en el punto 2 de dicho informe se dice:

> *"2. Consideración de la cuantía de PNC percibida por otro beneficiario a fin de determinar los ingresos computables de la unidad económica:*
>
> *Si bien de un modo expreso no es recogido reglamentariamente que los importes de las pensiones no contributivas reconocidas a otros beneficiarios integrados en la misma unidad económica estén excluidos a efectos de*

determinar las rentas o ingresos computables, dicha exclusión encuentra fundamento en las propias reglas de cálculo de cuantía, previstas en el artículo 145 de la Ley General de la Seguridad Social y, en concreto, en el apartado 3 de dicha disposición.

El referido artículo 145.3 establece las reglas a fin de que la suma de la pensión o pensiones, si hay más de un beneficiario, y de los ingresos computables de la unidad económica no superen el límite de acumulación de recursos aplicable a dicha unidad, determinando que en caso de superarse la pensión se reducirá en el mismo importe del exceso, distribuyéndose en igual cuantía dicha reducción en el supuesto en que existiera más de un beneficiario de pensión no contributiva.

De ello se deduce que si se incluyera en el concepto "renta o ingreso computable de la unidad económica" los importes de pensión no contributiva reconocidos y percibidos, dichos importes se estarían computando doblemente, por un lado como "pensión" y, por otro, como "renta o ingreso computable de la unidad económica".

En base a ello, se considera que los importes de pensión no contributiva reconocidos y percibidos por los beneficiarios de las mismas no deben incluirse a fin de determinar las rentas computables y, en definitiva el cumplimiento del requisito de carencia de rentas o ingresos."

Debe entenderse, que dicho criterio se aplica en función de la facultad de homogeneización de criterios atribuida al INSERSO (actual IMSERSO) por la cláusula tercera del Convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre coordinación de la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, publicado por Resolución, de 12 de julio de 1991, de la Subsecretaria de dicho Ministerio.

Además, la solicitante convive únicamente con su cónyuge por lo que nos encontramos ante una unidad económica de convivencia (U.E.C.) de dos miembros, sin que exista en la misma relaciones de parentesco de primer grado, por lo tanto,

para calcular el límite de acumulación de recursos de esta U.E.C aplicamos la fórmula establecida en el ya citado artículo 144.2 de la LGSS, obteniendo como resultado la cantidad de 6.873,20 € anuales.

En definitiva, en este caso, la suma de rentas e ingresos computables de la U.E.C. (3.457,80 € anuales), es inferior al límite de acumulación de recursos calculado para dicha U.E.C. (6.873,20 € anuales), por lo que entendemos que también se cumple la segunda condición exigida para acreditar el requisito de insuficiencia de recursos.

CUARTA.- En cuanto a la solicitud de PNC de invalidez presentada, el día 14 de diciembre de 2005, por D. BBB ha de señalarse:

En primer lugar, que en el año 2005 la suma total de los ingresos personales del solicitante asciende a 3.784,57 €, procedentes de un subsidio por desempleo percibido del 8 de febrero al 7 de diciembre de 2005 y de una liquidación de retribuciones por el trabajo realizado los días 30 y 31 de diciembre del mismo año, en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, por tanto, al ser el importe de sus ingresos inferior al referido L.A.R. propios del solicitante (4.043,06 € íntegros en ese año), debemos concluir que, en este caso, se cumple la que hemos establecido anteriormente como primera condición para acreditar el requisito de insuficiencia de recursos, es decir, la suma de los ingresos o rentas personales del solicitante es inferior a la cuantía determinada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En segundo lugar, que la U.E.C. de la que forma parte el solicitante está compuesta por él mismo, su cónyuge y una hija, siendo la suma de sus rentas e ingresos computables de 3.784,57 €, en el año 2005, procedente en su totalidad de los ingresos propios del solicitante, ya que la hija en situación de demandante de empleo no percibe ingreso o renta alguna y la PNC de invalidez que percibió su cónyuge, por importe de 4.043,06 € anuales, no tiene carácter de renta o ingreso computable por las razones anteriormente expuestas.

Debe tenerse presente en el cálculo del límite de acumulación de recursos (L.A.R.) que le corresponde en el año 2005 a esta U.E.C., que la misma se encuentra

integrada por tres miembros y que existe en ella una relación de parentesco de primer grado de consanguinidad entre el solicitante y la descendiente con la que convive. En base a estos datos, y utilizando la fórmula establecida en el mencionado artículo 144 apartados 2 y 3, de la LGSS, se obtiene un resultado inferior al límite de acumulación de recursos, por lo que entendemos que también se cumple, en este caso, la segunda condición que acredita el requisito de insuficiencia de recursos del solicitante.

En consecuencia, podemos afirmar que en el año 2005, el solicitante cumplía con el requisito de carencia de recursos para tener derecho al reconocimiento de una PNC, sin embargo debido a la fecha de presentación de su solicitud (14 de diciembre de 2005) el efecto económico de dicho reconocimiento debía producirse a partir del 1 de enero de 2006, por aplicación del artículo 146 de la LGSS que dispone:

> *"Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud".*

No obstante lo anterior, se da la circunstancia de que el solicitante comunicó, con fecha 9 de febrero de 2006, a la Delegación Provincial (…), que se había producido una modificación en su situación económica, esta comunicación se produce antes de que el órgano gestor dictase, a favor del solicitante, con fecha 3 de marzo del mismo año, una propuesta de resolución de concesión de PNC de invalidez que incluye el reconocimiento del pago de atrasos del período 01/01/06 a 30/04/06.

La variación de dichas circunstancias económicas se produce como consecuencia de un contrato de trabajo para la formación, firmado por el solicitante el día 30 de diciembre de 2005, con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de C., con una duración prevista de seis meses comprendidos desde la referida fecha de la firma del contrato hasta el día 29 de junio de 2006.

Si bien es cierto, que el órgano gestor computa en los ingresos del solicitante el importe de las retribuciones percibidas por éste, los días 30 y 31 de diciembre de 2005, correspondientes al referido contrato laboral, y que dichas retribuciones no

afectan al cumplimiento del requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes exigido al solicitante en dicho año, también es cierto que en base al importe íntegro mensual de dichas retribuciones (946,58 €) y a la duración prevista del contrato (seis meses), puede establecerse una previsión anual de ingresos propios del solicitante, en el año 2006, de 5.679,48 € íntegros anuales, que supera el límite de acumulación de recursos, fijado para dicho año en 4.221,70 euros íntegros anuales, por disposición de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y del Real Decreto 1611/2005, de 30 de diciembre sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas.

Además, el Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, al referirse en su artículo 17 a la variación de las rentas e ingresos del beneficiario de una PNC, dispone:

> *"En el supuesto de que el beneficiario viera incrementados o minorados las rentas o ingresos, inicialmente previstos, de los que, por su estimación en cómputo anual, de enero a diciembre, pudiera derivarse la modificación de la cuantía de la pensión que viniera percibiendo o la extinción del derecho a la misma, el organismo gestor, sin perjuicio de la regularización que proceda una vez concluido el ejercicio económico de que se trate, revisará el importe de la pensión o interrumpirá el pago de ésta, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido la variación correspondiente".*

La citada norma tiene por objeto evitar que se produzcan abonos indebidos a los perceptores de estas pensiones, para ello se autoriza un procedimiento que permite al órgano gestor reaccionar con rapidez ante una variación en los ingresos o rentas del beneficiario de una PNC, por lo tanto es lógico que si el órgano gestor tiene conocimiento de esa misma variación durante la fase de elaboración de la propuesta de resolución de concesión de una PNC actúe, con igual diligencia, dictando una resolución acorde con dicha variación, cumpliendo así con mayor eficacia la finalidad de estas prestaciones que no es otra que la de atender a los ciudadanos en estado de necesidad por carecer de ingresos suficientes, evitando una disposición indebida de fondos públicos.

De lo anteriormente expuesto se deduce que a partir de la referida fecha 1 enero de 2006, el solicitante ya no cumple con el requisito de carecer de rentas o ingresos suficientes, pues la modificación producida en las circunstancias laborales del solicitante hacen incrementar sus recursos propios por encima del límite legalmente fijado para dicho año y en consecuencia debería tenerse en cuentas esta circunstancia en la propuesta de resolución de concesión de la PNC tramitada por el órgano gestor.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

1. Rectificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido, por la Intervención Provincial (...), el 2 de febrero de 2006, relativo al expediente de PNC de jubilación correspondiente a AAA; y

2. Rectificar el informe de fiscalización de disconformidad emitido por dicha Intervención el 6 de marzo de 2006, relativo al expediente de PNC de invalidez correspondiente a D. BBB, si bien en base a su redacción literal, por cuanto las rentas computables en 2005 del interesado no superan el límite acumulado de recursos, sin perjuicio de que no proceda el reconocimiento de PNC alguna a su favor por las razones expuestas en la consideración quinta anterior.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, DE 26 DE JULIO DE 2006, SOBRE REHABILITACIÓN EN EL DERECHO A LA PERCEPCIÓN DE PRESTACIONES DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS).

Se ha recibido, en esta Intervención General, escrito de la Consejería X por el que se viene a formular discrepancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP), y en el artículo 13 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, a los informes de fiscalización de disconformidad emitidos por la Intervención Provincial, a dos expedientes de tramitación de alta en nómina, por rehabilitación en el derecho a la percepción de prestaciones del Fondo de Asistencia Social (en adelante F.A.S.), pertenecientes a las beneficiarias: Dña. AAA y Dña. BBB.

De dicho escrito, así como de la documentación aportada al expediente, se deducen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La citada Intervención Provincial, con fecha 9 y 11 de mayo de 2006, emitió sendos informes de fiscalización de disconformidad a los expedientes de referencia fundamentados en los motivos siguientes:

- En el listado de incidencias de la nómina F.A.S. del mes de mayo de 2006, se han incluido dos incidencias de alta en nómina y abono de atrasos por rehabilitación en el pago, correspondientes a Dña. AAA y Dña.BBB, dichas incidencias se encuentran, en el Sistema Integrado de Servicios Sociales (S.I.S.S.) con el que se tramita la mencionada nómina, en la situación de “preparado para Intervención”.

En relación con las referidas perceptoras aparecen tramitados en el procedimiento informático del S.I.S.S., actos de baja en nómina, con fecha 31 de enero, 1 de marzo y 4 de mayo de 2006, dichas bajas no fueron sometidas a fiscalización de esta Intervención Provincial, por no suponer un aumento de gasto o reconocimiento de derecho (nuevo o modificación), sino que tan solo constituyen un mero trámite interno de gestión en las nóminas, por esta misma razón entendemos que la rehabilitación en el pago es otro trámite interno de gestión, que al no suponer reconocimiento de derecho (nuevo o modificado), ni aumento de gasto, no debe someterse a nueva fiscalización.

SEGUNDO.- Frente a los mencionados informes, el Viceconsejero X, no conforme con ellos, da cuenta de su discrepancia a esta Intervención General, con fecha 5 de junio de 2006, al efecto de su resolución, formulando las siguientes alegaciones en apoyo de su disentimiento:

- En primer lugar, el informe de fiscalización de disconformidad, de fecha 9 de mayo de 2006, emitido por la Intervención Provincial, alude a la rehabilitación del derecho a la percepción de la prestación del F.A.S., entendiendo que dicha rehabilitación se trata de un "tramite interno de gestión, que al no suponer reconocimiento de derecho (nuevo o modificación), ni aumento de gasto no se debe someter a nueva fiscalización".

  A este respecto hay que tener presente que el órgano gestor emitió resolución de extinción del derecho a dicha prestación, por fallecimiento de la titular, tramitando su baja en la nómina del mes de marzo de 2006, basándose en la información de fallecimientos facilitada por el Instituto Nacional de Estadística, en la que constaba un beneficiario de pensión contributiva con un número de D.N.I. que se diferenciaba en tan solo un dígito con el de la beneficiaria, al no percatarse la Delegación Provincial (...) de esta diferencia, y de que por tanto se trataba de otra persona, procedió erróneamente a la extinción del derecho citado.

  Posteriormente, advertido el error cometido, la Delegación Provincial procede a solicitar certificado de fe de vida de la que fuera beneficiaria y a grabar la

rehabilitación del derecho en la nómina del mes de mayo de 2006, con efectos económicos retroactivos desde el mes de la baja erróneamente tramitada.

- En segundo lugar, el informe de fiscalización de disconformidad, de fecha 11 de mayo de 2006, emitido por la Intervención Provincial, que hace referencia al expediente de rehabilitación de la beneficiaria del F.A.S., Dña.BBB, se fundamenta en los mismos argumentos que los expuestos en el punto anterior.

  En este caso, se procedió a emitir resolución de extinción del derecho por fallecimiento de dicha beneficiaria también de manera incorrecta, debido a que la persona realmente fallecida era otra beneficiaria de iguales apellidos pero de nombre distinto, percatada del error, la Delegación Provincial procede a solicitar certificado de fe de vida de la que fuera beneficiaria y a grabar la rehabilitación del derecho en la nómina del mes de mayo del presente ejercicio, con efectos económicos retroactivos desde el mes de la baja.

- En tercer lugar, el órgano gestor entiende, sobre la base de lo establecido en el artículo 78 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que los expedientes son fiscalizables, dado que la rehabilitación del derecho supone en si mismo un incremento de gasto con respecto a la nómina anterior, así como en lo que respecta a los efectos económicos que con carácter retroactivo se han de abonar desde la fecha en que erróneamente se extinguió el derecho de los titulares citados.

  Por lo tanto, el órgano gestor discrepa de lo manifestado por la Intervención Provincial en cuanto a que entiende que sí existe un aumento de gasto por las razones aludidas.

- Por otra parte, hay que destacar que desde el año 1992 se viene llevando acabo la fiscalización de las nóminas del Fondo de Asistencia Social por las Intervenciones Provinciales a través del resumen informatizado de cada mes, conforme a las instrucciones dictadas con fecha 28 de abril de 1992, por el Interventor Central del I.A.S.S. sin que hasta la fecha se haya planteado reparo alguno por los Interventores actuantes.

- Con independencia de lo expuesto y, en relación con el contenido de los reparos, el órgano gestor manifiesta que como consecuencia de la mecanización a través del Sistema Integrado de Servicios Sociales (S.I.S.S.) de la nómina del Fondo de Asistencia Social, la Secretaría General Técnica de la Consejería X elaboró una propuesta de Instrucción conjunta, con la Intervención, en la que se incluían las relativas a la fiscalización de las incidencias a través de las relaciones expedidas al efecto y, si bien fueron trasladadas a esa Intervención General para su informe, hasta la fecha no se ha emitido. Por ello la Intervención Central cursó, con fecha 8 de marzo de 2005, a las diferentes Intervenciones Provinciales un correo electrónico indicando que:

  "Entre tanto se acuerda con la Intervención General el contenido de la fiscalización de los actos que componen la nómina F.A.S. y a fin de que puedan operarse, de momento, en la nómina de marzo, los trámites correspondientes previstos en el sistema, se indican a continuación las actuaciones que provisionalmente resultan necesarias por parte de las Intervenciones.

  Situadas las variaciones por el gestor en el trámite "Preparado para Intervención" y facilitada a la misma la relación de incidencias, la Intervención Provincial Fiscalizará éstas a través del S.I.S.S.. En caso de fiscalización de conformidad firmará la hoja resumen y el gestor proseguirá la tramitación de la nómina en el sistema".

A la vista del expediente y de los antecedentes consignados han de formularse las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con carácter previo ha de manifestarse que la presente discrepancia se ha formulado fuera del plazo establecido para ello, ya que el artículo 13 del RIJA establece un plazo de 10 días para presentarla, contados desde que fue recibido el

informe de fiscalización de disconformidad por el órgano gestor. No obstante, dado que el plazo no debe entenderse como preclusivo, esta Intervención General resuelve conocer del asunto planteado.

SEGUNDA.- La cuestión debatida, objeto del presente trámite de discrepancia, es determinar si la rehabilitación del derecho a percibir una prestación del F.A.S., cuando dicho derecho había sido extinguido por un error de la administración, constituye un nuevo reconocimiento de derecho que genera un nuevo compromiso económico y por tanto debe estar sometido a fiscalización previa.

TERCERA.- Una correcta interpretación de preceptos como el del artículo 78 de la LGHP, citado por el órgano discrepante, relativo al procedimiento de la función interventora y a la fiscalización previa, si bien aplicado a la gestión de las prestaciones del F.A.S., obliga a referir tales procedimientos de control interno a aquellas actuaciones tendentes al reconocimiento del derecho a dichas prestaciones o al incremento de su cuantía económica, actos estos que no resultan posibles en este tipo de prestaciones, dado que las pensiones asistenciales quedaron suprimidas por el artículo 7 del Real Decreto Ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes, por lo que nos encontramos ante un gasto que queda perfectamente identificado en cuanto a sus perceptores (los beneficiarios forman un colectivo perfectamente identificado en el que no es posible el alta de ninguno más como consecuencia de un nuevo reconocimiento de derecho, quizás con la excepción de altas por traslados desde otra Comunidad Autónoma), así como en cuanto a su importe, individual y global.

Además, nos encontramos ante un gasto que una vez resuelto en su día el reconocimiento del correspondiente derecho (previa fiscalización), su devengo tiene carácter periódico y repetitivo. Todas estas notas contribuyen, indudablemente, a considerar al gasto en cuestión como subsumible en el apartado a) del artículo 81 de la LGHP.

En cualquier caso, en los supuestos concretos que nos ocupan no es necesario un nuevo reconocimiento de derecho, pues en ningún momento hubo motivo legal para extinguir el derecho existente, tratándose simplemente de un error de hecho de la

Administración al dictar unas resoluciones de extinción del derecho motivadas en unos fallecimientos que en realidad no se habían producido. Dicho error tan solo precisaba ser rectificado a la mayor brevedad posible con objeto de minorar el perjuicio causado a las pensionistas afectadas, rehabilitándolas en su derecho a percibir las referidas prestaciones en las mismas condiciones de antigüedad y cuantía en que ya las venían disfrutando.

En definitiva, la rehabilitación de derechos en las referidas circunstancias no debe estar sometida a fiscalización previa, por dos razones principales:

1. La propia naturaleza de la incidencia producida: un alta en nómina por rehabilitación en el derecho a la prestación sin nuevo reconocimiento, sin que se genere un nuevo compromiso económico, ni aumento en la cuantía que regularmente se estaba abonando.

2. Evitar cargas administrativas innecesarias que dificulten la deseada agilidad en la gestión de estas prestaciones, sin que ello suponga merma alguna en el control interno de la gestión.

Estos criterios ya fueron establecidos al amparo de las competencias sobre dirección funcional de los artículos 69 y 72.1.i) del RIJA, por la Instrucción nº 5/2001, de 19 de octubre, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se determinan los expedientes sobre pensiones no contributivas que deben ser sometidos a fiscalización previa.

CUARTA.- No obstante lo expuesto en la consideración anterior, en atención al interés público que estas pensiones tratan de proteger y para no dilatar en el tiempo el perjuicio que se está causando a las beneficiarias afectadas, deberá tramitarse la fiscalización de conformidad de las referidas incidencias en el Sistema Integrado de Servicios Sociales en que se sustenta la nómina de dichas pensiones. Al mismo tiempo, para evitar que en el futuro se produzcan situaciones como esta, se le indica al órgano gestor la necesidad de que se corrija dicho sistema informático para que distinga aquellas incidencias de la nómina que precisan de fiscalización previa, de

aquellas otras que, como en este caso, no necesitan de dicho trámite, dándose cuenta a esta Intervención General de todo lo actuado al respecto.

En consecuencia, esta Intervención General, sobre la base de los antecedentes y consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA

RESUELVE

Ratificar los informes de fiscalización de disconformidad emitidos, por la Intervención Provincial (…), el 9 y el 11 de mayo de 2006, relativo a los expedientes de pensiones del F.A.S. correspondientes a Dña. AAA y Dña. BBB, si bien deberán realizarse las actuaciones de fiscalización indicadas en la consideración cuarta de la presente Resolución.

De no estar conforme con la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LGHP y en el artículo 13 del RIJA, se podrán trasladar las actuaciones, para su definitiva resolución, a la Comisión General de Viceconsejeros, por razón de su cuantía, comunicándolo a la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en el artículo 10 del citado Reglamento.

V.- CONTROL

V.1.- CONTROL INTERNO

V.1.1.- FUNCIÓN INTERVENTORA

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 29 DE MARZO DE 2006, SOBRE LA COMPETENCIA DE LAS INTERVENCIONES PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA PARA FISCALIZAR LAS SUBVENCIONES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DEL PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO 2003-2007.

La Intervención Provincial de la Delegación de la Consejería de Economía y Hacienda en "X", ha formulado consulta sobre la competencia para fiscalizar una subvención para "Transformación de Infravivienda", al amparo de lo establecido en la Orden de la Consejería de Obras Publicas y Transportes, de 15 de septiembre de 2003, sobre desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de rehabilitación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.

Argumenta dicha Intervención Provincial que, "el ámbito de competencia territorial de este servicio de Intervención para proceder a la fiscalización, no incluye los actos dictados por la Consejera."

De acuerdo con lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA) será competencia de las Intervenciones Provinciales, entre otras, la intervención previa de los gastos que se originen como consecuencia de los actos de gestión desconcentrada o delegada del gasto público en el ámbito de su territorio, así como la intervención formal de la ordenación de los pagos, siempre que se deriven de propuestas formuladas por órganos de su demarcación.

Por lo anterior, es la competencia en la gestión del gasto lo que delimita la competencia de la Intervención Provincial, sin que deban confundirse los actos de gestión administrativa en una materia determinada (contractual, convencional, etc...) con los distintos actos de gestión del gasto público.

Por lo que respecta a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Orden de 29 de diciembre de 2000, de delegación de competencias en diversos órganos de la Consejería (BOJA núm. 4 de 11 de enero de 2001), actualmente vigente, establece

en el artículo 3, apdo. 2, letra d), que en materia de gestión económica y presupuestaria se delegan en los Delegados Provinciales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades que en materia de aprobación de gastos, su compromiso y liquidación y ordenación de pagos vienen atribuidas a la Consejera por el artículo 50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma respecto de las subvenciones que se reconozcan a actuaciones en materia de vivienda del Sector Protegido en los distintos Planes de Vivienda y Suelo, con excepción tanto de las reconocidas en materia de Rehabilitación Singular, conforma al artículo 133 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, como de las establecidas en los artículos 118 y 119 del citado Decreto o disposiciones que los sustituyan, y en relación con os créditos que se asignen previamente por la Consejería a cada Delegación Provincial.

Ahora bien, el Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, hace inaplicable el precepto que hemos mencionado en el párrafo precedente, ya que las actuaciones protegidas de dicho Plan se estructuran y denominan de forma diferente a las del Plan anterior 1999-2002, que menciona la vigente Orden 29 de diciembre de 2000, de delegación de competencias.

Para salvar esta disfunción, la Disposición Adicional Quinta de la Orden de 8 de agosto de 2003, por la que se desarrollan determinadas actuaciones del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 (BOJA núm. 159, de 20 de agosto), establece en su apartado 2. que “Se delega en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades que en materia de aprobación de gastos, su compromiso y liquidación y ordenación de pagos vienen atribuidas al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el artículo 50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la

Comunidad autónoma en materia de subvenciones que se reconozcan a actuaciones en materia de vivienda en el Plan 2003-2007, y en relación con los créditos que se asignen previamente por la Consejería a cada Delegación Provincial."

La Orden de 8 de agosto desarrolla solo parte de las actuaciones que en materia de vivienda contempla el Plan 2003-2007, el resto de las actuaciones en materia de vivienda están recogidas en la Orden de 15 de septiembre de 2003, sobre desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de rehabilitación (BOJA núm. 188, de 30 de septiembre), siendo de aplicación a dichas actuaciones lo dispuesto en materia de delegación de competencias del gasto público por la Disposición Adicional Quinta de la Orden de 8 de agosto de 2003.

Por lo anterior, en el momento actual, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 81 del RIJA y en la Disposición Adicional Quinta de la Orden de 8 de agosto de 2003, las Intervenciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda serían competentes para realizar la fiscalización previa o intervención crítica de las subvenciones que se reconozcan a actuaciones en materia de vivienda del Plan de Vivienda y Suelo 2003-2007, sin perjuicio de la reserva que, en orden a la firma del convenio, hace el titular de la Consejería para si, en el artículo 7 de la Orden de 15 de septiembre de 2003, sobre desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de rehabilitación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.

No obstante, esta situación que en el momento actual está claramente definida, con la inminente publicación de la Orden de 10 de marzo de 2006, sobre desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de Vivienda y Suelo del Plan Andaluz 2003-2007, que deroga de forma expresa la Orden de 8 de agosto de 2003, se suscitarán importantes dudas sobre el marco competencial en materia de gestión económica y presupuestaria de las subvenciones que se otorguen para las actuaciones protegidas del Plan de Vivienda y Suelo 2003- 2007, ya que a lo largo del articulado de la nueva Orden de 10 de marzo de 2006, solo se mencionan, para cada una de las actuaciones protegidas, las competencias para resolver y notificar la concesión de la subvención o para la firma los correspondientes convenios.

Pero, como ya hemos mencionado anteriormente, las competencias en materia de gestión del gasto público no pueden confundirse con la competencia para dictar los actos administrativos de concesión de subvenciones, su notificación o la firma de convenios administrativos, aunque de ellos se deriven derechos de contenido económico.

Por lo anterior, se recomienda a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que, si como venía siendo hasta la fecha, quisiera delegar en las Delegaciones Provinciales de esa Consejería, en materia de subvenciones para las actuaciones contempladas en el Plan 2003-2007, las competencias que en materia de aprobación de gastos, su compromiso y liquidación y ordenación de pagos tiene atribuidas el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el artículo 50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad autónoma, lo haga de forma expresa, bien mediante la Orden de 10 de marzo de 2006, bien mediante la modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2000.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, DE 7 DE ABRIL DE 2006, SOBRE INTERVENCIÓN PREVIA DE LA PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL GASTO DERIVADO DE LA MENSUALIDAD DE DICIEMBRE DE 2005 POR UN SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN ESE PERIODO.

Se ha recibido en esta Intervención General escrito procedente de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, mediante el que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se plantea discrepancia con el reparo formulado por la Intervención Delegada Territorial en Segovia en relación con la intervención previa de la propuesta de reconocimiento de una obligación por importe de 1.783,58 euros correspondiente al gasto derivado de la mensualidad de diciembre de 2005 por el servicio de limpieza prestado en dicho período en las dependencias de la Subdelegación del Gobierno. Del citado escrito y de la documentación que le acompaña interesa destacar los siguientes

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de mayo de 2005, se inicia por la Subdelegación del Gobierno en Segovia, expediente de prórroga del contrato de limpieza para un período de vigencia comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2005, por un importe total de 10.701,49 €.

Entre la documentación acreditativa de las actuaciones realizadas a tal fin se incluyen, entre otros, los siguientes documentos:

- Certificado de retención de crédito por importe de 8.917,91€ para hacer frente al cumplimiento de la obligación derivada del servicio prestado por el contratista durante los meses de julio a noviembre de 2005, ambos inclusive.

- Certificado de cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para el ejercicio 2006 por importe de 1.783,58 €, correspondiente al gasto derivado del servicio que se prestará durante el mes de diciembre de 2005.

El 9 de junio de 2005 se emite informe favorable del Servicio Jurídico a la prórroga del contrato y el 20 de junio de 2005 se somete la propuesta de aprobación de gasto a la preceptiva fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada Territorial que fiscalizó de conformidad la citada propuesta en la que figuraba la siguiente distribución de anualidades:

- Anualidad 2005: 8.971,91 €
- Anualidad 2006: 1.783,58 €

Durante el año 2005 se tramitaron los respectivos expedientes de reconocimiento de obligación con objeto de proceder al abono de los pagos parciales, previa aportación de la factura correspondiente al servicio prestado durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005, de conformidad con lo establecido en la cláusula 11.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Finalmente, el 2 de enero de 2006, la propuesta de reconocimiento de obligación derivada del servicio prestado durante el mes de diciembre de 2005 se somete a la preceptiva intervención previa por parte de la Intervención Territorial quien, a la vista del contenido de la misma y de la documentación justificativa que la acompaña, mediante escrito de 18 de enero de 2006, formula reparo suspensivo por considerar que no se cumple el requisito de "*existencia de crédito adecuado y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de la obligación*", argumentando los siguientes motivos:

"Si bien el expediente de autorización y compromiso del que se deriva la generación de la obligación que se propone reconocer, se aprobó con la fiscalización favorable como un contrato plurianual, certificándose el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, el plazo de ejecución del mismo finalizaba el 31/12/2005, la obligación que se propone reconocer se corresponde con servicio realizado en el mes de diciembre de 2005.

A este respecto y para el acto que se ha remitido a intervenir habría que estar a lo establecido en el artículo 34.1.b) de la citada Ley General Presupuestaria que

establece que las obligaciones se imputarían al ejercicio presupuestario de su reconocimiento siempre que correspondan, entre otros casos, a servicios realizados dentro del ejercicio presupuestario al que se pretende imputar y con cargo a los respectivos créditos.

En consecuencia la obligación que se propone reconocer e imputar al ejercicio presupuestario 2006 en la consideración de certificación de no superación de los límites establecidos para compromisos de gastos a extenderse a ejercicios futuros (artículo 47), no se corresponde con los servicios prestados en dicho ejercicio (2006) y por lo cual habría que estar a lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 34 "Ámbito temporal de los Presupuestos Generales del Estado".

Disconforme la Subdelegación del Gobierno en Segovia con el criterio manifestado por el órgano de control, remite a esta Intervención General escrito por el que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, plantea discrepancia con el reparo formulado por la Intervención Delegada Territorial en Segovia.

En dicho escrito se pone de manifiesto lo siguiente:

"El artículo 73.4, punto segundo de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dice textualmente: "El reconocimiento de las obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto".

De acuerdo con tales previsiones, dado que los períodos mensuales previstos en el contrato a efectos de pagos parciales finalizan el último día de cada mes (mes vencido) la emisión del certificado de conformidad con la ejecución del servicio y la exigibilidad del pago no se producirá hasta el mes siguiente.

En el caso del servicio prestado durante el último mes del ejercicio presupuestario, esta circunstancia determinará que la obligación correspondiente se impute al ejercicio siguiente en el que resultará exigible, circunstancia a la que corresponde la

distribución de anualidades recogida en los documentos RC y Propuesta de Gasto correspondiente.

Por todo lo anteriormente citado y teniendo en cuenta que se ha cumplido el procedimiento, se solicita se proceda al abono del mes de diciembre con cargo a los presupuestos del año 2006."

Con el fin de resolver la discrepancia planteada, esta Intervención General estima necesario realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

I.-

La divergencia de criterios se centra en determinar la procedencia de imputar al Presupuesto del ejercicio 2006 la obligación derivada del servicio prestado durante el mes de diciembre de 2005 bien mediante el correspondiente acto de reconocimiento de la obligación acordado por el órgano competente, según el centro gestor; o previa autorización del titular del Departamento ministerial en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de acuerdo con el criterio del órgano de control.

Por tanto, procede analizar en primer lugar el ámbito de aplicación del citado artículo 34.3 de la LGP que dispone:

"*Los titulares de los departamentos ministeriales podrán autorizar, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, la imputación a los créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos adquiridos, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia. La decisión del departamento ministerial dejará constancia, en cualquier caso, de las causas por las que no se procedió a la imputación a presupuesto en el ejercicio en que se generó la obligación. (...)*

Una vez autorizada la imputación se remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para su toma de razón."

La cuestión objeto de análisis se concreta en la determinación del criterio aplicable para determinar cuándo estamos ante "*obligaciones generadas en ejercicios anteriores*".

En la argumentación desarrollada por la Intervención Delegada Territorial, transcrita en los antecedentes, subyace la aplicación del principio de devengo, según el cual debe atenderse al momento en que tiene lugar la corriente real de bienes y servicios, habida cuenta que, de una parte, invoca como único fundamento jurídico de tal consideración lo dispuesto en el artículo 34.1.b) de la LGP, según el cual, a cada ejercicio presupuestario se imputarán "*las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos*"; y de otra, concluye respecto de la obligación que se propone reconocer en el expediente objeto de discrepancia, que al no corresponder a servicios prestados en el ejercicio 2006, su imputación al presupuesto vigente en el mismo exige la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 34.3 de la LGP.

Por el contrario, la Subdelegación de Gobierno aplica, a los efectos de delimitar el concepto de "obligación generada en ejercicios anteriores", el criterio de exigibilidad entendiendo que esta circunstancia se da cuando una vez prestado el servicio o realizada la entrega del bien, se acredita documentalmente su realización y se emite el certificado de conformidad por el órgano competente, lo que, en el caso concreto, al haberse establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que los períodos mensuales de prestación de servicios que dan lugar a pagos parciales finalizan el último día de cada mes, implicará que la obligación no será exigible hasta el mes siguiente.

Expuestos los argumentos del órgano de control y del centro gestor, con el fin de resolver la cuestión planteada, el ámbito de aplicación de aplicación del artículo 34.3 de la LGP a partir de la delimitación del concepto de "*obligación generada en ejercicios anteriores*", procede traer a colación lo dispuesto al respecto en el Real Decreto 612/1997, de 25 de abril, de desarrollo del artículo 63 del texto refundido de

la Ley General Presupuestaria, antecedente inmediato del vigente artículo 34 de la LGP y que continúa en vigor en lo que no se oponga a su contenido.

En concreto, el artículo 1 del citado Real Decreto delimita el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 63 del TRLGP que al igual que el actual artículo 34.3 de la LGP era aplicable a las *"obligaciones generadas en ejercicios anteriores*". En este sentido, señala el precepto que *"se consideran obligaciones de ejercicios anteriores susceptibles de imputación a créditos del corriente aquellas que, resultando* ***exigibles*** *en el ejercicio de procedencia de acuerdo con el artículo 43 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria (actual artículo 21 LGP),* ***no han sido reconocidas a 31 de diciembre del correspondiente año*** *(...)"*.

De acuerdo con esta definición reglamentaria, puede afirmarse que el criterio aplicable para determinar cuando una obligación se entiende generada en ejercicios anteriores es el de exigibilidad, de forma que cuando se produce una disociación en los ejercicios en los que tiene lugar la exigibilidad y su imputación al Presupuesto a través del acto de reconocimiento, será necesaria la previa autorización del titular del Departamento en los términos previstos en el artículo 34.3 de la LGP, configurado como excepción a la regla general, según la cual, *"las obligaciones se imputarán al ejercicio en el que, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria* (actual artículo 21 de la LGP), *resulten exigibles. Es decir, en el supuesto de obligaciones recíprocas cuando el acreedor haya cumplido o garantizado la obligación a su cargo y, en el de las obligaciones unilaterales, cuando se hubiera dictado el acto administrativo o la ley que reconozca el derecho del acreedor"* (artículo 1.2 del Real Decreto 612/1997).

Esta misma conclusión, que confirmaría el criterio defendido por la Subdelegación del Gobierno frente al sostenido por la Intervención Delegada en lo que respecta a la delimitación del concepto de "obligaciones generadas en ejercicios anteriores", se alcanza de un análisis conjunto de los artículos 21, 34, y 73 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El artículo 21 de la LGP es el precepto regulador de la exigibilidad de las obligaciones y del que se desprende que en el supuesto de obligaciones recíprocas,

esto es, aquellas que tengan por causa prestaciones o servicios a la Administración por parte de terceros, la contraprestación a cargo de la Hacienda Pública únicamente resultará exigible cuando el acreedor haya cumplido o garantizado su correlativa obligación.

Por su parte, el artículo 73.4 de la LGP define el acto de reconocimiento de la obligación como "*el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública Estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente".* A continuación, dispone el mismo precepto que *"el reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto"*.

De la conjunción de los preceptos citados, cabe concluir que realizada la prestación por parte del tercero, la obligación económica devengada sólo se tornará exigible una vez que se hayan aportado los documentos justificativos del cumplimiento de la prestación, momento a partir del cual podrá y deberá dictarse el acto administrativo de reconocimiento de la obligación dirigido a imputar al Presupuesto vigente en ese momento la citada obligación.

En consecuencia, el procedimiento previsto en el apartado 34.3 de la LGP que, como se ha señalado anteriormente, tiene como presupuesto la existencia de una obligación exigible en un ejercicio anterior a aquel en que se acuerda el acto de reconocimiento, sólo será aplicable, en el caso de obligaciones bilaterales, cuando estemos ante obligaciones que tengan su causa en prestaciones, servicios realizados por el tercero en el ejercicio anterior siempre y cuando en el mismo también se haya producido la acreditación documental del cumplimiento de tal prestación, habida cuenta que para que una obligación sea exigible es necesaria, no sólo la realización de la prestación por parte del tercero sino, además, la aportación de los documentos justificativos de la prestación realizada de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

Conclusión que sigue el criterio que este Centro fiscal ha señalado en reiteradas ocasiones en relación a la determinación del momento en que una obligación es exigible y, por tanto, imputable a un ejercicio presupuestario determinado (vid. entre otros, informes de 7 de marzo de 2001 y 19 de julio de 2004).

Concretado el ámbito de aplicación del artículo 34.3 de la LGP, obligaciones que siendo exigibles en el ejercicio anterior no fueron imputadas al mismo mediante el correspondiente acto de reconocimiento, y que, como se ha indicado, confirma el criterio sostenido por la Subdelegación del Gobierno, se estima necesario analizar, a continuación, el momento en que ha devenido exigible la obligación que tiene su causa en el servicio de limpieza prestado durante el mes de diciembre.

Para ello, además de la normativa presupuestaria anteriormente analizada debemos tener en cuenta lo dispuesto al respecto en el ámbito contractual y, en concreto, en el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al disponer que "*el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto*", exigiendo en todo caso su constatación por la Administración mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

De acuerdo con la normativa analizada, se observa que la cláusula 11.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato que motiva la discrepancia establece que "*el pago se realizará a favor del adjudicatario, en firme, según lo establecido en la cláusula l) del cuadro de características*", apartado que fija el pago "***en firme, por meses vencidos, previa presentación de factura".*** Asimismo, añade la referida cláusula, como requisito previo para el pago la necesidad de expedición de *"la oportuna certificación de conformidad por la autoridad competente".*

Al igual que ocurriera en un supuesto análogo que motivó el informe de esta Intervención General de 19 de julio de 2004, de acuerdo con tales previsiones, dado

que los períodos mensuales previstos en el contrato a efectos de los pagos parciales finalizan el último día de cada mes (mes vencido), la aportación de la factura y la emisión del certificado de conformidad con la ejecución del servicio y la correspondiente exigibilidad del pago no se producirá hasta el mes siguiente.

En el caso del servicio prestado durante el mes de diciembre de 2005, si bien no consta la fecha en que fue aportada la factura ante la Administración ni la fecha del certificado de conformidad, debemos entender que la misma debió tener lugar después del 31 de diciembre de 2005, último día del período, habida cuenta que de haberse producido con anterioridad, habría implicado la expedición de un certificado de conformidad con un servicio cuya prestación debía abarcar un período que aún no habría concluido, lo que, como señaló esta Intervención General en escrito de 2 de diciembre de 2001, supone una actuación irregular "*ya que no es posible manifestar una conformidad en relación con servicios aún no prestados*", concluyéndose que en estos casos *"debería formularse el correspondiente reparo en base a la irregularidad de la acreditación de uno de los extremos, el relativo a la certificación o acta de conformidad con la prestación de los servicios, que debe ser objeto de comprobación en el marco de la fiscalización limitada"*.

Por tanto, si bien deberían haberse hecho constar expresamente las fechas de aportación de la factura y de la certificación de conformidad, dado que nada se objeta por el órgano de control en este sentido, cabe entender que las mismas se efectuaron al inicio del mes de enero del 2006, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En consecuencia, esta circunstancia determina que el momento en el que ha de entenderse exigible la obligación correspondiente al mes de diciembre es posterior al 31 de diciembre de 2005, por lo que, de acuerdo con las consideraciones anteriormente realizadas, cabe concluir que no resulta aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 34 de la LGP, habida cuenta que en este caso es aplicable la regla general según la cual exigibilidad y reconocimiento tendrán lugar en el mismo ejercicio presupuestario.

Lo anterior resulta, por otra parte, acorde con la distribución de anualidades realizada en el momento de la aprobación y compromiso del gasto derivado de la prórroga del contrato de limpieza para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2005, que fueron fiscalizados de conformidad el 23 de junio de 2005. En las citadas fases de aprobación y compromiso, la documentación administrativa, técnica y financiera contenía una distribución del gasto en dos ejercicios presupuestarios (2005 y 2006) que respondía al momento en que, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos, se preveían dictar los correspondientes actos de reconocimiento de obligación con el fin de que llegado el momento de cumplimiento por parte de la Administración exista crédito para hacerla efectiva.

Por tanto, si la ejecución del objeto del contrato se ha realizado según lo establecido al respecto en los pliegos y así queda acreditado en la documentación justificativa del servicio prestado, habrá que concluir que la propuesta de reconocimiento realizada en los mismos términos es conforme con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

A la vista de los antecedentes expuestos y de acuerdo con las consideraciones realizadas, esta Intervención General concreta su parecer en la siguiente

CONCLUSION

Debe resolverse la discrepancia a favor del criterio mantenido por la Subdelegación del Gobierno en Segovia, entendiendo que la obligación correspondiente al servicio prestado durante el mes de diciembre del ejercicio 2005 no resulta exigible hasta que, de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto, se aporte el documento justificativo de la prestación realizada (factura) ante el órgano competente y se emita por éste el certificado de conformidad con la ejecución del servicio, circunstancias respecto de las cuales si bien no hay constancia expresa de la fecha en que se han producido, sólo pueden haber tenido lugar, según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, una vez finalizado el último día del mes de diciembre, es decir, a partir del primer día del mes siguiente (1 de enero de 2006) que coincide con un nuevo ejercicio presupuestario. Por tanto, el acto de reconocimiento de la obligación e imputación al

Presupuesto de 2006 no requerirá la previa aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la LGP, al tener lugar en el mismo ejercicio en que la obligación ha devenido exigible.

En consecuencia, deberá remitirse nuevamente el expediente a la Intervención Delegada Territorial en Segovia para su preceptiva intervención previa, de acuerdo con el criterio manifestado por esta Intervención General.

Es todo cuanto, con devolución del expediente remitido, le comunico para su conocimiento y efectos.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 13 DE JULIO DE 2006, RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DE SUBVENCIONES TRAMITADOS AL AMPARO DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2005.

Con motivo de la próxima puesta a disposición de las Intervenciones competentes de aquellos expedientes de subvenciones tramitados al amparo de la Orden de la Consejería de Gobernación de 29 de diciembre de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Entidades Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación Municipal concede por el procedimiento ordinario la Consejería y se efectúa su convocatoria para el año 2006, y dado que los mencionados expedientes están formados en su práctica totalidad por documentos en formato electrónico, esta Intervención General ha estimado necesario elaborar el presente informe que tiene como objeto dictar las instrucciones de coordinación necesarias dirigidas al correcto ejercicio de la función interventora respecto de los mencionados expedientes.

Antes de abordar tales instrucciones, debe recordarse el marco jurídico que ampara y propicia el desarrollo de lo que genéricamente se ha venido en denominar como "administración electrónica", tanto a nivel general como, en concreto, en la Administración de la Junta de Andalucía.

Como exponente fundamental de este marco jurídico se puede citar, en primer lugar, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El art. 45.1 de este cuerpo legal insta a las Administraciones Públicas a impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias. También debe mencionarse en esta concreta materia a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, (BOE núm. 304, de 20 de diciembre), que ha venido a establecer, entre otros aspectos, la misma validez jurídica de la firma electrónica respecto a los datos consignados en dicho formato, que la firma manuscrita respecto a los consignados en soporte papel. Finalmente, se debe recordar, dentro ya del específico ordenamiento jurídico de la

nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 183/2003, de 24 de junio, (BOJA núm. 134, de 15 de julio de 2003) por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), estableciéndose en el mismo la regulación, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, de los procedimientos administrativos a través de redes abiertas de telecomunicaciones, no solo desde un punto de vista de relaciones de la Administración con los particulares, sino también desde la perspectiva de las relaciones internas entre los diversos órganos de la propia Administración autonómica.

Teniendo en cuanta el mencionado marco normativo, la Consejería de Gobernación ha implantado un sistema de tramitación telemática de subvenciones que abarca la práctica totalidad de los trámites y documentos que componen el correspondiente expediente administrativo.

Estando en la actualidad los referidos expedientes ultimados en su fase de instrucción previa a la resolución de concesión, y antes de que se comiencen a remitir a las Intervenciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda, así como de la Intervención Delegada en la Consejería de Gobernación, para evacuar el preceptivo trámite de fiscalización, es conveniente aclarar una serie de extremos necesarios para que el mencionado trámite de control interno se desarrolle de la manera más adecuada posible:

1. El presente informe se circunscribe, inicialmente, a los expedientes de concesión de las subvenciones previstas en la Orden de la Consejería de Gobernación de 29 de diciembre de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Entidades Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación Municipal concede por el procedimiento ordinario la Consejería y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

2. La Consejería de Gobernación pondrá a disposición de las Intervenciones competentes, por vía telemática, los expedientes con documentos electrónicos para la fiscalización previa del mismo, así como para las fases de compromiso y pago. A tal efecto, y a fin de determinar los documentos que deben integrar el expediente

administrativo y de gasto público, se deberá tener en cuenta la normativa tanto legal como reglamentaria (incluida la Orden reguladora y de convocatoria antes mencionada) contemplada en la normativa de aplicación.

No obstante lo indicado anteriormente, debe tenerse en cuenta dos claras excepciones:

a) Las propuestas de documentos contables se tramitarán en el soporte físico actualmente utilizado y mediante el procedimiento de captura por los órganos gestores y remisión a la Intervención, que viene contemplando el Sistema "Júpiter".
b) Todos los documentos electrónicos que debido a no haberse producido o generado por el propio sistema de tramitación de la Consejería de Gobernación no cuentan con firma electrónica para garantizar su autenticidad e integridad, aunque se encuentren escaneados y puedan ser visualizados, necesitarán ser acompañados de los documentos en soporte físico de los que traen causa solo cuando el Interventor actuante así lo requiera expresamente.

3. Las Intervenciones fiscalizarán los expedientes en los plazos máximos contemplados en el artículo 12 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía contados desde el día siguiente a la fecha de recepción de las propuestas de documentos contables, pero solo cuando en dicho día y en todos los posteriores hasta que se cumpla el plazo de fiscalización, se encuentre el expediente con documentos electrónicos a plena disposición de la Intervención. Los Interventores podrán rechazar las propuestas de documentos contables cuando en la fecha de su recepción no se tenga acceso al expediente electrónico o tal acceso no permita por dificultades técnicas fiscalizar el expediente.

Cuando los Interventores soliciten documentos o informes complementarios, como en el supuesto contemplado en la letra b) del apartado 2 anterior, el plazo para la fiscalización del expediente quedará interrumpido hasta su efectiva aportación o puesta a disposición electrónica.

4. En todo caso, el resultado de la fiscalización o de cualquier actuación relacionada con la misma de las Intervenciones actuantes, se deberá formalizar en documento físico de acuerdo con las reglas contenidas en la Instrucción 1/2000, de esta Intervención General, por la que se normalizan los informes de fiscalización que emiten los órganos interventores en el ejercicio de sus funciones y se dan instrucciones para la redacción de los mismos.

5. Los documentos electrónicos que formen parte del expediente y que se pongan a disposición de las Intervenciones a través del sistema de tramitación de la Consejería de Gobernación, tendrán el mismo valor que aquellos en soporte papel cuando incorporen la firma electrónica de su autor.

6. A los efectos contemplados en el artículo 10 del Decreto 183,2003, de 24 de junio, esta Intervención General considera que el sistema de tramitación de estos expedientes cuenta con las medidas de seguridad que garantizan la integridad, protección y conservación de los documentos almacenados y, en particular, la identificación de los usuarios y el control de acceso del los mismos.

7. Finalmente, debe recordarse que cualquier cuestión o problema en la fiscalización de los expedientes debe ser examinado previamente y, en función de su entidad, ser dirigido a las siguientes instancias:

a) Si estamos ante una cuestión que afecte al funcionamiento del sistema de tramitación de la Consejería de Gobernación, se deberá dirigir a la mencionada Consejería (teléfono 341093), o a los servicios de informática de la propia Delegación Provincial de Hacienda cuando éstos puedan solventarla.
b) Si el problema afecta estrictamente a los aspectos de fiscalización del expediente, se deberá utilizar los cauces habituales ante el Servicio de Fiscalización de esta Intervención General.
c) Ante cualquier otro problema no contemplado anteriormente, se podrá acudir al teléfono de esta Intervención General 364965, atendido por Catalina Herrera.

VI.- CONTABILIDAD

COMUNICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 8 DE MAYO DE 2006, SOBRE LAS IMPLICACIONES CONTABLES DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2005 Y ANTERIORES, QUE AÚN MANTENGAN REMANENTES DE CRÉDITO PENDIENTES DE PAGO, COMO CONSECUENCIA DE LAS COMPETENCIAS QUE SE LE ATRIBUYEN AL ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INICIADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y QUE SE ENCUENTRAN EN CURSO LA FECHA DE CREACIÓN DEL MISMO.

Mediante la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras se crea el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), como una entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de llevar a cabo la gestión de las infraestructuras educativas y los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria, produciéndose su constitución efectiva en el momento de la entrada en vigor de sus Estatutos que fueron aprobados por Decreto 219/2005, de 11 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición final primera del mencionado Decreto se dictó Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005, por la que se inicia la prestación efectiva de las actuaciones que constituyen el objeto del Ente Público.

Este inicio de actuaciones conlleva, entre otras cuestiones, en asunción de las competencias que se le atribuyen, la necesidad de traspasar al Ente las actuaciones que en materia de infraestructuras educativas y sus servicios complementarios había iniciado la Consejería de Educación y se encuentran en curso la fecha de creación del mismo

La implicaciones contables respecto a estos compromisos adquiridos en el ejercicio presupuestario de 2005 y anteriores que aún mantengan remanentes de crédito pendientes de pago, van a tener en el presente año el siguiente tratamiento:

Los expedientes correspondientes a las actuaciones en infraestructuras educativas así como los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria (comedores escolares y transporte escolar), pasarán a ser gestionados en todos sus trámites, incluido el pago, por el mencionado Ente. Tales operaciones requieren, por su parte, la contabilización del compromiso a favor del ente, como destinataria de los pagos que, de otra manera, hubiesen debido de satisfacerse directamente por parte de la Administración a los contratistas de las obras y a las personas o entidades concesionarias de los servicios.

Por tanto, las operaciones contables previstas en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 11 de octubre, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2005, deben tener una tramitación especial, consistente en la no realización del traspaso de remanentes comprometidos y anualidades futuras, derivados de los expedientes iniciados antes o a la fecha de creación del Ente y correspondientes a actuaciones en infraestructuras educativas y sus servicios complementarios y, en su lugar, la grabación de uno o más documentos contables “AD” a favor del ISE, por importe de todos los compromisos de gasto que deberán ser objeto de gestión por esa entidad. Estas últimas operaciones ya han sido llevadas a cabo por la Consejería de Educación y fiscalizadas por la Intervención Delegada.

A modo de conclusión de lo anterior, y desde el punto de vista de las tareas de cierre del ejercicio presupuestario de 2005 prevista en la Orden de 11 de octubre de la Consejería de Economía y Hacienda, es necesario que las Intervenciones afectadas tengan en cuenta que, no deberán ser objeto de traspaso de remanentes comprometidos y anualidades futuras aquellos documentos correspondientes a expedientes de infraestructuras educativas y los servicios complementarios.

Estos documentos deberán darse de baja en el Sistema Informático a través del programa DONTA1IO “Baja/traspaso manual de documentos”.